

UNIVERSIDAD DE MADRID
FACULTAD DE DERECHO



TESIS DOCTORAL

Concepto jurídico del colaboracionismo

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR

Pompeyo Realuyo y Roa

DIRECTOR:

Antonio de Luna García

Madrid, 2015

CONCEPTO JURIDICO DE COLABORACIONISMO

TESIS DOCTORAL

Que presenta a la Universidad Central
de Madrid para obtener el Título de -

DOCTOR EN DERECHO

POMPEYO REALUYO Y ROA

Ciudadano Filipino; Licenciado en Derecho; Licenciado en Letras; Profesor de Derecho Fiscal y Corporaciones de la Facultad de Comercio de la Universidad de Santo Tomás y del Colegio de San Juan de Letrán de Manila, Filipinas; Miembro del Colegio de Abogados de Filipinas.

Patrocinada y Dirigida por el

Dr. D. ANTONIO DE LUNA Y GARCIA.-

Catedrático de Derecho Internacional-
Público de la Universidad Central de
M a d r i d.

Madrid, Junio de 1.958.

DEDICATORIA

A mis padres, Don Florencio Realuyo y Concepción Roa de Realuyo, cifra y aliento de mis afanes, y a la joven fiel, Srta. Nora A. Bautista que, en playas filipinas, me aguarda para formar juntos nuestro hogar de delicias, dedico este modesto fruto de mis pesquisas académicas.

Madrid, 5 de Junio de 1.958

PALABRAS DE GRATITUD

Dos palabras tan sólo que dejen constancia de nuestro profundo agradecimiento a cuantas personas e Instituciones nos han ayudado en la redacción de esta tesis.

Nos confesamos, pues, deudores al Instituto - de Cultura Hispánica, por habernos agraciado con la - beca, que nos permitiera cursar el doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid; a las autoridades y Profesores de las referidas Universidad y Facultad; a los del Colegio Mayor Hispano-Americano de Nuestra Señora de Guadalupe; al Dr. Antonio M. Molina, al Profesor José Luis Azcárraga, al -- Profesor D. José de Yanguas Messia; y al Profesor Don Antonio de Luna, digno consejero de esta tesis, sin - cuya orientación y apoyo no nos hubiera sido dable -- cumplir con nuestro cometido; y por último, al Presidente y Miembros del Ilustrísimo Tribunal Examinador, a cuyo dictamen nos sometemos humildemente.

- - - - -

Madrid, 5 de junio de 1.938.

INDICE.

PROLOGO.

CAPITULO I

NOCIONES PRELIMINARES.

1.-- NATURALEZA DEL PROBLEMA Y SU ESTADO ACTUAL	1
2.-- METODO A SEGUIR	6
3.-- DEFINICION DE TERMINOS	7
- Colaboración	8
- Allegiance	8
- Loyalty	9
- Ocupación bélica	9
- Traición	10
- Soberanía	10

CAPITULO II

DE LA LEALTAD (ALLEGIANCE)

1.-- ETIMOLOGIA - EVOLUCION - CLASES Y CONCEPTO AC- TUAL	11
2.-- LEALTAD CIVICA O JURIDICA (ALLEGIANCE) Y LEALTAD PATRIA (LOYALTY)	21
3.-- LEALTAD CIVICA (ALLEGIANCE) Y LA RECIPROCA OHLI- GACION ESTATAL	23
4.-- LEALTAD CIVICA (ALLEGIANCE) <u>DE FACTO</u> Y LA SOBERA NIA <u>DE FACTO</u>	28

CAPITULO III

DE LA OCUPACION ENEMIGA

1.-- SU NATURALEZA Y CONSECUENCIAS JURIDICAS	34
- Las relaciones políticas de los habitantes -- con el Gobierno Legítimo	48
2.-- GOBIERNOS <u>DE FACTO</u> : TIPOS	53
3.-- PODERES Y PRERROGATIVAS DEL GOBIERNO DE OCUPACION	58
- Extensión de su autoridad con vistas de sus - fines y propósitos	58
- Extensión de los poderes generales del ocupan te	60
- El Derecho de Recabar los servicios de los ha bitantes	63
- El Derecho de Nombrar Agentes por los cuales- el Territorio Ocupado deba ser administrado y de Escoger las Formas de Administración .	67
- Limitaciones	71
4.-- ALLEGIANCE DE FACTO AL GOBIERNO DE OCUPACION ...	76

CAPITULO IV

DE LA SOBERANIA SUSPENDIDA

1.-- EFECTOS DE LA OCUPACION ENEMIGA	85
- En la Soberanía.....	85
- En la Allegiance.....	105
- En las Leyes Políticas.....	114
- Resumen de los Efectos de la Ocupación Enemiga.....	119
2.-- CONDUCTA DE LOS OCUPADOS.....	125
3.-- NATURALEZA Y PODERES DEL GOBIERNO DE JURE.....	140
4.-- RELACIONES DE LOS NACIONALES CON EL GOBIERNO LEGITIMO.....	146

CAPITULO V

TEORIAS CONTRARIAS A NUESTRA TESIS

1.-- LA FIDELIDAD(ALLEGIANCE)ABSOLUTA Y PERMANENTE...	152
2.-- LA NO SUSPENSION DE LA ALLEGIANCE DURANTE LA OCUPACION ENEMIGA.....	163
3.-- LA NEGACION DE LA EXISTENCIA DE RECIPROCIDAD ENTRE ALLEGIANCE Y PROTECCION.....	170
4.-- LA SUSPENSION DE LAS LEYES POLITICAS CUANTO EL OCUPANTE PERO NO RESPECTO DE LOS HABITANTES..	171
5.-- LA QUE NO ADMITEN LA SUSPENSION DE LAS LEYES POLITICAS.....	179
6.-- LA QUE NO RECONOCE LA VALIDEZ JURIDICA DE LAS LEYES PROMULGADAS POR EL OCUPANTE.....	181

CAPITULO VI

EL CASO DE LOS FILIPINOS

1.-- GOBIERNO DE OCUPACION.....	187
2.-- REPUBLICA MANIQUEI O INTRABELICA.....	193
3.-- EL GOBIERNO EN EXILIO.....	200
4.-- LA LIBERACION.....	201
5.-- LA MANCOMUNIDAD RESTAURADA.....	202
6.-- LA REPUBLICA.....	207
7.-- DICTAMEN NACIONAL.....	213

CAPITULO VII

EL CASO DE PETAIN, LAVAL Y QUISLING

1.-- EL CASO DE PETAIN.....	215
- Los Industriales.....	216
- Los Financieros.....	217
- Periodicos y Periodistas Pro-Nazis.....	218
- Los politicos.....	218
- Los Cagoulards.....	219
- El Proceso de Petain.....	219
2.-- EL CASO DE LAVAL.....	220

3.- EL CASO DE QUISLING.....	223
------------------------------	-----

CAPITULO VIII

RESUMEN DE LA TESIS Y CONCLUSION

1.- EPITOME DE LOS PRINCIPIOS DE LA LEY DE LAS NACIONES SOBRE LA OCUPACION ENEMIGA.....	228
2.- CONCLUSION.....EL COLABORACIONISMO.....	241
- Concepto.....	241
- Elementos:-	
1. Una Realidad Socio-Plotico.....	241
2. Consiste en Prestaciones.....	242
3. Dada Libremente.....	243
4. Que estas Prestaciones Responde a Mandatos del Ocupante que Caigan Dentro del ambito de las atribuciones a que en él reconoce el Derecho Internacional.....	244
5. Que las Prestaciones No obedezcan a órdenes en exceso de la autoridad del ocupante...	245

APENDICE

A.- CONSTITUCION DE FILIPINAS. Artículo II Inciso 3	248
B.- LOS REGLAMENTOS DE LA HAYA DEL 1907.....	248
C.- TEXTO DE LA CONVENCION DE GINEBRA DE 12 DE AGOSTO DE 1949 SOBRE LA PROTECCION DE LOS CIVILES EN TERRITORIOS OCUPADOS.....	250
D.- PROCLAMAS DEL COMANDANTE SUPREMO JAPONES.....	279
E.- INSTRUCCIONES DEL PRESIDENTE QUEZON.....	285
F.- PROCLAMAS DEL GENERAL MACARTHUR.....	287
G.- PROCLAMAS DE LA INDEPENDENCIA DE FILIPINAS POR EL PRESIDENTE TRUMAN.....	288
H.- PROCLAMACION DE AMNISTIA POR EL PRESIDENTE ROXAS.....	290

BIBLIOGRAFIA

A GUIA DE PROLOGO:

El recinto rebosaba de público. La sesión acababa de empezar. El presidente del Tribunal colegiado cedió la palabra al señor Fiscal. Obtenida la vena, éste se expresó así:

-- Señores del Tribunal: Ha llegado el momento en que este Ministerio Fiscal crea de su deber solicitar el sobreesi-
miento de esta causa criminal que pretende encartar al acusado por el delito de traición. Obedece esta resolución al testimo-
nio elocuente que nos rodea. Me refiero a este innúmero públi-
co que invade esta Sala de Visitas y los pasillos que a ella -
dan acceso, alcanzando inclusive los patios interiores del Tri-
bunal y la calle misma. Son sencillamente el pueblo. ¡Triste -
ironía la de que mientras aquí nos constituimos en lo que la -
ley da dado en llamar el Tribunal del Pueblo, ese pueblo al --
que pretendemos representar, nos dice, con su presencia y sus
muestras inequívocas de apoyo al acusado, que ya ha llegado a
un veredicto de inocencia totalmente incompatible con el de --
culpabilidad que este Ministerio parecía estar obligado a soli-
citar. ¿Cómo insistir en que el acusado se le declare traidor
al pueblo cuando ese mismo pueblo le aclama por su héroe y sal-
vador?.

Los aplausos ensordecedores que remataron esta interro-
gante angustiosamente sincera del señor Fiscal le anticipoaron

la resolución del Tribunal. En efecto, si bien no se concedió el sobreseimiento recabado, se sabe que poco después de que el presidente del Tribunal diera por levantada la sesión hasta ulterior señalamiento, se establecieron comunicaciones con el -Presidente de la República y, en brevísimo plazo, se hacía público la proclama de Amnistía Absoluta concedida por éste a todos los encausados por el mismo delito del encartado aquella mañana.

Aquella exoneración que recibiera del su pueblo el anterior Presidente de la República Filipina maniquí, D. José Laurel, se vio ratificada poc tiempo después al ser unido con el voto popular que le mereció un escaño en el Senado Filipino.

No había sido, pues, exaltación del momento, sino meditada decisión.

He aquí el episodio clímax de los famosos procesos por Colaboracionismo instruidos en Filipinas inmediatamente después de la conclusión de la Guerra del Pacífico.

En otras latitudes, empero, vemos a un anciano de aspecto venerabilísimo que, en la soledad escalofriante de una isla diminuta, va contando, al parecer, los minutos que le restan hasta el abrazo definitivo con la Descarnada. Venimos a descubrir que carece de nacionalidad, está desposeído de los elementales derechos cívicos, lleva en sí el estigma de la traición. No han sido parte a evitarle la ignominia su brillentísimo historial en los campos de batalla ni los grandes aciertos de estadismo en la época más difícil de su patria. Un tribunal "popular" muy al margen de los sentimiento del pueblo que suponía representar, le halló culpable del delito de alta

traición y cargó sobre él todas los rigores de la ley.

Se trataba, nada menos, que del Mariscal Henri Pétain.

!Qué contraste entre la causa contra Petain y la instituida contra Laurel!. ¿A qué se debió esa diferencia de criterio entre los tribunales francés y filipino. ¿Cuál de ellos -- se puede decir, acertó con su veredicto?. ¿A quién se hizo justicia?.

Hémos, pues, frente al problema del Colaboracionismo, uno de los más capitales que nos trajo la Segunda Guerra Mun--dial.

En gracia a las modificaciones sufridas en materia de conquista militar, hemos presenciado el surgir de un tipo nuevo de relaciones entre los vencedores y los vencidos. En épocas pretéritas -- se estaba con el enemigo --- y se era traidor o en contra suya- y se venía a ser héroe. Pero, en la pasada -- conflagración universal se dió el caso de hombres y mujeres -- que sin pronunciarse en contra del enemigo se sabía que no estaban con él. Es el caso de los colaboracionistas.

¿Hasta qué punto cabe admitir esta postura sin que se caiga de lleno dentro de las pragmáticas que sancionan la traición?. En qué se diferencia el colaboracionismo de la traición suponiendo que se diera tal diferencia?.

Fuerza es confesar que de la resolución acertada de este problema se seguirán resultados harto importantes en el predio de la política, la convivencia social, la ciencia jurídica.

Nosotros hemos querido enfocar la cuestión desde el punto de vista del Derecho y la Justicia. Según sea la actitud que

se adopte ante el problema planteado, habríamos traído el consuelo, la seguridad a muchas almas o, el contrario, habríamos comenzado a sembrar la zozobra, la angustia, el temor en todas ellas.

Si al colaboracionista se le reputa traidor, entonces se estaría a un paso de exigir que, en toda invasión enemiga, el pueblo vencido debería optar únicamente por dejarse matar hasta convertir la patria en un cementerio. ¿ Sancionaría esto la Justicia?.

Más, si, por el contrario, el colaboracionista se le debe concebir tan patriota como el que más y que, sin reparo alguno, pueda apoyar las pretensiones del enemigo ¿ no se seguiría de esto que habría que licenciar a todo traidor o que se justificaba la venta de la propia patria?

Estas alternativas nos dan ya la medida de la importancia del problema y, por ende, su justificación como tema de estudio.

Avala aún mas esa justificación el conocimiento que se tiene de que presuntamente acerca de este problema está aún por decirse la última palabra. Los pareceres distan bastante de ser unánimes y todavía no se cuenta con el fallo definitivo.

Dicho en otras palabras, la cuestión continúa sobre el tapete de la discusión.

Toda vez que la solución popular filipina riñe con las adelantadas por las instituciones jurídicas de otros países, hemos creído conveniente, oportuno, y hasta patriótico hacer de ella objeto de nuestra tesis doctoral.

En este modesto estudio pretendemos no solamente exponer, con la mayor claridad posible y apoyado siempre en textos

oficiales, la posición filipina respecto del problema del Colaboracionismo, sino también demostrar, dentro de nuestras fuerzas y dotes limitadas, la justificación lógica-jurídica de esa posición. Queremos creer que, en orden a la cuestión del colaboracionismo, Filipinas ha aportado una solución original que merece tenerse en cuenta por los tratadistas de Derecho Internacional y aún por cualquier discípulo de la Justicia.

Es posible que algo más que nuestra modestia no nos permita asegurar que hayamos alcanzado la realización de nuestro propósito. Pero, nos consolamos con el pensamiento de que en el esfuerzo emprendido hemos puesto nuestra mayor sinceridad y hemos blandido todos nuestros recursos. Después de todo ya el poeta filipino dejó dicho:

"La medida de las cosas humanas
no el éxito la da, sino el esfuerzo".

Sobre que, a decir verdad, del mérito o desmérito de nuestra obra no somos nosotros quienes debemos juzgar. Tarea tan delicada incumbe a este Ilustrísimo Tribunal calificador, a cuyo dictámen nos sometemos humildemente.

!El Señor sea servido de que merezcamos veredicto favorable!.

POMPEYO REALUYO FGA.

CAPITULO I

NOCIONES PRELIMINARES

I. NATURALEZA DEL PROBLEMA Y SU ESTADO ACTUAL:

Antes de los horrores y atrocidades de la Primera Guerra Mundial, que se multiplicaron desmesuradamente en la Segunda Guerra Mundial, las naciones habían formulado ciertas reglas y principios que vinieron a llamarse Derecho Internacional, regulando la conducta entre ellos y hacia sus respectivos habitantes, militares y civiles, en tiempos de paz o de guerra. Durante los años que precedieron a la primera conflagración mundial, los gobiernos civilizados no vislumbraban los excesos en potencia de que la inhumanidad del hombre para con el hombre sería capaz. Hasta entonces, la guerra bajo ciertas condiciones, se consideraba como debidamente justificada, por lo que, las naciones no la condenaron ni renunciaron a ella como instrumento de política nacional, o sea como un medio de dirimir las controversias internacionales.

Pero, cuando, en la primera Guerra Mundial, la humanidad civilizada vió que la guerra podía ser empleada para objetivos o razones diferentes, distintos de los de guerras anteriores y que los métodos e instrumentos de la guerra habían cambiado materialmente al ocupar no sólo a los ejércitos contendientes en los bien definidos campos de batalla en tierra, mar y aire, sino que también extienden mortandad y destrucción a los habitantes inocentes y a sus propiedades como se multiplicaron mil veces durante la segunda Guerra Mundial, la necesidad de exigir o poner en vigor las leyes de la guerra llegó a ser más evidente como queda

probado en los juicios y condena de los criminales de guerra en el Japón y en Alemania.

No es objeto de esta tesis establecer o exponer la legalidad o ilegalidad de la guerra, ni la culpabilidad o inocencia de los autores de la misma, sino que su objeto primordial es exponer y analizar los efectos jurídicos de uno de los incidentes de la guerra, es decir, la ocupación militar de los territorios del enemigo y las relaciones de los habitantes del territorio ocupado para con el ocupante según las reglas y los principios reconocidos del Derecho Internacional.

Es un hecho histórico que durante la segunda Guerra Mundial, muchas naciones especialmente pequeñas y débiles, sufrieron bajo la ópresión pesada de la ocupación militar. En el continente europeo, casi todos los países fueron ocupados militarmente por Alemania e Italia durante las primeras fases de sus ataques "blitzkrieg" contra los pacíficos habitantes de dicho continente. También en el Asia, no nos libramos de los efectos desgraciados de la última guerra. Filipinas, como los otros países del Oriente, fué así mismo víctima de la agrésión de las fuerzas Japonesas y avasallada por la ocupación militar por más de tres años; No decimos más de los sufrimientos, penas, dolores, tormentos, y padecimientos que tuvieron que sobrellevar estos pueblos ocupados, pues son de conocimiento internacional.

Después de la liberación de los territorios ocupados por los enemigos y la restauración de los gobiernos legítimos, en Filipinas, como en otros países que estuvieron ocupados militarmente, se crearon tribunales especiales (en Filipinas se denominó "People's Court" o Tribunal del Pueblo), cuya única mi-

sión era la de juzgar a los habitantes procesados por el delito de traición por haber supuestamente ayudado al enemigo durante la ocupación de los países respectivos. Todas estas causas se llamaron "Juicios por Colaboración", que es otro nombre para el delito de traición. Después de iniciarse estas causas en sus respectivos tribunales, hubo mucha polémica acerca de ellas y durante las vistas de las mismas, hubo muchos ciudadanos de opinión dividida, tanto que en uno de los países, casi llegan a provocar una guerra civil. En casi todos los casos, los acusados fueron condenados y muy pocos absueltos. Pero el fallo en estas causas en sus tribunales respectivos, no terminaría con las cuestiones jurídicas de aplicación en cada caso. De ahí que el objeto de este trabajo sea exponer todos los conflictos y llegar después a un concepto claro y jurídico sobre este tema del colaboracionismo político.

En esta tesis vamos a abordar la exposición y defensa de los puntos que a nuestro juicio deben ser reconocidos como fundamentales para llegar al conocimiento exacto del concepto jurídico del colaboracionismo:

1.- Durante la ocupación enemiga, la soberanía del gobierno de Jure queda suspendida; entendiéndose, que pierde vigencia jurídica.

2.- Como corolario inevitable del primer principio, la "Allegiance" (-) de los ciudadanos ó nacionales del país ocupado para con su gobierno legítimo o de Jure también queda suspen-

(-) - Por consejo del Director de esta tesis, usamos esta palabra.

dida.

3.- Las leyes políticas del gobierno legítimo no obligan a los naturales ó ciudadanos durante el período de ocupación enemiga.

4.- Los habitantes del territorio ocupado quedan obligados solamente por las leyes que el poder ocupante decida reconocer o imponer.

5.- La "Allegiance" y consiguiente protección, así como la "allegiance" y la soberanía, son términos recíprocos y no puede exigirse la una sin la otra.

6.- Los habitantes quedan sujetos a la "allegiance" temporal al ocupante únicamente en el sentido de obediencia a todos sus mandatos.

7.- La traición, como categoría jurídica, es un delito - esencialmente político, que exige la presencia simultánea de la "allegiance" y la "soberanía".

Con la exposición correcta de estos principios a la luz de las reglas reconocidas y establecidas por el Derecho Internacional y la justicia, es como podemos llegar al verdadero concepto del colaboracionismo deslindando de una vez su carácter no-delictivo.

Según el Derecho Internacional, el territorio es considerado ocupado cuando de hecho cae bajo la autoridad de las fuerzas enemigas. El Derecho Internacional impone a los ocupantes la - - obligación de restablecer el orden público - - - - "la autoridad del poder legítimo habiendo de hecho pasado a manos del ocupante, él mismo tendrá que tomar medidas efectivas que estén a - su alcance para restaurar cuanto antes la seguridad y el orden -

público respetando en lo posible las leyes vigentes en el país".

(1) Cuando esta disposición dice: "la autoridad del gobierno legítimo habiendo de hecho pasado a manos del ocupante", ¿qué efecto tiene esto sobre la soberanía del gobierno legítimo? ¿Y cuál sobre la "allegiance" de los habitantes? ¿Produce esta regla de Derecho Internacional el traslado de la soberanía del gobierno legítimo al ocupante militar ó solamente la suspende en el sentido de que no pueda ejercerse durante la ocupación enemiga? ¿O es que abroga totalmente la soberanía del gobierno legítimo?

Si podemos demostrar que la soberanía del gobierno legítimo queda suspendida durante la ocupación enemiga, ¿qué título, si hay alguno, podría aducirse para exigir la "allegiance" de los habitantes del territorio ocupado? ¿Están los ciudadanos obligados a obedecer las leyes del gobierno legítimo durante la ocupación enemiga? ¿Podría hacérseles responsables después por violaciones de las mismas durante la ocupación enemiga?

Se admite por el Derecho Internacional que el ocupante puede naturalmente suspender las leyes de naturaleza política y todas aquéllas que puedan afectar el bienestar y la seguridad de sus mandatos, así como los privilegios políticos, y promulgar leyes nuevas que la necesidad militar exige para el dominio del país ocupado y la protección de su ejército. (2) Cuando el ocupante suspende las leyes políticas, ¿alcanza esta suspensión a las leyes que castigan la traición? Si esto fuera así, ¿cómo podría castigarse a los habitantes que hubiesen cometido actos - -

1 - Reglamentos de La Haya de 1907, Artículo 43 y 44
2 - Rules of Land Warfare, U.S., 1940, Articles 285

que constituyan traición contra el gobierno legítimo? ¿Cómo podría el gobierno legítimo, una vez restaurado en el poder, exigir cuentas por actos de traición contra el mismo cometidos durante la ocupación enemiga? La debida solución a estos problemas nos hará llegar al correcto concepto jurídico del colaboracionismo. En las páginas siguientes procuraremos despejar estas incógnitas.

Confiamos en que este pequeño trabajo pueda ser una - - aportación a la solución de este problema explosivo que ha sacudido al mundo causando injusticias en muchos que, por motivos patrios, hicieron el duro sacrificio de prestar servicios al ocupante enemigo y que, por esto, fueron totalmente incomprendidos hasta el grado de signarles con la tara del traidor.

Expresamos esta confianza no sin el temor concomitante, porque sabemos que no todos están contestes en exonerar de toda responsabilidad criminal al que "colabora" con el enemigo de su propia patria. En una palabra, se está aún en el estado polémico respecto de este asunto; lo que lo justifica como tema de tesis doctoral.

2. METODO A SEGUIR:

En este trabajo, adoptamos el método de exponer primero todos los principios y reglas generales del derecho de la guerra que regulan los derechos y obligaciones del ocupante militar y los habitantes del territorio ocupado, teniendo en cuenta lo reconocido y establecido por el Derecho Internacional y la opinión de los autores y comentaristas más autorizados.

Después del estudio de estos principios y reglas, nos proponemos hacer una crítica de ellos, analizando las ventajas y desventajas de cada uno, basándonos en las experiencias y observaciones de los ejércitos de ocupación. Citamos también todos los comentarios y la jurisprudencia que interpretan y aplican es tos principios, adelantando incluso una crítica de los fallos y opiniones de reconocidos juristas u autoridades en Derecho Internacional.

En tercer lugar, adoptamos el estilo polémico cuando abr damos el estudio de las opiniones, teorías, fallos y jurisprudencia que militan en contra de nuestra tesis. Citamos uno por uno a estos críticos y les refutamos a la luz de los principios reconocidos, la jurisprudencia y las opiniones de autores y comentaristas consagrados, así como con los principios de la más depurada justicia. Si bien sentimos tentación de arredrarnos an te nuestra osadía, cobramos aliento al recordar que todos necesitamos del acicate de la crítica para mejorar nuestra vida profesional. Pero esta crítica solamente es provechosa, cuando es serena y correcta, sin apasionamientos ni censuras personales. Ciertamente, cuando como consecuencia del estudio y la investigación se llega a adquirir el convencimiento de lo que se cree acertado para enmendar un error, se siente el impulso irresistible de co municar estas observaciones en este trabajo, exponerlas más ampliamente posible, si es que con ellas podemos prestar un servicio a la justicia.

3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:

Antes de proceder al desarrollo de la tesis, es absoluta

mente necesario que delimitemos los conceptos y términos empleados en la misma. Hay muchas palabras que no podríamos traducir - al español porque ocasionarían equívocos o porque no tienen cabal equivalencia. Una de estas es la palabra inglesa "allegiance" que preferimos usarla en su original. Pedimos disculpa por ello a este Ilmo. Tribunal.

1. Colaboración - (Inglés - collaborate; Latín - colaborar) - laborar juntos; trabajar conjuntamente; cooperar con el enemigo (usualmente de modo traicionero) especialmente con los conquistadores de la propia patria.) (3)

2. "Allegiance" - el vínculo que une al ciudadano con su gobierno a cambio de la protección que el gobierno le brinda. El deber que el súbdito debe a su soberano, correlativo a la protección recibida. (4)

- El vínculo que une al ciudadano con su estado; la obligación de obediencia y apoyo que le debe; por -- usar una fraseología feudal, el estado es la persona política a quien se debe pleito homenaje. (5)

La obligación de fidelidad y obediencia que el individuo debe al gobierno bajo el cual vive, o a su soberano en cambio de la protección que recibe. (6)

- Aquel deber que es recíproco a la protección que nace de las relaciones políticas entre el gobierno y el ciudadano. (7)

3 - Webster's International Dictionary, Unabridged, 1955.

4 - 18 Law Quarterly Review, 47

5 - Willoughby, Fundamental Concepts of Public Law, p 356

6 - Carlisle vs. U.S., 85 U.S. 147

7 - Wallace vs. Harstad - 44 Pa., 492

- Es una deuda que se debe por el súbdito, según su contrato implícito con el príncipe, de tal modo que mientras uno brinda protección, así el otro se portará fielmente con él. (8)

3. LOYALTY - (Español) - lealtad; Frances - loyauté; Latin - lealtá) - cumplimiento de lo que exige las leyes de fidelidad y las del honor y hombría de bien.

- que guarde a personas ó cosas la debida fidelidad. Aplicarse también a las acciones, palabras propias de un hombre fiel y de buena ley, que es traidor. (9)

- entraña el sentimiento (frecuentemente fuerte y aún entusiástico) que acompaña a un sentido de "allegiance". (10)

4. OCUPACION BELICA O MILITAR - Un territorio se considerará como ocupado después de haber sido invadido por las fuerzas enemigas, el estado a que pertenece cesa de el hecho de ejercer su autoridad regular y el estado invasor es el único que puede mantener el orden en aquél. (11)

- un territorio se considera ocupado - - cuando de hecho se le pone bajo la autoridad del ejército enemigo. La ocupación se extiende sólo al territorio donde dicha autoridad se ha establecido y puede ejercerse. (12)

- Supone una invasión hostil, de resul--

-
- 8 - Jackson vs. Goodell, 20 Johns, N.Y., 1880
 9 - Enciclopedia Jurídica Española, Tomo 29, p. 1230
 10 - Webster's International Dictionary of the English Language, Unabridged, 1935
 11 - Manual de Oxford de 1928, Institute de Derecho Internacional
 12 - Reglamentos de La Haya de 1907, Artículo 42

tas de la cual el invasor ha hecho que el gobierno invadido se vea imposibilidad de ejercer públicamente su autoridad y que el invasor esté en situación de sustituir y de hecho ha sustituido con su propia autoridad la del gobierno legítimo en el territorio invadido. (13)

5. TRAICION - es una falta de lealtad cometida por aquél que la debe, perpetua o temporalmente. (14)

- La falta de "allegiance" por toda persona que la debe al gobierno de las Islas Filipinas, no siendo extranjera, que la combate o se adhiere al enemigo, dándole ayuda y apoyo dentro de Filipinas o fuera de ella.(15)

- (etim - de tradere - entregar) designa los delitos que tienen por fin la entrega de la Patria al extranjero. (16)

6. SOBEPANIA - (Latin - suprema potestas, superanus) (17) lo define Bodin como la "summa in cives ac subditos, legibusque soluta potestas", el poder supremo del Estado sobre sus ciudadanos y súbditos, sin restricción de la ley.

- Según Grotius - "The supreme political power vested in him whose acts are not subject to any other and whose will cannot be overridden".

- Blackstone, en su "Commentaries on the Laws of England" la define como "la autoridad suprema en donde la "Jus summi imperii" reside.

13 - U.S. Rules of Land Warfare, Article 272

14 - U.S. vs. Wilberger, CC Pa.1820; 5 Wheaton,76; 5 L.Ed., 37

15 - Código Penal de Filipinas, Artículo 114

16 - Groizard, El Código Penal de 1870, 2ª Edición, Madrid, 1911, p.18

17 - Bodin, De la República, 1576; Grotius; Blackstone, Comentarios on the Laws of England, Cyclopedia of American Government, Vol. III, p., 363-364, op. cit.

CAPITULO II
DE LA LEALTAD (ALLEGIANCE)

I. ETIMOLOGIA - EVOLUCION - CLASES Y CONCEPTO ACTUAL

La etimología de la palabra "allegiance" se remonta al origen del feudalismo en Inglaterra cuando los súbditos ó vassallor del Barón feudal debían "pleito-homenaje" a su señor ó amo en consideración de la protección que éste les pudiera dar. Es un hecho histórico de aceptación común que tal protección era el principal cuando no el único móvil por el cual los comuneros en la Inglaterra feudal se conformaban con perder la mitad de sus libertades y reconocer la autoridad del su señor. La "allegiance" era una relación personal entre el vasallo y su deudatario.

La "allegiance", como su etimología indica, es el nombre del vínculo ^{que} en enlaza al ciudadano con su patria - - - la obligación de obediencia y apoyo que debe a la misma. El estado es la persona política a quien esta "allegiance" pertenece. El principio fundamental del derecho común en relación con la nacionalidad inglesa reposa en el nacimiento dentro de la "allegiance" que se llama también "vasallaje", "obediencia", "fe", o "poder" del rey. El principio abarca a todas las personas que nacieron dentro de la "allegiance" al rey y estuvieron sujetas a su protección. La "allegiance" y la protección son conceptos mutuos, expresados en esta máxima - - - "protectio trahit subjectionem et subjectionem protectionem" - - - y no se ^econstrin^egía a los súbditos de origen ó por adquisición legal ni a los que hubiesen jurado "allegiance, sino también a los extranjeros amigos, en tanto estuvieran dentro del reino. (1)

La palabra "allegiance" procede de la latina "alligare" -- vincularse a otro -- y quiere decir el vínculo que enlaza al individuo con su gobierno(2)

Hay varias clases de "allegiance" y son las siguientes:

1. "Allegiance" natural - la que procede de la naturaleza y el nacimiento.

2. "Allegiance" adquirida - aquella que nace de una -- circunstancia o acto que no sea el nacimiento, o sea por naturalización.

3. "Allegiance" local - la que proviene de un juramento, prestado ordinariamente en el pueblo ó en su tribunal, pues, según el derecho común se puede tomar juramento a todo el que -- cumpliera doce años.(3)

En derecho español, parece que no hay equivalencia -- exacta de la palabra inglesa "allegiance". En nuestra investigación, hemos encontrado un término jurídico que asemeja el concepto de allegiance. Esto es el término Feudo-Ligio que se refiere a la relación entre el feudatario y señor en que el primero se -- queda tan estrechamente subordinado al señor, que no puede reconocer otro con subordinación semejante; como si se dijera, atado á aquel señor; a distinción del no ligio que refiere aquellos -- otros en que la fidelidad se prometía en tal forma que podía -- prestarse la que a otro señor se debiera; de donde resulta que --

2 - Magoon, Report on the Law of Civil Government under Military Occupation, p 114

3 - III Corpus Juris Secundum, 885

no podia recibirse por un feudatario mas de un feudo ligio, pero si dos o mas ligios. (3a)

Volviendo a la etimología de este término, el Feudo Ligio, pues, referimos primero al Feudo que se deriva en la palabra Latina (fides) y hay otras que se dice que el origen está en el antiguo aleman (feh, que significa la recompensa, y od, que equivale a propiedad). La primera etimología atiende mas a los servicios del vasallo; la segunda, a la recompensa por parte del señor.

El Feudo se refiere al contrato por el cual los soberanos y los grandes señores concedia en la Edad Media tierras ó rentas en usufructos obligandose el que la recibía a guardar fidelidad de vasallo al donante; prestarle el servicio militar y acudir a las asambleas politicas y judiciales que el señor convocaba.

En el párrafo inicial de Título XXVI, Partida 1ª se dice que es el feudo "una manera de bien fecho que dan los señores á los vasallos por razón de vasallaje"., y en la Ley 1ª del mismo título, se repite substancialmente el concepto agregando que "el vasallo faze homenaje de serle leal (al señor)". Este feudo se ponen en contacto de dos elementos: La concesión por parte del señor de la tierra, y el juramento de fidelidad que presta el concesionario. El primero tiene su antecedente en el beneficio y que tomó la concesión de tierras sin transmisión de plena propiedad, y el segundo en la recomendación. Esta costumbre de la reco

mendación, mediante de lo cual, los hombres pobres y desvalidos buscaban el amparo de los fuertes y se acogían á su protección. Con éste nació un estrecho vínculo mediante el juramento de fidelidad, origen de nuevas y mejor definidas relaciones personales

Había varias clases de Feudos, p. ejem., - el Feudo de Cámara - el que está constituida en un estipendio ó retirando - anual de dinero sobre el arca ó arario del señor directo. Se -- considera esta clase como uno de los modos del feudo personal, en frente a aquel real que podría transmitirse a los herederos. El Feudo Franco - el que se concedía libre de obsequio y servicio personal; Feudo propio o impropio siendo los propios los -- normales y ordinarios que pudieran considerarse como el tipo de la institución, y los impropios aquella que se apartan por alguna especialidad de esa norma ó tipo; El Feudo Laical- el que se daba por los principes ó otros señores seculares, y aún por eclesiásticos de sus bienes patrimoniales y laicas. El Feudo Recto que tenía obligación de obsequio y servicios persona determinado o no. Y el Feudo Alodial - el que no era redimible como en -- la actualidad, en el censo. El último clase de Feudo es que hemos citado arriba que tiene carácter semejante con el de la palabra inglesa "allegiance". Opino que no hay muchas variedades entre el uno y el otro por razón de que todos estos conceptos -- nacieron durante la época feudal, cuando los señores los rigieron la tierra y ejercen los poderes del soberano de hecho y de jure. (3b)

3b - Enciclopedia Jurídica Española, Tomo XVI.
Enciclopedia Universal Ilustrada, Europeo-Americana, Tomo XXIII

EL CONCEPTO ACTUAL:

La "allegiance" es la obligación de fidelidad y obediencia que asumen los individuos para con su gobierno ó su soberano a cambio de la protección que reciban.

La "allegiance" es el deber de obediencia a un gobierno, a sus decretos. Recalca una idea de obligación objetiva e deber debido, mientras que la lealtad según el uso moderno, entraña - los pensamientos y sentimientos - - algunos fuertes y entusias-- tas - - que acompañan a un sentido de "allegiance". (4)

El vínculo que enlaza al ciudadano con su gobierno a cam**bi**o de la protección que el gobierno le diera. La obligación del súdito al soberano correlativa a la protección recibida. (5)

"Allegiance" as defined by Blackstone, -!is the - tie or ligament which binds the subject to the King in - return for that protection which the King affords the - subject. Allegiance both expressed and implied is of two kinds, the one natural and the other local, the former - perpetual, the latter temporary. Natural allegiance is - such as is due from all men born within the King's domi- nions immediately upon their birth, for immediately upon their birth they are under the King's protection. Natu-- ral allegiance is perpetual and for these reason, eviden- tly founded on the nature of goberment. Allegiance is a debt due from the subject upon an implied contract with

4 - Webster's International Dictionary of the English Language,
2d Ed., 1935

5 - 18 Law Quarterly Review, 47

the prince that so long as the one affords protection the other will demean himself faithfully. Natural born subjects have a great variety of rights which they acquire by being born within the King's allegiance, which can never be forfeited but by their own misbehaviour; but -- the rights of aliens are much more circumscribed being -- acquired only by residence, and lost whenever they remove. Is an alien could acquire a permanent property in -- lands, he must owe an allegiance equally permanent to -- the King which could probably inconsistent with that -- which he owes his natural liege-lord; besides, that thereby the nation might in time be subject to foreign influence and feel many other inconveniences. (6)

"Allegiance" was said by Mr. Justice Story to be nothing "more than the tie or duty of obedience of a subject to the sovereign under whose protection he is". (7)

It is that duty which is reciprocal to the right of protection, arising from political relations between the government and the citizen. (8)

By allegiance is meant the obligation of fidelity and obedience which the individual owes to the government under which he lives or to his sovereign in return for -- the protection which he receives. (9)

6 - Jackson vs. Goodell, 20 Johns 188; 3 Words and Phrases, permanent ed, p. 226-7

7 - U.S. vs. Wong Kim Ark, supra;

8 - Wallace vs. Harmsstad, 44 Pa., 492,-501

9 - Carlisle vs. U.S., supra.

It would appear therefore that allegiance is a political obligation between the sovereign and citizen of a reciprocal character involving obedience on the part of the citizen and protection on the part of the sovereign. Incidental to the citizens obligation of obedience is the right to sever the obligation or expatriate himself. - This government has long contended for this right, and - has defined what shall constitute expatriation in the -- above provision of the Act of March 2, 1907. (10)

The obligation of inhabitants owing allegiance - to a sovereign is to obey the laws of said sovereign, - said law being the expression of his will. (11)

De las citas que preceden se puede resumir un pensamiento común, a saber que la "allegiance" no es más que la obediencia a las leyes. Quiere decir que la "allegiance" es el término que se usa para designar la obligación que tienen los ciudadanos para con su soberano o gobierno a cambio de la protección que éste les da. Este concepto de la "allegiance" es el actual y a la luz del mismo, seguimos en esta tesis con la exposición de los principios reconocidos por el Derecho Internacional. Este concepto puede verse en la actuación de los redactores de la Constitución Norte Americana, en la del Congreso de los Estados Unidos al promulgar la ley federal que castiga la traición, y la -

10 - Opinion of August 22, 1919 of the Solicitor General for the Department of State, Mackworth, Digest of International Law, Vol. III, p. 271, op. cit.

11 - Magoon, supra.

de los autores de la ley número 292 de la Comisión de Filipinas así como en el Código Penal de Filipinas, cuando en todas ellas se hace consistir básicamente la traición en una falta de "allegiance", en el entendido de que la "allegiance" es sencillamente la obediencia a las leyes. Una prueba es la Resolución del Congreso Continental de los Estados Unidos de 24 de Junio de 1776, que recomendaba a las colonias que aprobasen una legislación sobre la traición:

Resolved, That all persons abiding within any of the United Colonies, and deriving protection from the laws of the same, owe allegiance to the said laws, and are members of such colony; and that all persons passing through, visiting or make a temporary stay, owe, during the same time, allegiance thereto;

That all persons, members of, or owing allegiance to any of the United Colonies, as before described, who shall levy war against any of said colonies within the same, or be adherent to the King of Great Britain, or others the enemies of said colonies, or any of them, within the same, giving to him aid and comfort, are guilty of treason against such colony;

That it be recommended to the legislatures of several United Colonies, to pass laws for punishing, in such manner as to them shall see fit, such persons before described as shall be proveably attainted of open deed, by people of their conditions, or any of the treasons before described. (12)

En el texto de esta resolución, aparece claramente y sin género de duda que: (1) la "allegiance" a las Colonias Unidas quería decir ó equivalía a obediencia a las leyes de éstas; (2) y que la "allegiance" y la protección son recíprocas.

Ciertamente la "allegiance" no puede tener otra acepción ni siquiera la de patriotismo ó fidelidad (loyalty) a su patria y gobierno porque según los precedentes establecidos, no sólo -

los extranjeros domiciliados al igual los que ciudadanos, están sujetos a la ley contra la traición, sino también los extranjeros enemigos. (13)

"Allegiance" - Treason is a breach of allegiance and can be committed by him only who owes allegiance, - either perpetual or temporary. The word therefore "owing allegiance" to the United States in this section are entirely surplus words which do not in the slightest degree affect its sense. The construction would be precisely the same were they omitted. (14)

Treason against the United States may be committed by any one resident or sojourner within its territory and under the protection of its laws, whether he be a citizen or alien. (15)

Como ejemplos históricos, citemos los siguientes que prueban nuestra proposición de que la "allegiance" no es más que obediencia a las leyes a cambio de la protección recibida:

1. La "allegiance" de los filipinos a España durante -- los tres siglos que estuvimos bajo la soberanía de la misma. Esta "allegiance" no tenía más alcance que el puramente técnico y objetivo a saber, la obligación de obediencia a las leyes de España vigentes en Filipinas. La loyalty (fidelidad) y devoción de los filipinos se remitía a su propia patria;

2. La "allegiance" de los filipinos a los Estados Unidos desde la ocupación norte-americana que se impuso por la vio-

13 - De Jager vs. Atty. Gen. of Natal, Hackworth, Vol. III, op. cit. 386; Carlisle vs. U.S., 21 L. Ed., 426

14 - U.S. vs. Wiltberger, CC Pa. 1820; 55 Wheaton 76, 5 L. ed. 37

15 - 1 Hale Prec. (Eng.), 59, 60, 62; 1 Hawk P.O., (Eng.) W. Kel., (Eng.) 38 "Charge to the Grand Jury, CC Pa. 1851 a Wall, Jr., CC 134, 30 Fed. Cas. No. 18276 (United States Code Annotated, Title 8, Criminal code and Procedure, Secs. 1 to 260, p 8)

lencia. Esa "allegiance" surgió de la necesidad de someterse a una fuerza superior. La "loyalty" de los filipinos a su patria y a su República, de Malolos subsistió aún después del desaparecimiento de esa República, se acunó en el refugio de sus corazones y entendimientos hallando expresión en su lucha pacífica -- por la reconquista de su independencia.

3. La "allegiance" a Alemania por parte de los habitantes de las provincias francesas de Alsacia-Lorena, como resultado de la guerra Franco-Prusiana de 1870;

4. La reciente "allegiance" al régimen soviético de los habitantes de Estonia, Letonia, y Lituania después que sus Rep^ublicas independientes fueran destruidas por los soviéticos y -- sus territorios, incorporados a Rusia;

5. El caso de Irlanda: Por siglos, los irlandeses vienen odiando a los ingleses. Los irlandeses permanecieron neutrales durante la segunda guerra mundial mientras Inglaterra se desangraba y sus ciudades eran destruidas. Los movimientos irlandeses para lograr la completa separación de Inglaterra, se remonta a 1779 y, sin embargo, los irlandeses, según la ley durante todo ese tiempo, prestaban "allegiance" al Rey de Inglaterra y sus funcionarios públicos se veían obligados a prestar un juramento de "allegiance" al mismo monarca cuando tomaban posesión de sus cargos;

En 6 de Diciembre de 1921, los ingleses concedieron a Irlanda del Sur el estado dominio, con la creación del "Estado Libre de Irlanda". Pero apesar de esto y según la misma constitución Irlandesa, el juramento de "loyalty" sigue exigiéndose a los funcionarios públicos. Abominando de ese juramento, el Sr.

De Valera y sus partidarios lucharon por puestos electivos abogando por la supresión de este juramento al Rey, y como resultado, De Valera fué elegido Presidente en Marzo de 1932.

La "allegiance" que deben los irlandeses al rey de Inglaterra según la Constitución de Irlanda, ciertamente no quiere decir la fidelidad (loyalty) ó sentimientos patrióticos hacia Inglaterra y su rey. Significan sencillamente la obediencia a cualesquiera leyes de Inglaterra que estuvieron vigentes en Irlanda según su misma Constitución.

2. LEALTAD CIVICA O JURIDICA (ALLEGIANCE) Y LEALTAD PATRIA (LOYALTY):

Antes de seguir con este trabajo, es absolutamente necesario distinguir el sentido de estos dos conceptos, ya que en la mayoría de los juristas y autores hay mucha confusión sobre el uso y significado de estas dos palabras. A veces se usan de un modo indistinto; por eso, tenemos que delimitar el concepto de cada una para evitar confusiones.

La "allegiance" y la "loyalty" aunque usualmente intercambiables, son conceptos diferentes y separables. El primero es técnico y entraña la relación legal entre el individuo y el gobierno, sea éste el de su patria o el de un soberano extranjero, o entre el individuo y el gobierno del país de su domicilio. Significa por parte de tal persona la obligación de obedecer las leyes del gobierno a cambio de la protección que recibe o tiene derecho a recibir de éste. Se impone o hace de circunstancias independientes de los pensamientos, la simpatía, los deseos, y por consiguiente, es artificial en su naturaleza. De manera que, la

"allegiance", algunas veces, puede deberse a un gobierno extranjero aun enemigo.

"Loyalty" o lealtad patria por otra parte, en su sentido de patriotismo - - - la fidelidad de un ciudadano debida a su -- propio soberano - es estrictamente un asunto de sentimiento o -- conciencia. Posee una acepción sentimental o intelectual. Nace -- de la afinidad mental y emotiva hacia la patria a la que se pregta y se da libre y voluntariamente, al margen de circunstancias extrañas y sin cuidar de si se recibe o no protección de la misma. Así el individuo puede deber "allegiance" al gobierno extranjero o gobierno del enemigo, y al mismo tiempo, conservar su - - "loyalty"(fidelidad) a su patria. Habráse debido a esta razón -- por la que "loyalty" y no la "allegiance" fuera preferido por -- los redactores de la Constitución Polaca, al decir en su Artículo 89 lo siguiente:

Artículo 89: La lealtad (loyalty) a la República Polaca es el primer deber de los nacionales polacos.

La experiencia y la razón estan de acuerdo con que la -- "loyalty", el patriotismo del pueblo, no se forma ni se destruye no se descorazona ni se anima, por cualquiera contingencia que -- pueda surgir de los cambios políticos en un país o por la aplicación de las reglas y principios del Derecho Internacional, común a los países civilizados. La "loyalty" no depende para su propio vigor de los precedentes establecidos por la jurisprudencia, ni por las legislaciones.

Estas nobles emociones surgen de fuentes mas profundas, de las tradiciones heroicas de la raza, de la identidad de la -- sangre, de las ideas políticas, intereses económicos, acervos --

culturales y la fe en el destino común que constituye la nación. Se nutren en los senos de madres patrióticas y de maestros que modelan la maleable mentalidad de la niñez, por la comunidad que sabe aglutinar y anhebrar las fuertes aspiraciones de la juventud.

Ciertamente, no son productos del árbol seco de la ley; la ley delimita y exige la "allegiance", pero la "allegiance" a la patria y pueblo es sólo la cascara de que espíritu de la "loyalty" y la emoción patriótica son las sustancias vivas y alimenticias. Este espíritu y esta emoción no pueden traerse al ser -- por vía de legislación ni pueden reputarse muertas y extintas -- por la ley.

3. LEALTAD CIVICA (ALLEGIANCE) Y LA RECÍPROCA OBLIGACION ESTATAL:

De acuerdo con el concepto actual de "allegiance", hemos dicho que el ciudadano la debe a su soberano o gobierno a cambio de la protección que de él recibe y goza como tal ciudadano. El derecho del soberano o gobierno de exigir "allegiance" u obediencia a sus leyes y mandatos depende de la recíproca obligación de dar protección a sus súbditos. Si el gobierno es incapaz de darla a sus súbditos, - - - la única razón de su existencia no tiene derecho a exigir "allegiance" y los súbditos no están obligados a rendir esa "allegiance".

"Allegiance" - - - - - a political duty, ^b binding on him who enjoys the protection of the commonwealth, to render service and fealty to the Federal government; the obligation to fidelity and obedience which the individual owes to the government or to the sovereign under which he lives in return for the protection he receives; that duty which is reciprocal to the right of protection, arising from the political relations between the government and the citizen. (15a)

Reciprocal Obligation - the obligations flowing - from the relation of a state and its nationals are reciprocal in character. This principle has been aptly stated by the Supreme Court of the United States in its opinion in the case of Luria vs. United States:

"Citizenship is membership in a political society and implies a duty of allegiance on the part of the member and a duty of protection on the part of society, these are reciprocal obligations, one being a compensation for the other. (16)

Allegiance is a debt due from a subject, upon an implied contract with the prince, that so long as the one affords protection, so long will the other demean himself faithfully. (17)

By allegiance is meant the obligation of fidelity and obedience by which the individual owes to the government under which he lives or to his sovereign in return for the protection he receives. (18)

The power to protect is the foundation of the duty of allegiance, (19)

Allegiance is that duty which is reciprocal to protection arising from the political relation between the government and the citizens. (20)

Allegiance is nothing more than the tie or duty of obedience of a subject to the sovereign under whose protection he is. (21)

Allegiance is a duty owing by citizens - to their government which, so long as they enjoy its benefits, they cannot divest themselves. It is the obligations which they incur for the protection afforded them. It varies with, and measured by, the character of that protection. That allegiance and protection are reciprocal obligations binding mutually upon citizens and the government is the fundamental principle upon which society rests. (22)

-
- 16 - Hackworth, Digest of International Law, Vol. III.
 - 17 - Jackson vs. Goodell, 20 Johns N.Y., 188, 191
 - 18 - Shanks vs. Dupont, 2 Pet., 246; Hall International Law, 458; Davis, Elements of International Law, 327-328
 - 19 - Carlisle vs. U.S., 21 L. Ed., supra.
 - 20 - Wallace vs. Harstad, supra
 - 21 - US. vs. Wong Kim Ark, supra
 - 22 - Birkhimer, Military Government and Martial Law, Chapter III, Sec. 26

Natural allegiance is such as is due from all men born with the King's dominions, immediately upon their birth, for immediately upon their birth, they are under the King's protection. Natural allegiance, he (Blackstone) says is a debt due from the subject upon an implied contract with the prince that so long as the one affords protection, so long will the other demean himself faithful.(23)

The fundamental principle of common law with regard to English nationality was birth within the allegiance, also called "liegalty", "obedience", "faith", or "power" of the King. The principle embraced all persons born within the King's allegiance and subject to his protection. Such allegiance and protection were mutual - - - as expressed in the maxim, protectio trahit subjectionem et subjectionem protectionem - - - and were not restricted to natural born subjects and naturalized subjects, or to those who had taken an oath of allegiance but were predictable of aliens in amity, so long as they are within the kingdom. (24)

A citizen or subject may be defined as an individual member of a body politic, owing it a duty of allegiance and support, and entitled in return, to its protection as to his person or property.

He owes it a allegiance and is entitled to its protection. Allegiance and protection are in this connection reciprocal obligations. The one is a compensation for the other; allegiance for protection and protection for allegiance. (25)

Estas citas apoyan cabalmente nuestra proposición de que la "allegiance" y la protección son términos recíprocos, correlativos. Donde no hay protección, el gobierno no tiene derecho a exigir "allegiance". La medida del derecho a recibir "allegiance" de los súbditos la da la capacidad del gobierno de brindarles -- protección. A toda obligación corresponde un derecho. La obligación del gobierno para con sus súbditos es la de darles protección para que así pueda exigir la correspondiente "allegiance".

23 - Corpus Juris Secundum, 1150

24 - U.S. vs. Wong Kim Ark, supra

25 - Minor vs. Happerset, 21 Wallace, 162; U.S. vs. Cruikshank, 92 U.S. 542; The Pizarro, 2 Wheaton 227; Davis, Elements of International Law, Chap. IV, p 135

Si el gobierno es incapaz de dar esa protección por haberse refugiado en otro Estado o por abandonar a sus súbditos en poder del enemigo ocupante, entonces, no tiene derecho a exigir "allegiance" ni castigar o pedir cuentas a los súbditos por sus actos durante el tiempo que estuvieron dejados de la mano de su propio gobierno y se vieron abandonados, poniéndose en el trance de tomar las medidas que las leyes de la necesidad y la propia conservación les dictaban en aquellas circunstancias.

Había una ley en Inglaterra que reconocía al principio - de que, entre la nación fuerte y la débil, cuando ésta se somete a la anterior en consideración de la protección, si dicha ésta - no puede ya darse, entonces la nación débil se ve libre de la obligación del contrato y puede tomar otras medidas eficaces para obtener la protección que necesite. Esta ley ha sido aceptada en Inglaterra desde 1797. La cita el abogado de la defensa durante la vista de los oficiales del Ejército Nacional de la India, - - quienes habían sido acusados por traición, de la siguiente manera:

"When a nation had placed itself under the protection of another that is more powerful, or has entered in to subjection to in with a view of receiving its protection, - - if the latter does not actually protect the - - other, it is manifest that, by failing in its engagement it loses all the rights it has acquired by the convention and that the other being disengaged from the obligation it had contracted reenters into the possession of all - - its rights, and recovers its independence or its liberty. It is to be observed that this takes place even in cases - where the protector does not fail in his engagements through want of good faith but merely through inability. For the weaker nation having submitted only for the sake of obtaining protection - - - if the other proves unable to fulfill that essential condition, the compact is dissolved - - - the weaker resumes its right and he may if he thinks proper, have recourse to a more effectual protection"

Y podemos preguntar: ¿por qué durante el tiempo feudal,

los comuneros en Inglaterra y en Europa, en vez de deber "allegiance" a sus reyes o emperadores, la debían a sus Feudatarios o señores? Es porque los Monarcas no tenían poder de hecho y, por eso no estaban en situación de dar protección a sus súbditos. El poder estaba alojado y ejercido en realidad por los feudatarios o señores, quienes suplían a los Emperadores y reyes reduciendo a éstos a meras figuras decorativas. La soberanía de jure estaba conferida a los reyes y emperadores, pero la soberanía de facto estaba en manos de los feudatarios dentro del dominio de su territorio. Y la "allegiance" se debía a ellos, quienes tenían la fuerza física, permitiéndoles exigir obediencia a cambio de la protección que ellos, y no los reyes, podían dar.

"The prevailing need of the later Roman and early mediæval society was protection -- protection against sudden attacks of invaders or revolted peasants, against unwarranted demands of government officers, or even against the legal but not too heavy exactions of the government. The protection which the government normally furnished the weak freeman and the small landowner could no longer obtain. He must seek protection wherever he could get it and pay the price demanded for it. There are the great social facts -- the failure of the government to perform one of its most primary duties -- the necessity of finding some substitute in private life -- extending throughout the whole formative period of feudalism. (27)

En la causa de la República contra Chapman (28) se planteó la cuestión de la reciprocidad de la "allegiance" y la protección. El acusado lo estaba de traición por haber marchado en 26 de Diciembre del 1776, de la Commonwealth de Pennsylvania, de donde era habitante, para ingresar en las fuerzas inglesas. La cuestión

27 - 9 Encyclopedia Britannica, 204, 14th Edition

28 - Republica contra Chapman, 1 U. S. L, Ed., 33-39

planteada y decidida era la de la naturaleza recíproca de la protección y la "allegiance".

"Defendant's Contention: His counsel argued that - on the 26th of December 1776, there was no government in Pennsylvania from which he could receive protection and consequently, there was none to which he could owe allegiance - - protection and allegiance being political - - obligations of a reciprocal nature.

Contention of the Prosecution: The Attorney General stated the question to be in fact, whether Pennsylvania was a Commonwealth on the 26th day of December 1776. By the declaration of Independence on the 4th of July, 1776 every State in the Union was solemnly declared free and independent. But even before that period, Congress had recommended that new governments should, adequate to the - agency of the public affairs, and a council of safety -- with other temporary bodies actually discharged the functions of the State"

En esta causa, la defensa y la acusación estaban de acuerdo acerca del principio de reciprocidad. Se decidió, no obstante, que había un gobierno en Pennsylvania que aunque imperfecto podía dar protección.

En mérito de lo expuesto, sostenemos que la "allegiance" no es más que una sujeción a las leyes y es sencillamente recíproca e inseparable de la protección, de tal forma que donde no haya protección, no puede haber tampoco la obligación de la "allegiance". En cambio la lealtad (loyalty), la devoción a la patria está al margen de la ley y de la capacidad del Estado de dar protección. No importa lo que las leyes digan y ni cuál sea la doctrina que los tribunales puedan sentar, siempre habrá patriotas y traidores.

4. LEALTAD CIVICA (ALLEGIANCE) DE FACTO Y LA SOBERANIA DE FACTO:

En el estudio de nuestra proposición de que durante la -

ocupación enemiga, el ocupante ejerce su propia autoridad, pero no priva el Estado invadido su soberanía, sino que suspende durante un cierto tiempo el ejercicio ésta. tenemos que llegar a un punto en que nos preguntemos: ¿Qué es la autoridad del ocupante? El estado jurídico de su ocupación de un territorio enemigo conforme el Derecho Internacional le dota competencia para ejercer su propia autoridad y que sus actos tengan validez? ¿Por qué se reconocen esos actos y se les da validez jurídica? En respuesta a estas preguntas, tenemos, que distinguir entre soberanía de facto y soberanía de jure:

"De facto and De Jure Sovereignty: - a distinction may be made between the sovereignty which is actually obeyed by the inhabitants though it may not rest on a strict legal basis, and the sovereignty which has a legal right on its side but which may be temporarily excluded or disorganized as a result of a revolution or foreign conquest. Numerous examples of de facto sovereignties have occurred in history. Such was the sovereignty wielded by Cromwell after the dissolution of the long Parliament, that of Napoleon after the overthrow of the Directory, that of the English Convention which bestowed the Crown on William and Mary and that of the Southern Confederate States from 1861 to 1865. (29)

Here are several kinds of de facto governments. -- The first or government de facto in a proper legal sense is that government that usurps, by force or by voice or -- the majority, the rightful legal government and maintains itself against the will of the latter, such as the government of England under the Commonwealth, first by Parliament and later by Cromwell as Protector. The second is -- that which is established and maintained by military forces who invade and occupy a territory of the enemy in the course of war and which is denominated as a government by paramount force, as the cases of Castine, Maine, which was reduced to British possession in the war of 1812 -- and of Tampico, Mexico, occupied during the war with Mexico by the troops of the United States. And the third, is that established as an independent government by the inhabitants of a country who rise in insurrection against the parent state such as the government of the Southern Confederacy in revolt against the Union during the war --

of Secession.

Hablando de la ^{segunda} ~~guda~~ clase de gobiernos de facto, la Corte Suprema de los Estados Unidos, en la causa de Thorington contra Smith, (30) dijo:

But there is another description of government called also by publicists a government de facto, but which might be denominated a government by paramount forces. - Its distinguishing characteristics are (1) that its existence is maintained by active military power within the territories, and against the rightful government; and (2) That while it exists, it must necessarily be obeyed in civil matters by private citizens who by acts of obedience rendered in submission to such force, do not become responsible as wrongdoers for those acts, though not warranted by the laws of the rightful government. Actual governments of this sort are established over districts differing greatly in extent and conditions. They are usually administered by military authority, but they may be administered by civil authority supported more or less directly by military force. One example of this sort of government is found in the cases of Castine, Maine, reduced to British possession in the war of 1812, (Us. vs. Rice, 4 Wheaton, 253). A like example may be found in the case of Tampico occupied during the war by troops of the United States, (Fleming vs. Page) 9 Howard 614). - These were cases of temporary possession of territory by lawful and regular governments at war with the country of which the territory so possessed was part.

El Gobierno de Ocupación debe, pues, considerarse como - un gobierno de hecho que, por la naturaleza de las cosas, necesita atender a su conservación ó a su convalidación. Todo aquél - que se halle en posesión de la soberanía puede ejercer de hecho las funciones de ésta con mayor o menor eficacia, según su mayor ó menor autoridad y el poder de su imperium y de su auctoritas - en el territorio ocupado.

El gobierno de ocupación es un gobierno de hecho, y nadie puede desconocer que éste, aunque temporalmente, reemplaza al Gobierno del vencido y puede ejercer, a su vez, los derechos de soberanía. (31)
El soberano de hecho se subroga al legítimo en cuanto a los derechos y obligaciones respecto del país ocupado, debiendo atender principalmente a la instrucción, a la beneficencia pública, el libre ejercicio de los cultos, y a satisfacer todos los intereses de la vida social. Por esto, los actos por él realizados tienen la misma fuerza y autoridad que los del soberano legítimo. (32)

Si es verdad que el gobierno de ocupación es un gobierno de hecho, ¿que clase de obediencia deben los habitantes al ocupante? ¿Deberían prestarle allegiance? Sostenemos que durante la ocupación militar, los habitantes deben una "allegiance" temporal y restringida a la potencia ocupante. Por eso hemos dicho antes que durante la ocupación enemiga, el soberano legítimo no era capaz de dar protección a sus súbditos y el gobierno ocupante le sustitúa en su puesto, al que transfieren la fidelidad temporal y restringida. Los habitantes tácitamente acceden al ejercicio por el invasor del derecho de soberanía en recompensa de la protección que les suministra. (33)

Los tratadistas de Derecho Internacional y Los Reglamentos de Guerra de los Estados Unidos están de acuerdo en que (1)
Aunque la ocupación no transmite la soberanía, sí traspasa el -

31 - 4 Fiore, Derecho Internacional Público, 233, 1919

32 - Fiore, *ibid.*

33 - Klüber, par. 256; De Martens, Précis, 280

ejercicio de los derechos de soberanía, autoridad que, según dice el Prof. Davis, "en muchos aspectos, es más fuerte y extensa que la del gobierno despojado totalmente del ejercicio de esa autoridad en el territorio ocupado; (3) El ocupante militar, nos dice Dr. Hackworth, es "de todos modos, el soberano durante la ocupación; la autoridad del poder del ocupante puede llamarse soberanía de facto, y la obligación de prestar obediencia al gobierno impuesto y mantenido por fuerza se conoce por "allegiance" de facto.

Los poderes y las obligaciones del gobierno de hecho se rigen por las reglas de la Convención de La Haya en 1907, que son una revisión de las de la de 1889 acerca de la misma materia: la autoridad militar sobre el territorio enemigo.

Aun cuando es verdad que al ocupante se le prohíbe obligar a que los habitantes le presten juramento de "allegiance", - sí puede hacer que estos juren someterse a todos los mandatos legítimos del ocupante; es decir, a los mandatos que tiene autoridad para imponer según el derecho de guerra. Consideremos que la "allegiance" no es más que la obediencia a las leyes del gobierno bajo el cual la persona vive; o sea, este juramento de obedecer las leyes del ocupante es igual al de la "allegiance" temporal, que no puede considerarse como una violación de las Reglas de La Haya. En otras palabras, el juramento de "allegiance" que se prohíbe es aquél que presupone el cambio total de "allegiance" pero no el juramento que reconoce el hecho de que los habitantes tienen obligación de obedecer temporalmente las leyes del ocupante. Si el gobierno del ocupante durante la guerra es un gobierno de hecho, podemos, por tanto, considerar su soberanía como una -

de hecho también. Si la posesión provisional del ocupante madura en una conquista (debellatio) permanente, ya sea debido a una -- victoria absoluta o a un acuerdo esta "allegiance" de hecho se -- convierte acto seguido en "allegiance" de Jure.

CAPITULO III
DE LA OCUPACION ENEMIGA

I. SU NATURALEZA Y CONSECUENCIAS JURIDICAS:

Cuando un ejército invade un territorio enemigo, su entrada en él desplaza las fuerzas del poder legítimo y pone al invasor en posesión de dicho territorio, el cual tiene aquél derecho a "secuestrar" en virtud de su potestad general de apropiarse de los bienes enemigos. En muchos casos, el invasor no tiene intención de apropiárselo y aunque la tenga, por razón de la inestabilidad de la posesión el acto de apropiación no puede calificarse como completo y absoluto. (1) Podemos considerar -- que la ocupación es un hecho; es la consecuencia lógica del choque entre dos ejércitos y del avance del vencedor; es una de -- las vicisitudes de la lucha y no tiene, pues, carácter definitivo, dándose el caso de que la ocupación del territorio nacional por las fuerzas de otro Estado, siga la evacuación del mismo, y más tarde la invasión del territorio enemigo. (2)

Con anterioridad a la aparición de una ley específica -- de ocupación enemiga, y durante la segunda mitad del siglo XVIII y a principios del XIX, se consideraba que la toma de posesión de un territorio del Estado enemigo por parte de las fuerzas militares del otro beligerante atribuía a éste el derecho de considerar como propio el territorio ocupado y de disponer del mismo libremente. (3) Tal territorio ocupado de todos modos se con-

1 - Hall, International Law, p 485

2 - Reglamento Español, Art. 871; Manual del Instituto, Art. 41

3 - Nys, Le Droit International, les principes, les theories, les faits, vol.iii, 1912, p 223; Kunz, Josef, Kriegerrecht und Neutralitätsrecht, 1935, p. 88

consideraba por el ocupante como de su propiedad, por lo que podía hacer de él y de sus habitantes lo que quisiera.

No había distinción entre ocupación (ocupatio bellica) y conquista (debellatio). Los autores primitivos reputaban la ocupación efectiva como un modo de adquisición del título sobre el territorio ocupado. El ocupante podía, aun antes de finalizar la guerra y de su carácter de ocupación definitiva, disponer del territorio cediéndolo a una tercera potencia. Un ejemplo de esto lo proporciona la guerra del Norte en los años 1700 a 1717 cuando en 1715, Dinamarca vendió los principados suecos de Verden y Bremen al Reino de Hanover. (4) El ocupante podía obligar a los habitantes a prestar servicio en su ejército y luchar contra el soberano legítimo como ocurrió durante la guerra de Siete Años, cuando Federico II de Prusia repetidas veces hizo levatas obligatorias de miles de reclutas en Sajonia, que él había ocupado. (5)

A mediados del siglo XVIII el concepto de la ocupación bélica empezó a cambiar. Surgió la distinción entre la ocupación bélica y la conquista. Fue Vattel en su obra "De Droit des Gens" (6) quien llamó la atención hacia ésta. Mas, fué solo durante el siglo XIX cuando estas distinciones se emplearon en toda su extensión. Mérito debe hacerse de Heffter cuando en su tratado "Das Europäische Völkerrecht der Gegenwart, 1844" agota las consecuencias de la distinción entre la ocupación bélica y la adquisición de territorio. Pufendorf discutió este asunto exhaustivamente y

4 - Oppenheim, International Law, II, - 432 (1944)

5 - *ibid*

6 - Vattel, De Droit des Gens, 1758, lib. III, cap. XIII

arguía que la soberanía debe establecerse por medios que no sean el ejercicio de la fuerza, que es un hecho físico y que no puede tener significado político. (7)

En el siglo XIX comenzó a elabórase la nueva doctrina de la ocupación considerándola en sus justos límites, no ya como medio de conquista, sino como una situación de hecho impuesta -- por la necesidad bélica. La ocupación bélica se considera esencialmente como un hecho provisional, que no anula por sí solo internacionalmente el derecho de la soberanía del Estado al que -- pertenece el territorio ocupado mientras esta situación de hecho no se convierta en una propia y verdadera situación de derecho -- en virtud del tratado de paz que ponga fin a la guerra. La ocupación bélica aunque haya de considerarse como un hecho provisional, de lugar, sin embargo, a varias é importantes consecuencias jurídicas. Por tanto, es necesario determinar con precisión cuán do y con qué límites existe.

Los Reglamentos de La Haya de 1899 y 1907 sobre las leyes y usos de la guerra han dedicado a esta cuestión un conjunto de normas en su artículo 42 que establece: "Un territorio se con sidera como ocupado cuando está bajo la autoridad del ejército -- enemigo. La ocupación no se extiende sino a los territorios en -- los que dicha autoridad se halla establecida y en las condiciones en que se ejerce". El Manual de Oxford sostiene que "un territorio se considera como ocupado cuando, después de haber sido inva-- dido por las fuerzas enemigas, el Estado al que pertenece, ha ce sado de hecho en el ejercicio de una autoridad regular y el Estado invasor es el único que puede mantener el orden en aquél". Y

7 - Pufendorf, De Jure Naturale, lib vii, c. vii 3 et seq.

las reglas de los Estados Unidos sobre la guerra terrestre de -- 1940 dicen en su Artículo 272 que "La ocupación militar es una - cuestión de hecho. Presupone una invasión hostil de resultados de la cual el invasor ha vuelto incapaz al gobierno invadido de ejercer públicamente su autoridad y el invasor se encuentra en situación de sustituir y ha sustituido su propia autoridad por aquella del gobierno legítimo en el territorio invadido." Los autores están de acuerdo en que cuando las fuerzas del invasor han tomado posesión de una porción del territorio del enemigo, tal territorio se considera como ocupado, y el invasor tiene derecho a - ejercer todos los poderes que acompañan la ocupación bélica. (8) - Fiore(9) dice que la ocupación efectiva entraña la sumisión real de los habitantes del Estado ocupado a la autoridad del ocupante Y Wilson(10) sostiene que la tendencia efectiva de un territorio enemigo por parte de un poder militar hostil constituye ocupación militar.

8 - Temporary Occupation: - When an invading force has taken secure possession of a particular portion of the territory of the enemy, such territory is said to be occupied and the invader is permitted to exercise there all the rights of military occupation. The former sovereign has been displaced by an application of military force the allegiance of the inhabitants to their former government, though displaced or suspended, by existence of war and the fact of hostile occupation has not been destroyed. Their obedience to the authority of the invader is constrained and involuntary and can be retained by him only so long as the occupying force is maintained at such strength, throughout the extent of the occupied territory as to effectively compel such obedience. (Boyd's Wharton, Sec 346; US vs. Peraheman, 7 Peters 86; Leitenstorfer v. Webb 20 Howard, 176; US vs. Moreno, 1 Wall 400; II Halleck, p. 462-65; Risley, p. 135-39; Creasy, p. 496; Davis, Elements of International Law, 327.)

9 - Fiore, International Law Codified, Articles 1543-44, 1919)

10 - Wilson, International Law, p. 307, 1939

Sen dos los requisitos para la existencia de la ocupación bélica de un determinado territorio; a saber: (1) que el Estado a quien corresponda la soberanía sobre el mismo no esté ya en condiciones de hacer valer su propio poder y (2) que el Estado ocupante tenga la posibilidad de ejercer de un modo efectivo su autoridad sobre dicho territorio. (11)

Estos requisitos que determinan la existencia de la ocupación bélica, fijan también sus límites, pues tal ocupación no existe sino donde el beligerante logra realmente hacer sentir su propio poder. De esto resulta que los requisitos esenciales de la ocupación bélica, aún siendo distintos de los de la ocupación pacífica, tienen, no obstante, algo de común, advirtiéndose que en aquélla, a diferencia de ésta, no es necesario de ninguna manera que el Estado que se posesiona de un determinado territorio, tenga la intención de someterlo a su soberanía.

En nuestra exposición de los requisitos esenciales para la existencia de la ocupación efectiva, es necesario distinguir el concepto de invasión del de ocupación. La invasión es el paso de las tropas o el vuelo de aviones militares por territorio enemigo. La invasión no es necesariamente ocupación, aunque precede a ésta y con frecuencia, coincide con la misma. El estado de invasión corresponde al período de resistencia del enemigo. El invasor podría penetrar rápidamente en una gran porción del territorio enemigo sin establecer aquel dominio efectivo que es esencial

11 - Prof. Colby maintains that belligerent Occupation is an incident of war. It is a means of carrying on a war. It is a legitimate method of warfare...It adds to the resources of the occupying power. Its purpose is military as is the litigation of nations. Questions in dispute are settled by force. Belligerent occupation is a forceful seizure and maintenance or -

al estado de ocupación.(12)

La ocupación tiene un cierto carácter de duración o permanencia; se basa en las normas del derecho de guerra y por ella el territorio pasa de hecho a manos del ocupante. La invasión se caracteriza por su provisionalidad, con lucha o sin ella; en la invasión, un ejército puede entrar sin ocupar. La diferencia entre la invasión y la ocupación se torna evidente al considerar que mientras el ocupante instala un modo de administración del territorio, el invasor no hace así.(13)

Hemos dicho antes que la ocupación bélica es un hecho provisional y que es necesario también distinguir entre la ocupación que es la detención momentánea de un territorio y la conquista o ~~subyugación~~ que es la toma de posesión definitiva de un territorio. Los requisitos para la existencia de la conquista son (1) la posesión firme del territorio y (2) la intención y capacidad de retenerlo permanentemente.(14). La conquista, en

firm possession of enemy property. (Colby, Occupation Under the Laws of War. Columbia Law Review, 1926, Vol. XIV, No. 7, p. 915-917)

12 - US Rules of Land Warfare, 1940, Article 274.

13 - Fiore menciona que la ocupación militar propiamente dicha, tiene cierto carácter de estabilidad que la distingue perfectamente de la simple invasión y tiene lugar cuando teniendo el beligerante intención de conservar el territorio ocupado, establece un gobierno provisional, apoderándose de hecho del ejercicio del poder soberano en el territorio ya militarmente, provee a la administración y al despacho de los asuntos civiles, a los servicios públicos, y a la administración de justicia limita las libertades, y los derechos políticos. (Derecho Internacional, 2300, 1919.

14 - "Military occupation in a foreign war, being based upon the fact of possession of enemy territory, necessarily implies -- that the sovereignty of the occupied territory is not vested in the occupying power. The occupation is essentially provisional. On the other hand, subjugation or conquest implies a transfer of sovereignty. Ordinarily however, such transfer is affected by a treaty of peace. (US. Rules of Land Warfare, Article 275)

cuanto a sus implicaciones durante la guerra, no depende del último resultado de ésta Ordinaria pero no necesariamente, se efectúa por tratados de paz. Durante la ocupación bélica, la soberanía del gobierno legítimo no se transmite al ocupante pues que tal situación es solo un hecho provisional, mientras que la conquista, entraña esa transmisión.

Las consecuencias de la ocupación bélica por ser como son tan graves para los habitantes, es necesario precisar cuando empieza y cuando termina la ocupación efectiva. Al invasor sólo se le considera en ocupación del territorio que estuviese totalmente abandonado por las fuerzas enemigas. La ocupación debe ser -- real y no nominal. La verdadera prueba de la ocupación bélica está en la posesión exclusiva. Cuando la ocupación se haya establecida, la mera presencia de las fuerzas del invasor no pone fin a la ocupación. La ocupación termina cuando las fuerzas del invasor se retiran o se desalojan de tal forma que implique la intención de abandonar el territorio ocupado, o cuando son expulsados de él. Y Josef Kunz añade el acuerdo entre el ocupante y los poderes ocupados en la forma de un tratado de paz o armisticio.(15)

Después de precisar la naturaleza de la ocupación bélica y su distinción de otros conceptos que algunas veces se confunden con aquella, podemos ya exponer las importantes consecuencias

Occupation and Conquest:- further, just as invasion must be accompanied by certain essential conditions in order that it may be transformed into occupation, so must military occupation be accompanied by certain necessary conditions in order that it may ripen into conquest. Conquest depends upon the firm possession together with the intention and capacity to hold the territory so acquired.(II Wheatons International Law by Keith, 223.)

15 - Josef L. Kunz, *Kriegsrecht Und Neutritätsrecht*, p.91 1935, Verlag von Julius Springer, Wien.

jurídicas que la ocupación bélica produce en el territorio ocupado. Los Reglamentos de La Haya, en su Artículo 43, sostienen que "Cuando la autoridad del poder legal pase a manos del ocupante, éste deberá tomar las medidas que dependan de él para restablecer y asegurar, en cuanto fuere posible, el orden y la vida públicas, respetando, salvo impedimento absoluto, las leyes vigentes en el país". ¿Cuál es la autoridad del poder legítimo que pasa a manos del ocupante? En la ocupación del territorio enemigo, el ocupante inmediatamente asume la autoridad absoluta; y el hecho de la ocupación lleva consigo la sustitución de su voluntad en lugar de las leyes vigentes hasta entonces, así como la actual administración civil y judicial por la jurisdicción militar.⁽¹⁶⁾ El soberano legítimo se ve impedido en el ejercicio de sus poderes por causa de la ocupación, y este poder pasa a manos del ocupante. El ocupante se vuelve la única autoridad dentro del territorio ocupado en donde su poder queda establecido y podría ejercerlo efectivamente. Y cuando su autoridad ha sido así establecida y ejercida, no cabe duda de que el poder legítimo se torna impotente de ejercer los poderes de soberanía, pues su autoridad ha sido sustituida por la del invasor sobre el territorio ocupado.⁽¹⁷⁾ La ocupación bélica priva al vencido de la posesión del territorio ocupado y hace que el vencedor le sustituya en el ejercicio de los poderes de soberanía.⁽¹⁸⁾

Hay muchas teorías sobre las consecuencias jurídicas que la ocupación bélica produce en el territorio ocupado. Una de estas teorías es la que sostiene la temporal y parcial sustitución

16 - Hall, International Law, p. 560

17 - US Rules of Land Warfare, Art. 272, 1940

18 - Hackworth, Digest of International Law, Vol. I, 1940, p. 156

de la soberanía. Esta teoría dice que durante la ocupación enemiga el ocupante es el soberano de facto, lo cual le hace acreedor de derecho, a la obediencia de los habitantes del territorio ocupado. Reconoce que la soberanía del gobierno de jure subsiste pero, durante la ocupación enemiga, queda suspendida y su ejercicio pasa al ocupante. La exposición de esta teoría la reservamos para el próximo capítulo por ser la más importante y razonable de las teorías para llegar a un concepto jurídico del colaboracionismo. Hay otra teoría que considera la ocupación bélica como puramente militar en su carácter; los actos que al beligerente le están permitidos son meros incidentes de las hostilidades; la autoridad que el ocupante ejerce es una forma de presión que impone sobre el enemigo; y los derechos del soberano legítimo permanecer intactos y las relaciones legales de los habitantes para con el invasor no cambian. Se considera la ocupación bélica solamente como una fase de las operaciones de guerra que no implica ningún cambio en la posición legal del invasor con respecto al territorio ocupado y sus habitantes. En ella se reconoce la autoridad del invasor para cometer los actos que sean necesarios para la prosecución de la guerra y la seguridad y éxito de sus operaciones.

Opino que la primera teoría es la más razonable y justa ya que jurídicamente al analizar las consecuencias de la ocupación bélica se ve que el ejercicio eficaz del gobierno legítimo es la señal externa de la posesión de la soberanía. Si aquél no puede ejercer esa autoridad, porque el ejercicio de la misma ha pasado al ocupante, entonces en esta situación de hecho, queda -

suspendida la soberanía del gobierno legítimo y se traslada al ocupante la autoridad de ejercer los poderes de la soberanía mintras dure la ocupación. Esta conclusión es ineludible, pues es un principio admitido que toda soberanía sin poder para ejercerla eficazmente no es soberanía propiamente dicha. La autoridad del ocupante puede llamarse soberanía de facto o autoridad de facto. Ya que según el derecho internacional, la autoridad del gobierno legítimo pasa al ocupante por eso se dan efectos legales a los actos que el ocupante tuviese la obligación de hacer. Reservamos la exposición de esta teoría para el Capítulo IV donde mejor pertenece.

La obligación que los Reglamentos de La Haya imponen al ocupante de restaurar el orden y seguridad públicas, necesariamente lleva consigo la concesión implícita del derecho de asumir el ejercicio de los poderes de soberanía sobre el territorio ocupado.(20)

El derecho del ocupante de ejercer los poderes de soberanía la viene de su poder establecido y la necesidad de mantener el orden y la seguridad públicas, indispensables tanto a los habitantes como a las fuerzas del ocupante.(21) Todos los poderes del gobierno legítimo, legislativo, ejecutivo, judicial, cesan bajo una ocupación militar.(22) Todos estos poderes pasan al ocupante. MacNair dice que "el principio de que el ocupante está bajo la obligación de mantener el orden público y conservar los de

20 - Fiore, *ibid*, p. 230

21 - US Rules of Land Warfare, 1940 Article 273

22 - US Rules of Land Warfare, *idem*, Artículo 283

rechos de los habitantes, con potestad reconocida por el derecho internacional para promulgar aquellas regulaciones y hacer aquellos cambios que sean menester para asegurar sus fuerzas y la realización de los objetivos legítimos de la ocupación, incluyendo actos, legislativos, ejecutivos, ó judiciales, mientras no traspase estos límites, está reconocido por el gobierno Británico y por los tribunales ingleses.(23)

Por todo lo expuesto, es necesario tratar del carácter legal de la ocupación bélica: ¿Produce alguna consecuencia jurídica? La mayoría de los países pequeños y débiles niega carácter legal a la ocupación bélica y la reputa sólo como un hecho de fuerza. Así, en las causas decididas por las cortes de Holanda - ante los cuales súbditos holandeses fueron procesados por prestar servicios a favor del enemigo, se sostiene que los Reglamentos de La Haya sobre las leyes y usos de la guerra terrestre se enderezaban a limitar los poderes del enemigo sobre el territorio ocupado y no a definir sus derechos sobre los habitantes. De manera que los decretos del ocupante no han producido, en general, obligaciones legales en los habitantes.(24) En la causa de Re Contractor Knols, (25) se sostiene que el hecho de que los Reglamentos de La Haya tengan vigencia en Holanda no significa que en los tribunales holandeses los súbditos podrían eludir la culpabilidad en la denuncia de haber ayudado al enemigo, confiados en la alegación de que, no importa cuáles hayan sido las circuns-

23 - MacNair, Legal Effects of War, 3rd Ed., 1948, p 337

24 - In Re Van Huis, 15 Nov. 1946, Decisión by the Special Criminal Court at Hague.

25 - Annual Digest, 1946, Case no. 144

tancias de hecho, ellos estarían justificados al hacer tales actos en beneficio del enemigo, pues que éste tiene derecho según los Reglamentos a recabar tales servicios. En otra causa, Re Contractor Worp, (26) el mismo tribunal declara que la responsabilidad penal de los ciudadanos en territorio ocupado a la luz de los decretos que prohíben la asistencia al enemigo en los casos previstos por el Artículo 52 de los Reglamentos de La Haya no se rigen por dichos Reglamentos, sino por los principios generales de la ley penal del país, tales como los que se refieren a fuerza mayor. En Re Van Der Giessen, (27) el mismo tribunal también afirmó que los súbditos holandeses no pueden disculparse de la denuncia de haber colaborado con el enemigo, alegando que el ocupante este, por derecho internacional, autorizado a pedir de ellos los servicios prestados. En cambio en la causa de "The Adelaide Star", (28) decidida por el Tribunal Supremo de Dinamarca, los demandantes habían sido obligados por orden del ocupante a completar unos buques de guerra que estaban en construcción en su astillero. Se sostuvo que las condiciones de la ocupación eran tales que las prestaciones no habían podido evadirse y el astillero no era culpable. En todas estas causas, el carácter legal de la ocupación bélica no está reconocido y se tienen a los Reglamentos de La Haya como una limitación del poder de hecho del ocupante. Así, la Corte de Apelaciones de Lieja decidió en la causa de Mathot c. Longué, en su fallo de 19 de Febrero de --

26 - Annual Digest, 1946, Case 145

27 - Annual Digest, 1948, Case No. 146

28 - Annual Digest, 1948, Case No. 173

1921, que "es inexacto decir que por virtud de la Convención de La Haya, al ocupante se le haya dado alguna porción del poder legislativo, aparece del contexto de la convención y de la obra -- preliminar que todo lo que se ha pretendido, es restringir el -- abuso de fuerza por el ocupante, y no el darle o reconocer en él ninguna autoridad en la esfera de la ley"(29). Parece que se quiere decir que los servicios que el ocupante tiene derecho a exigir conforme al derecho internacional están justificados sólo cuando la fuerza actual a disposición del ocupante no permite elección contraria, tomando en cuenta que las causas citadas se refieren a servicios que el ocupante no estaba autorizado a exigir bajo los Reglamentos de La Haya.(30) Este punto de la ocupación bélica no ha sido aún precisado con uniformidad. Morrentsen en su artículo "Validity of the Acts of the Belligerent Occupant"(31) -- opina que los Reglamentos de La Haya no sólo han puesto límites legales al poder de hecho del ocupante sino también, por deducción, han reconocido algunos derechos y han impuesto al ocupante obligaciones positivas en relación con los habitantes. Por tanto el mero hecho de que el Derecho Internacional permite al ocupante tomar tales medidas y exigir obediencia a los habitantes, de un carácter legal a las relaciones entre el ocupante y los habitantes. Habiendo así una relación legal entre ellos, entonces, a la vuelta del soberano legítimo, está obligado a respetar y a no

29 - Annual Digest, 1919-22, Case No. 329

30 - In the three of the cases, military assistance has been given to the Germans in violation of Art 52 of the Hague Regulations; in the third, a policeman was charged with having enforced German racial legislation.

31 - British Yearbook of International Law, 1951, p 295; She states here that the most relevant provision are Article 43 whereby the occupant is not only empowered, but obliged to take

abrogar arbitrariamente la legislación que por Derecho Internacional le competía al ocupante formular. Oppenheim sostiene que el - ocupante según el Derecho Internacional, tiene potestad de hacerlos, son actos legítimos de guerra y, por consiguiente, el ocupante, tiene el derecho legal de exigir el reconocimiento de estos - actos por el gobierno legítimo.(32) El Profesor Hyde, sin llegar a afirmar que haya una obligación internacional sobre el asunto, sugiere que la doctrina de que el soberano legítimo no está bajo la obligación de someterse a lo que el ocupante hubiese decretado "es una doctrina delicada la cual, si se aplica consecuente y ampliamente iría en contra del principio legal de que los actos legales y transacciones del ocupante, tal como son en conjunto en - los Reglamentos de La Haya de 1907, deberían ser respetados para beneficio de todos.(33)MacNair dice que es costumbre en el gobierno legítimo reconocer las medidas que el ocupante hubiese tomado dentro de la esfera de su autoridad.(34) Entre los escritores - franceses, Pillet dice que "le lois et réglemens votés par l'occupant pendant le période de l'occupation, les actes passés par le ministère de ses fonctionnaires, les jugements émanés des juridictions par lui institutées devront etre considérés comme bons - et valables par le gouvernement légal, orsqu'il aura récupéré les provinces dont l'occupation ennemie lui avait otel administracion" (35) Rolin ha expresado su adhesión al punto de visre de Westla-

all steps in his power in the interest of the public order and safety and Art 52 which by inference authorizes requisitions in kind and in service for the necessities of the army of occupation.

32 - Oppenheim, International Law, II, 1912, p 342

33 - Hyde, International Law as interpreted and Applied by the US, 2d, 1945, 346

34 - MacNair, Legal Effects of War, ibid; Tambien, Hall, International Law, 8th Ed., by Pearce Higgins, 1924, p 579/

ke, es a saber, que "les affets que (la lui édictées pa l'occupant) a déjà produit subsistent lorsque l'occupant a cessé sand qu'on puisse obtenir l'annulation des actes d'execution déjà -- accomplis".(36)

Por todo lo expuesto, los artículos 43 y 52 de los Reglamentos de La Haya de 1907, que conceden derechos al ocupante e imponen a éste algunas obligaciones en relación con los habitantes del territorio ocupado, dan fuerza de ley a los actos autorizados por tales artículos. Cualquier conflicto que surja entre la obligación legal derivada del derecho internacional y la que nace del derecho municipal de no prestar ayuda al enemigo, debe resolverse considerando a la anterior como lex specialis, la -- cual forma como una excepción a ésta.(37) La circunstancia de -- que los actos del ocupante que violan el derecho internacional -- no sean reconocidos por los tribunales del territorio ocupado -- viene a ser un reconocimiento de los efectos jurídicos que producen los actos dentro de la esfera de su autoridad.

B. LAS RELACIONES POLITICAS DE LOS HABITANTES CON EL GOBIERNO LEGÍTIMO:

Según el Derecho Internacional, durante la ocupación bélica las relaciones políticas de los habitantes del territorio ocupado para con el gobierno legítimo se consideran disueltas y la obligación de los habitantes para con dicho gobierno se reputa suspendida, lo mismo que la constitución y todas las leyes po

35 - Pillet, Le lois Actuelles de la guerre, 2d.ed.1898, p. 255

36 - Rolin, Le Droit moderne de la guerre, 1920, p. 438

37 - Mortensen, British Yearbook, 1951, ibid.

líticas. Decía el Presidente McKinley de los Estados Unidos, en su orden presidencial del 18 de Julio de 1898, que el primer - - efecto de la ocupación militar del territorio del enemigo es el rompimiento de las relaciones políticas formales de los habitantes y el establecimiento del nuevo poder político.(38) Las relaciones entre los habitantes del territorio ocupado y el Estado - al que pertenece no se rompen enteramente sino que se interrumpen o se suspenden mientras la ocupación continúa. Los habitantes están bajo las leyes del ocupante, y no a las órdenes del gobierno vencido.(39) Como consecuencia de esto, la obligación de los habitantes de prestar obediencia al gobierno legítimo queda también suspendida. Los habitantes no están obligados a reconocer la autoridad del Estado que ya no puede prestar servicios ni darles protección a cambio de obediencia. Sería harto inhumano e injusto obligar a los habitantes a obedecer los mandatos del gobierno legítimo que por el presente no ejerce ningún dominio efectivo sobre el territorio ocupado y no puede dar ninguna protección a los habitantes del mismo. El hacerlo de su parte, sería atraer medidas graves de represión a los habitantes por parte de las autoridades del gobierno militar, las cuales el gobierno le-

38 - Order of President McKinley to the Sec. of War, July 18, 1898 of the Occupation of Santiago de Cuba, VII Moore, op.cit, 261-63.

"As a necessary consequence of such occupation and dominion the political relations of people to their former government are for the time being, severed." (Dow vs. Johnson, 100 US 158; Leitensdorfer vs. Webb, supra, The Fama, 5 C. Robb, 106, 15 R. C.L. 180)

39 - New Orleans vs. N.Y. Steamship Mail Co, 20 Wall, 387, 22 L. ed, 359

gítimo no tendría fuerza para impedir. Esto de acuerdo con el principio de que la "allegiance" y la protección son términos recíprocos y donde no haya protección, o allegiance o soberanía tampoco habrá obligación de prestar obediencia. (40)

El invasor decide con mucha libertad las relaciones para con él de los habitantes del territorio ocupado. Suspende las leyes según las cuales los habitantes deben obediencia al gobierno legítimo, porque esta obediencia no es consecuente con la seguridad del invasor. (41) Las leyes que el invasor suspende inmediatamente son las políticas, incluyendo la Constitución del país, pues la vigencia de las mismas ríe con el objeto principal de ocupante, o sea, el de la seguridad del ejército invasor, su mantenimiento, su eficacia, y el éxito de sus operaciones. Es práctica respetar las leyes municipales, las que regulan los derechos privados, las que penan de delitos comunes no políticos, salvo que las necesidades militares del ocupante requieran su suspensión o alteración. (42). El ocupante naturalmente suspende o modifica todas las leyes políticas y también los privilegios políticos y todo aquello que afecte al bienestar y la seguridad de su ejército. Dentro de esta clase están incluidos el derecho de asamblea, el de portar armas de fuego, el del sufragio, el de la libertad de prensa, el de viajar libremente por el territorio ocupado. En lugar de éstos, el ocupante tiene derecho de promulgar nuevos decretos para la gobernación del territorio ocupado, siempre dentro de la limitación impuesta por el Derecho Internacional, o sea, en tan- - - -

40 - Birkhimer, William; Military Government and Martial Law, p. 10; Colby, *ibid.*

41 - Hall, *supra.*

42 - US Rules of Land Warfare, Article 285.

el Derecho Internacional, o sea, en tanto sean necesarias para el dominio del territorio y la protección del ejército. Estos -- principios los han afirmado varios tribunales en varias causas. Así, el Tribunal Supremo de Filipinas, en la causa de Cokkim -- Cham v. Valdez Tankeh, (44) sostiene que "las leyes políticas o -- las que tratan de las relaciones políticas se consideran suspendi das o a la expectativa durante la ocupación enemiga, y en otra -- causa, Peralta c. Director de Prisiones, (45) sostiene también que el beligerante es totalmente independiente de la Constitución y las leyes del territorio ocupado, ya que la ocupación es un arma bélica y la manutención y seguridad de sus fuerzas y el objeto de la guerra están a la cabeza de sus intereses y debe promover los bajo cualesquiera circunstancias o condiciones". Birkhimer -- tiene también la misma opinión sobre la suspensión de las leyes políticas (46) Magoon en su tratado (47) dice que cuando un ejerci to en la lucha actual expulsa o destruye la antigua soberanía de un país, las leyes creadas por la misma soberanía y que dependen

43 - *ibid*, Article 287

44 - G.R. No. 1-5 Jurisprudencia Filipina

45 - G.R. No. L - 49, *ibid*,

46 - "Political laws are enacted for the convenience, security - and administration of government. These, upon military occu pation of a State by an enemy, cease to have validity. (Maine p 179; Manning, p 182; Op. Atty. Gen., vol. 22, 527) By that event, a new government based not upon the express, though it may be implied consent of the people takes place of the old. And while municipal law may be retained in the subjugat ed district, this in the nature of things, cannot be true of political laws which prescribe political rights, duties, and obligations of government and its citizens, (Halleck, Chap 32 Sec. 4,; Boyd's Wheaton, 346; Birkhimer, op. cit., Sec. 67, Chap VI)

47 - Magoon, Law of Civil Government during Military Occupation, p. 13

de ésta fenecen con ella, Fenece también la obligación de los ha
bitantes que hasta entonces debían lealtad a la soberanía depuesta
ta de obedecer la voluntad o mandatos del soberano, viz, sus le-
yes. Fiore(48) es muy categorico al decir que cuando un Estado -
se haya hecho impotente por los accidentes de la guerra, para --
proteger una parte de su territorio contra las fuerzas del enemigo
go, y éste haya logrado apoderarse efectivamente de dicha parte
y tenga fuerza y poder suficiente para obligar a todos los ciudada
danos a prestarle obediencia, éstos se hallan exentos temporal--
mente de la obligación de reconocer la autoridad del antiguo go-
bierno, la cual no podrá ejercerse ni coexistir con la del go- -
bierno vencedor durante la ocupación.

48 - Fiore, Derecho Internacional Público, p 234.

II. GOBIERNOS DE FACTO: TIPOS

Antes de proceder a la exposición de los poderes y obligaciones del ocupante, importa saber los tipos de gobierno de -- facto, entre los cuales se cuenta el gobierno de ocupación. Hay tres clases de gobierno de facto:

1. El primer tipo de gobierno de facto es el de aquél -- que toma posesión y dominio de mando usurpándolo por la fuerza o por decisión mayoritaria, manteniéndose en contra de la voluntad del gobierno legítimo. Un ejemplo de este tipo es el gobierno in glés durante la Mancomunidad, primero por el parlamento y después por Cromwell, el Protector.

2. El segundo tipo del gobierno de facto es el que se establece y se mantiene por fuerzas militares que invaden y ocupan un territorio del enemigo durante la guerra, y que se llaman gobiernos de fuerza suprema. A este tipo pertenecen los casos de Castine, (Maine) que pasó a poder de los ingleses durante la guerra de 1812, y Tampico, (Méjico) que fué ocupado por las tropas de los Estados Unidos durante la Guerra Méjicana.

3. El tercer tipo de gobierno de facto es el que se establece como un gobierno independiente por los habitantes de un -- país quienes se levantan en insurrección contra la madre patria. Sirven de ejemplos el gobierno de la Confederación del Sur durante la Guerra Civil de los Estados Unidos de Norteamérica, el gobierno de la República de Malolos durante la revolución filipina contra España y luego contra los Estados Unidos.

De estos tres tipos de gobierno de facto, nos interesa el segundo, al cual pertenecen los gobiernos establecidos con motivo de una ocupación bélica. Las características de este tipo

de gobierno, según el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en la causa de *Thorington v. Smith*(49) son: (1) que su existencia se mantiene por la fuerza militar dentro del territorio y en contra de la autoridad del gobierno establecido y legítimo; y (2) que durante su existencia los habitantes tienen que obedecerlo en -- asuntos civiles y por esos cometidos en cumplimiento de esa obligación y por sumisión a esa fuerza, no se hacen responsables como culpables de los mismos, aunque no estuvieren permitidos por las leyes del gobierno legítimo. Gobierno de este tipo se establecen por la fuerza y coacción, en grados diversos. Es costumbre administrarlos por la autoridad militar pero, algunas veces, gobierna la autoridad civil, aunque, eso sí, apoyado siempre por las fuerzas militares.

Los poderes y obligaciones del gobierno de facto de este tipo se rigen por los reglamentos de La Haya de 1907, en su inciso III, que contienen la revisión de los reglamentos de la Convención de La Haya de 1899, acerca de la autoridad Militar en Territorio Enemigo. El Artículo 43 del Inciso III de los mismos Reglamentos dice "la autoridad del poder legal actualmente pasa de éste a manos del ocupante; éste deberá tomar las medidas que de él dependan para restablecer y asegurar en cuanto fuera posible, el orden y la vida públicas, respetando, salvo impedimento absoluto, las leyes vigentes en el país".(50)

Expuesto ya este tipo de gobierno de facto, al cual pertenece el gobierno de ocupación, nos preguntamos: ¿Qué necesidad -

49 - 8 Wallace 1

50 - *Co Kim Cham v. Valdez Tankeñ*, Supra

hay de este gobierno durante la ocupación enemiga? La necesidad que lo provoca es la ausencia ó incapacidad del gobierno legítimo de ejercer sus funciones públicas por razón de las operaciones militares.(51) Esto es así porque durante la ocupación, las facultades ordinarias del gobierno, incluidas las medidas para la prevención y el castigo de los delitos y también para el mantenimiento de la paz y el orden públicos están paralizados. Esta paralización o suspensión ocurre cuando la sociedad está en estado de trastorno, cuando las restricciones de la ley están en su eficacia mínima, y cuando la necesidad de esas restricciones es muy importante. Este estado, del territorio ocupado es el resultado de su ocupación por el enemigo. El único poder organizado capaz de restaurar y mantener el orden público es el del invasor, que reside en su comandante general.(52) Y los Reglamentos de La Haya han reconocido esta situación al obligar al ocupante a tomar las medidas en su poder para restablecer y asegurar lo más posible, el orden y la seguridad públicas.(53)

Durante la ocupación, algo tiene que hacerse. Los habitantes tienen que vivir y continuar en la misma comunidad: tienen que comer y vestirse, laborar, producir y comerciar.(54) La existencia de la guerra o la consiguiente ocupación del territorio no rompe de ninguna manera el vínculo de la sociedad ni prescinde del gobierno civil o la administración regular de las leyes, porque el orden tiene que mantenerse, los reglamentos urbanos deben seguir, los delitos tendrán que ser perseguidos, habrá que -

51 - US Rules of Land Warfare, Article 281

52 - US c. Kekelman, 92 U.S. 526

53 - Reglamentos de La Haya, Artículo 43

54 - Colby supra

proteger la propiedad, los contratos deberán cumplirse y celebrarse los matrimonios, la transmisión de la propiedad deberá ser regulado como en tiempo de paz.(55) De manera que es imperativo que cuando un territorio esté ocupado debe tener alguna clase de gobierno; de lo contrario, habrá un caos. Según MacNair, - la ley de la ocupación bélica es un intento de sustituir el caos con alguna clase de orden por duro que fuese.(56).

No tenemos que exponer aquí la base jurídica de la organización del gobierno de ocupación. Baste recordar que el ocupante está, según los Reglamentos de La Haya, obligado a tomar medidas para restablecer y asegurar el orden y la seguridad públicas. Esto es suficiente para que el ocupante pueda tener el derecho de organizar un gobierno para la administración del territorio. Aun en ausencia de estos Reglamentos de La Haya, el ocupante tendría derecho de administrar por medio de un gobierno militar el territorio ocupado, pues tal administración se considera como un acto de guerra que emana del derecho de conquista. Es de hecho un ejercicio de las hostilidades sin el uso de la fuerza. Esta autoridad se deriva de los cánones de guerra establecidos por la ley de las Naciones y confirmada por los tratadistas más autorizados y las decisiones de los tribunales de varios países.(57) El gobierno militar en territorio enemigo es un modo de retener una conquista, ejercer una supervisión sobre el territorio hostil, y sujetar a los habitantes malquistados a la voluntad de una fuerza superior.(58)

55 - How vs. Jackart, 17 Wallace 570

56 - MacNair, supra, p. 322

57 - Halleck, Digest of International Law II, p. 444

58 - Birkhimer, supra, p. 53

El gobierno militar toma el puesto de la soberanía suspendida. Se propone hacer dos clases de servicios, que son: 1) -- promover las operaciones militares del ejército ocupante, y 2) -- conservar y mantener la seguridad de la sociedad.(59)

Cuanto a la naturaleza del gobierno establecido por el ocupante, ha habido muchos nombres adoptados por los mismos ocupantes. Algunas veces se han llamado gobierno civil y otras, militar. Realmente, no hay diferencia entre uno y otro, porque no entraña ya ningún concepto jurídico. Es todavía un gobierno de facto por razón de fuerza superior. Está establecido y mantenido por la fuerza y la legalidad de sus actos será determinada por las leyes de guerra. El carácter y la base de su autoridad son iguales, o sea, la ley marcial del ocupante. Según el Profesor Hyde(60) el término "ley marcial" cuando se usa para la descripción de cualquier hecho, en relación con la ocupación bélica, no se refiere a ningún código particular o sistema de derecho, ni a una agencia especial encargada de su administración. El término sencillamente se refiere a la masa de leyes actualmente aplicada y que cuenta con sanción de la autoridad militar, esencialmente marcial. En otras palabras, es la voluntad del ocupante sujeta siempre a las limitaciones impuestas por las leyes de guerra.(61)

59 - Ex-Parte Milligan, 4 Wallace 127; Magoon, supra, p. 13

60 - Hyde, International Law, II p. 386

61 - "The institution of military government in any country by the commander of a foreign army is not only a belligerent right but often a duty. It is incidental to the state of war and appertains to the law of nations. That rights of occupation, says Hall, may be placed upon broad foundations of military necessity". The commander of the invading, occupying, conquering army rules the country with supreme power, limited only by international law and the orders of his government. For, by the law of nations, the occupatio bellica --

III. PODERES Y PREROGATIVAS DEL GOBIERNO DE OCUPACION:

1. Extensión de su Autoridad con vista de sus fines y -- propósitos:

La ocupación es un arma bélica y el mantenimiento y seguridad de sus fuerzas así como la finalidad de la guerra constituyen su interés primordial y tiene que promoverse bajo todas - circunstancias y condiciones.(62) El éxito de sus armas es el - primer objetivo del conquistador. Tiene ante su gobierno la obligación de asegurar el éxito por cualquier modo reconocido por - las leyes de guerra. La responsabilidad del comandante es siempre grande.....Y si para salvar su propio ejercito, el sitiado lanza a no-combatientes, mujeres, niños, poniéndoles a merced del enemigo, no se puede ello calificar de violación de las reglas de la guerra.(63)

La ley de las Naciones reconoce que el ocupante militar de un territorio enemigo tiene los siguientes objetivos y propósitos que se consideran legales y legítimos: Proveer a la seguridad del ejército del invasor y contribuir a su ayuda y eficiencia y el éxito de sus operaciones(64); fortalecerse y debilitar al enemigo,(65); atender a la prosecución franca de molestar y subyugar al enemigo;(66) velar por la paz y el orden de la reta-

transfers the sovereign powers of the enemy's country to the conqueror. An army in the enemy's country may do all -- things allowed by the rules civilized warfare. (Birkhimer, supra, p. 54)

62 - Oppenheim, International Law, Vol. II, 342, 1948

63 - Dr. Liebers Instructions to the Armies in the Field, Sec. I, par. 17-18

64 - US rules of Land Warfare, 1940, Article 285

65 - State of New Orleans vs. NY Steamship Co., supra, 3 Hyde - 1883

66 - Westlake, John, International Law, Vol. II p. 459

guardia de los ejércitos ocupantes y el desarrollo de los recursos del territorio ocupado y su utilización por el ocupante,(67) El ocupante está obligado a considerar como objetivo principal la seguridad, ayuda, eficacia y éxito de sus fuerzas en el territorio enemigo habitado por ciudadanos hostiles;(68) la ocupación existe para hacer al enemigo daño de modo general.(69)

El poder ocupante tiene derecho de dislocar a la autoridad pre-existente y asumir en el grado que juzgue propio, el - - ejercicio por su cuenta de todos los poderes y funciones del gobierno.(70) El derecho adquirido por el invasor en efecto viene a ser la posesión momentánea del poder legislativo y ejecutivo. En la ocupación de un territorio, el invasor asume inmediatamente la autoridad absoluta en aquel territorio; y el hecho de la ocupación necesariamente trae consigo la sustitución de su poder en lugar de las leyes vigentes cuando esa sustitución sea necesaria, y también el reemplazamiento de la actual administración civil y judicial por la administración militar.(71) Dice Kuns(72) que el ocupante tiene autoridad absoluta en la administración -- del territorio, pero tiene que observar las leyes de guerra. Las medidas tomadas tienen que ser no solamente para la seguridad --

67 - Colby, Occupation under the Laws of War, supra

68 - Hyde, International Law, Vol. II, p. 690

69 - Colby, supra quoting US vs. Rice; Fleming vs. Page; McCleod vs. US, Berchard, 240 and 1 Chamsewitz, 33

70 - The conquering power may appoint all the necessary officers and clothe them with designated powers, larger or smaller, according to its pleasure. It may prescribe revenues to be paid, and apply them to its own use or other wise. It may do anything necessary to strengthen itself and weaken the enemy. There is no limit to the power that may be exercised in such cases save those that are found in the laws and usages of war. These principles have found sanction of all publicists who have considered the subject. Dooley vs. US,

del ocupante sino también para los habitantes.

2. Extensión de los poderes generales del ocupante:

La ley de las Naciones da al ocupante tales poderes que sean conmensurables con sus fines y propósitos. En general, estos poderes son suficientes para llevar la guerra a una conclusión favorable y hacer todas las cosas necesarias para fortalecerse y debilitar al enemigo, y no hay ninguna limitación a lo que pueda hacer excepto las que se encuentran en las leyes de guerra.(73) Al entrar en territorio enemigo, el invasor reemplaza enseguida al gobierno civil legítimo, con el régimen militar y hace los cambios necesarios para su seguridad y éxito en la lucha.(74) El invasor maneja libremente las relaciones de los habitantes del territorio ocupado. Suspende las leyes vigentes y promulga nuevos decretos por razones de necesidad militar(75)

12 Well 342; citing case of New Orleans vs. NY Steamship Co.; Colby, Military Occupation Under the Laws of War, supra.

71 - Hall, International Law p. 560

72 - Kunz, Josef, Kriegerecht und Neutralitätsrecht, supra, §.91

73 - New Orleans vs. NY Steamship Co, supra

74 - Hall, International Law supra, p. 65-69

75 - "The only restrictions or limitations imposed upon the power of a belligerent to alter the laws or promulgate new ones, especially the criminal law as well as the laws regarding procedure, that is for his control of the territory and the safety and protection of his army, are those imposed by the Hague Regulations, the usages established by civilized nations, the laws of humanity and the requirements of public conscience.(Peralta vs. Director of Prisons, Official Gazette, February 1946, p. 208)

According to Hyde, the right of the occupant as a lawgiver have a broad scope. He may not unlawfully suspend existing laws and promulgate new ones when the exigencies of the military service demands such action. According to that War Department rules of Land Warfare of 1940, he will naturally suspend or alter all laws of a political nature as well as political privileges, and all laws which affect the welfare and safety of his command. Of this class are said to be those relating to recruitment in occupied territory, the right

incluyendo los que sean necesarios para el dominio del territorio y la protección de su ejército;(76)

El ocupante naturalmente suspenderá las leyes políticas y las que puedan afectar al bienestar y la seguridad de su ejército; más lo deberá anunciar a los habitantes;(76a) El ocupante puede exigir a los habitantes la obediencia necesaria para la seguridad de sus fuerzas, el mantenimiento de la paz y el orden públicos, y la propia administración del país.(77) El ocupante puede pedir a los habitantes toda clase de servicios para las necesidades del ejército de ocupación, excepto la de obligar a los habitantes a tomar parte en las operaciones militares contra su propio país.(78) El resistir la afirmación de autoridad del ocupante es esencialmente ilegal.(79) El ocupante puede impedir al enemigo el uso de los recursos del territorio ocupado.(80)

of suffrage, and the freedom of the press, the right to quit and travel freely within the occupied territory. It is declared that the occupant may create new laws for the government of a country where no exists, and that he will promulgate - such new laws and regulations as military necessity demands. In this class are said to be included those laws which come into being as a result of military rule...that is, those -- which establish new crimes and offenses incident to a state of war and are necessary for the control of the country and the protection of the army.(Sec. 690, Hyde 1883)

"Except as restrained by the law of nations, the will of the conqueror is the law of the conquered. By the laws of war, an invaded country may have all its laws and municipal institutions swept by the board.(John Quincy Adams, House of Representatives, US Congress, April 14-15, 1842)

"The rule is that military occupation includes executive judicial and legislative authority".(Malcolm, Philippine Government, Sec 69 p. 203-4)

76 - US Rules of Land Warfare, Article 286-288

76a- *ibid*, Article 287

77 - *ibid*, Article 279

78 - Hague Regulations, Article 43, US Rules, Article 302-303; Hall, p.65-69; Lawrence, International Law, 411-417; Oppenheim, Law Quarterly Review, vol. CLXXII; 3 Hyde 1829; Colby, *supra*.

El ocupante puede exigir que los funcionarios públicos y demás habitantes tomen un juramento de obediencia a sus mandatos mientras retenga el dominio del territorio ocupado y a no obrar en perjuicio suyo.(81) El ocupante no está obligado a dejar a los funcionarios públicos en sus puestos ni éstos obligados a permanecer(82) Puede castigar como delitos de guerra la desobediencia o negligencia en el cumplimiento de sus mandatos y regulaciones.(83).Puede recabar el apoyo, en servicios y especie, que sea necesario para las exigencias del ejército.(84) Este derecho del beligerante no está puesto en duda hoy por ningún escritor. Como dice muy bien el Reglamento Español en su Artículo 881, "Por el antiguo y constante principio que la guerra debe alimentarse a la guerra, por la moderna movilidad de los ejércitos que no se puede alcanzar sino viviendo en gran parte sobre el país, el gene--

79 - Hyde, International Law, vol. III, p. 1889

80 - Hall's International Law, 507; In the Prize cases, it was held that the right of the belligerent not only to coerce the other by direct force but also to cripple his resources by the seizure and destruction of his property is a necessary result of a state of war. Money, wealth, the products of agriculture and commerce are said to be the sinews of war - and are necessary in its conduct as numbers and physical force. Hence it is, that the laws of war recognizes the right of a belligerent to cut these sinews of the power of the enemy by capturing his property on high seas.(17 U.S.L. Ed. 459, 476)

81 - US Rules of Land Warfare, Art. 309

82 - Josef Kunz, Kriegsrecht und Neutralitätsrecht, supra

83 - US Rules, supra, Art. 309; 355; 340. Dr. Liber's Instructions to the US Armies in the Field, Art 26; Wheaton's International Law II, by Keith, 1945, p. 246; Oppenheim by Lauterpacht, 1943; III Hyde 1899)

84 - US Rules, Article 335-340

85 - Coleman vs. Tennessee, 7 Ott. 509-540

ral en jefe puede imponer contribuciones militares en dinero ó en especie; puede nombrar funcionarios públicos que sean necesarios e invertirles de los poderes precisos, a Juicio suyo. Puede decidir el carácter y la naturaleza del gobierno que vaya a establecer y asumir en el grado que juzgue debido todos los poderes y funciones del gobierno. Pueden elegir medios eficaces para alcanzar sus objetivos en la guerra.(8)

3. El Derecho de Recabar los servicios de los Habitantes:

El ocupante puede imponer a la población del país ocupado, además del pago de los impuestos, determinadas contribuciones en dinero. Añadido a esto, el beligerente que ocupa un territorio enemigo puede recurrir a las requisas para obtener de los habitantes del país ocupado las cosas que precise. Las requisas cuando tengan este fin, se denominan reales, para distinguirlas de las que tienden a obtener la prestación de servicios, en cuyo caso, se denominan personales. En general, el ocupante puede exigir toda clase de servicios a los habitantes con la única limitación de que en el rendimiento de estos servicios, los habitantes no tomarán parte en las hostilidades combatiendo contra su patria y que sean servicios para las necesidades del ocupante.(87)Estos

86 - Birkhimer, Military Government and Martial Law, p. 117, supra. El Prof. Hyde dice que 'Military necessity is in theory based upon the needs of a belligerent force and at the same time takes cognizance of the equities of those whom it may oppose. In estimating their relative values, it needs the requirements of the commander of an army in securing the objects of war and in protecting the safety of his own troops. In this respect, it appears to open broad and convenient avenues of procedure the use of which implies no wrongfulness of conduct.' (III, International Law Chiefly as Interpreted and Applied by the U.S. p. 1801-1902)

87 - Colby continues in saying that 'the invading army cannot dispense with the services of the inhabitants; it is obliged to demand them at every step. These services have to be secured

servicios comprenden los de los negociantes, médicos, cirujanos, carpinteros, carniceros, panaderos, empleados de servicios públicos como el Metro, el gas y el alumbrado público, etc. Los funcionarios del ferrocarril, barcos, teléfonos, correos, y servicios de transporte.(88) El Prof. Hyde opina que no es injusto exigir a los habitantes del territorio ocupado a rendir servicios que no lleguen a ser participación en las hostilidades contra su patria. Aun el empleo de guías ha merecido el apoyo de las opiniones de varios países porque dicen que estos servicios son esencialmente necesarios en cualquiera incidente de la guerra en el campo del territorio enemigo no conocido.(89) El derecho del ocupante de exigir prestaciones es universalmente reconocido y no hay ninguna duda sobre el mismo. Las requisas en especie y los servicios personales se podrán pedir a las poblaciones y sus habitantes únicamente para las necesidades del ejército de ocupación. Los habitantes del país ocupado son sus súbditos temporales, en este sentido, aunque no pueda exigírseles un juramento de fidelidad. Estas prestaciones podrán pedírseles solo bajo la autoridad del jefe del ejército.(90) Lo que venimos notando es -

only through fear of severer and more certain punishment -- than that threatened by domestic law. In such cases, interest and fear must silence patriotism and the sense of right in the hostile population. This is certainly far from moral, but it is a military necessity and the inevitable result of military invasion.(citing Smith, p. 150, supra.)

88 - US Rules of Land Warfare, Article 303

89 - III Hyde International Law Chiefly as Interpreted and Applied by US, 1893

90 - Marques de Olivart, Derecho Internacional Publico, p. 175

que estas limitaciones a este derecho del ocupante se basan en las necesidades de éste. Los Reglamentos de La Haya nada dicen acerca de cuál sea el criterio que el ocupante deba observar en la determinación de sus necesidades. De donde resulta que el ocupante es el único que pueda decidir sobre sus necesidades y por eso parece que esta limitación no constituye ninguna cortapisa. Cualquier servicio que el ocupante exija podría justificarse alegando que es para las necesidades de su ejército. Cabría también admitir que pertenece al ocupante el derecho de exigir prestaciones de los habitantes y funcionarios públicos en forma de propaganda en gracia a que ésta es una de las armas de guerra moderna apoyándose así en la necesidad militar. (92)

Sobre las prestaciones en especie, dicen los Reglamentos de Guerra de los Estados Unidos, que no podrán exigirse de los habitantes del territorio ocupado salvo por razón las necesidades del ejército. Las prestaciones deberán estar en proporción -

91 - Hague Regulations, Article 52; And Article 53 authorizes -- the army of occupation to take possession of cash, funds, and realizable securities which are strictly the property -- of the state, depots of arms, means of transport, stores -- and supplies and generally all movable property belonging -- to the State and which may be used for operations of war.

All appliances whether on land, at sea or in the air adopted for the transmission of news, or for the transport of persons or things, excluding cases governed by naval law, depots, of arms, and generally all kinds of munitions of war may be seized even if they belong to private individuals but must be restored and compensation fixed when peace is made.

92 - Hyde holds that heretofore, it has not been considered to be unjust to compel enemy persons to perform numerous forms of services falling short of actual participation in hostilities, (Hyde, Vol.III. Dec. 666, p. 1839)

con las riquezas del país y del tal naturaleza que no constituyan una obligación de los habitantes a tomar parte en las hostilidades contra su propia patria. (93) Con este derecho-- casi todas las clases de artículos que sean necesarios para el mantenimiento del ejército pueden exigirse, tales como -- productos, cosechas, tabacos, ropas, máquinas, pieles, etc... alojamiento, salmón, carbón, fuego, baxaje, etc. (93a). Los habitantes también pueden ser obligados a ceder al ocupante el uso de objetos que sean de necesidad imprescindible para el -- ejército ocupante, que se pagarán al contado o por los que se dará el recibo correspondiente. También se incluyen requises en metálico como equivalentes a las que se habrán de efectuar en especie. Hemos dicho que la mayor limitación en el derecho del ocupante de exigir prestaciones, ya en servicio o en especie, está en que los habitantes, en el cumplimiento de estas prestaciones, no podrán participar en las hostilidades u operaciones de guerra contra su propia patria. En la interpretación de esta limitación, especialmente respecto de la palabra "operaciones", surge la cuestión de si esta limitación comprende -- también los servicios prestados en las preparaciones militares. Oppenheim, distingue entre "operaciones militares" y "preparaciones militares". Sobre las segundas opina que tales servicios pueden exigirse de los habitantes porque todos los intentos de incluir esta prohibición en las convenciones han hallado, incluyendo en la Convención de La Haya de 1.907. Dice Oppenheim:

93 - US Rules of Land Warfare, Article 335.
93a- Ibid, Article 336

"Attempts has been made to obtain the prohibition of the requisitioning of even such services as only - involved in taking part in military preparations." Thus the Russian draft put before the Conference of Brussels in 1.874 proposed (Article 48) to stipulate that the population of an occupied province might not be forced to take part in military operations against -- their own government, or in such acts as are contradictory to the realization of the aims of war detrimental to their own country, but the conference struck out the underlined words. It is true that the Oxford-"Manual de lois de la guerre sur la terre" of the Institute of International law did law down (Article 48-2) the rule that the occupant must not compel the inhabitants to either to take part in the military operations or to assist him in his works of attack or defense, but the Hague Conference did not adapt this rule and Article 52 of the Hague Regulations prohibits the requisitioning of services only as to imply an obligation to take part in military operations. It is apparent that all attempt to extend the prohibitions - to services which imply no obligation take part in military preparations and the like have hitherto failed. (Oppenheim, International Law, Vol. II Disputes, war and Neutrality, 1.944, ed.)

Por todo lo expuesto, sostenemos que el derecho del - ocupante de exigir prestaciones en forma de servicio podrá incluir el obligar a los habitantes a prestarles en las preparaciones militares del ocupante, viz., en la construcción de -- trincheras, refugios, etc. Es una clase de servicio que no está comprendida en la prohibición contra los servicios que equivalgan a participar en las operaciones militares contra la -- propia patria.

4.- El Derecho de Nombrar Agentes por los cuales el - Territorio Ocupado deba ser Administrado y de Escoger las Formas de Administración:

Se ha visto que la autoridad del gobierno legítimo en todos sus aspectos, legislativo, judicial e ejecutivo, queda suspendida cuando la ocupación se hace efectiva. El poder ocupante tiene derecho de asumir, según lo tenga por debido, el ejercicio por sí de todos los poderes y las funciones del go-

bierno, y al hacerlo así tiene también derecho a determinar - de qué manera y por qué organismo dicho gobierno ha de regirse (94). El ocupante puede nombrar todos los funcionarios necesarios para la administración del territorio ocupado, pero en este territorio el ocupante no puede obligar a las autoridades administrativas ni judiciales locales a permanecer en su puesto; más a las que consientan continuar en sus puestos, el ocupante tiene derecho de exigir un juramento de desempeñar lealmente sus cargos y de no obrar en su perjuicio. (95). Cualquier funcionario que no quiera tomar tal juramento puede ser expulsado; pero háganlo así o no, deben obediencia al ocupante. (96). En virtud de su derecho de regir el territorio,-

94 - It was held by the US Supreme Court in the case of *Coleman vs. Tennessee*, 7 Otto., 509-540, that the doctrine - of international law on the effect of military occupation of enemy's territory of the enemy upon its former law is well established. The right to govern the territory of the enemy during the military occupation is one of the incidents of war, being a consequence of its acquisitions; and the character and form of the government to be established depend entirely upon the laws of the conquering state or the orders of the military commander.

He exercises all civil as well as military authority. Yet in so doing, he may utilize local officials who are familiar with local customs and local laws. The mere - fact of military occupation does not abrogate or destroy public offices.- *Ketchum vs. Buckley*, 1.878, 99 U. Su. - 188; *Wagon*, ob. cit. 198.

95 - Dr. Liebers Instructions to the Armies (US) in the Field says that Commanding generals may cause the magistrate - and civil officers of the hostile country to take the -- oath of temporary allegiance or an oath of fidelity to - their own victorious government or ruler and they may expel any one who declines to do so. But whether they do so or not, the people and their civil officers owe strict obedience to them as long as they hold sway the district or country at the peril of their lives.- Par. 26, GO 100 AGO

96 - US Rules of Land Warfare, Article 309.

el ocupante puede eliminar a los funcionarios públicos de -- cualquier carácter que sean, especialmente a los que tengan cargos políticos. (97). Los salarios de los funcionarios públicos del gobierno legítimo que continuen en sus puestos, -- sobre todo los que pueden continuar en plena guerra -- -- como son los jueces, los policías, y funcionarios administrativos y municipales -- -- se pagan con los ingresos del territorio ocupado. (97a). En la administración del territorio -- ocupado, el ocupante por razones prácticas estaría dispuesto a utilizar los organismos existentes del gobierno legítimo y a suspender la operación de otros. (98). Algunas veces, los-

97 - Ibid, Art. 311; Foire mantiene que los funcionarios públicos no pueden dejar a su vez de reconocer en el ejercicio de sus funciones el soberano que de hecho ocupe el territorio, y cuando llegue el caso de reclamar la intervención de la fuerza pública para la ejecución forzosa de sus actos o para legitimar ciertos procedimientos, deberán recurrir a la fuerza militar del ejército que ocupe al territorio, pues si haciendo esto faltaran a sus deberes respecto de la soberanía nacional ni podría hacerse ningún cargo a dichos funcionarios o haber perdido la intervención de la fuerza militar extranjera. (4 Foire, Derecho Internacional, 252).

Es natural que el gobierno de ocupación procure que se satisfagan las necesidades del país ocupado; debe -- pues, continuar las obras públicas, atender el mantenimiento de los caminos, de las vías de comunicación, a los servicios postales, telegráficos, marítimos y ferrocarriles, destinada a este objetivo una parte de los impuestos percibidos durante la ocupación. El soberano de hecho subroga el legítimo en cuanto los derechos y obligaciones respecto al país ocupado, debiendo atender -- principalmente a las instituciones a la beneficencia pública, al libre ejercicio de los cultos, y a satisfacer todos los intereses de la vida social. Por esto, -- los actos por él realizados tienen la misma fuerza y autoridad que los del soberano legítimo. (4 Fiore 231).

97a- US Rules of Land Warfare, Article 310

98 - Hyde, International Law, III, p. 690.

habitantes pueden ser expresamente instruidos por su gobierno legítimo a permanecer en sus puestos y autorizados a continuar ejerciendo sus cargos a condición de que no ayuden al enemigo en el aspecto militar (99), y si solamente para que puedan -- cuidar de los intereses de los habitantes (99a). En la restauración del orden y la seguridad pública, el ocupante dejará -- en vigor las leyes municipales y penales del territorio ocupado que no rifan con sus objetivos. Estas leyes, en lo posible serán aplicadas por los funcionarios locales (100). En general, es obligación del ocupante dejar en el servicio a los -- funcionarios públicos del territorio ocupado y el Dr. Hackworth, en apoyo de este principio, cita las causas de Kotra, Igneczy, Balogh, Tegen, c. Etat tchecoslovaque, en las que el -- Tribunal Arbitrario Mixto de Hungría y Checoslovaquia, en -- 1.934, falló que según los Tratados de La Haya de 1.907, -- es obligación del ocupante dejar que continúen en el servicio los funcionarios públicos para asegurar la vida normal de la comunidad.

"In the case of Kotra, Igneczy, Balogh, Tegen C. Etat tchecoslovaque, the plaintiffs, officials of the Hungarian State Railways in Slovakia, made claim against the Czechoslovakia authorities then occupying part of Hungary. The Hungarian-Czechoslovakia Mixed Arbitral-Tribunal in 1.934 dismissed the claim for lack of jurisdiction, stating that so far as the Hague Convention of 1.907 relating to the laws and customs of war on land, imposed a duty on an occupying power to continue in service the officials of the occupied territory, it did it in order to insure the normal life of the community and not in order to guarantee to the officials themselves the right to continue employment and receipt of their salaries. (Annual Digest, 1.933-34, Case no. 221; IV Hackworth, Digest of International Law, op. cit. p. 394).

99 - Prussian Regulations of 1.814, Bray, op. cit. 490, no.2.
99a- Bluntschli, p. 342
100- US Rules of Land Warfare, Article 284.

Sobre el establecimiento de tribunales, el Dr. Josef Kunz (101) sostiene que los del gobierno legítimo perviven.-- El poder ocupante no puede obligar a los jueces a dictar fallos en su nombre, ni puede intervenir en las funciones de los jueces, salvo en circunstancias extraordinarias. Al poder ocupante se le permite nombrar jueces militares y solamente para causas militares. Sin embargo, establecer Tribunales civiles si éstos han cesado de existir. Estos tribunales podrían ser presididos por sus jueces; sin embargo, éstos en causas civiles, tienen que juzgar según las leyes del territorio -- ocupado que no estén suspendidas y en otras causas, por su propia ley. Estos casos, el Dr. Kunz continúa, ocurren cuando los jueces del gobierno legítimo no quieren permanecer en sus puestos bajo el ocupante, quien por su parte no tiene derecho de obligarles a continuar ejerciendo sus funciones.

5.- Limitaciones:

Hemos citado todos los poderes del ocupante según -- las leyes de guerra; pero, cuando la ley de las Naciones reconoce esos poderes, impone limitaciones en el ejercicio de los mismos. Muchas de estas limitaciones pueden encontrarse en los Pactos de La Haya, que declaran expresamente que está prohibido obligar a los habitantes a tomar parte en las operaciones militares contra su propia patria, o sea, dar información militares sobre el ejército del otro beligerente -- o de sus medios de defensa (102), ni podrá el ocupante exigir de los habitantes un juramento de fidelidad (103). Es --

101.- Kunz, *Kriegsrecht und Neutralitätsrecht*, p. 92, 1.935
Wien.

102 - Hague Regulations of 1.907, Article 44.

103 - Ibid, Article 45.

tas son las limitaciones generales a los poderes del ocupante en sus relaciones con los habitantes del territorio ocupado . Los Reglamentos de La Haya dicen también que el honor de la familia, los derechos, la vida de los habitantes y sus propiedades, y la libertad de cultos deben respetarse. Los bienes privados no pueden ser confiscados. Su derecho de imponer castigos por desobediencia o mala conducta que amenace su seguridad, no permite al ocupante imponer a los habitantes penas -- con carácter general, sean pecunarias o de otro tipo, por razón de los actos de los individuos, por los cuales, aquéllos no pueden reputarse responsables mancomunada y solidariamente (104).

En la convención de Ginebra de 1.949, estas limitaciones se han ampliado imponiendo otras más a los poderes del -- ocupante. La convención fué convocada de resultado de los abusos cometidos por los Alemanes en Europa y por los Japoneses en el Asia, cuando ocuparon muchos territorios durante la Segunda Guerra Mundial. Es un esfuerzo por concretar y hacer más precisos los Reglamentos de La Haya de 1.907. En la exposición de las conclusiones de la Convención, nos limitamos a la parte que concierne al asunto de esta tesis, pues sabido es -- que aquella convención abordó muchas otras materias referentes a la protección de los civiles durante la ocupación, así como durante el choque de la fuerza enemiga.

El Artículo 47 declara categóricamente que los habitantes no se verán privados en ningún caso y bajo ninguna forma de los beneficios de la Convención por cualquier cambio in

troducido, como resultado de la ocupación del territorio, en las instituciones del gobierno o por la anexión por el beligerante de todo o parte del territorio ocupado. Están también prohibidas las deportaciones en masa o individuales desde el territorio ocupado al del poder ocupante o a cualquier territorio. Notamos en este caso que el Dr. Kunz sostiene que la deportación de los civiles podría ser justificada si hay muchos individuos sin empleo que constituyen un peligro o amenaza la seguridad del poder ocupante (105).

La Convención prohíbe además al ocupante obligar a los habitantes del territorio ocupado a prestar servicios en sus fuerzas armadas o auxiliares; ni puede permitir presión o propaganda alguna para conseguir el alistamiento voluntario. La Convención enumera todos los servicios que el ocupante puede exigir de los habitantes. Queda prohibido obligar a los habitantes a trabajar para el ocupante en tanto no tengan 18 años de edad, y aún así, se impone la limitación de que sólo pueden ser obligados al trabajo que sea preciso para las necesidades del ocupante, los servicios públicos, o la alimentación, el cobijo, el vestido, la transportación, y la salud de los habitantes del territorio ocupado (106). La prohibición de los Reglamentos de La Haya contra la coacción de los habitantes para tomar parte en las operaciones militares queda reiterada en esta Convención, y se añade además que el ocupante no puede obligar a los habitantes a asegurar las instalaciones en donde estén haciendo trabajos forzados. Ni puede forzar-

105 - Kunz, *Kriegsrecht und Neutralitätsrecht*, p. 96

106 - Convención for the Protection of Civilians in Occupied-Territory of 1.949, Article 51.

a los ocupados a hacer trabajos fuera del territorio ocupado y encima, tienen derecho a cobrar salarios por sus trabajos, que deberán ser proporcionados a sus capacidades intelectual y física.

Sobre los funcionarios públicos, el Artículo 54 dice que el poder ocupante no debe alterar su estado ni usar en modo alguno de medida de coacción o discrimen contra ellos - en el caso de que se abstengan de ejercer sus cargos por razones de conciencia. Esta disposición dice Oppenheim no es muy clara, ya que en el Artículo 51, al ocupante se le permite exigir prestaciones en forma de servicio. Pero, en cualquier caso, el ocupante tiene derecho de quitar a cualquier funcionario público y reemplazarlo con uno de su agrado.

El texto de la Convención tiene muchas disposiciones que se refieren a la administración de las leyes penales por el ocupante y la defensa de las garantías judiciales en favor del procesado. El artículo 64 establece por su parte que la legislación penal del territorio ocupado queda en vigor, salvo en la medida en que pueda ser derogada o suspendida por la potencia ocupante si tal legislación constituyere una amenaza para su seguridad o un obstáculo a la aplicación del Convenio, pudiendo también dicha potencia dictar, a su vez, las normas necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones y su propia seguridad, pero dichas normas no entrarán en vigor sino después de haber sido publicadas y llevadas a conocimiento de la población en su propio idioma sin que puedan tener efecto retroactivo.

El artículo 68 añade también que las disposiciones de orden penal promulgadas por la potencia ocupante no pue-

den imponer la pena de muerte respecto a las personas proteg
das más que en el caso en que éstas sean culpables de espionaje,
sabotaje, o infracciones graves e intencionadas que hayan
causado la muerte de una persona o más y siempre que la legisl
lación del país ocupado en vigor antes del comienzo de la ocup
pación, disponga dicha pena para tales hechos y en las que habr
á de tenerse en cuenta siempre que el culpable no sea un --
súbdito de la potencia ocupante ni esté ligado a ella por --
ningún deber de fidelidad.

Cuanto a las requisiciones en metálico o en forma-
de servicios, la Convención las milita sustancialmente por --
cuanto que el ocupante puede exigir las solo a condición de --
que las necesidades de los habitantes hubiesen sido tenidas --
en cuenta por el ocupante.

IV. ALLEGIANCE DE FACTO AL GOBIERNO DE OCUPACION:

Hay muchas obras escritas sobre si los habitantes del territorio ocupado deben alguna clase de allegiance al ocupante. Esta cuestión no está aún bien decidida y se ha podido encontrar una solución concreta a esta obligación de los habitantes en sus relaciones con el ocupante. Antes de abordar a fondo esta cuestión, debemos reiterar que al hablar de allegiance, le damos sólo su significación jurídica, o sea, la obligación de obedecer las leyes. Por eso, cuando decimos - lealtad de facto queremos apuntar a la obediencia de facto a las leyes del gobierno de ocupación.

Cuando el territorio enemigo está bajo ocupación, los habitantes del mismo, se dice, están obligados a no cometer actos que puedan amenazar la seguridad del ocupante. La violación de esta obligación se describe algunas veces como "traición de guerra" o "rebelión bélica". No hay ningún acuerdo sobre el carácter real de las relaciones que existen entre el poder ocupante y los ocupados. Hay muchas teorías sobre estas relaciones y una de ellas es la de que cuando el territorio enemigo está ocupado, la fidelidad (Allegiance) de los habitantes se traspasa al ocupante. En otras palabras, el ocupante sustituye al gobierno legítimo en el ejercicio de los derechos de soberanía y asume todo el dominio del territorio. Esta teoría es la consecuencia de otras anteriores que sostienen que cuando el territorio está ocupado forma parte de propiedad del ocupante. (107). La allegiance - - - absoluta, in-

107 - Wye, Le Droit International, vol. III, 1.912, p. 233.

condicional- - - de los habitantes del territorio pasa inmediatamente al ocupante. (108). Esta teoría desapareció durante las guerras del siglo XVIII y el derecho del ocupante de exigir la allegiance absoluta de los ocupados cesó generalmente sin sanción legal.

En las leyes anglo-sajonas, la relación entre el ocupante y los habitantes se describe en términos de "Temporary-Allegiance". Dejamos la exposición de esta teoría para el próximo capítulo. Por ahora basta saber que según esta teoría, - el ocupante es el soberano de facto en el territorio ocupado- y los habitantes le deben una "Temporary Allegiance". (109). La obligación de "a legiance" según Halleck, es recíproca a - la del ocupante de dar protección; pero, por la incompleta es tabilidad de la ocupación, la allegiance es temporal nada más. (110). A decir verdad, continua Halleck, los habitantes del - territorio capturado por el enemigo, que les deja depone las armas y volverse a sus ocupaciones pacíficas están virtuelmen- te en la condición de prisioneros bajo parole. Los escritores Americanos se refieren a esta relación entre los habitantes y el ocupante como un convenio implícito, un parole tácito de - permanecer quietos, que se impone a los habitantes y forma la base de su allegiance para con el ocupante. (111). Fiore (112) alude a esta relación cuando dice: "De cualquier modo que es- to ocurra, debe considerarse, sin embargo, como regla que, -- cuando los habitantes hayan cesado de ofrecer resistencia y - el enemigo haya ocupado el país, se establece entre unos y --

108 - Wolff, Jus Gentium Methodo Scientifica Retractatum, - - 1.764, p. 892.

109 - US. vs. Hayward, 2 Gall, 485.

110 - Halleck, Rule Regulating Intercourse of States in Peace and War, p. 791.

otros una especie de contrato moral, cierta comunidad de derecho que impone a los habitantes el deber de abstenerse de todo acto de hostilidad y les obliga a aceptar como una necesidad la sumisión a las órdenes del vencedor, imponiendo a éste a su vez, la obligación de proteger a dichos habitantes, defender y respetar los derechos de cada uno, y ejercer su autoridad suprema con la templanza que impone la situación excepcional en que dichos habitantes se hallan, es decir, la de estar naturalmente ligados a su patria y a su soberano".

La tercera teoría sobre la obligación de los habitantes de obedecer al ocupante se refiere a la obligación impuesta por la ley de las naciones. Los proponentes de esta teoría sostienen que la razón de este principio descansa en la consideración de que la obligación de obediencia y sumisión se debe en aras de la protección que los habitantes reciben. (113) Algunos comentaristas del Continente aportan una base jurídica para esta obligación, la cual se describe por Gaulle como "Una Especie de Cussi-Contrato"; por Loenning como "comunante de droit" y por Fiore (supra) y Calvo como "une sorte de contrat moral" entre el ocupante y los ocupados. Sostienen que si el habitante viola este contrato social, el cual se reputa como una creación de necesidad y no voluntaria, se coloca fuera de la protección de las leyes y podrá tratársele con un margen de discreción sujeto a las limitaciones impuestas por la moralidad y la justicia natural. Hay otras autoridades del Continente que no se refieren a esta relación como una especie de contrato moral, pero creen igualmente que la obligación de obedecer es correlativa a la del ocupante de proteger

111 - Taylor, Treatise on International Law, 1.901, 585-92.

a los habitantes, creadas ambas por el Derecho Internacional. (115) Esta teoría prevalece en las leyes francesas y del continente, en donde hay algunos que mantienen que la base de esta obligación no es más que la fuerza; pero, son pocos en número. (116).

A la luz de estas teorías, pues, creemos que la base de derecho del ocupante de exigir obediencia y la correspondiente obligación de los ocupados de prestarla al ocupante está en la ley de las Naciones, especialmente los Reglamentos de La Haya, los que en su artículo 43 imponen como obligación primordial del ocupante el mantenimiento de la paz y el orden público en el territorio ocupado. Por lo cual, el ocupante está autorizado a suspender las leyes que impidan la realización de sus objetivos y siempre por razón de la necesidad bélica, y promulgar nuevos decretos para la consecución de esos objetivos. Si el ocupante está autorizado a hacer todo esto, entonces, debe tener también el derecho de exigir el cumplimiento de las leyes y decretos que haya promulgado para el mantenimiento de la paz y el orden públicos y la administración del país. (117). Hay muchos que niegan el carácter legal de la ocupación bélica y se refieren a ésta como un mero acto de fuerza. (117). Los juzgados Holandeses han decidido -

112 - Fiore, Derecho Internacional, IV, 231.

113 - Baxter, Duty of Obedience to Belligerent Occupant, British Yr. Book, 1.950.

114 - Guellé, Précis des lois de la guerre sur la terre, 1884, p. 130; Loenning, L'Administration du gouvernement-général de l'Alsace durante la guerre de 1.870. Fiore, Trattato di Diritto internazionale pubblico, 1.884 III, 238; Calvo, Le Droit International Théorique et pratique, 4 th ed., 1.896, IV, 206.

115 - Pillet, Les lois actuelles de la guerre, 1.898, p. 200; Folin, Le Droit Moderne de la guerre, 1.920, Vol. I, p. 429; Fauchille, Traité de droit international public, 1.920, p. 429.

en muchos casos, después de la Segunda Guerra, que el ocupante tiene sólo provisionalmente la autoridad de facto sobre el territorio ocupado y que, con la posible excepción de los decretos que miran a mantener la vida normal de la comunidad, los decretos del ocupante no crean en general obligación legal en los habitantes. En cualquier caso, toda obligación de obediencia al ocupante está subordinada a la más alta de obediencia al gobierno legítimo y de abstenerse de ayudar al enemigo. --

(118) Dice Oppenheim que no es fácil convenir con esta proposición porque la correlativa de la Allegiance por transitoria que sea; es decir, la protección, casa con las exigencias de la lógica jurídica. Al ocupante no se le puede exigir que cumpla con su obligación de dar protección a unos habitantes -- que no le deban ninguna obligación de "allegiance". De todas formas los Reglamentos de La Haya no sólo han impuesto límites legales al poder de hecho del ocupante, sino que, por deducción, han reconocido algunos derechos y han impuesto al ocupante obligaciones positivas en su relación con los habitantes. Esto se vislumbra en el Artículo 43 de dichos Reglamentos, en donde el ocupante no sólo está autorizado, sino -- aún obligado a tomar las medidas de que sea capaz en interés de la paz y el orden públicos, y el artículo 52 que autoriza prestaciones en especie o en forma de servicios, para las necesidades del ejército de ocupación. Estas son pruebas de que

1.921, Vol. II, p. 210; Merignhac, Traite de droit International, 1.912, Vol. III, p. 316; Van Lisst, Le -- Droit International, p. 326.

116 - Jacomet, Le lois de la guerre continentale, --. 65; Cole, l'Occupation du Temps de la guerra, p. 71; Lorriot, De la nature de l'Occupation de guerre, p. 175.

117 - Mathot, v. Loncue, supra.

118 - In Re Van Huis, 1.946, supra.

los habitantes están obligados a obedecer todos los decretos que caigan dentro de la esfera del poder del ocupante según el Derecho Internacional. Así, en justicia como en buena lógica sostenemos, que los habitantes están bajo la obligación legal de obedecer al ocupante.

"Reciprocal Obligations of Inhabitantes - In return for such considerate treatment, it is the duty of the inhabitants to carry on their ordinary peaceful pursuits, to behave in an absolutely peaceful manner, to take no part what ever in the hostilities carried on; to refrain from all injurious acts towards the troops or in respect to the operations; -- and to render strict obedience to the officials of the occupant.- Article 301, US Rules of Land Warfare.

Other crimes - There are many other crimes or offenses incident to war and which a belligerent may forbid and punish, such for example as neglect or disobedience of orders and regulations of a military occupant. Article 354, US Rules of Land Warfare.

Durante la ocupación, los habitantes están sujetos a las leyes que el ocupante quisiere imponer. No hay forma de burlar esto. En donde no hay protección por parte de la soberanía legítima, no hay tampoco derecho de exigir obediencia por el antiguo gobierno. (119). Hemos dicho en nuestra exposición de los varios tipos de gobierno de facto que el de -- ocupación es un gobierno de facto que se denomina técnicamente como gobierno de fuerza superior. Como tal, tiene que ser obedecido en asuntos civiles por los habitantes, quienes por esa obediencia debida a una fuerza irresistible no se hacen reos de culpabilidad por sus actos, aún cuando no estuviesen aprobados por las leyes del gobierno legítimo, pero temporalmente desplazado. (120). Como el Estado no ha podido brindar

119 - Boyd's Wheaton, International Law, p. 412; Bluntschli, I sec. 35.

120 - Thornton vs. Smith, supra.

protección a sus súbditos no pueden luego ser castigados por haberse sometido a la autoridad que estaba en dominio del territorio. (121) Oppenheim ha aclarado mucho esta cuestión acerca de la base legal del derecho del ocupante de exigir obediencia a los habitantes al decir que "la obligación de los habitantes de prestar obediencia al ocupante se basa en el Derecho Internacional porque la ocupación es un arma bélica legítima ; de manera que el beligerante no actúa ilegalmente en la ocupación del territorio enemigo. Además, el derecho internacional reconoce que la autoridad sobre el territorio ha pasado de facto a manos del ocupante y éste ha adquirido un derecho transitorio de administración sobre el territorio y los habitantes. Lo correlativo del derecho es la obligación y viceversa. Si el ocupante al tomar posesión del territorio, ha adquirido el derecho de administrar el territorio y sus habitantes, éstos deberán estar obligados a someterse a esa administración. Si el ocupante tiene obligaciones para con los habitantes, debe tener también derechos sobre ellos y uno de éstos es el de exigirles la obediencia. (122) Fiore es más explícito aún al decir que cuando el vencedor haya ocupado efectivamente una parte del territorio, y el gobierno del Estado vencido haya cesado de ejercer allí sus poderes y de defender y proteger a los súbditos contra el invasor, los habitantes del territorio colocado de hecho bajo la dependencia del vencedor, deberán obedecer a éste, aunque sea obligado por la necesidad de las cosas. (123).

121 - 4 Wheaton, International Law, 246; 8 Wallace 1; 96 U.S. 189.

122 - Oppenheim, Legal Relations Between Occupying Power and Inhabitants, The Law Quarterly Review, Vol. CXXXII, supra.

123 - 4 Fiore, Derecho Internacional, 234.

Sobre esta obligación de los habitantes de prestar obediencia, Oppenheim sigue diciendo: "Ellos (los ocupados) recibirán al ocupante sumisamente porque no pueden evitarlo. Sufren su yugo u opresión cuando les tiene por fuerza bajo su influjo. Su patriotismo nunca puede conformarse con la proposición de que estén ligados moralmente a no rebelarse en masa y libertar así a su país de las garras del ocupante, o a no dar información valiosa a su propio gobierno legítimo, o a no ayudar a los soldados de su propio ejército para evitar su captura. Si no cometen estos actos, quiere decir que sólo tienen miedo a la pena con que les amenaza el ocupante. Y el ocupante sabe de sobra que los habitantes sólo padecen su dominio o se someten al mismo, porque no pueden hacer otra cosa, y se salvarían del territorio si él no consiguiera retenerlos a la fuerza.

El Prof. Davis dice que "No hay garantías, constitucionales o no, que sean efectivas contra el poder del ocupante, - pues éste ejerce actualmente la autoridad y el poder legítimo - se ve impedido de ejercer su autoridad (125). El ocupante adquiere el derecho provisional de administrar el territorio ocupado y sus habitantes; y todos los actos legítimos que el ocupante haya hecho en el cumplimiento de su deber deberán ser reconocidos por el gobierno legítimo después de que cese la ocupación. (126) El ocupante tiene autoridad militar sobre el territorio ocupado. Los habitantes, pues, están bajo su ley marcial y quedan obligados a prestar obediencia a sus mandatos y decretos. La obligación de obedecer, según Oppenheim, no se ba

124 - Oppenheim, *ibid.*

125 - Davis, *International Law*, p. 331

126 - Oppenheim, *Disputes, War and Neutrality*, Vol. II, sec. 169.

se en la ley municipal del territorio ni en el Derecho Internacional, sino en la ley marcial del ocupante, a la que están sujetos. (127). La raison d'etre de la obligación de obediencia, según Oppenheim en su Obra "The Legal Relations between the Occupying Power and the Inhabitantes" (supra) - - - -, es si es ley alguna, es la ley marcial del poder ocupante que se impone inmediatamente a los habitantes por la ocupación militar del territorio. Le deben obediencia porque los tienen en la palma de la mano; los aplastaría si no fueron obedientes. Deberán ser obedientes, porque él puede imponer obediencia".

Bajo esta situación descrita arriba, creemos que, según cualquiera de los principios o teorías que invoquemos, -- los habitantes, durante la ocupación de su territorio, están obligados a obedecer los mandatos y decretos del ocupante que estén dentro de la esfera de su autoridad, primordialmente según las leyes de guerra y específicamente, según los Declaramentos de La Haya. No hay ninguna duda de que el ocupante puede exigir la obediencia a sus decretos y este acto del ocupante tiene fuerza legal, que el gobierno legítimo deberá respetar después del cese de la ocupación.

127 - Ibid, Sec. 170.

CAPITULO IV

DE LA SOBERANIA SUSPENDIDA

I.- EFECTOS DE LA OCUPACION ENEMIGA:

Hemos dicho en los capítulos anteriores que la ocupación bélica es un hecho provisional que engendra varias e importantes consecuencias jurídicas. Hemos citado una de ellas, o sea el efecto que produce sobre la soberanía del gobierno legítimo del territorio ocupado, y su corolario, la "allegiance" que deben los habitantes al nuevo poder. En este capítulo a guisa de proposición mayor, expondremos y analizaremos en su sentido jurídico, todos los efectos posibles en apoyo de nuestra aseveración de que, durante la ocupación bélica, la soberanía del gobierno legítimo queda suspendida y los habitantes deben una "Allegiance" temporal al ocupante mientras dure la ocupación, "allegiance" que consiste en la obligación de obedecer todas las leyes y decretos que el ocupante promulgue en el ejercicio de sus derechos según el derecho internacional.

1.- EN LA SOBERANIA:

Antes del advenimiento de una ley específica sobre la ocupación bélica el territorio que un estado perdía como resultado de la guerra se convertía en propiedad del vencedor, en tanto éste tuviera fuerza suficiente para ocuparlo, y retenía durante dicha ocupación todos los derechos de soberanía y de propiedad conferidas transitoriamente al vencedor. Se sostenía también que la "allegiance" de los habitantes para con su antiguo soberano quedaba disuelta legalmente por el hecho de la ocupación bélica y se trasladaba al nuevo soberano, al ocupante. Esta era la teoría en el Derecho Romano y se mantuvo -

hasta después de la mitad del siglo XVIII. (1)

Se siguió la misma por los Estados Unidos cuando ocupó Nueva Méjico en 1.846 y se citó en apoyo de esta proposición en la causa de La Fema (2) en la que Sir William Scott -- declaró que era un principio de la ley de las naciones que -- los habitantes del territorio ocupado cambian su "allegiance" y sus relaciones con su soberano antiguo se disuelven, aunque las relaciones entre sí y sus derechos de propiedad que no se anulen por los decretos del vencedor permanecen invariables(3).

En los últimos años del siglo XVIII y como consecuencia de las ocupaciones frecuentes durante las guerras que siguieron a la Revolución Francesa, otra teoría empezó a prevalecer. La doctrina del traspaso absoluto de la soberanía y la "allegiance" quedó generalmente abandonada y se reemplazó por la teoría de la sustitución temporal de la soberanía incluyendo la transferencia, también temporal de la "allegiance" de los habitantes del territorio ocupado. Esta es precisamente -- la proposición mayor de nuestra tesis que nos permite llegar a un concepto correcto y jurídico de colaboracionismo. Esta -- doctrina, que es la de los Estados Unidos de Norte América, la reiteramos así: Durante la ocupación enemiga, la soberanía -- del gobierno legítimo queda suspendida y los habitantes deben

1 - Grotius, liv. III, cap. VIII, sec. 4; Albercus Gentiles, De Jure Belli, liv. III, cap. V.; Hall, International Law p. 462, 473; De Martens, Precis, Sec. 28; Heffter, Sec. - 132; Creasy, p. 492-502; Lawrence, International Law, Sec. 200; Davis International Law, p. 327, op. cit.

2 - 5 C. Robb, 106.

3 - Leitensdorfer v. Webb, 15 L. Ed., 891.

una "allegiance" temporal al ocupante en el sentido de que es su ley la que por el momento deba obedecerse. El ocupante temporalmente el soberano de facto del territorio ocupado y los habitantes le deben "allegiance" temporal. La base de esta teoría estriba en que la capacidad de proteger es la raíz de la obligación de prestar "allegiance"; de manera que, cuando el Estado ha dejado de ser capaz de proteger una porción de su territorio, pierde su derecho de exigir "allegiance" y los habitantes o bien pasan a deber "allegiance" provisionalmente o restringida al vencedor o como Hall ha dicho, "siendo capaces en su estado de libertad de entrar en un convenio con el invasor tácitamente convienen en reconocer su soberanía a cuenta de que se renuncie a los derechos de guerra casi absolutos -- que el ocupante tiene sobre sus vidas y sus bienes (4). Otro fundamento de esta teoría es el de que nuestras relaciones -- con el gobierno legítimo se basan en la libre voluntad, y como quiera durante la ocupación bélica, no existe libertad en los habitantes del territorio ocupado respecto del ocupante, no tienen ambos otro ligamen entre sí salvo el de la allegiance de facto. Cuando el gobierno legítimo es expulsado y no puede ya asegurar a los habitantes por los derechos por cuyo mantenimiento se instituye principalmente todo gobierno, la allegiance de los habitantes, entonces, durante la ocupación se mantiene en suspenso y en una forma modificada, se traslada al ocupante aunque éste se funde en la fuerza superior mi-

4 - Hall, *International Law*, p. 467; Klubar, *Sec. 256*; De Martens, *Précis*, *Sec. 280*; *Shanks vs. Dupont*, 3 Peters 246; II Halleck, *Digest*, pp. 462-64; Calvo, *vl. IV*, *Sec. 2.166*; Davis, *International Law*, *op. cit.*, 327-28.

litar..... que puede garantizarles, y de hecho les garantiza total o parcialmente esos derechos (5). Esta es otra corroboración de nuestra proposición de que la "allegiance" y la protección son conceptos recíprocos y cuando no haya protección no habrá tampoco derecho de exigir allegiance. Cuando el territorio de un estado está bajo ocupación bélica, no cabe duda de que el ejercicio efectivo de los poderes de soberanía sobre el territorio ocupado por el gobierno legítimo se vuelve nulo, porque no puede haber dos legislaciones ni dos jurisdicciones contrarias por naturaleza que emanen de fuentes de autoridad distintas sobre una porción definida de territorio (52) (Theory of coexistence of competency. Minliadda.) Este principio está de acuerdo con las disposiciones de los Reglamentos de La Haya, en sus artículos 42 y 43, en que se declara que el territorio se considera ocupado cuando está colocado de hecho bajo la autoridad del ejército enemigo y cuando la autoridad del poder legal pasa a manos del ocupante éste deberá tomar las medidas que de él dependan para restablecer y asegurar, en cuanto fuera posible, el orden y la paz pública

5 - Birkhimer, "Military Government and Martial Law, p. 22-25.

5a- Podemos que los autores Italianos como Balladores-Pallieri, "La Guerre", p. 325 y Capotorti, "L'Occupazione nel diritto di guerra", p. 57, l.949, considera el derecho de ocupación como un campo en donde se aplican dos órdenes jurídicos del estado ocupado y del estado ocupante ; Mientras, Ago, "Occupazione bellica e trattato Lateranense", Milano, l.946, p. 146, critica esta teoría de -- sus compatriotas sosteniendo que esta teoría niega sin embargo el hecho de que el derecho de ocupación conoce -- el lado de los reglamentos jurídicos del estado ocupante y estado ocupado, las normas autónomas del derecho de -- gentes, y justamente la delimitación entre esos dos primeros órdenes jurídicos es el objeto de tales normas. Si -- viendo, dice que el derecho de gentes cabe decidir si -- las medidas tomadas por el gobierno legítimo fuera del -- territorio ocupado son válidos y efectivos dentro del -- territorio ocupado. Gungenheim, Paul: Traité de Droit In--

cas, respetando, salvo impedimento absoluto, las leyes vigentes del país (5b). El traspaso de la autoridad de manos del gobierno legítimo a las de la potencia ocupante lleva consigo natural y necesariamente la potestad de ejercer los derechos de soberanía. La soberanía sin autoridad, esto es sin la capacidad efectiva de ejercer los derechos inherentes a la misma, no es soberanía. La autoridad del poder legítimo o soberano, habiendo de hecho pasado a manos del ocupante por razón de su firma y efectiva posesión del territorio invadido, y en gracia a que el soberano de jure ha sido expulsado, la soberanía de éste, ex necessitate rei, deberá reputarse suspendida porque no cabría tener dos soberanías sobre una misma porción de territorio, que actúen al mismo tiempo, ni que emanan de dos fuentes distintas de autoridad.

Hemos dicho que esta teoría es definitivamente el punto de vista de los Estados Unidos, que queda expresada en la causa de:

A.U.S. contra Rice, (6) en la cual se dice:

1.- La firme posesión adquirida por el enemigo le permitió ejercer los más plenos derechos de soberanía sobre el lugar;

2.- La soberanía de los Estados Unidos sobre el territorio quedó en consecuencia, suspendida.

3.- Las leyes de los Estados Unidos no podían ya im-

ternational Public, Vol. II, p. 461, 1.954, Geneva, op. cit.

5b- Según Liszt, esta disposición radica el título jurídico de la autoridad soberana del estado ocupante; Franz Von-Liszt, Derecho Internacional Público, 1.919, p. 437-444.

6 - 4 Wheaton 276.

ponerse justamente ni obligaban ya a los habitantes que se quedaron y se sometieron al conquistador;

4.- Los habitantes pasan a deber "allegiance" temporal al gobierno Británico;

5.- Los habitantes estaban obligados únicamente por las leyes que el gobierno Británico eligió a reconocer imponer;

6.- Por la naturaleza del caso, ninguna otra ley podría serles obligatoria, porque donde no hay protección, no hay tampoco derecho de exigir obediencia (6a).

Este principio ha sido reiterado en las causas de:

B.- Fleming contra Page (7), sobre los efectos de la ocupación de Tampico, México y la captura del estado de Tamaulipas:

6a - "By the conquest and military occupation of Castine, - Maine the enemy acquired that firm possession which enabled him to exercise the fullest rights of sovereignty over that place. The sovereignty of the United States over the territory was, of course suspended and the laws of the United States could no longer be rightfully enforced there or be obligatory upon the inhabitants who remained under a temporary allegiance to the British government and were bound by such laws and such laws only as it chose to recognize and impose. From the nature of the case, no other laws could be obligatory upon them for where there is no protection or allegiance, or sovereignty, there can be no claim to obedience" ----- this is the dispositive part of the decision of the U.S. Supreme Court in the Rice Case.

7 - The Supreme Court of the U.S. in disposing of the case of Fleming vs. Page held that "It is true that when Tampico, Mexico had been captured and the State of Tamaulipas subjugated, other nations were bound to regard the country while in our possession to continue as the territory of the United States and to respect it as such. While it was occupied by our troops they were in an enemy's territory and not their own; the inhabitants were still foreigners and enemies, and owe to the United States nothing more than the submission and obedience, sometimes called temporary allegiance, which is due from a conquered enemy, when he surrenders to a force which he is unable to resist. 13 L. Ed. 276.

1.- Los habitantes solo deben a los Estados Unidos -
sumisión y obediencia, que algunas veces, se llaman "allegian
ce" temporal, debida por un enemigo conquistado cuando se --
rinde a una fuerza superior que es incapaz de resistir;

2.- Por las leyes y usos de las naciones la conquis-
ta confiere un título válido por el cual el victorioso retien
posesión exclusiva del territorio conquistado. (7a.)

C.- Shanks c. Dupont, (8) sobre los efectos de la --
captura y posesión de las Islas de James por los Ingleses en
febrero de 1.780:

1.- No fué un traspaso absoluto de "allegiance" al -
vencedor.

2.- Pero los habitantes debían "allegiance" al venced
dor durante la ocupación.

3.- Era una "allegiance" temporal al que no destruyó
y si solo suspendió la antigua "allegiance". ()

D.- Coleman c. Tennessee, (9)

1.- El derecho de gobernar el territorio del enemigo
durante la ocupación militar es una consecuencia de su adquis
sición de la guerra.

2.- El carácter y la forma de gobierno que haya de -
establecerse depende en un todo de las leyes del Estado del
vencedor o los de decretos del Jefe en General.

3.- Las relaciones políticas entre los habitantes y
su gobierno legítimo o soberano son por el tiempo partido.

4.- Las leyes municipales permanecen vigentes a me--

nos que se suspendan o se anulen por el conquistador.

E.- The City of new Orleans o. N.Y. Steamship Mail -
co. (10).

1.- La potencia vencedora tiene derecho de reempla--
zar la autoridad de la vencida.

2.- Podrá asumir en el grado que juzgue propio, el -
ejercicio por sí mismo de todos los poderes y las funciones-
de gobierno.

3.- Podrá nombrar todos los funcionarios que se hace
siten a investirles de poderes precisos.

4.- Podrá hacer cualquier cosa que sea necesaria para
fortalecerse y debilitar al enemigo.

5.- No hay limitaciones a los poderes que pueda ejer-
cer, salvo las que marcan las leyes y los usos de guerra.

6.- La vinculación política de los habitantes del te-
rritorio ocupado con el Estado al que pertenece no se escin--
de totalmente, sino que es interrumpida o suspendida mientras
dure la ocupación.

7.- Están sujetos a las órdenes del vencedor y no --
del gobierno desplazado.

F.- Dow c. Johnson, (11).

1.- Consecuencia necesaria de la ocupación bélica y
la consiguiente dominación es la de que las relaciones polí--
ticas entre los habitantes y el gobierno legítimo se escin- -
den provisionalmente.

2.- Las leyes municipales continúan hasta que se sus-
pende o se abroguen para beneficio de los habitantes (11a.)

10 - 20 Wall. 387-403; 22 L. Ed., 354.

11 - 25 U.S. L. Ed., 652.

11a- It should be noted that all these principles announced

Y el Profesor Taylor en su tratado (12) está perfectamente de acuerdo con la teoría de la soberanía suspendida y la "allegiance" temporal al decir que "Cuando un Estado se ve obligado a someter una porción de su territorio y las - - fuerzas superiores del enemigo, pierde por un tiempo su derecho a exigir allegiance de sus habitantes a quienes ya no le es dable proteger. En su consecuencia, los habitantes deben prestar una "allegiance" temporal y restringida al ocupante-- militar cuya posesión suspende en tal grado la autoridad del antiguo soberano que incluso le despoja el derecho de enajenar parte cualquiera de su territorio mientras quede en poder del conquistador o sus aliados. Durante la suspensión de la soberanía del antiguo régimen, los habitantes no tienen - ninguna obligación, sea moral o legal, para con el ocupante-- que les prive del derecho de rebelarse contra él, con tal de que estén dispuestos a arrastrar los riesgos que semejante - empresa supone."

Otro fundamento de esta teoría nos lo dan las rela--

bu the US Suprme Court beginning from the Pice case were reiterated in numerous decisions and up to the present, stands as the leading case in the United States -- on Belligerent Occupation, its effects and consequences. To cite a few; MacLeod vs. U.S., 57 L. Ed. 1.266; Percy v. Strannahan, 51 L. Ed., 792; Underhill vs. Hernandez, 42 L. Ed., 456, 168, U.S. 253; The Grapeshot -- vs. Wallerstein, 19 L. Ed., 653; Hannauer vs. Woodruff, 21 L. ed. 277; U.S. vs. Wong Kim Ark, 42 L. Ed. 903, -- 169 U.S. 683; De Lima v. Bidwell, 45 L. Ed. 1.050, 192 - U.S. 181; Downes v. Bidwell, 45 L. Ed., 1.113; Lincoln-- v. U.S., 818, Cook v. Tait, 286 Fed. 412; Banque de - - France v. Equitable Trust, 33 Federal, 2 d series, 206; U.S. v. Reiter, 27 Fed. Cas. 773. US vs. 100 Barrels of Cement, 27 Fed. Cas. 294; The Army Warwick case No. 342, 1 Fed. Cas. 809; The Haiwatha, 12 Fed. Cas. 95, The Parkhill, 18 Fed. Cas. 1.187; US vs. 17 Packages, 27 Fed.-- Cas. 1.029.

12 -Taylor, Treatise on International Public Law, Sec. 573.

ciones entre el gobierno legítimo y los ciudadanos que se fundan en el consentimiento de los súbditos. Esto quiere decir - que existe un libre juego entre el gobierno y sus súbditos. - Los ciudadanos tienen toda la libertad para hacer lo que quieren dentro de la órbita de la ley, y el elemento de compulsión o coacción no aparece nunca en estas relaciones. Los ciudadanos saben que en cualesquiera actividades que emprendan - no tienen que temer ningún castigo futuro, lo que no ocurre bajo la administración de unas fuerzas de ocupación. Bajo la -- ocupación militar en cambio, los ciudadanos no pueden decir - no hacer tales cosas porque se ven coartados por las órdenes del ocupante quien tiene derecho de castigar cualquiera desobediencia a sus decretos, en una palabra, el elemento de coacción e intimidación está siempre presente en cualquiera actividad de gobierno del ocupante. Por eso, las relaciones que vinculan a los habitantes al ocupante militar pueden considerarse como un ligamen de hecho impuesto por las necesidades bélicas, como otros escritores lo llaman una allegiance de -- facto (13) toda vez que, durante la ocupación enemiga, los habitantes están obligados a obedecer todas las leyes y órdenes del ocupante en el ejercicio de sus derechos según el derecho internacional.

13 - Birkhimer in his treatise on Military occupation cites - Blackstone: "Under military government, this allegiance - is said to be temporary only. It is wholly different in kind but in degree falls short of that owing by a native born or naturalized subjects to their permanent government. (Blackstone, vol. I, p. 370; Hale, Pleas of the - Crown, Vol. I, p. 68; Kent, Vol. II, -, 49, Birkhimer, - "Military Govt, etc., op. cit, sec. 26).

.

Si bien es verdad que hay muchos otros autores que no están conformes con esta teoría de la soberanía suspendida y enseñan que la soberanía es absoluta y no se suspende nunca, como veremos en el próximo capítulo, opinamos que esta teoría es la más lógica, justa y humana que pudiera adoptar el mundo internacional, porque las leyes sobre la ocupación bélica no se promulgan para proteger al ocupante ni al soberano en exilio, si no a los habitantes del territorio ocupado y menguar los sufrimientos de estos infortunados que -- por el momento están sujetos por fuerza al enemigo. No hay manera de refrenar los abusos del ocupante, salvo después de la guerra, esto es, si resulta vencido en cuyo caso habría la posibilidad de hacerle responder de las violaciones de las leyes y los usos de guerra; pero, si se hacen vencedores en definitiva, ¿quién les habría de juzgar por sus actos, a no ser la opinión pública del mundo tan amorfa y veleidosa?

Hemos dicho que la teoría de la soberanía suspendida y su corolario de la "allegiance" temporal es definitivamente el punto de vista de los norteamericanos. No quiere decir esto que los ingleses tengan otra opinión sobre la misma. Están también perfectamente de acuerdo con esta teoría, como se ve en la obra de Dana's Wheaton en la que se dice: "Los habitantes del territorio vencido que permanecen como no combatientes, deben una allegiance temporal y restringida a las fuerzas de ocupación. (14)

La opinión clásica de los ingleses sobre este tema de la "allegiance" temporal la expone más detalladamente --

14 - Dana's Wheaton, Elements of International Law, 366.

Birkhimer, en la obra que ya hemos citado en la que sostiene citando a Blackstone, que, aún el monarca de facto o usurpador tiene derecho a exigir allegiance temporal a su administración de gobierno y de prestar protección temporal a los habitantes (15).

Oppenheim, (16) Wheaton, (17) Keith and Hall (18), -

15 - "By the English law it is high treason to compass or -- imagine the death of the King, his lady, the queen or -- his eldest son, the heir. (25 Edward III, 87, 1.352, -- chap 2) The King here intended is the King in possession, without regard to his titles. For as Blackstone -- says, 'it is held that the king de facto and not de jure or in other words, a usurper that hath got possession of the throne is the king within the meaning of the statute, as there is a temporary allegiance due to him for his administration of government and the temporary protection of the public. (Commentaries, IV, p. 17) And so far as this principle carried that through Parliament -- had declared the line of Lancasters to be usurpers, -- still treasons committed against Henry VI were punished under Edward IV. By a subsequent statute all person who in defense of the King for the time being, waged war -- against those who endeavor to subvert this authority by force of arms, though the latter may be aiding the lawful monarch, are relieved of the penalties of treason. (Blackstone, Commentaries, p. 77.) Being in possession-allegiance is due to the usurper as King de facto. To -- this height has the duty of allegiance to the de facto-goverment been carried by the English law. (Birkhimer, op. cit., Military Government and Martial law, Sec. 30).

"The principle here involved, and which is equally applicable to both regular and temporary governments is the simple one of mutuality of allegiance and protection. In this regard military government is the simple -- one of mutuality of allegiance and protection. In this-regard military government is on the same footing with -- any other. To the extent that it assumes and discharges these obligations of a regular government, it is entitled to obedience of those who are recipients of its bounty. But as military government is at best transient, the allegiance due to it is correspondingly temporary. x x x . Birkhimer, supra. Sec. 31.

16 - Oppenheim in this book holds: "As the occupant actually exercises authority, and as the legitimate government is prevented from exercising its authority, the occupant -- acquired a temporary right of administration of over -- the territory and its inhabitants....

An occupant having military authority over the territory, the inhabitants are under his martial law and

verdaderas autoridades inglesas en derecho internacional, aparentemente están en contra de la teoría norteamericana sobre

have to render obedience to his command. The duty to -- obey does not of course, arise from their own municipal law nor from international law, but from the Martial law of the occupant to which they are subjected.

He may compel them to take an oath... sometimes called an oath of neutrality to abstain from taking up a hostile attitude towards him and willingly to submit to his commands, and he may punish them severely for breaking his oath.

The belligerent occupant is totally independent of the constitution and the laws of the territory, since occupation is an arm of warfare and the maintenance and safety of his forces and the purposes of war stand in the foreground of his interest and must be protected under all circumstances or conditions. (Oppenheim, International Law, Vol. II, p. 169-170, 1.944).

In an article he published in 1.917, Oppenheim again said: "...They receive the occupant submissively because they cannot help it. They chafe under his yoke while he keeps them by force under his sway. Their patriotism -- will never agree to the proposition that they are normally bound not to rise in arms and thereby free the country from his sway... Or if they desist from committing such acts, they do it because they are afraid of punishment threatened by the occupant. (Oppenheim, Legal Relations between an Occupying Power and the Inhabitants, -- Law Quarterly Review, XXXIII, p. 362).

17 - Says Wheaton by Keith: "Martial law in the field or in occupied territory has been defined to be the will of -- the commanding officer of an armed force or of a geographical military department, expressed in time of war within the limits of his military jurisdiction as necessity demands and prudence dictates, restrained or enlarged by the orders of his military chief or supreme ruler. -- As was said in an American case: "Martial Law is the law of necessity in the actual presence of war. It is administered by the general of the Army. The laws of war -- (when that expression is not used in a generic term) are the laws which govern the conduct of belligerents towards each other and other nations *flagrante bello*. Military government is government imposed by a successful belligerent either over a foreign province or over a district retaken from insurgents treated as belligerents. This supersedes as far as may be deemed expedient, the local law and continues until the war of rebellion is terminated and a regular civil authority instituted. (Wheaton, Elements of international Law, Vol. I, 7th ed. by -- Keith, 240).

18 - As Hall puts it: "On occupying a country an invader at once invests himself with absolute authority; and the -- fact of occupation frays with it as of course the substitution of his will for previously existing law whenever--

la allegiance temporal al ocupante, pero en realidad, como se verá en sus obras, la oposición se reduce nada más que a la terminología, o sea no están conformes con el uso de la expresión "allegiance" temporal; no obstante, en último análisis, es claro que están de acuerdo con el principio en el sentido de que durante la ocupación enemiga, es la ley del ocupante, o sea la ley marcial la que rige el territorio ocupado y sus habitantes están estrictamente obligados a obedecer dicha ley. Los ingleses denominan esta situación como - - obediencia constreñida. En otras palabras, el conflicto está en el uso del propio término acertado, lo que no es más que - un conflicto de pura forma, que no altera los efectos jurídicos que la ocupación enemiga produce en el territorio ocupado.

El Dr. Hackworth acepta esta teoría de la soberanía - suspendida y la "allegiance" temporal pues escribe que durante la ocupación enemiga, para todos los fines y propósitos, - el ocupante es el soberano y en su consecuencia, los habitantes le deben "allegiance" temporal, o sea, fidelidad y obediencia a cambio de la protección que reciben del ocupante .

(19). El Procurador General de los Estados Unidos, en una - -

such substitution is reasonable needed and also the replacement of the actual civil and judicial administration by military jurisdiction.

x x x The invader deals freely with the relations of the inhabitants of the occupied territory toward himself. He suspends the operation of the laws under which they owe obedience to their legitimate ruler; because - obedience to the latter is not consistent with his own safety. (Hall, Treatise on International Law, p. 464).

19 - Dr. Hackworth maintains that... 'True when pursuant to a treaty, the US occupied this island, the inhabitants thereof, (Cuba) during such occupancy undoubtedly owed-

opinión dada en 1.909, dice que "la ocupación dota al enemigo de soberanía y le da dominio civil mientras retenga la posesión militar. Los habitantes que se queden y se sometan y los extranjeros que vayan a ese territorio ocupado por el -- enemigo deberá aceptar la ley de este gobernador de facto (20)

Y el comandante William Birkhimer, en su obra "Military Government and Martial Law" expone con gran énfasis y lucidez esta teoría de la allegiance temporal así como las bases en que se funda. Escribe así: "La teoría de la Allegiance temporal ha sido adoptada para describir las relaciones -- que los habitantes del territorio ocupado tienen con el gobierno militar establecido sobre ellos. Está aceptada por -- los fallos repetidos de la Corte Suprema de los Estados Unidos con referencia tanto a nuestros ciudadanos, que estén sujetos temporalmente a un mismo extranjero, como los súbditos del enemigo, que estén bajo nuestro control. Y aunque esta -- teoría es rechazada por algunos escritores respetables, el mayor peso de las autoridades y los hechos concretos de la -- realidad la favorecen (21).

allegiance to the U.S., i.e., fidelity and obedience for the protection they receive but that did not divest -- them of their inherent rights. (Hackworth, Digest of International Law, Vol. I. p. 156).

20 - 1.909 Opinions of the Attorney General, p. 140.

21 - Maj. Birkhimer continues in his exposition on Temporary Allegiance..... not only does this theory give a juster conception of the relations existing between the ruler and the people ruled under these circumstances than any other, but it is based upon considerations which are peculiarly advantageous to the latter. It signifies to -- them protection to person and property so far as this -- course is compatible with a proper prosecution of the -- war by the dominant power.
xxa... From any other than a humanitarian view, it is -- a matter of indifference to him whether or not they are protected in their rights of life and property; to them

Las teorías europeas sobre este tema son diversas. - Una de ellas sostiene que durante la ocupación enemiga, no hay traslación de soberanía sino únicamente sustitución provisional y limitada de competencias. Así, lo notamos en los fallos de varios Tribunales de distintas naciones, como el de la causa de "Ottoman Debt Arbitration" (22), en donde el árbitro sostuvo que la ocupación militar no puede operar como una traslación de soberanía, hasta que el tratado de paz no exprese lo contrario. También en la causa de Alexander K^emeny vs. Etar Serbe-Croat-slovene, (22a) el Tribunal de Arbitrio mixto Húngaro-Yugoslavo en 1.928 se declaró que en los territorios húngaros que fueron ocupados por las fuerzas yugoslavas no se produjo la traslación de soberanía sobre el -

it is a matter of vital importance. He (the occupant is there to enforce his will and is able to do it; they must accept what he offers. By remaining with their property in the territory which he alone governs, they impliedly, under the laws of war accede to his terms; and while - - they live under his rule and they receive the benefits - of that law and order which he institutes and maintains, they owe him that transient duty of obedience which is called Temporary Allegiance.

It has been observed and the observation has the sanction of numerous expressions emanating from the Supreme Court that those who quietly remain in the occupied territory transacting their ordinary business should receive the care of and they owe temporary allegiance to the government established over them. (8 Wallace 10; 4 - - Wheatons Int'l Law, 253; Bluntachli, I, Secs. 35-36.) - Allegiance is a duty owing by a citizen to their government of which so long as they enjoy its benefits, they cannot divest themselves. It is the obligation they incur for the protection afforded them. It carries with and is measured by the character of protection. That allegiance and protection are reciprocal obligations binding mutually upon citizens and government is the fundamental principle upon which society rest. (Birkhimer, supra, p. 157).

22 -Annual Digest, 1.925, Case No. 260.

22a VIII Fevueil des decisions de Tribunaux Arbitraux Mixte 588, Annual Digest, 1.927-28, Case no. 374.

territorio ocupado. En la causa de Auditeur Militaire vs. G. Van Dieren (22b), el Consejo de Guerra de Brabant en 31 de enero de 1.919 sostuvo que la soberanía nacional sobre el territorio ocupado existía aún cuando el poder ocupante ejercía la autoridad de facto, lo mismo con fallos del Tribunal Holandés, y en la causa de Naoum et Autres c. Min. public et colonies de L'Afrique occidentale française (22c), los encausados fueron condenados por haber exportado monedas de oro al territorio de Togolandia, entonces bajo la ocupación militar de los franceses y el Tribunal de Casación Francés declaró que aquel territorio bajo la ocupación militar no podía ser considerado como parte del territorio nacional. Por su parte, otros escritos europeos como Franz Von Liszt (22d), sostiene que el estado ocupante asume el ejercicio de la autoridad soberana en el estado ocupado, pero no como delegado o representante de éste, sino por derecho propio, garantizado por el Derecho Internacional. Pasa a decir luego que la ocupación militar del territorio enemigo establece entre el poder ocupante de una parte y los habitantes del país ocupado y los demás estados, de otra, una verdadera relación jurídica creada por la fuerza de armas, pero reconocida y reglamentada por el Derecho Internacional a pesar de su carácter transitorio. Verdross (22e) dice, que la autoridad del estado-

22b - Annual Digest. 1.919-22, Case No. 310; Parisicrise Belge, 1.919, pt. III, p. 1.

22c - Annual Digest, 1.919-22, Case No. 3.121; Gazette du Palais, 1.920, I, p. 162.

22d - Franz Von Liszt, Derecho Internacional Público, 1.919.

22e - Alfred Verdross; Volkerrecht, trad, por A. Truyols, - 1.955, Madrid.

ocupado continua existiendo durante la ocupación. Pero, sobre ella se sobrepone la autoridad del ocupante citando el Artículo 43 de los Reglamentos de La Haya. Dice también que el ocupante ejerce su propia autoridad, sin más. Su poder es supremacía territorial y no personal, por lo que se ejerce no solamente sobre las nacionales del estado ocupado sino que se extiende en principio a todas las personas que se encuentran en el territorio ocupado. La ocupación no entraña la soberanía independiente ni cualquiera sucesión verdadera al soberano extranjero el cual continua existiendo, si no solamente el ejercicio temporal de soberanía dentro de los límites fijados por los tratados o las costumbres(22f).

Otras teorías quieren aclarar el carácter jurídico de la ocupación en virtud de la soberanía en el territorio, y buscar o determinar a quién pertenece esta soberanía. Algunos admiten que el poder ocupante ejerce su propia soberanía en el territorio ocupado, mientras otros afirman que el poder ocupante ejercería el del estado ocupado al que ha sustituido de hecho (22g). Otros pretenden que el poder ocupante no es el representante ni el gerente oficioso de los asuntos del poder cuyo territorio está ocupado, sino que -- actúa en virtud de un derecho propio (22h). Pero Guessenheim (22i), el autor suizo, dice que la única tesis correcta es

22f - Moller, Alex: International Law in Peace and In War, - II, 1.935, Copenhagen, p.

22g - Decisions del Tribunal Arbitral Mixte franco allemand du 8 avril, 1.929, des L'affair compagnie des chemins de fer du Nord c. Etat allemand, Rec. T.A.M., IX, 67, decisión qui admet la responsabilita de L'Etat occupante relativement a L'Utilization des réseaux ferroviaries de L'Etat occupé.

22h.- Kohler, Grundlagen des Volkerrechts, 1.918; p. 86; -

la que se admite que las normas que el ocupante ejecuta en el territorio ocupado, dependen del orden jurídico del estado ocupado, del de su propio orden jurídico, y también del Derecho Internacional consuetudinario, que regula la ocupación militar, particularmente la competencia concurrente de dos órdenes jurídicos. Y Díaz Lora (22j) sostiene, con -- otros autores, que la ocupación bélica crea tan solo una situación de hecho; no implica sustitución de soberanía en tan to no se consigne así en el tratado que ponga fin a las hostilidades y mientras la autoridad del ocupante sea consecuencia de la imposibilidad material del ejército de la soberanía por el poder legal sobre el territorio ocupado. Como vemos en estas citas, aunque se sostiene la teoría de que no hay traslación de soberanía durante la ocupación bélica, no afecta de ninguna manera la nuestra de la soberanía suspendida porque como hemos dicho antes, la ocupación bélica es una situación de hecho que entraña varias consecuencias jurídicas, una de las cuales es la suspensión del ejercicio del poder soberano por el gobierno legítimo. En todas estas teorías, mencionadas arriba, notamos que hay un acuerdo común sobre el reconocimiento del poder del ocupante de ejercer potestad estatal sobre el territorio ocupado, lo cual ha sido firmado por Keller, supra, y sostenido durante el primer conflicto mundial por Loenning, supra, y durante el segundo conflicto por Waltz, supra.

Loenning, Das Subjekt der Staatsgewalt in besetzten - feindlichen Gebieten, ZIR 1.920, ss. 1.920; SCHENK, von Stauffenberg, Verhältnisse Beziehungen des okkupanten - zu den Landeseinwohnern, ZAO, R.u.V.R., 1.931, I, p. - 102; Waltz, Recht der Landkreiszuführung, 1.942, p. 78.
221 - Guggenheim, Pral: Traité de Droit International Publi-

Desde luego, una vez que el soberano de jure haya --
vuelto a su poder, la allegiance temporal al ocupante cesa --
automáticamente, ya que se basa tan solo en una situación de
hecho en donde la eficacia del ejercicio de la autoridad es
la que importa. Pero, a la obligación de la allegiance el so-
berano de jure, por encima de la allegiance temporal constre-
ñida al ocupante no sería posible darla un efecto retroacti-
vo, de la misma manera que toda soberanía no puede tener --
efecto retroactivo. La regla más favorable y justa parece --
ser la que reconoce el carácter recíproco y mutuo de la alle-
giance y la protección; de ahí que donde la protección sea --
nominal, la allegiance lo sea también nominal, y cuando la --
protección quede suspendida, la allegiance también se suspen-
da. Otra consideración a hacerse resía la del papel de la li-
bertad en la relación mutua entre el pueblo y el gobierno. --
La protección una vez restaurada, no puede tener efecto re--
troactivo porque la protección es un hecho y no una mera tea-
ría ni puede nunca extenderse por supuestos legales. (23) No
puede ya resucitar a los que han sufrido y muerto durante la
ocupación enemiga porque el gobierno no legítimo no estaba --
en condición de darles protección.

que, Geneva, 1.954, II, p. 461

22j - Diaz Lora; Derecho Internacional Público en Paz y en
Guerra, Madrid, 1.949, p. 303.

23 - Claro M. Recto, The Law of Belligerent Occupation, --
1.947, p. 145. Manila.

2.- EN LA ALLEGIANCE:

Durante la ocupación enemiga, la allegiance de los habitantes del territorio ocupado al gobierno de jure queda suspendida. Esta teoría es el reverso del principio que hemos discutido o sea que la protección y la allegiance son recíprocas, y la ocupación hostil por el enemigo priva al gobierno de jure del poder, quedando así incapacitado para cumplir su obligación de proteger a los súbditos. Esta teoría de la allegiance suspendida difiere de la allegiance temporal al ocupante ya que si ésta incluye y presupone la suspensión de la allegiance en cambio esa suspensión de la allegiance no quiere decir necesariamente ni da lugar a la allegiance temporal. Esta doctrina se justifica por el hecho de que según la ley de las naciones el interés del ocupante es supremo, y también por razones humanitarias. Ha sido formulado para beneficio de los indefensos habitantes del territorio ocupado permitiéndoles así actual legalmente con miras a su seguridad mientras falta la protección que su gobierno legítimo por el momento es incapaz de prestar. Es un hecho reconocido que durante la ocupación militar, la voluntad o coacción del comandante militar dentro de algunas zonas de actuación, es la ley en el territorio, y podría hacerla valer incluso por fuerza si fuese necesario. Así, pues, los habitantes se colocan en una situación harto precaria si la doctrina de la suspensión de la allegiance no se admite, ya que los habitantes tendrían que obedecer a dos autoridades, y la obediencia a una entraña naturalmente la desobediencia a la otra o viceversa. Esto es, en nuestra opinión, muy injusto e inhumano para con los habitantes. Incluso nos suena a una-

contradicción de términos. Los habitantes, al principio de la ocupación, deben ser liberados del vínculo de obediencia a -- las leyes del gobierno legítimo mientras dure la ocupación, y que puedan adoptar las medidas necesarias para su protección y seguridad. Esto estaría de acuerdo con las teorías expuestas por los Tribunales y por renombrados tratadistas de Derecho Internacional. Cuando el Estado no ha podido proteger a sus habitantes, su derecho de exigir la allegiance de él os queda suspendida durante la ocupación hostil. Los habitantes no sólo no podrán ser castigados por su sometimiento a la autoridad que ha ganado el dominio sobre el territorio, sino que tampoco podría obligárseles a pagar el gobierno después de su restauración, impuestos a aduanas por el tiempo que el territorio estuvo en manos del enemigo. (24).

Hemos advertido antes que aunque la capacidad de proteger es el fundamento de la obligación de la allegiance, durante la ocupación enemiga, cuando el gobierno legítimo se -- vuelve incapaz de prestar protección por haber sido desplazado o expulsado temporalmente, los ciudadanos a quienes la protección se debe, quedan libres temporalmente de su obligación de allegiance al gobierno de jure. Cuando el Estado cesa de -- prestar protección a una porción de sus súbditos, pierden su derecho a la allegiance de éstos que pasan directamente a estar bajo la allegiance temporal o restringida al conquistador (25). Fiore en su obra citada es muy categórico cuando escri-

24 - U.S. c. Pico, supra.

25 - "When an invading force has taken secure possession of a portion of the territory of the enemy, such territory is said to be occupied, and the invader is permitted to --

be; "La ocupación debe modificar ante todo las relaciones de fidelidad y ciudadanía de los habitantes del país ocupado. - No quiere decir esto que cambien definitivamente las relaciones de soberanía y de vasallaje, pero si un gobierno puede - exigir fidelidad y obediencias a sus súbditos, también es evi- dente que cuando un Estado se vuelve impotente por inciden-- cias de guerra, para proteger una parte de su territorio con-- tra las fuerzas del enemigo y éste logra apoderarse efectiva-- mente de dicha parte y cuenta con fuerza y poder suficientes para obligar a los ciudadanos a prestarle obediencia, éstos-- se hallan exentos temporalmente de la obligación de sujetar-- se a la autoridad del antiguo gobierno, la cual no podrá - - ejercerse ni coexistir con la del gobierno del vencedor du-- rante la ocupación (26).

También Hall se muestra muy explícito acerca de la - teoría de la allegiance suspendida, expresando su aprobación cuando arguye contra la teoría del traspaso de la allegiance. Dice que el mero hecho de que un gobierno pierda el derecho a la -

exercise there all the rights of military occupation. - The former sovereign has been displaced by an applica-- tion of military force but allegiance of the inhabitants to their former sovereign altho displaced or suspended, by the existence of war and the fact of hostile occupa-- tion has not been destroyed. Their obedience to the au-- thority of the invader is constrained and involuntary, and can be retained by him only so long as the occupy-- ing force is maintained at such strength, throughout - the extent of the occupied territory as to effectively compel such obedience. (Boyd's Wheaton, Sec. 346, a; US vs. Percheman, 7 Peters 86; Leitenstorfer v. Webb, 20 - Howard, 176; II Halleck, p. 462; Wisely, 135; Hall, p. 462; Creasy, p. 496; Davis, Elements of International - Law, op. cit. p. 327).

allegiance de sus súbditos, no hace que se traslade ese derecho a cualquier otro estado. El territorio invadido tan solo se expone a la aceptación o imposición de un nuevo soberano (27). Y Borchard en la edición de 1.919 del I libro de Figue, apoya la doctrina de la allegiance suspendida cuando sostiene que el ocupante tiene derecho a obligar a todos los habitantes a obedecerle, a reconocer el statu quo, y a considerar que sus relaciones de fidelidad y obediencia para con el gobierno vencido temporalmente suspendidas (28).

Por todo lo expuesto, no podemos menos de admitir que la teoría de la allegiance suspendida durante la ocupación militar es la más humana y justa que podría adoptarse para el bienestar de los habitantes de todo territorio ocupado. Sería injusto por parte del gobierno legítimo, que ha sido expulsado temporalmente forzar a los habitantes seguir prestandole obediencia, cuando no podrían obtener de dicho gobierno enti-

27 - "An invaded territory in the course of war between independent nations is possessed temporarily by a lawful government at war with the country of which the territory - so possessed is a part and during their possession, the obligation of the inhabitants to their country are suspended although not abrogated. (US vs. Rice, supra; Fleming v. Page, supra; Baldy v. Hunter, 171 U.S. 388).

"The legitimate government of the occupied territory is temporarily displaced and overthrown; the functions of its officers and agents are suspended and the territory is ruled by martial law. The ordinary civil laws of the country continue to exist and courts are permitted to administer them but they do so at the pleasure of the commanding general, of the occupying forces. No guarantees constitutional or otherwise, are effective against his will and his consent to their existence or execution may be withdrawn at anytime. (Boyd's Wheaton, Sec. 346; Lawrence, International Law, Sec. 201; Calvo, sec. 2.166-69 II Cuella, p. II-173; I Hackworth, "Digest", Sec. 3, Davis, Elements of International Law, op. cit. 330).

28 - Figue's Derecho Internacional por Borchard, 1.919, sec. 1.547.

que la correspondiente protección. Además, el rechazar esta teoría pondría a los habitantes en una situación peligrosa totalmente a merced del ocupante, ya que la obediencia a sus órdenes y decretos está dentro de los límites de su autoridad bajo las leyes de guerra. No podemos negar que las órdenes o decretos del ocupante son siempre para su bienestar y en contra del gobierno vencido, por lo que cualquier decreto u orden que el ocupante promulgara sería en derogación de los del gobierno legítimo. Tenemos, pues, aquí una situación en que los pobres y desamparados habitantes se ven coridos entre el fuego encontrado de las soberanías opuestas, por último, - - desechar esta teoría es añadir el insulto al daño pues hemos partido del supuesto de que en el territorio ocupado los habitantes viven y actúan bajo la coacción del ocupante, que les priva de libertad. Por todo esto, la allegiance suspendida es la solución más aceptable para el caso entre manos. Esta teoría ha sido aceptada universalmente por los Tribunales y escritores de derecho internacional, y creemos que habrá de perdurar mientras no hayamos organizado nuestro mundo en una sola unión y mientras las guerras tengan lugar entre los hombres.

No debemos olvidar que cuando hablemos de allegiance, sólo queremos indicar la obediencia de las leyes, por eso --- cuando decimos allegiance suspendida, lo que queda suspendida es la obligación de obedecer las leyes del gobierno legítimo. En modo alguno se refiere a la obligación de lealtad o loyalty de los ciudadanos para con el gobierno legítimo, que nace del amor a la patria. De manera que, durante la ocupación enemiga, lo que se suspende es la obligación de obedecer las leyes del gobierno legítimo, particularmente las políticas, las

cuales el ocupante derogará naturalmente como contrarias a -- sus derechos.

La doctrina de la suspensión de la allegiance durante la ocupación enemiga, ha sido adoptada como un sistema humano y sabio. Está basada en la presunción de que todos los habitantes de territorio quedan sujetos al cumplimiento de los derechos y mandatos promulgados por el ocupante, los cuales tienen a darle auxilio y apoyo. Los exponentes de esta doctrina han comprendido la dificultad extrema de determinar si un acto que da ayuda y apoyo, una vez que se haya establecido que el mismo se hizo en cumplimiento de las leyes del ocupante, es un acto voluntario en el sentido de que podía ser evitado o involuntario puesto que fué cometido bajo coacción. No se ha intentado por tanto hacer ninguna distinción, sino que se ha declarado que las leyes del gobierno de jure al que los habitantes originalmente deben allegiance son ineficaces y sin ningún efecto, por lo que los habitantes temporalmente quedan exentos de su obligación de obedecer al gobierno de jure. Guiados por el sentido de justicia, sin embargo, no han abandonado el otro elemento que constituye la traición, o sea, la adhesión al enemigo. De manera que el trabajo se ha hecho fácil ya que en vez de intentar lo imposible, a saber, si un acto cualquiera de ayuda y apoyo al enemigo, prefieren determinar si tal acción se ha hecho voluntariamente o no.

El repudio de esta teoría de la allegiance suspendida, en efecto, admitiría la existencia de dos clases de leyes, necesaria y esencialmente incompatibles entre sí por lo que no podrían coexistir no tener la misma fuerza obligatoria en los habitantes. Este sería el resultado absurdo si negamos de esta teoría, por cuanto hemos dicho que la allegiance no es más

que la obediencia a las leyes, y por consiguiente, si la allegiance durante la ocupación enemiga continua debiéndose al gobierno de jure entonces también continuaría la obediencia a - él no obstante el hecho de que éste sea contrario a las leyes del ocupante al que hemos dicho antes también están obligados a obedecer. Este resultado es claro, no sólo sería inaceptable y absurdo sino que reñiría con los principios de la ley - de las naciones.

La teoría de la allegiance suspendida durante la ocupación enemiga encuentra otros apoyos en la doctrina norteamericana de que, según el derecho internacional, el territorio ocupado, se considera como enemigo, lo mismo que sus habitantes sin consideración a sus sentimientos y disposiciones para con él, el gobierno legítimo. Así, se ha sostenido en el caso de "Thirty Hogshead of Sugar, c. Boyle" (29), que aunque las adquisiciones hechas durante la guerra no son consideradas como permanentes hasta ser confirmadas por un tratado sin embargo, para los fines comerciales y bélicos, se las consideran como parte del dominio del conquistador mientras retenga la posesión y el gobierno de las mismas. Y en las causas de - - "Washington Ford c. James Sargeat" (30), The Prize Cases, (31), Mrs. Alexanders Cotton, (32) The Venice (33), The Peterhoff, (34) también se ha sostenido que los distritos o territorios que por el gobierno legítimo declara en insurrección contra él, son territorios enemigos, y todos los que residen en - -

29 - 9 Cranch 191; VII Moore, 257
30 - 97 U.S. 1.018
31 - 17 U.S. L. Ed. 476;
32 - 17 U.S. L. Ed. 916;
33 - 17 U.S. L. Ed., 866.
34 - 18 U.S. L. Ed. 564.

ellos deberán, según las leyes públicas y para los fines relacionados con la guerra ser tratados por los Estados Unidos durante la guerra y mientras residan dentro de la zona de insurrección, como enemigos sin cuidarse de sus sentimientos personales. (35) Según McNair, el carácter de enemigo depende de hechos objetivos y no de sentimientos o razones de nacimiento o nacionalidad. Se les describe como enemigos técnicos o territoriales. Su estado se basa en la residencia o domicilio. (36) La razón de esta teoría estriba en que en territorio ocupado, el terreno, los bienes de cualquier clase y las personas, pueden ser utilizados por el ocupante para promover sus intereses bélicos. Sería una contradicción de términos considerar a los habitantes del territorio ocupado legalmente como enemigos del gobierno de jure durante la ocupación enemiga y al mismo tiempo, como persona que todavía deben allegiance a ese gobierno. Está claro que la allegiance y la enemistad son conceptos que se repugnan.

El profesor Colby tiene una explicación muy luminosa sobre esta teoría cuando dice que durante el estado de guerra, todo el territorio ocupado debe considerarse como parte de las riquezas del ocupante. El puede exigir prestaciones en grandísimas cantidades. Puede desarrollar en ventaja suya ta

35 - "Cuba was enemy's territory and all person residing there pending the war, whether spanish subjects or americans, were to be deemed enemies of the U.S., their property and subject to seizure and confiscation and destruction. x x x And this is but the application of the rule which declares that war makes of the citizens or subjects of one belligerent enemies of the government -- and of the citizens and subjects of the other." (The Venice, 2 Wall. 258; White v. Birnley, 20 Howard, 235; Hackworth, op. cit. p. 177).

las riquezas naturales que le ayuden en la prosecución de su campaña de guerra. Ha de usar del territorio como suyo propio... y para todo fin práctico, el territorio ha cambiado - de manos. Es verdad que no es más un traslado temporal. x x x x pero por el momento, es territorio enemigo respecto del-gobierno expulsado. (37).

36 - McNair, Legal Effects of War, p. 328

37 - Colby, Occupation under the Laws of war, Columbia Law - Review, Vol. XXV, Nov. 1.925, - p. 915).

3. EN LAS LEYES POLITICAS:

Es un principio admitido por el Derecho Internacional que las leyes políticas, como la Constitución, las que se promulgan para los objetivos y la administración del gobierno, y también las que determina las relaciones políticas entre los habitantes y su gobierno, se consideran suspendidas. La razón de esto, según Hall (38), es que la obediencia a estas leyes rifan con la seguridad del ocupante, y en la ocupación del territorio, el ocupante inmediatamente asume para si una autoridad efectiva; y del hecho de la ocupación surge naturalmente la sustitución de su voluntad por las leyes entonces vigentes, en cuanto tal sustitución es razonablemente necesaria, así como el reemplazo de la administración civil y judicial por la jurisdicción militar.

Las Reglas de los Estados Unidos para la guerra terrestre, del 1.940 en su Artículo 287, sostienen que el ocupante naturalmente cambiará o suspenderá todas las leyes políticas y también los privilegios políticos, así como las leyes que afectar el bienestar y la seguridad de su mando. Quedan incluidas las leyes que se refieren a la leva en territorio ocupado, al derecho de sufragio, al de reuniones, al de portar armas, a la libertad de prensa, y al de viajar libremente por el territorio ocupado. Este poder concedido al ocupante está de acuerdo con el reconocimiento de los objetivos principales de la guerra, o sea procurar la seguridad del ejército invasor, contribuir a su ayuda, y eficacia y al éxito de sus operaciones, fortalecerse y debilitar e importunar al enemigo.

Aún cuando es verdad que el ocupante podría dejar vigentes - las leyes municipales, como las que regulan los derechos privados, y castigan los delitos, comunes, todavía tiene derecho de suspender o modificar las mismas cuando las necesidades de su ejército así lo exijan.

Esta teoría de la suspensión de las leyes políticas - ha recibido ya mucha pacificación en los fallos de varios tribunales así como en los tratadistas del derecho de guerra. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos en muchas causas, entre ellos la principal que ha dejado abierta la puerta a esta doctrina o sea la causa de U.S. c. Hayward (39). En la causa de U.S. contra Rice, que se refiere al mismo asunto, el fallo dictado por el Jefe de la Corte, el Jefe de la Corte, sostiene que la autoridad de los Estados Unidos sobre el territorio de Castine, Maine, que quedó suspendida y las leyes de los Estados Unidos no podrían ya imponerse válidamente ni obligar a los habitantes, que habían quedado sometidos al ocupante (40). En la causa, la de "Ci-

39 - 2 Gall 485; 26 Fed. Cas, 240.

40 - "The well known doctrine of U.S. vs. Rice is but a reiteration of one previously formulated by the Circuit court of the District of Massachusetts, in the Federal Case of U.S. vs. Hayward. Both decisions penned by Justice Story have to do with the occupation by the British of the port of Castine, Maine in 1814. It is this case that contains a full discussion not only of the question involved and determines, but also the nature and character of the temporary sovereign of the occupant and the status of the ousted sovereignty. We cite a portion of the Hayward decision:

"The second objection is that the court directed -- the jury that Castine was under the circumstances a foreign port. By 'foreign port' as the terms are here used may be understood a port within the dominions of a foreign country and without the dominions of the United States. The port of Castine is the port of entry for the district of Penobscot, and is within the acknowledged territory of the United States. But, at the time referred to in the bill of exceptions, it had been captured, and was in open and exclusive possession of the enemy. By -

ty of New Orleans v. New York Steamship Co, el mismo tribunal amolió los efectos jurídicos de la ocupación enemiga al sostener que las leyes políticas, por regla general, quedan suspendidas durante la ocupación enemiga del territorio invadido. - El vínculo político entre los habitantes de dicho territorio-

the conquest and occupation of Castine, that territory - passed under the allegiance and sovereignty of the enemy. The sovereignty of the United States over the territory was of course, suspended, and the laws of the United States could no longer be rightfully enforced, or be obligatory upon the inhabitants who remained and submitted to the conquerors. Castine, therefore, could not, strictly speaking, be deemed a port of the United States; for its sovereignty no longer extended over the place. No, on the other hand could it, strictly speaking, be deemed a port within the dominions of Great Britain, for it had not permanently passed under her sovereignty. The right which existed was the mere right of superior force, the allegiance was temporary, and the possession not that firm possession which gives to the conqueror *plenum dominium et atiel*, the complete and perfect ownership of property. It could only be by a renunciation in a treaty of peace, or by possession so long and permanent, as should afford conclusive proof, that the territory was altogether abandoned by its sovereign or had been irretrievably subdued, that it could be considered as incorporated into the dominions of the British sovereign. Until such incorporation, by a recapture or repossession, the territory would be entitled to the full benefit of the law of *postliminy*. If then the term 'foreign port' were intended a port absolutely within the dominions of a foreign sovereign, and incorporated into his realm, it might be very doubtful if the direction of the court could be sustained. But it seems to me, that taking the whole direction together, in reference to the first and third counts, it meant no more, than that Castine, being in possession of the enemy by right of conquest, it was no longer to be considered as a port of the United States, with reference to the non-importation acts, but that so far as respected the obligatory force of the laws of the United States, it was to be considered a 'foreign port' or port '*extra licentiam reipublicae*'. And in this view the direction may well, in point of law be supported.

This leads me to the third objection x x x x x Without examining whether the simple fact of bringing the goods from Halifax to Castine was of itself, "to all intents and purposes of this libel", sufficient to entitle the United States to a verdict on these counts, as the opinion guardedly expresses it, let us attend to the substance of the objection. It rest altogether upon the-

y el Estado al que pertenecía, no está enteramente disuelto si no tan solo suspendido mientras dura la ocupación. Y también - el Tribunal Supremo de Filipinas, en dos ocasiones, ha dicho - que las leyes políticas y las que conciernen a las relaciones políticas, queden suspendidas durante la ocupación enemiga, y citando a Oppenheim, sigue diciendo que 'en la administración del territorio ocupado y sus habitantes, el ocupante es totalmente independiente de las leyes y la constitución del territorio, ya que la ocupación es una medida bélica y el mantenimiento y la seguridad de las fuerzas del ocupante y el objetivo de la guerra, son sus intereses primordiales y deberá promoverse - bajo cualquier circunstancias o condición.

En Filipinas se ha llegado a decir por nuestro Tribunal Supremo que la Constitución de la Mancomunidad no estaba - vigente durante la ocupación japonesa (41). Y los tratadistas - no van a la zaga en su apoyo de esta teoría de la suspensión - de las leyes políticas. Así, dice Macoon (42); "cuando un ejército en lucha actual, expulsa o destruye al antiguo soberano -

assumption, that Castine was to be deemed a port of the United States, in which the laws had their full operation notwithstanding it was, at the time of the supposed importation, in the actual possession of Great Britain. This position, however, is utterly inadmissible upon every principle of the law of nations. By the Conquest and occupation, the laws of the United States were necessarily apended in Castine, and by their surrender the inhabitants became subject to such laws, and such laws only as the conquerors chose to impose. No other laws could, in the nature of things, be obligatory upon them for where there is no protection or sovereignty there can be no claim to obedience. This objection therefore, must also be overruled. (U.S. vs. Hayward, 2 Gall 485; 26 Fed. Cas., 240).

41 - Co Kim Chen vs. Valdez Tan Keh, C.F. No., L- 5;

42 - Macoon, "the law of Civil Government under Military Occupation, p. 33.

de un país, las leyes dictadas por dicho soberano y que dependen de él. también pasan con él. Lo mismo para la obligación de los habitantes de rendir allegiance al soberano antiguo, - de obedecer los mandatos del mismo, i. e., de sus leyes."

Y Fiore dice que cuando un Estado se haya hecho impotente, por los accidentes de la guerra, para proteger una parte de su territorio contra las fuerzas del enemigo, y éste ha ya logrado apoderarse efectivamente de dicha parte, y tenga fuerza y poder suficientes para obligar a los ciudadanos a -- prestarle obediencia, éstos se hallan exentos temporalmente de la obligación de reconocer la autoridad del antiguo gobierno, la cual, no podrá ~~ejercerse~~ ni coexistir con la del gobierno vencedor durante la ocupación (43).

El Comandante Birkhimer dice también que "las leyes políticas se promulgan para la conveniencia, seguridad y administración del gobierno. Estas al principio de la ocupación militar, de un Estado por el enemigo, cesan de tener validez. Con tal ocasión, un nuevo gobierno que no se basa en el consentimiento expreso sino implícito del pueblo toma posesión en lugar del anterior. Y mientras las leyes municipales podrían continuar en vigor, dada su naturaleza, no resulta así con las leyes políticas que prescriben derechos y obligaciones recíprocas, del gobierno y sus ciudadanos" (44).

Cuando decimos que las leyes políticas quedan suspendidas, queremos indicar que están inoperantes o inactivas temporalmente, No deben confundirse, empero, con las leyes aboli

43 - Fiore, Derecho Internacional, Vol. IV, p. 234.

44 - Halleck, Chap. 32, Sec. 4; Boyd's Wheaton, Sec. 346; Maine, 179; Manning, 182; Hall, 402; Opinion of Atty. General, Vol. 22, p. 527; Birkhimer, supra, op. cit., - Chap. VI. sec. 67.

das ya que esto implica el fin de la ley (45). En otras palabras, durante la ocupación enemiga, las leyes políticas del gobierno legítimo están suspendidas en el sentido de que no están en vigor, no tienen validez ni fuerza de ley.

Como resumen de los efectos de la ocupación enemiga, repetidamente declarados por los tribunales y los tratadistas de reconocida autoridad en derecho internacional. así como los manuales de guerra que regulan los ejércitos de distintos países, damos los siguientes:

1.- El Ocupante ejerce los Derechos de Soberanía:

El principio está de acuerdo con las disposiciones de los Artículos 42 y 43 de La Haya que declaran que el territorio se considera ocupado cuando está bajo la autoridad del ejército enemigo. Y cuando la "autoridad del poder legítimo pasa de éste a manos del ocupante, éste deberá tomar las medidas que de él dependen para restablecer y asegurar en cuanto fuere posible, el orden y la vida pública, respetando, salvo impedimento absoluto, las leyes vigentes en el país". El traspaso de la autoridad del poder legítimo a manos del ocupante, lleva consigo natural y necesariamente el derecho de ejercer los poderes de soberanía.

2.- La Soberanía del Gobierno queda Suspendida:

Esta es la consecuencia necesaria del primer principio. La soberanía es el poder supremo por el que un Estado se gobierna. Es una autoridad sin cortapisas ni intervenciones algunas de cualesquiera fuerzas extranjeras. En otras palabras es el mayor poder en el territorio en donde se ejerce su dere-

cho. Incluye como principio fundamental el poder no solo de -- promulgar las leyes o decretos sino también el de exigir el -- cumplimiento efectivo de esas leyes y la correspondiente san-- ción para asegurar ese cumplimiento, pues sin éstas potestades no sería la soberanía eficaz que, en rigor, importa. Es pura-- mente ilusorio hablar de un soberano que no tenga fuerza para-- asegurar el cumplimiento de sus mandatos. Durante la ocupación enemiga, el soberano de jure todavía tiene la facultad de pro-- mulgar leyes, pero éstas no tienen el único que puede ejercer-- derechos en dicho territorio según el derecho internacional. -- De hecho, aunque el soberano de jure quisiera imponer sus le-- yes, no podría hacerlo porque las fuerzas enemigas están en do-- minion fáctico de su territorio y los habitantes del mismo tien-- nen necesariamente que obedecer todos los mandatos del mismo, quien tiene derecho de exigir tal obediencia. Pues que la auto-- ridad del poder legítimo ha pasado a manos del ocupante en gra-- cia a su dominio firme del territorio invadido, y el gobierno de jure ha sido expulsado, la soberanía de éste, ex necessitate rei queda suspendida. Cuando decimos suspendida, no quere-- mos intinar la disolución o la abrogación de esa soberanía por que su condición dependen de lo que resulte al finalizar la -- guerra; o bien retorna al antiguo soberano en cuyo caso, la so-- beranía queda restaurada, más sin efecto retroactivo, o bien -- se pierde permanentemente si, el ocupante consolida su ocupa-- ción en razón de una victoria definida o en virtud de un trata-- do de paz.

- 3.- Las leyes del Gobierno de jure no podrán ya tener-- vigencia, especialmente las Políticas, en el Terri-- torio Ocupado no podrán ser Obligatorias a los Ha--

bitantes:

Esta es otra consecuencia legítima de las disposiciones de los Reglamentos de La Haya. La autoridad de todo gobierno sólo puede expresarse por medio de leyes. Si dicha autoridad ha pasado a manos del ocupante, entonces sus leyes no podrían tener vigencia ni ser obligatorias a los habitantes, especialmente aquéllas que describan y regulan las relaciones entre los habitantes y el gobierno. Puesto que las leyes políticas de gobierno de jure están solo suspendidas y no derogadas o abrogadas, el ocupante no tiene derecho a exigir a los habitantes la ejecución de actos que únicamente pudieran justificarse si las mismas hubiesen sido definitivamente abolidas. La situación de estas leyes es semejante a la de la soberanía, que queda suspendida más no abrogada o destruida.

4.- La Allegiance de los habitantes al gobierno desplazado no queda abolida ni destruida sino meramente suspendida durante la ocupación:

Este principio es un corolario del de la soberanía suspendida y de la suspensión de las leyes políticas. La allegiance, como hemos dicho antes no es más que la obediencia a las leyes del gobierno. Si las leyes a las que se debe obediencia quedan suspendidas, no hay nada que obedecer, por lo que esta obligación, o sea, la allegiance, también queda suspendida. Esto no quiere decir desde luego que no deban ser fieles a su propia patria y gobierno, aún cuando la allegiance esté suspendida, pues no cabe duda de que estos vínculos de lealtad y amor a la patria subsisten aún durante la ocupación enemiga.

5.- Los habitantes quedan vinculados solo a las leyes - que el ocupante se decida a reconocer e imponer:

Esto está de acuerdo con las disposiciones de La Haya en sus Artículos 42 y 43 cuando disponen que el poder legítimo pase actualmente a manos del ocupante. El ocupante se convierte en autoridad absoluta dentro del territorio ocupado y la misma está reconocida por el derecho internacional. Este poder no está tan solo autorizado, sino también obligado a tomar medidas que estén a su alcance para restablecer y asegurar en cuanto le sea posible la vida y el orden públicos. En el cumplimiento de este deber del ocupante, los ciudadanos están desde luego sujetos a cualquiera de las leyes y decretos que el ocupante promulgue para el cumplimiento de dicho deber. En otras palabras, el ocupante está investido de plenos poderes para promulgar leyes o decretos que decida imponer y para reconocer como subsistentes cualquiera ley original del territorio ocupado.

5.- Los habitantes trasladan su "allegiance" temporal al ocupante:

Aunque haya algunos que no están de acuerdo con este principio, sin embargo, casi todos los escritos más distinguidos de derecho internacional, como Oppenheim (46), Wheaton (47),

46.- Oppenheim maintains that the occupant may compel the inhabitants to take an oath---sometimes called an oath of neutrality--- to abstain from taking up a hostile attitude against him and willingly submit to his legitimate orders and he may punish them severely for breaking such oath. (supra)

47 - Says Wheaton, "some writers hold that officials who are retained in their offices by the occupying commander may be required to take an oath of fidelity. There is perhaps nothing illegitimate in this requirement, provided the operation of the oath is confined strictly to the period of lawful occupation x x .. the same considerations might be applied to the inhabitants in general in the occupied territory".- Wheaton by Keith, 1.944, p. 246.

Hyde (48), y Dr. Lieber (49), admiten que el ocupante tiene derecho de obligar a los habitantes a prestarle un juramento de obedecer fiel y gustosamente todos sus mandatos legales, lo -- cual equivale al juramento de allegiance temporal al ocupante, ya que la allegiance, como hemos dicho antes, no es más que la obediencia a las leyes.

Si el juramento de allegiance temporal está permitido por el derecho internacional, quiere decir que los habitantes pasan a estar bajo la allegiance temporal al ocupante, y que -- el juramento de allegiance, cuya imposición está prohibida por las disposiciones de los Reglamentos de La Haya, se refiere al de la allegiance permanente o sin restricciones.

7.- En donde no hay protección, o allegiance, no puede exigirse la obediencia consiguiente:

El principio de reciprocidad de la protección y la --

48 - El Prof. Hyde sostiene: "That the Hague Regulations declare that the occupant is forbidden to compel the inhabitants to wear allegiance to the hostile power. It is believed that notwithstanding this requirement, the occupant may not unreasonable compel the inhabitants in case of persistent and insidious attempt to resist his authority, to take an oath not to oppose the lawful assertion of the same and so facilitate his task of enforcing them to respect their legal duty of obedience. (Hyde, International Public Law, Vol. III, 1.898).

49 - El Dr. Lieber en sus instrucciones dice: "That the Commanding General may cause the magistrates and civil officers of the hostile country to take an oath of temporary allegiance or an oath of fidelity to their own victorious government or rulers, and they may expel every one who declines to do so. But whether they do so or not, they and their civil officers owe strict obedience to them as long as they hold sway over the district or country at the peril of their lives. (Art. 26, Instruction for the Govt. of the Armies in the Field, by Dr. Lieber, Davis, Elements of International Law, op. cit. 509).

allegiance fué proclamado por primera vez en el fallo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en la causa del U.S. c. Wice, en la que se afirmó la regla clásica de que si el estado no puede cumplir su obligación, de prestar protección a sus súbditos, la cual es la razón de su existencia, entonces los habitantes o súbditos quedan exentos de la obligación de la allegiance, o sea, de obedecer al mismo. La base misma del derecho del Estado de exigir obediencia radica en su capacidad de dar protección a sus ciudadanos. Desde el momento en que el Estado falle en esta obligación, los habitantes se ven libres de la obligación de obediencia.

II.- CONDUCTA DE LOS OCUPADOS:

Hemos dicho en el Capítulo III de esta tesis que el ocupante tiene derecho de exigir a los habitantes que les presten obediencia, la cual puede ser necesaria para la seguridad de -- sus fuerzas, el mantenimiento de la vida y orden públicos, y la administración del país (50). Esta es la consecuencia necesaria del poder concedido al ocupante militar de tomar las medidas necesarias a su alcance, para restablecer y asegurar en cuanto -- sea posible el orden público (51). Estos principios se basan en la teoría de que la ocupación es un arma legítima de guerra y -- el beligerante, por eso, no actúa ilegalmente en la ocupación -- del territorio enemigo. El propio derecho internacional recono-- ce que la autoridad del poder pasa de facto a manos del ocupan-- te. Si el ocupante adquiere el derecho temporal de la adminis-- tración y de recibir a sus habitantes, a la recíproca éstos tie-- nen que estar obligados a someterse a su administración.

Según las Reglas de los Estados Unidos sobre guerra te-- rrestre, los habitantes están obligados a comportarse de una ma-- nera pacífica, continuar sus trabajos ordinarios, no tomar parte de ningún modo en las hostilidades que se lleven a cabo, ab-- tenerse de cometer actos que causen daños a las tropas del ocu-- pante o a sus operaciones; y a prestar obediencia a los funcio-- narios del ocupante. Esta es una de las muchas reglas para la -- conducta de los ocupados. Estos no pueden hacer otra cosa que -- obedecer porque están a merced del ocupante. Si quieren ser bien tratados, lo que no se consiguió nunca durante la última guerra

50 - US rules of Land Warfare, Article 297.

51 - Hague Regulations, Article 43.

mundial, tienen que abstenerse absolutamente de cualquier hosti-
lidad contra el ocupante, pues que éste tiene poder, dentro de
las limitaciones definidas por las leyes de guerra, para tomar-
las medidas necesarias para combatir la situación a mano tan so-
lo para lograr sus objetivos, o sea sus operaciones militares-
y la protección del ejército .

Tenemos que hacer notar que el Artículo 52 de los Regla-
mentos de La Haya autorizan al ocupante a exigir prestaciones -
en forma de servicio o en metálico para las necesidades del - -
ejército de ocupación, y los habitantes están obligados a cum-
plir tales prestaciones exigidas con tal de que no entrañen ope-
raciones directas contra su propia patria. No podemos negar que
los habitantes en el cumplimiento de estas prestaciones, por --
su propia naturaleza, prestan ayuda y apoyo al ocupante. No po-
demos imaginarnos ningún orden de prestaciones que no tengan es- -
te objetivo. Esto así, estamos ya frente a la cuestión de la --
obediencia total órdenes y mandatos, que le ocupante tiene de--
recho de promulgar, podría constituir traición contra el gobier-
no legítimo.

En la solución de este problema, es necesario saber an-
tes a qué rama del Derecho, pertenece la ley que castiga la - -
traición. La traición, como su nombre implica, es la violación-
de la allegiance que el ciudadano no debe a su soberano en con-
sideración a la protección que éste le brinda. Consiste en que-
un ciudadano haga la guerra contra su país y se una a los enemi-
gos, dándoles ayuda y aliento (52). En general, la palabra trai-

52 - Willard, Hurst, "Treason in the United States, In Harver -
Law Review 1.944-1.945, February, issue.

ción (de tradere - entregar) designa los delitos que tienen - por fin la entrega de la Patria al extranjero (53). Es un delito de carácter político porque tiene como fin el mantenimiento y cumplimiento de la allegiance que los ciudadanos deben al Estado. Esta penada por razones públicas y no privadas. El Tribunal Supremo de Filipinas ha clasificado la traición como un delito político, al sentenciar que los delitos - contra la seguridad del Estado y las naciones, como la traición, el espionaje, la instigación a la guerra, la violación de la neutralidad, la correspondencia con el país enemigo, la evasión al territorio enemigo, la piratería, son todos delitos políticos castigados por razones públicas más que privadas y son actos que ayudan a favorecer al enemigo y van dirigidos contra el bienestar y la seguridad del ocupante. Por todo esto, pues, no cabe duda de que la ley que castiga el delito de traición tiene carácter político y como hemos dicho antes que las leyes políticas quedan suspendidas durante la ocupación enemiga, siquiere de esto que la ley de traición quedasuspendida también y no tiene efecto legal para con los habitantes del territorio mientras dura la ocupación enemiga. Los habitantes, pues, que cometan actos en contra, de esta ley - que los castiga no tiene vigencia en el territorio ocupado. No sólo esto. El hecho de la ocupación no solo suspende las leyes políticas del territorio ocupado, entre ellos la que castiga la traición, sino que también retira fuera del dominio de la ley territorial y la pone bajo las leyes de guerra o ley marcial como las llama Hyde (54).

53 - Groizard, El Código Penal de 1.870, 2ª. Ed. Cuello Caelon, ob. cit.

Mirando el problema desde otro lado, o sea a la luz de la autoridad del ocupante de exigir la obediencia a sus mandatos, hemos dicho antes que el gobierno militar del ocupante es

54 - Hyde, International Law, Vol. III, p. 361; As to what is Martial Law, Moore enumerates the following:

1.- A place, district or country occupied by an enemy stands in consequence of the occupation, under the martial law of the invading or occupying army, whether any proclamation declaring martial law or any public warning to the inhabitants, has been issued or not. Martial Law is the immediate and direct effect and consequences of occupation or conquest.

The pretense of a hostile army proclaims its martial law.

2.- Martial law does not cease during the hostile occupation except by special proclamation, ordered by the commander-in-chief or by special mention in the treaty of peace concluding the war, when occupation of a place or territory continues beyond the conclusion of peace as one of the conditions of the same.

3.- Martial law in a hostile country consists in the suspension by the occupying military authority of the criminal and civil law and of the domestic administration and government in the occupied place or territory, and in the substitution of military rule and force for the same, as well as in the dictation of the general laws as far as military requires this suspension, substitution, or dictation.

The commander of the forces may proclaim that the administration of all civil and penal law shall continue either wholly or in part, as in times of peace, unless ordered by the military authority.

4.- Martial Law is simply military authority exercised in accordance with the laws and usages of war. Military oppression is not martial Law; it is abuse of the power which that law confers. As martial law is executed by military force, it is incumbent upon those who administer it to be strictly guided by the principles of justice, honor, and humanity --- virtues adorning a soldier even more than other men, for the very reason that he possesses the power of his arms against the unarmed.

5.- Martial Law should be less stringent in places and countries fully occupied and fairly conquered. Much greater severity may be exercised in places or regions where actual hostilities exist or are expected and must be prepared for. Its most complete sway is allowed --- even in the commander's own country --- when face to face with the enemy, because of the absolute necessities of the case, and of the paramount duty to defend the country against invasion.

All civil and penal law shall continue to take its usual course in the enemy's places and territories under-

es un gobierno de fuerza superior y que cuando existe, deber - ser obedecido en asuntos civiles por los ciudadanos, quienes - por sus actos de cumplimiento y sumisión a las fuerzas superio - res no se hacen reos de dichos actos, aunque no estuviesen per - mitidos por las leyes del gobierno legitimo que ha sido despla - zado o expulsado. (55).

martial law unless interrupted or stopped by order of - the occupying military power; but all the functions of the hostile government, legislative, executive, or administrative - whether of a general, provincial or local character, cease under martial law, or continue only with the sanction or if deemed necessary, the participation of the occupier or invader.

6.- Martial Law extends to property, and to persons, whether they are subjects of the enemy or aliens, to that government.

7.- Martial Law affects chiefly the police and collection of public revenue and taxes, whether imposed by the expelled government or by the invader, and refers mainly to the support and efficiency of the Army, its safety, and the safety of its operations....

8.- Whenever feasible martial law is carried out in cases of individual offenders by military courts; but sentences of death shall be executed only with the approval of the Chief Executive, provided the urgency of the case does not require a speedier execution and then only with the approval of the chief commander.

9.- Military jurisdictions is of two kinds: First, that which is conferred and defined by statute; second, -- that which is derived from the common law of war. Military offenses under the statute law must be tried in the manner therein directed; but military offenses which do not come within the statute must be tried and punished under the common law of war. The character of the courts which exercise these jurisdictions depends upon the local laws of each particular country.

In the armies of the United States the first is exercised by courts-martial; while cases which do not come within the Rules and Articles of War or the jurisdiction -- conferred by statute on courts-martial, are tried by military commissions." (Instructions for the Governments of the Armies of the United States in the Field, G.O., No. 100 April 24, 1863, prepared by Dr. Francis Lieber, VII-Moore, op. cit., pp. 275-277).

55 - Thorington vs. Smith, 8 Wallace 9.

Tales actos coexisten con el elemento de coacción, -- que está siempre en toda ocupación militar respecto de las relaciones entre el ocupante y los habitantes. No es necesario que una bayoneta o un arma de fuego se emplee para que la coacción exista, ni para que pueda exigirse el cumplimiento de los mandatos o decretos del ocupante. La mera presencia del enemigo, sus objetivos bélicos y su fuerza aplastante y suprema siempre dispuesta a lograr sus objetivos o a eliminar toda oposición es suficiente para constituir una coacción del género más pre-potente que haga que todo hombre se acoquine ante el solo pensamiento de lo que podría ocurrir a su familia, sus amigos, sus paisanos, y su país, por su negativa a cumplir los mandatos del ocupante. Por eso, en todo cuanto los habitantes cometan que por su naturaleza fuera dar ayuda y aliento al enemigo, la existencia de la coacción se presume siempre. El elemento de libertad que caracteriza las relaciones entre los habitantes y su gobierno legítimo está ausente. Los habitantes no tienen otra alternativa que no sea cumplir con los decretos promulgados por el ocupante. Desde luego no pretendemos aquí los poderes ilimitados para el ocupante, sino solo aquellos que están autorizados por los Reglamentos de La Haya. Habiendo demostrado la existencia de la coacción, no podríamos exigir responsabilidad legal a los habitantes por actos cometidos en cumplimiento de los mandatos del ocupante? -- Están presentes todos los elementos de la responsabilidad jurídica en este caso? Opinamos que en este caso falta un elemento primordial, o sea el dolus o la libre voluntad, ya que cualquier acto que se someta bajo la coacción no puede imputarse.

tarse al actor del mismo. Esto está de acuerdo con el principio "Actus non facit reum nisi mens sit rea". Cuando los habitantes cumplen con los mandatos del ocupante, los cuales por su naturaleza suponen ayuda y aliento para éste, aquéllos están cumpliendo sólo una obligación legal de obediencia que les impone el derecho internacional. Si al hacer tal, se beneficia al ocupante, dándole ayuda y aliento, no se puede culpar a los habitantes ya que no tienen más alternativa que cumplir, aún en ausencia de la ley de las naciones que impone dicha obligación legal toda vez que el ocupante tiene la fuerza suficiente para imponer sus mandatos.

He aquí las circunstancias que caracterizan a la ocupación enemiga según la ley de las naciones y que constituyen -- coacción inherente la cual afecta las relaciones entre el ocupante y los habitantes sometidos:

1.- El Gobierno Militar es un gobierno impuesto por las leyes de guerra.

2.- Es un gobierno bajo la ley marcial. Su régimen de poder se impone por la fuerza militar. Según Oppenheim, el ocupante tiene a los habitantes en un puño y los trituraría si no son obedientes.

3.- Es un gobierno totalmente independiente de la Constitución y las leyes del territorio ocupado.

4.- Es un gobierno eminentemente de puro poder y fuerza que asegura el dominio del territorio, la seguridad de las fuerzas del ocupante, el éxito de sus operaciones, y de un modo secundario el bienestar de los habitantes.

5.- La ocupación es un arma de guerra o el mantenimiento y la seguridad de las fuerzas del ocupante así como los obje

tivos de guerra ocupan lugar preferente en sus intereses y deben promoverse bajo todas las circunstancias y condiciones.

6.- Todas las relaciones entre el poder ocupante y los habitantes pasan de la ley territorial para colocarse bajo lo que se llama la ley Marcial.

7.- Los delitos de Guerra o contra el ocupante se - - crean por mandato militar del ocupante para hacer completo y - efectivo su dominio del territorio.

8.- El ejército de ocupación tiene derecho a promulgar leyes y tomar medidas hostiles a su enemigo, el gobierno legítimo, pues su objetivo es perseguir y vencer a éste.

9.- El ocupante militar tiene derecho de exigir la obediencia de los habitantes en tanto sea necesaria para la seguridad de sus fuerzas, el mantenimiento de la vida y el orden públicos, y la propia administración del país. (56)

10.- Los habitantes tienen obligación de obedecer al - ocupante y esta obligación está expresamente impuesta por el - Artículo 301 de las Reglas de los Estados Unidos sobre la guerra terrestre. Por su parte el Artículo 354 declara punible -- por el ocupante la mera negligencia o desobediencia de sus mandatos.

Todas estas circunstancias son indicios claros de que la coacción existe en todos los mandatos y decretos promulgados por el ocupante. Por eso, según el Profesor Colby, que cita a Bluntschli, "El uso de la fuerza o amenaza releva a los habitantes del delito de traición, pues un individuo aislado -

56 - US Rules of Land Warfare, Article 297.

no podría resistir a un ejército y tiene que ceder a las amenazas. La coacción o la coerción, puede, por tanto, darse por presente en el mero hecho de la ocupación militar.

Volviendo a uno de los elementos del delito de traición, aquél que consiste en dar ayuda y aliento al enemigo, - la misma naturaleza y supuestos de la ocupación enemiga, nos dice ya que es inevitable en un territorio ocupado dar ayuda y aliento al enemigo, porque la guerra no destruye los vínculos de la sociedad ni descarta todo gobierno civil o la administración regular de las leyes, ya que hay que conservar el orden, las regulaciones de política deben mantenerse, los delitos deben castigarse, la propiedad debe ser protegida, los contratos deben cumplirse, los matrimonios tienen que celebrarse y deben regularse las herencias y la devolución y - - traspaso de la propiedad, precisamente como en tiempos de paz (57) y porque la ley de las naciones obliga al ocupante militar a que retenga las leyes locales e instituciones apolíticas en tanto lo permita la necesidad militar para que de ese modo las tareas ordinarias y los negocios de la sociedad no sufran desconcierto. (59).

Es pues inevitable que los habitantes de un territorio ocupado den ayuda y aliento al enemigo. Este principio - permite la persistencia de numerosas ocupaciones y operaciones los cuales podrían directa o indirectamente entrañar la - voluntaria ayuda y aliento al ocupante. El ejército de est a-

57 - Horn vs. Lockart, 17 Wall 571; Williams vs. Bruffy, 96 - U.S. 176; Co. Kim Cham vs. Valdez Tan Koh, supra.

58 - Taylor, International Public Law, p. 590

derechos por parte del ocupante autorizado así por las Reglas de guerra terrestre y los Reglamentos de La Haya, tiende siempre a los mismos, o sea, la ayuda y el aliento al ocupante en el logro de su principal objetivo de guerra. El derecho del ocupante de exigir prestaciones, ya en especie o en metálico, a los habitantes para las necesidades del ocupante incluye el de rebasar los servicios de los cirujanos, carpinteros, mecánicos, técnicos, ayudantes, etc., los cuales inegablemente redundan en el bienestar del ocupante. dándole ayuda y aliento. Precisamente por eso -- porque tienden a dar ayuda y aliento -- dichas prestaciones están permitidas. Es la única razón que las justifica. Lo mismo podría decirse del derecho del ocupante, concedido y reconocido por la ley de las naciones, de pedir prestadas las propiedades particulares para la ayuda y otros beneficios del ocupante. En ésta están incluidas toda clase de útiles de guerra (59) y también, los combustibles, las cosechas, las ropas, el tabaco, el carbón, etc., otros podrían ser obligados a prestar servicios en forma de discursos de propaganda, artículos u otros materiales escritos. No hayamos que una diferencia de grado entre estos servicios y los suministrados por un cirujano. Es regla aceptada de que una persona no puede ser hallada culpable del delito de traición -- meramente por pronunciar discursos o escribir artículos (60)). Y si la persona que pronuncie el discurso es un funcionario público, quien es obligado por el ocupante, la justificación sería mayor porque debe al ocupante una obligación especial de obediencia, como es el caso de los procesados por colabora

59 - U.S. Rules of Land Warfare, Article 322.

60 - 38 Cyc. 954; *Wimmer vs. U.S.* II Federal Reports, p.264.

cionismo en Filipinas.

Aún los habitantes que viven pacíficamente cultivando el campo, produciendo cosechas, y transportándolas a donde se necesitan están de una manera indirecta dando ayuda y - - alienta al enemigo que de este modo adquiere vituallas. Los ciudadanos que venden artículos al enemigo y aceptan sus billetes también dan ayuda y aliento a éste. Más, aun, los que no hacen nada sino vivir pasivamente, en paz de una manera - dan ayuda y aliento al enemigo, porque por vivir así, han permitido al enemigo desviar sus fuerzas a otros objetivos de -- guerra en vez de quedar clavados en el mantenimiento de la vida y el orden públicos. Todos estos casos contribuyen a fortalecer al ocupante o debilitar al gobierno legítimo. ¿Llamaremos esto traición? Podríamos atribuir conducta traidora a los habitantes por hacer aquello a que estaban obligados por la ley de las naciones? Sería injusto e inhumano pedirles cuentas por sus actuaciones realizadas en cumplimiento de una obligación legal impuesto por las leyes de guerra. Hay alguna justificación por parte del gobierno legítimo para procesar a estos por actos de traición a su vuelta al territorio? Sostenemos que desde ambos puntos de vista jurídica y legal, el gobierno legítimo no tiene absolutamente derecho ni justificación - de pedir cuentas por los actos de sus ciudadanos cometidos -- durante la ocupación, no sólo porque su soberanía estaba entonces suspendida y la allegiance a la misma por parte de los ciudadanos, como corolario consiguiente también quedó suspendida, sin que además no es humanitario sujetar a los habitantes a dos autoridades, contrarias, de tal forma que la obediencia a una daría lugar al castigo por la otra. Es incref--

ble que las leyes de guerra pudieran permitir esta situación, ya que entonces los habitantes estarían sometidos a un tormento parecido al antiguo castigo bárbaro de atar a una persona a dos caballos que luego corriesen en direcciones opuestas. - Esto sería en violación de las leyes de la humanidad, y las exigencias de la conciencia pública que forman parte de la -- ley de las naciones según el Preámbulo de los Reglamentos de La Haya. Sin embargo, tal sería el resultado si la autoridad del gobierno legítimo se reconociera sobre el territorio mientras esté ocupado por el enemigo.

Otro punto de que debemos considerar es el requisito-primero para la existencia del delito de traición, es saber - que no sólo debe el procesado ser culpable de haber dado ayuda y aliento al enemigo, sino también de que se haya unido al enemigo., añheriéndose al mismo. La presencia de uno sin el - otro elemento no resultaría en la culpabilidad del procesado. Precisamente, durante la ocupación, el cumplimiento de las órdenes que exigen prestaciones en forma de servicios o útiles- de guerra, en ausencia de la intención de unirse con el enemigo, adheriéndose al mismo, no constituye traición. Debe haber prueba clara y explícita de que aparte de dar ayuda y aliento al enemigo, el procesado se ha unido o adherido al enemigo. - Prueba de la importancia de este requisito, en las leyes an- glo-sajonas, es una regla que se llama "two witness rule", la cual es indispensable para probar la culpabilidad del acusado del delito de traición. Bajo esta regla, cada acto de trai- ción, deberá probarse por dos personas que declaren de la migma manera. Si hay alguna variación en el testimonio de los -- dos testigos del ministerio fiscal, no se podrá condenar al -

procesado por este delito. Ya en este punto tan solo, las ~~cau~~
sas contra los llamados colaboracionistas tendrían que fallar.
Y ésta es una de las razones que nos mueven a sostener la teo
ría de que durante la ocupación enemiga, el delito de trai-
ción no puede cometerse, por lo que no puede darse un tono de
delictivo al termino "colaboracionismo". Además hemos dicho que
los habitantes del territorio ocupado, cuando la ocupación --
quedan libres de su obligación de allegiance para con su anti
guo soberano, y pueden adoptar las medidas oportunas para la
conservación de sus vidas. No cabe duda de que durante la ocu
pación de Filipinas por las fuerzas Japonesas, nuestro proble
ma primordial radicaba en la clase de trato que recibiríamos--
del ocupante. Es más bien una obligación que incita a los ha
bitantes a obedecer los mandatos del ocupante para asistirle--
en el restablecimiento del orden y paz, para contentarle no --
por causa suya, sino por la de los habitantes a fin de evitar
represalias inhumanas. Es increíble que se considere tales --
acciones como motivadas por el deseo de cometer traición con
tra la patria. Estos actos están puramente motivados por el --
deseo de obtener un trato benévolo, favorable y humano, en una
situación de desamparo y abandono desde la huida forzosa del--
gobierno legítimo, quien está obligado a protegerles. No pode
mos, pues, ver ninguna razón para que el delito de traición --
tenga lugar en estos casos. Según Oppenheim, las relaciones --
entre el poder ocupante y los habitantes no surte de un con--
trato moral implícitamente establecido entre ellos, sino son
resultado de una obligación moral de los ciudadanos y no del
ocupante, para evitar que éste recurra a represalias que mi--
nen la seguridad de los propios habitantes, medio al que está

autorizado por la ley a recurrir si fuese necesario (61). No hay duda de que todos estos actos podrán dar ayuda y aliento al enemigo ya que se le alivia en el cumplimiento de su obligación de mantener el orden público. Mas, este deseo de ayudar al pueblo de un territorio ocupado por los enemigos, esta intención tan espléndida pura y desinteresada y sin mezcla de una intención de unirse a adherirse al enemigo, lleva consigo, como consecuencia inevitable, la de darle ayuda y aliento. Podríamos por eso llamarlo traición? Oppenheim sostiene que no. Y con él conviene el renombrado jurista filipino, Claro W. Fegio, quien alega que es inevitable en todo territorio ocupado dar ayuda y aliento de una u otra forma al enemigo (62). Y sin embargo, fueron éstos los motivos que impulsaron las querellas por haber colaborado con el enemigo, para aplacerle y aliviar así los sufrimientos del pueblo como consecuencia de la ocupación enemiga, para actuar como intermediarios entre los habitantes y el ocupante. Podríamos castigar como traidores a su patria?

En la exposición de este problema, surge otra cuestión o sea, si bien la mayoría de los habitantes pudiese ser motivada por puros sentimientos patrióticos, no podemos olvidar que siempre hay algunos que con la traición en sus corazones, vean en esta ocupación un momento oportuno para vender su patria al enemigo. Podríamos considerarles exentos de la disposiciones que castigan el delito de traición? Les protegerían los principios que hemos expuesto. Están fuera de la vigencia de la ley que pena el delito de traición cometido contra el gobierno le-

61 - Oppenheim, Legal Relations Between the Occupying Power and the Inhabitants, supra.

gitino, de tal forma que habría que ponerles en libertad sencillamente con invocar los principios que hemos enunciado? Se vería el gobierno legítimo privado de autoridad para pedir -- cuentas por sus actos durante la ocupación enemiga? Las respuestas a estas preguntas las reservamos para la siguiente -- parte en que exponemos la naturaleza de los poderes del gobierno de jure.

III.- NATURALEZA Y PODERES DEL GOBIERNO DE JUPE;

Nuestra proposición fundamental es que durante la ocupación enemiga, la soberanía del gobierno legítimo queda suspendida y en su consecuencia la allegiance que los habitantes deben al mismo queda suspendida también. Con esta suspensión, se sigue ipso facto la de las leyes políticas, pues su continuación sería incompatible con la seguridad del ocupante. Como dice Magoon, la expulsión del antiguo soberano por el enemigo hace que aquél lleve consigo las leyes promulgadas por él y que dependan del mismo. También cesa la obligación de los habitantes de rendir allegiance al soberano antiguo. Recuérdese que esa soberanía de jure queda sólo suspendida y no abolida ni destruida. En otras palabras, todavía existe pero temporalmente, es ineficaz en relación con los habitantes del territorio ocupado en donde su autoridad pasa al ocupante (62). En estas circunstancias, cuáles la naturaleza del gobierno de jure durante la ocupación enemiga?

Para resolver esta cuestión tengamos en cuenta que la esfera de este problema se limita a las relaciones que el gobierno de jure tiene para con el territorio ocupado y sus habitantes durante la ocupación enemiga. ¿Qué poder, si hay alguno podría el gobierno legítimo ejercer en relación con sus ciudadanos en el territorio ocupado? ¿Podría promulgar reglamentos que obligaran a los habitantes del territorio ocupado? ¿Podría mandar a sus súbditos lealmente que no obedezcan los decretos del ocupante? Sostenemos que respecto del poder legislativo -- del gobierno legítimo, este subsiste pero sin eficacia sobre el territorio ocupado, porque como hemos dicho antes su soberanía

nia está solamente suspendida y no abrogada. Cualquiera medida que tome es legítima en gracia a que procede de una fuente legal, aquella en donde la soberanía reside, sin mezcla de ningún defecto en su origen. En otras palabras, sus medios tienen todos los requisitos para su validez en cuanto a la pureza de su origen. Pero las leyes, para que produzcan su finalidad no sólo deben proceder de una fuente legal, i. e., del soberano sino que deben aplicarse efectivamente o imponerse por las sanciones correspondientes. En un territorio ocupado, debido a la naturaleza de las cosas, este último requisito no está presente o no podría presentarse por la sencilla razón de que la soberanía legal ha sido sustituida en su lugar, por la autoridad del ocupante militar merced al empleo de fuerza superior. No importa cuanto intente el soberano legal para imponer sus decretos, no producirá ningún efecto legal, pues su autoridad -- dentro del territorio ocupado ha sido trasladada al ocupante, ni podría jurídicamente vincular a los habitantes del territorio ocupado porque éstos han sido liberados de su obligación de allegiance por el mero hecho de la ocupación y la deben temporalmente al ocupante. Es ilusorio hablar de una soberanía -- sin autoridad efectiva que haga valer su poder o tenga capacidad de imponer las sanciones correspondientes. La Ciencia del Derecho maneja la realidad jurídica y no meras teorías. En relación con esto, vale citar el caso de México. Este país tiene una ley que prohíbe a cualquiera de sus funcionarios a aceptar puestos o cargos de autoridad bajo el ocupante militar. Según el libro "Military Aid to Civil Power" publicada en los Estados Unidos como guía en la administración del territorio ocupado, al momentar esta ley, esta sería desde luego muy comprome-

tedorar al ejército invasor, porque tal ley podía causar más daño a México que al ocupante. En la Guerra Franco-Prusiana, - hubo muchas instrucciones dadas por el gobierno francés para - que los funcionarios públicos en el este evacuaran y no aceptaran puestos o cargos bajo los alemanes. Se cree improbable - que tales instrucciones se dieran durante la guerra mundial - porque es sabido que después de ésta, Francia ha condecorado a algunos de sus funcionarios quienes habían permanecido en sus - cargos durante la ocupación alemana y ejercido sus funciones - de manera beneficiosa para los habitantes. Es un principio reconocido por el derecho internacional al que toda ley que el - ocupante promulgue dentro de la esfera su autoridad según las leyes de guerra, deberá reputarse la ley del territorio ocupado, aún cuando contradiga y se oponga al poder del soberano legítimo según este se expresa en sus leyes vigentes (63). La posesión por el ocupante del poder de declarar, mantener, o modificar las leyes que deban tener vigencia en el territorio ocupado se considera como de carácter exclusivo. Hyde sostiene -- que el soberano legítimo no puede contender desde un mismo nivel. Si intenta interponer su acción será una mera manifestación de un esfuerzo por debilitar al enemigo y no tiene significación legal en lo que el ocupante ejerza durante su dominio de territorio. Sigue diciendo que si el soberano legítimo por algún decreto cuasi-legislativo, prohíbe a sus súbditos que -- cumplan con los que el ocupante hubiese ordenado, la obediencia a tal decreto no podría eximir al interesado de ser proce-

63 - Hyde, International Law Chiefly as Interpreted and Applied by the United States, 2d ed., vol. III, p. 1.887.

sado por el ocupante. Per eso, vemos que durante la ocupación enemiga, las medidas tomadas por el gobierno de jure, no producen ningún efecto legal en cuanto a sus súbditos, que residen en territorio ocupado (64). No quiere esto decir desde luego que el gobierno de jure está totalmente privado de sus derechos sobre el territorio ocupado, ya que éstos sólo quedan suspendidos. Lo que se quiere dar a entender es la imposibilidad extrema de dar a tal soberanía sustancia y forma activa. El gobierno de jure a su vuelta al poder todavía podría castigar a los habitantes que hubiesen cometido actos en violación de las leyes penales del territorio que no hubiesen sido suspendidas por el ocupante, aunque tales actos hubiesen sido cometidos durante la ocupación. Esto no rife con los principios enunciados en las páginas anteriores porque hemos dicho que las leyes municipales y penales permanecen vigentes durante la ocupación enemiga mientras el ocupante no haga nada para sustituirlas o abrogarlas, por razones de necesidad militar. Sin embargo, con respecto a las leyes políticas, que

64 - --- With reference to a legislation by the de jure government during occupation. Belgium has an example. A Belgian Decree of Dec. 10, 1.916 forbade trading between Belgian notables and Germans. In the case of Herwin v. Muche, the Belgian German Mixed Arbitral Tribunal in 1.922 held that a contract between a Belgian and German national entered into in or about 1.914 was not annulled until Nov. 1.918 when Belgian territory was liberated, since the decree has no force of law in the occupied territory. (El Conseil de plusieurs des Tribunaux Arbitraux Mixtes, 368).

Notemos tambien la sentencia holandesa de 17 de diciembre de 1.947 en el asunto de Tobaver, y la Estonoumidesa de 21 de enero de 1.953, en donde ha sostenido que las disposiciones tomadas por el gobierno exilado para el territorio ocupado tiene fuerza obligatoria en cuanto no interfiere los derechos que al ocupante concede el Derecho Internacional. (Annual Digest, 1.947, Case no. 108; Netherlands vs.

tratan de las relaciones entre los habitantes y su gobierno - legítimo, opinamos que este no tiene derecho a castigar violaciones de las mismas por la sencilla razón de que durante la ocupación enemiga, tales leyes no tenían vigencia, y para que se de este efecto, el ocupante no necesita proclamar su suspensión porque en cuanto se da la ocupación, estas clases de leyes quedan suspendidas automáticamente. Si el ocupante tiene obligación de proclamar esa suspensión según las Prácticas de los Estados Unidos, es para información de los habitantes a fin de que no puedan alegar ninguna coartada en el sentido de que todavía tenían que obedecer las leyes de su antiguo gobierno porque les parecía serdian vivientes.

Cuanto se acaba de decir, en modo alguno supone, que el gobierno no legítimo no pueda castigar a nadie por el delito de traición cometido durante la ocupación. Cuando existan pruebas de que un ciudadano, con suero libre albedrío y por su gusto, en territorio ocupado, comete un acto que tiene todos los ingredientes de la traición, entonces, el gobierno legítimo, o su restauración al poder, tiene perfecto derecho de procesar a dicho ciudadano, toda vez que no habiendo obrado bajo coacción enemiga, no reza para con él la exención que el derecho internacional reconoce por los actos a favor del ocupante llevados a cabo por las coaccionados súbditos temporales. No se olvide que la defensa de coacción, que serviría para la absolución de un presunto traidor, sólo puede alegarse en relación con actos mandados por el ocupante en exceso de sus atribuciones, porque aquéllos que se cometen dentro de la

autoridad de ocupante, aunque se hagan libremente, no ensen-
dran responsabilidad legal ante el gobierno legítimo, como no-
sea la de reconocerlos y darlos validez. De modo que un acto ,
objetivamente traicionero, necesariamente tiene que ser realiza-
do en acatamiento a una orden o deseo ultra vires del ocupante.
Si ello se hace voluntariamente, entonces la coacción no exis-
te en este caso se pierde la única defensa posible. El gobier-
no legítimo, puede, por tanto, exigir responsabilidad criminal
e imponer el condigno castigo.

IV.- RELACIONES DE LOS NACIONALES CON EL GOBIERNO LEGÍTIMO:

En la exposición de este tema, tenemos que dividir a los nacionales en dos clases: los que residen en el extranjero, y los que quedan en el territorio ocupado por el enemigo. La razón de esto es que en cada clase, se dan distintos efectos jurídicos respecto a las relaciones entre los nacionales y el gobierno legítimo.

Comencemos por los nacionales que residen en el extranjero. Para éstos, la ocupación de su país por las fuerzas enemigas no produce ningún efecto jurídico en sus relaciones con el gobierno legítimo, aunque éste estuviese en exilio por haber sido expulsado de su propio territorio. Tienen la misma obligación de obedecer todas las leyes del gobierno legítimo que podrían tener efecto en el extranjero como aquéllos que castigan el delito de traición, la piratería, la falsificación de moneda, etc., la ocupación militar de su país y sus consecuencias jurídicas que se producen en aquel territorio no afecta de ninguna manera su estado jurídico mientras no se sometan a la autoridad del ocupante militar como sería si regresaran a su país durante la ocupación. En otras palabras, su allegiance y fidelidad a su gobierno legítimo subsiste. Por eso, el gobierno legítimo tiene derecho de exigir de ellos esa obediencia que todo soberano puede exigir y en incumplimiento de esta obligación, haría que el soberano pudiera procesarlos por violación de sus leyes. No debemos olvidar tampoco que cuando un nacional residen en el extranjero, tiene también, obligación de obedecer todas las leyes del gobierno de su domicilio accidental en reciprocidad a la protección que recibe de dicho gobierno. Más, eso no afecta de ninguna mane-

ra su obligación para con su soberano legítimo al que todavía está vinculado por todas las leyes del gobierno legítimo que tengan efecto extra-territorial. No puede alegar los principios que hemos propuesto en páginas anteriores porque las circunstancias en que se fundan dichos principios no existen para él. El elemento de ocupación militar, o sea, la coacción, que existe por deducción no está presente en su caso. Si, - - pues, comete actos de traición contra su patria, el gobierno legítimo tiene derecho de procesarle sin que aquél pueda invocar los principios de la soberanía suspendida y la allegiance temporal. Para él, el único soberano legítimo es el propio -- originario de su país, y está obligado a obedecer sus mandatos, sin descuidar desde luego que, si reside en territorio extranjero, tiene también que obedecer los mandatos del gobierno de dicho territorio ya que le debe una allegiance temporal durante su permanencia en aquel sitio. Se puede, pues, decir que todas las leyes del gobierno legítimo que puedan tener vigor en el extranjero afectarían y coligarían a los nacionales que residan en el extranjero, porque las leyes de guerra no afectan este ejercicio del poder.

Los nacionales en el territorio ocupado, por otro lado, como hemos dicho antes, cubren como primer efecto de la ocupación militar la desvinculación de sus relaciones políticas con el antiguo gobierno por el establecimiento de un nuevo poder (65); esta desvinculación no es total ni absoluta ni permanente sino que sólo supone una suspensión, mientras que

65 - Order of President McKinley to the Secretary of War, July 18. 1.898, VI Moore, op. cit., pp 261.

dure la ocupación x x x; están sujetos a las leyes del ocupante y no a las del gobierno desplazado (66); las leyes políticas del país pueden suspenderse y no son obligatorias para -- los habitantes, el gobierno legítimo está impedido de ejercer su poder, aquel adquiere el derecho temporal de administrar -- el territorio y sus habitantes y todas las medidas legítimas -- que tome en el territorio de este poder, el gobierno legítimo tendría que respetar y reconocer después del cese de la ocupación (67). Esto así, ¿qué relaciones, si hay alguna, existen -- entre los ciudadanos del territorio ocupado y su gobierno legítimo? Decimos que en cuanto a las relaciones políticas, -- los habitantes están libres de cualquier vínculo legal que -- proceda de estas relaciones políticas. Su allegiance al go- -- bierno legítimo, o sea, su obligación de obedecer sus leyes . queda suspendida temporalmente y pueden tomar cualquier medida conveniente en la situación en que se hallan temporalmente y el gobierno legítimo que se ha escapado y dejado de dar la -- protección que tiene que prestar a los habitantes pierde el -- derecho de exigirles la allegiance a sus ciudadanos. Al comen- -- zar la ocupación, los habitantes quedan sujetos a las leyes -- que el ocupante prescribe y no a los mandatos del gobierno -- desplazado, que según Westlake (68), las leyes del ocupante -- dentro de sus autoridades, justificándose o no moralmente, vincu- -- larán a los habitantes del territorio ocupado y aun a su go- -- bierno nacional. Esto está de acuerdo con las teorías de que-

66- City of New Orleans vs. New York Steamship Co, supra.

67 - Oppenheim. Disputes, Neutrality and War, by Lauterpacht, Vol. II, p.

68 - Westlake, International Law, Vol. II, p. 98.

el ocupante tiene derecho de promulgar las leyes a las que está autorizado por los Reglamentos de La Haya, y mientras no se extralimitan, producirán efectos legales no solo entre él y los habitantes, sino también entre éstos y el gobierno legítimo. Halleck (69) explica que el gobierno establecido por el ocupante sobre el territorio enemigo durante la ocupación militar podría ejercer todos los poderes concedidos por las leyes de guerra al ocupante sobre los ocupados, sujeto a todas las restricciones y limitaciones que el mismo impone x x x x - Es un gobierno impuesto por las leyes de guerra y en cuanto a los habitantes de tal territorio así como el mundo, sólo estas leyes determinan la legalidad o ilegalidad de sus acciones. En otras palabras, los habitantes no tienen que invocar las leyes de su gobierno legítimo para determinar si sus actos son legales o no. Mientras la ocupación dure, las leyes de guerra solamente, son exclusión de las leyes políticas del gobierno legítimo y de las que el ocupante decide suspender o abrogar, determina la legalidad o ilegalidad de los actos del ocupante y los habitantes cuando cumplen los mandatos y decretos de aquél. Por consiguiente, cualquiera acto del ocupante dentro de sus atribuciones reconocidas, vinculan a los habitantes y al gobierno legítimo. Los habitantes no tienen por que tener que pudiera hacerselos responsables de sus acciones en obediencia a los mandatos legítimos del ocupante ya que según el derecho internacional, estos actos producen efectos legales, que el gobierno legítimo tiene obligación de reconocer. Sin embargo, no queremos decir que los habitantes estén totalmente divorciados de sus relaciones con el gobierno legítimo. Creemos que en los casos en que el ocupante no tie-

ne derecho ni está autorizados por las leyes de guerra de ma-
dar esto o aquello si los habitantes cumplen con ese mandato,
entonces el gobierno legitimo tiene derecho de negarse a reco-
nocer validez jurídica en esos actos y exigir responsabilidad
al ocupante, porque según los Reglamentos de La Haya, si al-
cun beligerante viola estos Reglamentos, el otro tiene dere-
cho de pedir recompensación. Ejemplares de estos actos serian -
los que tengan por fin obligar la jura de allegiance al ocu-
pante, o prestar servicio militar en contra el gobierno legi-
timo. Desde luego, los habitantes podrán siempre alegar la e-
xistencia de la coacción, pero ésta ya es materia de pruebas

Por eso, los que temen que con la aprobación o admi-
sión de estos principios enunciados, resultaria que cualquier
habitante en territorio ocupado se veria libre de cometer ac-
tos de traición contra su patria, no tienen por qué preocu-
parse ya que el gobierno legitimo no está tan absolutamente -
impotente para exigir cuentas por los actos de sus nacionales
Los espías, quinto-columnas y otros todavía caen dentro de la
esfera de la ley del gobierno legitimo cuando sus actuaciones
no estén de ninguna manera autorizados por el derecho interna-
cional. El ocupante no está autorizado a reclutar espías, ni
los habitantes están obligados a acatarle. Si algunos por su
propia voluntad, por consideraciones monetarias o de otro ti-
po cualquiera, o por ser verdaderos traidores contra su pa-
tria, entonces, el gobierno legitimo tiene derecho de casti-
garles porque, para esta clase de nacionales, no se da la -
coacción, pues que obran según su voluntad. Para ellos puede-
decirse que no existe la ocupación militar, el ejercicio de -
la fuerza superior, el peso de la coacción porque, voluntaria

- 151 -

mente han cometido los actos traicioneros contra su patria. -
Aquí se dan todos los requisitos de responsabilidad ditectiva
principalmente el elemento de libertad.

CAPITULO V

TEORIAS CONTRARIAS A NUESTRA TESIS

Antes de citar las teorías que se encuentran en las obras autorizadas escritores y en los fallos de los Tribunales de distintos países, tengamos en cuenta que el método que adoptamos en este capítulo es el polémico; es decir, citamos la teoría y los argumentos en su favor para después refutarlas. Estima que con este método, se podría llegar a un claro y escabado desarrollo de este capítulo que pretende despejar todas las dudas acerca de nuestra proposición.

1. Una de las teorías más contrarias a nuestra tesis es la que el Tribunal Supremo de Filipinas sustentó, en su sentencia en la causa de Anastacio Laurel contra Triberto Misa, (1) tratando ex profeso de la cuestión de los colaboracionistas, de claro que "Un ciudadano ó súbdito no debe una fidelidad restringida ó temporal, sino una fidelidad absoluta y permanente que consiste en la obligación de obediencia y lealtad a su gobierno o soberano; la fidelidad absoluta y permanente no debe confundirse con la restringida y temporal que profesa un extranjero al gobierno o soberano del territorio en que reside, en reciprocidad de la protección que recibe de dicho gobierno o soberano; la fidelidad absoluta y permanente que tienen para con su gobierno o soberano los habitantes de un territorio ocupado por el enemigo no se extingue ni se deroga por la ocupación, porque la soberanía de gobierno o soberano de jure no se cede ni se transfiere al ocupante beligerante, pues que permanece alojada en el gobierno o soberano legítimo; la soberanía

1 - G.R. No. L-409, Jr. Filipina.

residente en el gobierno titular debe distinguirse del ejercicio de los derechos inherentes a la misma, el cual puede ser - transferido a otro; no se suspende esta soberanía pero sí el - ejercicio de los derechos de la soberanía cuando el territorio ocupado está bajo el dominio y la autoridad del invasor beligerante; no habiéndose suspendido la fidelidad que deben los habitantes del territorio ocupado a su gobierno legítimo, si un ciudadano o súbdito aun estando en el extranjero puede cometer el delito de traición contra su propio gobierno o soberano, - también puede cometer dicho delito en su propio país, aunque - este ocupado por el enemigo."

El quid de esta doctrina promulgada por el Tribunal Supremo de Filicines que declara que existe el delito de Traición por actos cometidos por los ciudadanos durante la ocupación enemiga, está en que durante la ocupación de un territorio por un invasor beligerante la soberanía del gobierno legítimo subsiste y continúa residiendo en él; que aunque el territorio es te completamente bajo el dominio y la autoridad del invasor, - no se transfiere la soberanía a éste, que solamente tiene el ejercicio de los derechos de soberanía. Por consiguiente no se interrumpe la fidelidad que los ciudadanos deben a su propio - gobierno. En su consecuencia, cabe la posibilidad del delito - de traición.

El Tribunal, en apoyo de su doctrina, distingue la soberanía propiamente dicha, que es el poder supremo que gobierna una entidad ó sociedad política que constituye el Estado, - la cual podrá ser destruida, disuelta, o transferida a otro, - pero no podría ser suspendida sin acabar con su existencia ó -

despojarsela a su poseedor, cuando menos durante la suspensión, y el ejercicio de los derechos de soberanía el cual, puede ser suspendido cuando el territorio ocupado esté bajo el dominio y la autoridad del invasor.

En contestación a este argumento, afirmamos que toda soberanía importa únicamente cuando se pueda ejercer. Para nosotros, es indiferente que la cosa suspendida sea la soberanía o sólo su ejercicio. La soberanía sin el poder fáctico de ejercer los derechos que lo pertenecen no es soberanía. Es puramente ilusorio hablar de una soberanía que no tenga capacidad para ser efectivo en sus mandatos o decretos.

Ciertamente el delito de Traición se basa en la infidelidad del súbdito o ciudadano para con su propio soberano. Es decir, para que exista el delito, es preciso que el reo deba fidelidad a su soberano durante la comisión de los actos imputados. En vista de esta consideración, creemos que para determinar si existe el delito de traición por actos cometidos durante la ocupación, por los habitantes de un territorio ocupado por el enemigo, no es menester acertar si se ha transferido o no la soberanía del gobierno legítimo al invasor beligerante. Este punto no es indiferente, porque estamos conformes con la doctrina de que la ocupación de un territorio no priva al Estado invadido de su soberanía. Más, sostenemos que esta soberanía aunque resida en el gobierno legítimo, por las circunstancias producidas por la ocupación, está suspendida pues no tiene autoridad efectiva ni capacidad para imponer sanciones a sus mandatos o decretos y esta autoridad ha sido asumida por el ocupante. Pero el punto de la controversia teórica es si du

rante la ocupación bélica, los habitantes del territorio ocupado continúan o no debiendo fidelidad (Allegiance) a su propio soberano. Esta teoría sostiene que un ciudadano o súbdito no debe fidelidad restringida o temporal sino una fidelidad absoluta y permanente que consiste en la obligación de obediencia y lealtad a su soberano. En primer lugar, esta teoría de allegiance absoluta o permanente no puede derogar nuestra proposición o teoría de la Allegiance suspendida. La allegiance podría ser absoluta ó permanente, y sin embargo, estar suspendida temporalmente por la fuerza de las circunstancias. Y en segundo lugar, la teoría de la allegiance absoluta y permanente ha sido explotada hace ya mucho tiempo. Aun en Inglaterra de donde provino esta teoría, -----"un inglés debe por nacimiento allegiance perpetua y personal a su Rey,"----- ha sido abandonada. La doctrina inglesa era que la allegiance es indeleble; Nemo potest exuere patriam. Se decía que era una deuda y obligación al soberano coextensiva con la vida del súbdito. Después de mucha controversia, esta teoría fué abandonada con la promulgación de la Naturalization Act of 1870 en donde por primera vez los súbditos ingleses, por nacimiento o adquisición, podrien bien por una ley del Parlamento ó por cesión de un territorio inglés, renunciar su nacionalidad y allegiance. Este derecho de expatriación fué revalidado sustancialmente en la British Nationality and Status of Aliens Act of 1914-1922.(2) En los Estados Unidos, esta doctrina de allegiance absoluta, que fundamentalmente niega el derecho de emigración, no está admitida(3)

2 - 1 Encyclopedia Britannica, 644

3 - 3 Opinions of Attorney General; Magoon, Law of Civil Government and Martial Law, 175

Allí se sostienen que la expatriación es un derecho inherente y natural de todas las personas y que si es verdad que la allegiance es una obligación, no es en cambio una cadena que sujete a la persona un cautiverio que debe llevar a la nueva vida en una nueva tierra. Es una obligación que un hombre libre podría abandonar cuando voluntariamente asuma otra allegiance al país de su nuevo domicilio y tomara las obligaciones y derechos del ciudadano de ese lugar. Cuando acepta el nuevo vínculo, el antiguo se disuelve y desaparece.(4) Dice el Prof. Davis(5) que la doctrina de allegiance permanente o indeleble está ahora tácitamente ó expresamente abandonada por casi todas las naciones que admiten el Derecho Internacional. Esta teoría pues no tiene aceptación en nuestro acervo jurídico.

El mayor defecto de esta teoría radica en la confusión que sus defensores, especialmente nuestro Tribunal Supremo incurren respecto de la diferencia entre Allegiance y Loyalty. La primera hemos dicho en el capítulo II de esta tesis, significa la obediencia a las leyes, incluyendo las del ocupante en caso del territorio ocupado. Es la obligación de obediencia que un súbdito debe a su gobierno o soberano bajo el cual se vive en recompensa por la protección que se recibe.(6) Este es el concepto que debemos tener en cuenta siempre que hablemos de allegiance, sobre todo cuando nos ceñimos al concepto jurídico del Colaboracionismo, que es un aspecto concreto de nuestra ciencia

4 - Hackworth, op. cit., Vol. III, p. 162

5 - Davis, Elements of International Law, p. 144

6 - Carlisle vs. United States, 21 L. Ed., 429

jurídica. La loyalty por su parte, se refiere a los sentimientos y emociones extra-jurídicos, o sea, conceptos que no pertenecen a la ciencia del Derecho sino al foro interno del hombre. En ella se incluye el amor patrio, que es permanente y absoluto que termina solamente con la muerte. Este sentimiento amalgama la atracción, el amor, simpatía, admiración, respeto, veneración, gratitud, amistad, entendimiento, que vincula a los hombres con su nación. La ciencia jurídica no puede regir los sentimientos y emociones del hombre, porque hacer tal es inherentemente impráctico, cuando no tiránico. De ahí que la ley que castiga el delito de traición hace consistir a éste no en la mera adhesión al enemigo, que es más mental y emotivo, sino que exige que tal adhesión deba ser acompañada por la ayuda prestada al enemigo.(7) Esta diferencia reza aun en las leyes que venan el delito de -- traición no solamente en los súbditos sino también en los extranjeros. Si adoptamos la teoría de que el ciudadano podría ser -- acusado por el delito de traición porque debe loyalty y no allegiance, entonces el incluir a los extranjeros en lo mismo no -- tendría base jurídica, ya que éstos no deben ningún loyalty al soberano sino únicamente allegiance en el sentido de obediencia a las leyes del gobierno en donde residan y reciban protección del mismo. Dice Webster(8) que cualquiera extranjero que reside

7 - U.S. vs. Cramer, 65 Sup. Ct., 918, April 23, 1945

8 - El Antiguo Secretario de Estado de los EE.UU. en 1851;- "By allegiance, he meant the obligation of fidelity and obedience which the individual owes to the government under which he lives or to his sovereign in return for the protection he receives. It may be an absolute and permanent obligation or it may be qualified and temporary one. The citizen or -- subject owes an absolute and permanent allegiance to his government or sovereign or at least, until by some open and -- distinct act, he renounces it and becomes a citizen of sub-

en el país, debe éste allegiance u obediencia a sus leyes mientras permanezca en él como una obligación que nace del mero hecho de su residencia, y aquella protección temporal que recibe y está tan obligado como el propio ciudadano. Por esta razón - el extranjero también está sujeto a las leyes que castigan el delito de traición. En otras palabras, la esencia del delito de traición no está en la disloyalty contra el propio país, sino en luchar contra la autoridad bajo la cual se reside y de la que se recibe protección.

Volvemos a incidir en la suspensión de la soberanía, - pues, aunque la ocupación de un territorio por el enemigo no priva al Estado invadido de su soberanía, es igualmente bien sabido que suspende el ejercicio de los derechos de esa soberanía, el cual ya corresponde al invasor. En otras palabras, - el invasor beligerante se arroga a sí mismo el derecho de ejercer la soberanía sobre el territorio ocupado.(9) Hemos citado antes los reglamentos de La Haya en su artículo 43 por el cual

- ject of another government or another sovereign. The alien, whilst domiciled in the country, owes a local and temporary allegiance which continues during the period of his residence."

"The claimant were residents in the U.S. prior to the commencement of the rebellion. They so allege in their petition; they were therefore, bound to obey the laws of the country not immediately relating to citizenship, during their sojourn in it; and they were equally amenable with the citizens for any infraction of those laws." "The rights of sovereignty - - say Wildman in his Institutes of International Law, p. 40 - - - extends to all persons and things not privileged that are within the territory. They extend to all strangers therein not only to those who are naturalized and to those who are domiciled therein having taken up their abode with the intention of permanent residence, but also to those whose residence is transitory. All strangers are under the protection of the sovereign while they are within his territories and owes a temporary allegiance in return for that protection"

el ocupante deberá tomar todas las medidas oportunas para restablecer y asegurar la vida pública, respetando, en cuanto sea absolutamente posible las leyes vigentes. Bajo este precepto, el invasor beligerante juntamente con su derecho de ejercer la soberanía, tiene también el deber de proteger a los habitantes del territorio ocupado. El poder de dar protección, como ya hemos dicho es la base del derecho de exigir allegiance. Por tanto, cuando un Estado ha cesado de estar capacitado de proteger a sus súbditos o ciudadanos, pierde su derecho de exigir de éstos su allegiance, quienes pasan a la allegiance temporal y -- restringida al invasor, no solamente por razón de la protección sino también porque los habitantes están obligados a obedecer bajo el Derecho Internacional. Los habitantes tácitamente se conforman con el ejercicio por el invasor del derecho de soberanía en recompensa de la protección que les suministra.(10)

This obligation of temporary allegiance by an alien - resident in a friendly country is everywhere recognized - by publicists and statesmen. In the case of Trasher, a citizen of the U.S., resident in Cuba who complains of injuries suffered from the government of that island, Mr. Webster, then Secretary of State made in 1851 a report to the President in answer to the resolution of the House of Representatives in which he said: "Every foreigner born residing in a country owes to that country allegiance and obedience to its laws so long as he remains in it, as a duty upon him by the mere fact of his residence, and that temporary protection which he enjoys, and is as much bound - to obey its laws as native subjects or citizens."

This is the universal understanding in all civilized States and nowhere more established doctrine than in this country"...And again: "Independently of a residence with intention to continue such residence, independently of domiciliation, independently of taking of any oath of allegiance or of renouncing any former allegiance, it is well known that by the public law, an alien or a stranger born for so long a time as he continues within the dominions - of a foreign government, owes obedience to the laws of -- that government and may be punished for treason or other crimes as a native born subject might be unless his case is varied by some treaty stipulation.(6 Webster's Works, - 526; Carlisle vs. United States, 429)

Debemos tener en cuenta otra vez que la allegiance que el gobierno legítimo pierde se refiere a la obligación que los habitantes tienen de obedecer sus leyes, la cual se traslada al -- ocupante, primero porque los habitantes no pueden hacer otra cosa, y segundo, por estar obligados a ello por el Derecho Internacional los habitantes del país ocupado con sus súbditos temporales, aunque no puede exigírseles un juramento de fidelidad.(11)

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América -- ha sostenido nuestra teoría de la allegiance y soberanía suspendidas en la famosa causa de U.S. contra Rice.(12) Durante la guerra de 1812 entre los EE.UU. é Inglaterra, el puerto de Castine, Maine, fué ocupado por los ingleses y sus fuerzas permanecieron en él, hasta la ratificación del Tratado de paz de 1815. La autoridad civil y militar fué establecida sobre este territorio, en virtud de la cual, fué instituida una Sección -- de Aduanas. Ciertas mercancías fueron importadas a este territorio, quedando allí hasta su evacuación. Al restaurarse el gobierno americano en el territorio, el colector de Aduanas exigió el pago de los derechos de aduanas por las mercancías arriba expresadas, de acuerdo con las leyes de rentas internas de los EE.UU.

-
- 9 - Reglamento Español, Artículos 882 y 837; Reglamentos de -- La Haya del 1902, Art. 42 y 43
10 - Klüber, par. 256; De Martens, Précis, par. 280; Mr. Justice Story in Shanks vs. Dupont, 3 Peters 246; Halleck, Vol. II, p. 462-64; Tivies, ii, par 64.
11 - Marques de Olivart, Derecho Internacional Publico, p.
12 - 4 United States Reports 246.

El Tribunal Supremo de América declaró: "Las mercancías no están sujetas a ningún derecho de aduanas. Por la conquista y ocupación de Castine por los ingleses, el enemigo adquirió esa firme posesión que le habilitó a ejercer completamente los derechos de soberanía sobre dicho territorio. La soberanía de los Estados Unidos fué sin duda, suspendida, y las leyes de los Estados Unidos no podían regir allí, ni podían -- ser obligatorias a los habitantes que se quedaron y se sometieron al invasor. Por la rendición, los habitantes pasaron bajo una fidelidad temporal al gobierno británico y solamente estaban obligados a obedecer las leyes que el gobierno ocupante -- quiso reconocer o imponer. Por la naturaleza del asunto, no había otras leyes obligatorias para ellos, porque donde no hay -- protección, no puede haber derecho de exigir obediencia y fidelidad?"

El Tribunal Supremo de Filipinas, para fortalecer su opinión, presentó una analogía diciendo que si un ciudadano ó súbdito puede cometer el delito de traición contra su propio gobierno estando en el extranjero, también puede cometer dicho delito estando en su propio país aunque esté ocupado por el -- enemigo. Creemos que esta analogía no tiene ningún fundamento jurídico, porque las circunstancias que prevalecen en un territorio ocupado por el enemigo no son iguales a los que reinan -- en un territorio extranjero en donde rige la paz. En primer lugar, hemos dicho antes que cuando un territorio está ocupado -- por el invasor, el gobierno titular pierde su poder y el ejercicio de los derechos de la soberanía sobre el territorio y -- sus habitantes. En cambio, si el ciudadano se encuentra en el extranjero donde no se hace valer el poder del enemigo, no de-

be ninguna fidelidad, temporal o restringido al enemigo de su país. Su gobierno legítimo sigue ejerciendo la soberanía sobre él, quien continúa estando sujeto a las leyes de su patria. La protección que un súbdito recibe en el extranjero es diferente de la que los habitantes reciben del ocupante. En el primero, la protección es real, actual y no de la misma clase de protección que el ocupante podría suministrar a los habitantes del territorio ocupado. En segundo lugar, el ocupante beligerante no tiene poder sobre él, y éste no tiene ningún deber hacia -- aquél. Las leyes políticas se suspenden en el territorio ocupado por el enemigo, pero no en aquellos donde el enemigo no logra hacer sentir su propio poder. El ocupante beligerante no tiene el deber de proteger a un ciudadano que esté fuera del territorio ocupado; este ciudadano no tiene relación alguna -- con el enemigo. Por tanto, si comete actos constitutivos del delito de traición, estando en un país extranjero, puede y debe ser procesado y castigado como tal traidor. La situación jurídica de los ciudadanos que se quedan en el territorio ocupado es muy distinta.

El Tribunal Supremo de Filipinas siguiendo su raciocinio en apoyo de su doctrina, dice que la adopción de nuestra teoría de la allegiance suspendida podría excitar al ocupante a reclutar legalmente a los habitantes para luchar contra su propio gobierno sin que se vuelvan responsables por el delito de traición. Estimo que este argumento no es válido, porque la suspensión de la soberanía y la allegiance, no exime al ocupante de cumplir con los Reglamentos de La Haya en su Artículo 52 que le permite exigir prestaciones en forma de servicios a

condición de que no obligue a los habitantes a tomar parte en las operaciones militares contra su propia patria. La suspensión tampoco impide que los habitantes asuman una actitud pasiva, y mucho menos que mueran como se vieran obligados por el ocupante, a luchar contra su patria.

2. Otra teoría es la de que la allegiance no puede nunca ser suspendida durante la ocupación, porque al ocupante le prohíben los Reglamentos de La Haya que obligue a los habitantes a prestar juramento de fidelidad y también a exigirles información militar acerca del ejército de su patria ó a tomar parte en las operaciones bélicas contra su patria. Se dice, por tanto que estas prohibiciones tienen por su objeto respetar la allegiance de los habitantes del territorio ocupado para con el gobierno legítimo.

El fundamento de esta teoría estriba, pues, en los Reglamentos de La Haya que prohíben al ocupante obligar a los habitantes del territorio ocupado a prestarle juramento de fidelidad. Se dice que esto demuestra que no se puede admitir que la allegiance de los habitantes quede suspendida. Opinamos -- que ninguno de nuestros principios citados en páginas anteriores se opone a estos Reglamentos de La Haya. En primer lugar, no podemos ver ninguna contradicción entre esta prohibición y los principios de la allegiance y la soberanía suspendida. Precisamente porque la soberanía del gobierno de jure está suspendida y no ha sido investida en el ocupante y la allegiance de los habitantes a su gobierno legítimo también está solamente suspendida y no abrogada ni transferida al ocupante, es evidente que éste no tiene derecho a obligar a los habitantes a pres

tarle juramento de fidelidad.

Que las leyes políticas del gobierno expulsado no son obligatorias para los habitantes antes no quiere decir ni implica la transferencia del allegiance al ocupante, sino la suspensión de su allegiance al gobierno de jure. Si la allegiance está solamente suspendida pero no transferida al ocupante, éste no tiene derecho de imponerse a los habitantes obligándoles a jurarle allegiance. Hay, por tanto, una prohibición contra el juramento obligado de fidelidad y no la hay contra el principio de la soberanía y la allegiance suspendidas.

Esta prohibición la han interpretado los autores americanos y ingleses como Hyde, (13) Lieber, (14) Wheaton (15) y Oppenheim (15) en el sentido de que se refiere al juramento de fide-

-
- 13 - Dice Hyde: "The Hague Regulations declare that the occupant is forbidden to compel the inhabitants to swear allegiance to the hostile power. It is believed that notwithstanding this requirement, the occupant may not unreasonably compel the inhabitants in case of persistent and insidious attempt to resist his authority, to take an oath not to oppose the lawful assertion of the same, and so facilitate his task of enforcing them to respect their legal duty of obedience, (Hyde, Vol. III, p. 1898-99)
- 14 - Dr. Lieber in his Instructions for the Government of the Armies of the United States in the Field maintains: "Commanding Generals may cause the magistrates and civil officers of the hostile country to take an oath of temporary allegiance or an oath of fidelity to their own victorious government or rulers, and they may expel every one who declines to do so. But whether they do so or not, the people and their civil officers owe strict obedience to them as long as they hold sway over the district or country at the peril of their lives. (Davis, op. cit. p. 509)
- 15 - Wheaton holds "Some writers hold that officials who are retained in their offices by the occupying commander may be required to take an oath of fidelity. There is perhaps nothing illegitimate in this requirement, provided the operation of the oath is confined strictly to the period of lawful occupation and to such services as the officials may rightfully be called upon to render. The same consideration might be conceivably apply to the inhabitants in general in the occupied territory. (2 Wheaton, 246)

lidad absoluta y permanente. Sostienen que el juramento de allegiance temporal, v.gr., valedero solamente durante la ocupación podría legalmente exigirse de los habitantes. Es el juramento - de someterse a las órdenes del ocupante, v.gr., obedecer sus leyes, que es lo que se reduce la allegiance.

Si el juramento de allegiance temporal está permitido por el Derecho Internacional quiere decirse que los habitantes pasan a la allegiance temporal del ocupante y que el juramento de Allegiance, al que no se les puede obligar según los Reglamentos de La Haya comprende el de la allegiance permanente y absoluta.

Otro argumento de los proponentes en abono de su teoría es el de que la prohibición de los Reglamentos de La Haya - contra el ocupante de exigir de los habitantes cualquier información sobre el ejercicio de su país y que tomen parte en las - operaciones militares contra su propia patria, viene a reconocer paladinamente que la allegiance de los habitantes al soberano legítimo y todos los derechos que le pertenecen permanecen - intactos sin afectarse por la ocupación militar y que la soberanía del gobierno legítimo sigue vigente. En contestación a este argumento, diremos que es precisamente porque la allegiance al gobierno legítimo no ha sido abrogada sino suspendida, pendiente del resultado último de la guerra, el ocupante no tiene dere

16 - Oppenheim sostiene: "He (the occupant) may compel them (the inhabitants) to take an oath, --- sometimes called oath of neutrality -- to abstain from taking up a hostile attitude against him and willingly submit to his legitimate commands; and he may punish them for severely breaking his oath.

cho a exigir de los habitantes actos que vulneren su allegiance básica, la cual por suspendida solamente y no abrogada, podría restaurarse si el resultado de la guerra es contra el ocupante. Todo cuanto sea compatible con la allegiance suspendida de los habitantes, como por ejemplo, la obediencia a los mandatos del ocupante dentro del ámbito de su poder bajo las leyes de guerra o el juramento de fidelidad por el período de ocupación, puede exigirse. Ciertamente, exigir un juramento de allegiance absoluta o información sobre el ejército de su propio país, u obligar le a tomar parte en las operaciones militares contra su propia patria, se oponen a la doctrina de la allegiance al gobierno legítimo hubiese sido abrogada completamente y no suspendida tan sólo. La razón de estas prohibiciones no es proteger al soberano legítimo ni asegurarle la allegiance de los habitantes, sino -- proteger los derechos de los habitantes contra los sufrimientos morales que se seguirían de un juramento de allegiance al enemigo y de prestar servicios en su favor, así como contra los peligros que son innatos a estos servicios. El tomar parte en las operaciones militares, trabajando en fuertes, trincheras y defensas les expondría a ser disparados o bombardeados por las fuerzas de su propio país. Y más aún podrían ser un buen arma para el ocupante que haría a los habitantes carne de cañón para que las fuerzas de su país se vieran impotentes de disparar contra el enemigo visto que las vidas de sus propios súbditos quedaban en peligro.

Hagamos notar que estas prohibiciones van dirigidas solamente al ocupante, y no a los habitantes. Demuestran que los Reglamentos de La Haya no se preocupan por proteger la soberana--

nía del gobierno de jure, salvaguardando la allegiance de los habitantes, pues si fuera, así no empecen tales disposiciones, los habitantes habrían sido advertidos contra la vulneración de esa allegiance por la comisión de ciertos actos. El objeto de los Reglamentos de La Haya es proteger a los habitantes contra los actos del ocupante que afrentaran a su conciencia porque se les supone leales a su propio gobierno aun cuando su allegiance estuviese suspendida.

Por todo lo expuesto, sostenemos que las prohibiciones contenidas en el Artículo 45 de los Reglamentos de La Haya, van dirigidas primero a proteger el culto religioso y los sentimientos naturales - - - la devoción y el patriotismo de los habitantes, y evitar, durante la continuación o duración de la guerra, que el ocupante dé por supuesto un resultado que sólo puede darse después de la terminación del conflicto en su favor, v.gr., la disolución de la allegiance debida por los habitantes al gobierno legítimo. Sin embargo, este Artículo no suponía ni podía suponer la continuidad de la allegiance, porque queda suspendida por el hecho de la ocupación y permanece durmiente hasta que sea revivida o definitivamente suprimida por el resultado favorable o desfavorable de la guerra.

De este modo, los Reglamentos de La Haya operan en ambas direcciones, o sea, con respeto al ocupante y al gobierno legítimo. Ninguno de ellos puede asumir una actitud y una posición incompatibles con el carácter provisional de la ocupación. De un lado, al gobierno legítimo se le prohíbe actuar como si continuara en el ejercicio de los derechos de soberanía sobre el territorio durante la ocupación. De otro, al ocupante se le

inhibe de obrar como si la soberanía del gobierno de jure hubiese sido disuelta, como si el territorio hubiese sido conquistado por él definitivamente. En ambos la situación es esencialmente temporal, y uno y otro deberían conformar sus actos con aquel carácter de temporalidad. El resultado de la guerra determinará si la ocupación madurará en conquista o si la soberanía de gobierno expulsado será restaurada.

Se dice que la restricción impuesta por los Reglamentos de La Haya tienen por objetivo la protección de allegiance de los habitantes del territorio ocupado. Estimo que la conclusión correcta es que su verdadero objeto es la protección de los individuos en el disfrute de algunos privilegios importantes, uno de los cuales se refiere a la allegiance al soberano de jure. - La allegiance de los habitantes al gobierno de jure no ha sido disuelto sino que subsiste. Pero, también está suspendida como resultado de la ocupación enemiga. Como no está disuelta, el ocupante no tiene derecho a considerarla así exigiendo de los habitantes el juramento de fidelidad. Y, pues, está suspendida, el gobierno de jure no puede conceptuarla obligatoria en los habitantes durante la ocupación. El Status Quo de la allegiance - suspendida mas no abrogada debe mantenerse y respetarse por ambos, el ocupante y el gobierno de jure, durante la ocupación. - Por razones morales y no políticas, con vista de las exigencias de la conciencia pública, se imponen estas restricciones. Notemos que según los Reglamentos de La Haya, el juramento de allegiance está en la misma categoría que el honor familiar, las relaciones domésticas, las convicciones religiosas y los servicios personales. Fijemos también en que las prohibiciones van dirigi

das contra actos de coacción en esas materias por parte del ocupante. No hay nada que prohíba prestar voluntariamente el juramento de allegiance, porque como dice Hall, los habitantes son libres de hacerlo. Según Hyde, la allegiance es un privilegio personal, de manera que el ejercicio de la misma no puede sujetarse a la fuerza. Aún en tiempos normales, según el derecho americano la allegiance es un privilegio del ciudadano, y él podría transferirla, sin la necesidad de obtener permiso del gobierno. Por la naturalización en otro país, o por jurar allegiance a un poder extranjero, se le considera haber renunciado su antiguo allegiance. Aunque es verdad que durante la guerra el ciudadano no puede renunciar a su allegiance para evadir el servicio militar, sin embargo las condiciones que prevalecen durante la ocupación enemiga son totalmente diferentes y como Hall ha expuesto, " puede concederse que la incapacidad por parte del Estado de proteger a sus súbditos los libra hasta el grado de que puedan hacer válidamente lo que mejor les conviniere ". La allegiance temporal, que no afecta la allegiance absoluta -- (ésta quedará decidida por el resultado de la guerra) es una de esas cosas. La interpretación de Hyde sobre la regla que prohíbe la exigencia obligatoria del juramento de fidelidad, es que a los habitantes se les podría obligar a tomar un juramento de someterse a los mandatos legítimos del ocupante, que estén dentro de la esfera de sus poderes según las leyes de guerra. Tomando en consideración que la allegiance no es más que la obediencia a las leyes del gobierno del sitio en que la persona reside, este juramento de obedecer las leyes del ocupante es equivalente al de allegiance temporal, la cual no podría considerarse

como una violación de los Reglamentos de La Haya. En otras palabras, el juramento obligatorio de allegiance que se prohíbe es aquél que presupone un cambio completo de la allegiance, pero no un juramento que implica la obligación temporal de obedecer las leyes del ocupante, o sea un allegiance temporal al mismo.

3. Otra teoría empieza por negar la existencia de reciprocidad entre allegiance y protección, y sostiene que los Reglamentos de La Haya tienen el propósito de conservar la allegiance no obstante la falta de protección. Hemos explorado ya este punto en las páginas anteriores, especialmente en el capítulo II al cual este tema pertenece. Pero, los sostenedores de esta teoría añaden que podría considerarse como protección de la lucha por parte del soberano de jure contra el invasor, porque constantemente va recordando al invasor la posibilidad de exigírsele cuentas por delitos de guerra y abusos de autoridad si le suerte de la guerra, le es adversa. Peregrina doctrina de protección es ésta. Durante una guerra, cuando el ocupante esté cometiendo barbaridades, decapitaciones, torturas, etc., ¿podría decirse que exista la protección del soberano legítimo? ¿Podría éste intervenir para evitar esos abusos? Es risible hablar de protección cuando ésta no pase de ser una abstracción metafísica. No hay ningún hombre que quiera jurar allegiance perpetua a cambio de esa clase de protección, porque es bien humano recabar protección preventiva a cambio de su sumisión, ya que su interés primordial es su seguridad y supervivencia. Desde luego, no es necesario que tal protección preventiva sea actual, pero ciertamente tiene que ser positiva, y adecuada según las circunstancias lo permitan. El residente de un territorio no puede de-

cir que no tenga protección solo porque resulte víctima de un robo o una sustracción, o haya sufrido injurias, toda vez que tenia posibilidad de defenderse si la policía hubiese estado a mano. Pero en un territorio ocupado no hay ninguna oportunidad para que el gobierno legítimo pueda parar o prevenir la agresión contra un habitante durante el periodo de la ocupación.

Se arguye que si es verdad que la protección y allegiance son reciprocas y que la protección es la base o el fundamento del derecho de exigir allegiance, entonces, ¿que clase de -- protección pueden recibir del ocupante los habitantes en el territorio ocupado? En primer lugar, la obligación del ocupante -- de dar protección a los habitantes y el deber correlativo de -- los habitantes de prestarle obediencia son principios derivados de la ley de las naciones. Que cualquiera de ellos o ambos dejan de cumplir sus obligaciones respectivas, pudiendo cumplirlas, -- no anula la existencia del principio. En la mayoría de los casos, los habitantes no quieren obedecer las leyes del ocupante, -- ni éste les brinda protección. En segundo lugar, la protección, que es la obligación del ocupante de darse refiere a la seguridad interna y está dirigida al mantenimiento de la paz y el orden públicos y a procurar que el ocupante militar haga su ocupación menos rigurosa y exigente. Los habitantes deben obedecer para -- que puedan protegerse de medidas represivas y crueles que, de -- otra forma, el ocupante se veria justificado a emplear.

4. Una cuarta opinión asegura que las leyes políticas -- están suspendidas solamente cuanto el ocupante pero no respecto de los habitantes. Sostiene que todas las leyes políticas del -- gobierno de jure están en vigor durante la ocupación enemiga --

simultaneamente con las leyes contrarias del ocupante, pero que las sanciones por las violaciones de aquellas leyes del gobierno de jure, necesariamente deberán demorarse hasta que restablezca su autoridad y dominio sobre el territorio.

Esta teoría resulta novedosa y curiosa, toda vez que en contra del principio consagrado de la singularidad de las leyes y la exclusividad de la jurisdicción ----- un principio que prevalece no solamente durante los tiempos normales cuando el territorio en donde los habitantes residen está bajo el régimen de sus propias leyes y goza de la protección de su propio gobierno, sino también en tiempos de guerra cuando los habitantes de un territorio ocupado están despojados de la protección del gobierno legítimo y tiene que obedecer los mandatos del ocupante militar. Creemos, pues, que la palabra "Suspendidas" en la frase: "las leyes políticas están suspendidas durante la ocupación enemiga" quiere decir que provisionalmente aquellas leyes no obligan a los habitantes ni tienen efecto ni validez como si no existieran. Dice Oppenheim en su obra:

Sec. 169 - As the occupant actually exercises authority, and as the legitimate government is prevented from exercising his authority, the occupant acquired a temporary right of administration over the territory and its inhabitants; and all legitimate steps he taken in the exercise of this right must be recognized by the legitimate government after the occupation has ceased."

La autoridad del gobierno se expresa por sus leyes. La autoridad que, según Oppenheim, el gobierno legítimo queda impedido de ejercer, pues que actualmente la ejerce el ocupante, no es, por tanto, en último análisis, más que las leyes del gobierno legítimo en el primer caso, y las leyes o órdenes del --

ocupante en el segundo. Por eso, bajo la ocupación legítima no rigen y en su lugar, la autoridad del ocupante, v.gr., su voluntad, o ley marcial opera plena y exclusivamente. Oppenheim sostiene que el gobierno de jure tiene que reconocer después de la ocupación todos los actos legítimos del ocupante, Si las leyes políticas estuviesen vigentes durante la ocupación no habría -- ningún acto del ocupante en el ejercicio de su autoridad que -- puedan considerarse como legítimo, porque tal ejercicio, aun -- siendo legítimo bajo las leyes de guerra, no podrían menos de ser anuladores, de suyo, de las leyes políticas del gobierno legítimo. Oppenheim, todavía dice que cuando el ocupante tiene la autoridad militar sobre el territorio, los habitantes están bajo su ley marcial y han de prestar obediencia a sus mandatos. Esta obligación de obedecer no surge de su propia ley municipal ni - del Derecho Internacional, sino de la ley marcial del ocupante, a la que están sujetos.(17)

Cuando Oppenheim dice que los habitantes tienen que prestar obediencia a los mandatos del ocupante y que esa obligación no surge de su propia ley municipal, v.gr., las leyes del gobierno legítimo, sino de la ley marcial del ocupante, a la están sujetos según el Derecho Internacional, viene a indicar claramente que las leyes municipales, v.gr., las leyes del gobierno legítimo que riñen con el interés del ocupante, como las que -- tienen carácter político, no están vigentes y por esta razón, -- los habitantes no tienen ninguna obligación de obedecer esas leyes. Y Oppenheim añade, para completar sus comentarios sobre es

te tema, que el ocupante podría obligar a los habitantes a prestar un juramento - - algunas veces se llama 'juramento de neutralidad' - - de abstenerse de tomar una actitud hostil contra él y de someterse a sus mandatos legítimos.(18) Este juramento de sumisión voluntaria a los mandatos legítimos del ocupante ri ne completamente con el principio de obediencia simultanea a -- las leyes del gobierno legítimo, porque si el habitante obedece a estas, necesariamente será hostil al ocupante ya que esa obediencia sería contraria al interes del ocupante. Dice también - Oppenheim que el ocupante es totalmente independiente de la Con stitución u las leyes del territorio, porque el mantenerlo y la seguridad de sus tropas, así como los objetivos de la guerra, - están a la vanguardia de sus intereses y deberán fomentarse bajo todas las circunstancias y condiciones. Si el ocupante es in dependiente de la Constitución y de las leyes del territorio ocupado, por aquellas razones, y los habitantes tienen que obedecer al ocupante según Oppenheim y Hyde, y que podría obligarles a - prestar un juramento de someterse voluntariamente a sus mandatos legítimos, no hay ninguna otra conclusión que la de que las leyes políticas del gobierno legítimo no rigen durante la ocupación enemiga, porque sino los habitantes se verían sometidos y hacer a estos correr en direcciones opuestas. Este tratamiento violaría las leyes de humanidad y los requisitos de la conciencia pública, y que forman parte de las leyes de las naciones se gún el preámbulo de los Reglamentos de La Haya.

Escribe Hall que la ocupación trae consigo, como conse-

cuencia, la sustitución de su voluntad en el lugar de la ley anteriormente vigente siempre que haya necesidad razonable para tal sustitución. Añade que el ocupante suspende la vigencia de las leyes bajo las cuales los habitantes deben obediencia al gobierno legítimo, porque la obediencia no es compatible con su seguridad." ¿Cuales son las leyes por las que los habitantes deben obediencia al gobierno legítimo y que según Hall, el ocupante tiene derecho a suspender? No otras que las leyes políticas y particularmente la que castiga el delito de traición. La razón, dice Hall, de este derecho del ocupante, es porque la obediencia de los habitantes al gobierno legítimo no es compatible con la seguridad de aquél.

MacNair por su parte enseña que "El ocupante adquiere el derecho sobre los habitantes que se quedan de hacerles obedecer las reglas para la administración del territorio y la seguridad de sus fuerzas. Esta obligación y el derecho del ocupante de administrar el territorio ocupado están gobernados por el Derecho Internacional.(19) Si según MacNair es una regla de Derecho Internacional que los habitantes tengan que obedecer todas las ordenaciones legales del ocupante, por las razones ya citadas, no puede ser una regla del Derecho Internacional que las leyes políticas del gobierno legítimo estén, al mismo tiempo, en vigor, porque ésto sería en derogación de la otra, pues las regulaciones del ocupante para la seguridad de sus fuerzas deben reputarse contrarias a las leyes políticas del gobierno le-

19 - MacNair, Legal Effects of War, p. 321

gítimo. Dos reglas contradictorias no pueden proceder del mismo origen.

Westlake, opina que "La ley del ocupante promulgada dentro de su autoridad, esté o no moralmente justificada, obligará a cualquiera de los habitantes en el territorio ocupado, contra cualquier otro, así como entre ellos y su gobierno nacional, en tanto en cuanto produce efectos durante la ocupación." (20) Esta regla es la mayor prueba en contra del principio de que las leyes políticas no están suspendidas durante la ocupación. En efecto, aún entre los habitantes y el gobierno legítimo, las leyes promulgadas por el ocupante dentro de su poder, obligan en tanto que surten efecto durante la ocupación. Según el Derecho Internacional, solamente las leyes de guerra y con exclusión de las políticas del gobierno legítimo, determinan la legalidad o ilegalidad de los actos del ocupante, en cuanto se refiere a -- los habitantes y todo el mundo, incluyendo el gobierno legítimo de manera que, la legalidad o ilegalidad de los actos de los habitantes en obediencia a aquellos actos del ocupante también -- son determinadas por solamente aquellas leyes," (21) y a pesar de esto, la voluntad del ocupante dentro del territorio ocupado es su ley marcial, con lo cual se da al ocupante no solamente la autoridad de legislar como crea conveniente sino también, de determinar cuál sea legal o no y necesariamente esto excluye la regla que permite al gobierno legítimo a decidir lo mismo a la luz de sus leyes políticas.

20 - Westlake, International Law, p. 98, Vol. II; Peralta vs. Director of Prisons, supra

21 - Halleck, International Law, Vol. II, p. 466.

Además, las Reglas de los EE. UU. sobre guerra terrestre sostienen que el objetivo principal del ocupante es proveer a la seguridad de su ejército y contribuir a su ayuda y eficacia y al éxito de sus operaciones"(22) Veto así, entonces, todas las leyes del gobierno legítimo que sean antagónicas a dicho objetivo cesan de obligar a los habitantes durante la ocupación, sobre todo porque las mismas Reglas disponen que el ocupante militar no solo suspenderá como es natural todas las leyes políticas, sino que también podría suspender otras leyes existentes y promulgar otras nuevas cuando las exigencias del servicio militar así lo requieran.

Magoon afirma que cuando un ejército en plena campaña expulsa o destruye a la soberanía anterior de un país, las leyes de dicha soberanía y que dependen de ella también fenecen. Asimismo cesa la obligación de los habitantes que antiguamente debían allegiance a la soberanía expulsada, de obedecer sus leyes.(23) Como explica Magoon, no hay lugar para dudar que la regla de Derecho Internacional en el sentido de que durante la ocupación enemiga, las leyes del gobierno legítimo que dependen de la soberanía, v.gr., sus leyes políticas, fenecen con el gobierno expulsado, lo cual quiere decir que la obligación de los habitantes de obedecer tales leyes también se esfuma. Esta es una refutación directa de la teoría de que las leyes políticas del gobierno de jure continúan en vigor y obligan a los habitantes durante la ocupación, siendo inválidas é ineficaces solo --

22 - US Rules of Land Warfare, Article 284

23 - Magoon, Law of Civil Government under Military Occupation
p. 13

contra el ocupante. Aún Birkhimer, citando a Halleck y Wheaton, dice que las leyes políticas se promulgan para la conveniencia, seguridad y administración del gobierno. Estas, con la ocupación militar de un Estado por el enemigo, cesan de tener validez, (24) . . . Y mientras las leyes municipales podrían tener vigencia en el distrito ocupado, no ocurre lo mismo con las leyes políticas que prescriben los derechos y las obligaciones recíprocas del gobierno y sus súbditos. (25) Notamos que las leyes de las naciones distinguen entre las leyes políticas y las municipales pero en -- cuanto se refiere al ocupante, esta distinción no tiene valor, -- porque tiene derecho a suspender o abrogar cualquiera clase de -- leyes cuya vigencia esté en contradicción con su seguridad según el Derecho Internacional. La distinción es para beneficio de los habitantes, quienes tienen que saber cuáles leyes deberán obedecer y cuáles podrán ignorar, durante la ocupación enemiga. El -- Prof. Hyde es muy categorico cuando dice que lo que el ocupante decreta en el ejercicio de su poder legislativo deberá tenerse -- por ley del lugar ocupado, no obstante que contradiga o desafíe la voluntad del soberano territorial ejemplificada en la legislación hasta entonces vigentes. (26)

En suma podemos decir que no hay discrepancia acerca de la proposición de que es un principio universal indisputable -- del Derecho Internacional de que durante la ocupación enemiga, -- las leyes políticas del gobierno de jure se suspenden. Este principio no es una mera deducción sino unos enunciados positivos de

24 - Maine, p.179; Manning, p.182; Hall, p.402; Op. Atty. Gen., Vol. 22, p.426-38, post Chapter 9 Sec. 116

25 - Halleck, International Law, Chap. 32, sec.3; Boyd's Wheaton Sec. 346 c.; Birkhimer, VI, Sec. 67.

26 - Hyde, International Law....., Vol. III p. 1885

Tribunales Supremo y de Reglas de Guerra de todas las naciones civilizadas, así como por los escritores de Derecho Internacional. Aquella suspensión no solamente es proclamada por el ocupante sino que fluye de mero hecho de la ocupación enemiga debido a la incompatibilidad de aquellas leyes con la nueva situación. Ni puede haber controversia sobre el principio de que durante la ocupación enemiga el gobierno de jure queda impedido de ejercer cualquiera autoridad dentro del territorio ocupado, y con este impedimento, podemos añadir, la imposibilidad física de ejercer tal autoridad. Y, sin embargo, el principio que nuestros oponentes quieren imponer es que lo que queda suspendido es el poder físico del soberano de castigar las violaciones de aquellas leyes, que por su parte permanecen en todo su vigor. Mas, esta proposición sigue riñendo con el principio fundamental de que no pueden coexistir en un mismo territorio y sobre unos mismos individuos dos cuerpos legales que dimanen de soberanías contrarias, por la sencilla razón de que toda soberanía es en sí única y exclusivamente en una comunidad cualquiera.

5. Otro teoría contraria sostiene que las leyes políticas no pueden ser suspendidas porque no hay otras que las puedan sustituirlas, ya que las reglas y los decretos del ocupante promulgados bajo la autoridad de las leyes de guerra no tienen carácter ni fuerza de ley. Para nosotros esta teoría es completamente incompatible con la opinión unánime de los tratadistas de Derecho Internacional. Aun el preámbulo de la IV convención respecto de las leyes y costumbres de la guerra terrestre de La Haya del 1907 concede la calificación de ley a las reglas que el

ocupante militar promulgue.(27) No hay cuestión de que las reglas del ocupante militar dentro de la esfera de las leyes y cos

27 - Said Preamble of Convention IV of the Hague Regulations of 1907 says:

"Whereas, while seeking means to safeguard the peace --- and to prevent armed conflicts between nations, it is equally important that the Conference consider the case in which a call to arms shall have been brought about by events that its solitude shall not have been able to avert;

Still animated by a desire to serve the interests of humanity and the ever progressive demands of civilization in this extreme case;

Regarding it as important to that end to revise the general laws and customs of war with a view to define them with greater precision, or to impose certain limits upon this -- exercise to the end that their rigor may be restricted as much as possible;

It has been adjudged necessary to complete and make clear certain parts of the work of the First Peace conference, -- which, inspired by the ideas commended to its attention by the wise and generous foresight of the Brussels Conference of 1874 has adopted certain dispositions having for their object to serve as a general rule of conduct for belligerents in their relations with each other and with populations;

According to the views of the High contracting Parties, these arrangements, formations of which has been inspired by a desire to diminish the evils of war, so far as military necessities permit, are designed to furnish a general rules for the guidance of belligerents in their conduct with each other and in their relations with the population;

It has not been possible, however, to devise stipulations covering all cases which may present themselves in practice; otherwise it could not enter into the minds of the high contracting parties that cases not foreseen, in the default of written stipulations, should be left to the arbitrary judgment of those who direct the armies;

Until a more complete code of the laws of war can be prepared, the High Contracting Parties Judge it opportune to see that, in the cases not included in the regulations adopted by them, people and belligerents remain under the protection and dominion of the principles of international law which results from the usages established between civilized nations, the laws of humanity and the dictates of public conscience. They declare that they should be understood in this sense, notably Articles I and II of the regulations -- adopted." (Davis, op. cit. p. 572-73)

tumbres de la guerra constituyen la ley en el territorio ocupado, y que esta ley del ocupante, aunque se base en la fuerza, - está expresamente reconocida por el Derecho Internacional, la - única diferencia entre las leyes del gobierno legítimo y éstas es que las primeras se fundan en el consentimiento de los habitantes, y estas últimas en la fuerza que existe, y obligan solamente durante la ocupación.

6. Dicen otros que las leyes promulgadas por el ocupante no son tales en el sentido jurídico porque la fuerza es su fundamento y la fuerza no crea derecho.

Aunque es verdad que la autoridad del ocupante es caracterizada por la fuerza superior, es suficiente indicar que ésta se halla refrendada y reconocida por el Derecho Internacional; y sus decretos y mandatos, como leyes del territorio ocupado.-- Ahora bien; si los decretos del ocupante caen dentro de su autoridad reconocida, y del ámbito de las leyes de guerra, se les conceptúan legales por la ley de las naciones, y si van en contra, de estas leyes, las declaran ilegales. Y. sin embargo no solamente los decretos del ocupante de la segunda clase sino también aquellos de la primera, o sean tanto los actos legales como los ilegales, según el criterio de las leyes de guerra, tienen la misma fuente; la fuerza y violencia. No hay distinción entre los actos del ocupante que estén de acuerdo con las leyes de guerra y los que violen éstas, ya que la fuerza es su fuente común y, por consiguiente deberían ser consideradas ilegítimas é ilegales. Esto no es lo que ocurre. Siempre que haya guerra entre las naciones deberá ser regulada, si no se quiere que las naciones vuelvan a la edad barbara. Las leyes de guerra todavía

determinan la ilegalidad e ilegalidad de los actos del beligerante, apesar de que estos resulten violentos. Aun las naciones agresoras, según Hyde y Oppenheim, tienen derechos de beligerante bajo las leyes de guerra.

Esta teoría de que los habitantes no deben obediencia - al ocupante, porque sus leyes no son tales sino que son manifestaciones de fuerza y la fuerza no crea el derecho, esta repudiada y rechazada por casi todas las publicistas del Derecho Internacional, por decisiones de los tribunales y por los mismos Reglamentos de La Haya. Citemos algunos extractos:

"El ocupante podrá promulgar nuevas leyes para la gobernación del país.(28)

"La autoridad del poder legítimo pasa de éste a manos - del ocupante"(29)

"Cuando un territorio es invadido, debe tener alguna -- clase de gobierno, sino habría una situación de confusión o caos."(30)

"El derecho del ocupante de gobernar el territorio es -- uno de los incidentes de la guerra. Su autoridad se deriva directamente de las leyes de guerra, establecido por los usos del mundo, y confirmado por las obras de los publicistas y las decisiones de los tribunales, -- es decir de las leyes de las naciones."(31)

"Por las leyes de las naciones, la ocupatio bellica --- transfiere el poder soberano al ocupante."(32)

"El gobierno de ocupación es un gobierno de facto."(33)

"La existencia del estado de guerra no suelta los vínculos de sociedad no desprende de aplicación regular de las leyes."(34)

28 - US Rules of Land Warfare, Article 188 (1940)

29 - Hague Regulations of 1907, Article 43

30 - Macnair, supra, p. 322

31 - Halleck, supra, Vol. II, p. 444; Co Kim Cham vs. Valdez -- Tan Keh, 41 O.G. 787

32 - Birkhimer, supra, p. 54

33 - Fiere, Derecho Internacional Publico, Vol. 4, p. 234

34 - Horn vs. Lockhart, 17 Wall. 570; Williams vs. Bruffy, 96 U. S. 176

"Es un gobierno impuesto por la fuerza y la legalidad de sus actos está determinada por las leyes de la guerra."(35)

"Los derechos del ocupante como legislador tienen amplio ámbito."(36)

"El ocupante ha adquirido un deber temporal de administrar el territorio y a sus habitantes. Los habitantes. Los habitantes deberán estar obligados a someterse a su administración."(37)

"El resistir la afirmación de la autoridad por el ocupante es esencialmente ilegal."(38)

"En Orden a supremacía actual en todo los asuntos de gobierno dentro de sus leyes militares, el poder del ocupante no pueden ser cuestionado. La obediencia a su autoridad es una obligación. Sin esa obediencia, el orden público será imposible."(39)

"En la guerra, las cosas serán necesarias o no según la norma militar puramente; y todas aquellas que ayuden el aspecto militar son necesarias. Esta es la regla de la ocupación bélica. Es la teoría que se esconde en cada palabra de los Reglamentos de La Haya sobre la ocupación del territorio."(41)

"En la prosecución de una guerra extranjera, tenemos el deber de adquirir posesión del territorio del enemigo y de ejercer todos los deberes de soberanía sobre el mismo."(42)

"Todos los actos legítimos que el ocupante lleve a cabo en el ejercicio de su poder administrativo sobre el territorio debe ser reconocidos por el gobierno legítimo después de la ocupación."(43)

"El ocupante podría obligar a los habitantes a prestar un juramento de someterse voluntariamente a sus mandatos legítimos."(44)

35 - US. Rules of Land Warfare of 1940, Article 284

36 - Hyde, supra, Vol. III, p. 1883

37 - Oppenheim, Law Quarterly Review, Vol. CXXXII

38 - Hyde, ibid, p. 1899

39 - Thorington vs. Smith, 8 Wall, 1; Willimas vs. Bruffy, supra; Bluntschli, Laws of War, Secs. 64, 122; Borkhimer, Sec. 68

40 - New Orleans vs. NY Steamship Co., 20 Wall 387

41 - Colby, supra,

42 - President Polks message To Congress, supra

43 - Oppenheim, Lauterpacht, supra

44 - ibidm.

"El derecho del ocupante y su obligación de administrar el territorio están gobernados por el Derecho Internacional. Los habitantes tienen que obedecer sus reglamentos legales referentes a la administración del territorio y la seguridad de sus fuerzas."(45)

"El derecho promulgado por el ocupante dentro del ámbito de su poder obligará a todos los habitantes del territorio ocupado y a su gobierno nacional, en tanto produzcan efectos durante la ocupación."(46)

"En general, los actos del ocupante tiene validez legal bajo el Derecho Internacional, y no deberán ser anuladas por el gobierno legítimo."(47)

"En un país ocupado por los beligerantes, la única ley vigente es aquella que se llama las leyes y costumbres de guerra terrestre."(48)

"El ocupante podría promulgar leyes y reglamentos -- nuevos que sean necesarios para el control del país y la protección de su ejército."(49)

"El ocupante puede pedir de los habitantes del territorio ocupado la obediencia que sea necesaria para la seguridad de sus fuerzas, el mantenimiento de la paz y el orden públicos, y la propia administración del país."(50)

"El ocupante tiene el poder exclusivo de promulgar leyes y administrarlas."(51)

"Es formalmente imposible excluir cualquiera de los poderes legislativo o administrativo del ámbito del dominio del invasor."(52)

Todas estas citas refutan la teoría de que las leyes o decretos del ocupante no tienen fuerza de ley por derivarse de la fuerza. Estimo que los proponentes no han analizado esta teoría y han dejado de tomar en cuenta que esta fuerza y coacción empleada por el beligerante esta sancionada por el Derecho Inter-

45 - McNair, supra, p. 321

46 - Westlake, International Law, Vol. II, p.98; Peralta vs. Director of Prisons, supra.

47 - Wheaton, Vol. II, p. 245

48 - Blackworth, Digest, Vol. VI, p. 411 quoting US Supreme Court in Young vs. US and Mrs. Alexander's Cooton, 2 Wall 404

49 - US Rules of Land Warfare, Article 288

50 - ibid, Article 297

nacional. No importa que la relación establecida entre el ocupante y los habitantes del territorio se llame relación legal o no. Precisamente la antigua teoría de que el ocupante es el amo indiscutido del territorio ocupado ha sido reemplazada por la doctrina moderna de que hay una ley que regula las relaciones entre ellos, y que mientras la base de los deberes del ocupante es la fuerza, el uso de la misma, está sin embargo, circunscrita por principios bien definidos de las leyes de guerra. Por esta razón los decretos del ocupante que este promulgue bajo su poder legislativo como lo define el Derecho Internacional, produce el efecto de una ley, aunque la fuerza sea su primaria -- fuente de autoridad.

51 - Hyde, supra, Vol. III, p. 1883

52 - Hall, International Law by Pearce Higgins, 6th Ed., p. 500

CAPITULO VI

EL CASO DE FILIPINAS

La ocupación de Filipinas durante la Segunda Guerra Mun dial fué una torva realidad que produjo resultados trágicos a - nuestro pueblo. Una de sus causas principales fué la falta de - preparación de los Estados Unidos y su política desorientada y vacilante en el Extremo Oriente en donde sus promesas estuvi-
ron absolutamente desproporcionadas con su capacidad real para cumplirlas cuando surgió la crisis. No fué una guerra por causa de Filipinas, sino que ésta se vió complicada por estar sujeta entonces a la soberanía de los Estados Unidos.

La declaración de la Ciudad de Manila como ciudad abier-
ta, en 26 de Diciembre de 1941; la retirada de las fuerzas ame-
ricanas y filipinas a Bataan y Correcidor; la rendición incondi-
cional de las fuerzas de la USAFFE(1), seguida de la proclama-
ción del Comandante en Jefe de las mismas a todo el archipiéla-
go para que cesara toda clase de resistencia; el hambre, las en-
fermedades, los tormentos que mataron a miles y miles de prisi-
oneros de guerra americanos y filipinos; la orgía de asesinatos
y atrocidades que por tres años los japoneses cometieron conti-
nuamente contra los habitantes; la destrucción de Manila y -
otros pueblos de Filipinas, ---- todos estos infortunios son re-
cuerdos rípidos de la impotencia y el abandono del pueblo fili-
pino. Más, no hay porque repetir estos sufrimientos del pueblo
durante la ocupación. Lo que sí debemos tener en cuenta es que

1 - Quiere decir, United States Armed Forces in the Far East.

Filipinas estuvo bajo la ocupación Japonesa cerca de tres años.

1. GOBIERNO DE OCUPACION:

La ocupación de Filipinas comenzó unos días después de la declaración de guerra por los Estados Unidos contra el Japón en contestación del ataque improvocado por éste a las bases navales de aquellos en Pearl Harbour. Formalmente dicha la ocupación comenzó en 2 de Enero de 1942, cuando el Comandante en Jefe del Ejército Japonés proclamó la ocupación de Filipinas y el establecimiento de la administración militar japonesa. Este hecho es, reconocido por el Tribunal Supremo de Filipinas cuando dice que "la ocupación militar de los Japoneses comenzó en 2 de Enero de 1942 y terminó el 3 de Febrero de 1945." (2) En la misma fecha el Comandante en Jefe del Ejército japonés proclamó un edicto advirtiendo a los habitantes de Filipinas que "el ofrecer resistencia o cometer actos hostiles contra las fuerzas japonesas en la forma que sea, traería la destrucción de Filipinas y que los que importunaran el pensamiento de los funcionarios y el pueblo serían castigados con la muerte". (3) En 3 de Enero de 1942, otra proclamación del Comandante en Jefe Japonés declaraba el cese completo de la soberanía de los Estados Unidos en Filipinas y ponía bajo la ley marcial a todos los distritos ocupados por el ejército japonés estableciendo una administración militar sobre los mismos. La misma proclama encarecía a las autoridades y los habitantes de la Mancomunidad filipina a romper sus relaciones con los Estados Unidos y a obede-

2 - Co Kim Cham vs. Valdez Tankeh, Jurisprudencia Filipina, ^{supra}

3 - Official Journal, Japanese Military Administration, Vol. II p. 1.

cer, fielmente todos los mandatos del ejército japonés, cooperando voluntariamente con éste en sus actividades de estacionamiento y suministrándole lo que necesitare". Finalmente, aseguraba a los habitantes a comprender las verdaderas intenciones del ejército japonés, que no se dejaran engañar por las propaganda de los Estados Unidos y de Inglaterra, y a no alterar la paz de ninguna manera ni diseminar rumores falsos, avisando -- que tales actos se considerarían hostiles y los culpables castigados con la muerte según la ley marcial."(4) Hay muchas más proclamas y decretos promulgados por el ejército japonés, que son prueba de la coacción que el ocupante en el uso de sus poderes bajo las leyes de guerra, está autorizado a ejercer. Estas órdenes e instrucciones amenazadoras constituyen la base -- en que descansó la participación de los filipinos en la administración establecida por el alto mando japonés.

En 23 de Enero de 1942, se creó un Consejo Provisional de Estado. Fue precedido por una declaración de sumisión por parte de los dirigentes filipinos que fueron llamados uno por uno por el Comandante en Jefe a su despacho, y obligados a cooperar con la organización del mismo. Para que los habitantes no supieran que habían sido obligados a cooperar, sino que pareciera como que se habían ofrecido a cooperar voluntariamente, el Comandante en Jefe ordenó que estos dirigentes escribieran una carta de Respuesta, que después se llamó la "Wagna Carta de la Traición." Esta carta en parte decía: "En cumplimiento de su consejo, y teniendo en cuenta los grandes ideales de la libertad y felicidad de nuestro país, estamos dispuestos a obedecer con nuestras buenas capacidades y dentro de los medios a

nuestra disposición a las ordenes promulgadas por las fuerzas japonesas para el mantenimiento de la paz y el orden y la promoción del bienestar de nuestro pueblo bajo la administración militar de los japoneses. En su consecuencia nos hemos constituido en un Consejo Provisional de Estado".

En realidad, esto no había sido un consejo sino una orden del Comandante en Jefe de las fuerzas japonesas. Y estos filipinos tenían que obedecer, porque según General Homma, el mismo general que ocupó Filipinas, cuando fué capturado en Tokyo, "no les quedaba otra alternativa". Recordemos que Homma fué el mismo general que ordenó a los Filipinos que cooperaran con su administración.

La Orden Nº 1 del Comandante en Jefe se dirigía personalmente al Sr. Jorge Vargas mandándole que siquiera con la organización de la Comisión Ejecutiva que debía componerse de -- seis departamentos, que hicieran cumplir todas las ordenes de las fuerzas japonesas. Para asegurar el cumplimiento de tales -- órdenes, se ordenaba que cada departamento tuviera un consejero japonés y dos ayudantes japoneses.(5)

La Orden Nº. 3 prescribe los principios básicos en el -- ejercicio de los poderes legislativos, ejecutivo, judicial;(6)- en esta orden se autorizó a la Comisión ejecutiva a promulgar -- nuevas leyes, pero siempre sujeta a la aprobación del Comandante en Jefe del Ejército Japonés.

5 - *ibid*, Vol. I, p. 20

6 - Aviso de 24 de Mayo de 1942, Official Journal, JMA, Vol.IV p. 3

Con todas estas órdenes, el dominio de los japoneses en Filipinas fué absoluto. Se extendió en toda fase de su vida, política, económica, docente y religiosa. En la esfera económica, los Japoneses cambiaron la producción del arroz por la del algodón. Casi todos los productos iban a los japoneses para su manutención y para llevarse los al Japón. Las plantaciones de azúcar y cocos fueron incautados para la fabricación de alcohol y sus productos fueron embargados y explotados por su propia cuenta. Asociaciones de acaparamiento y corporaciones japonesas surgieron enseguida para tomar parte en los negocios abandonados por el pueblo. Día a día, se promulgaban órdenes, proclamas, decretos, instrucciones, avisos, advertencias, etc. poniendolo todo bajo el ferreo dominio y monopolio japonés.

En la esfera ideológica, y cultural, las fuerzas japonesas también introdujeron su dominio. La publicación de noticias fué reprimida y se autorizó un solo órgano de publicación, bajo más estricta censura. Se promulgó la Orden nº. 2 que prescribía los principios básicos de la educación en Filipinas. La debida comprensión de la coprosperidad y la parte de Filipinas en ella era la base principal de estos principios. Se abjuraba de la dependencia de los Estados Unidos é Inglaterra. El idioma japonés se hizo obligatorio para sustituir al inglés como medio de instrucción. El examinando ha tenido la infortunada oportunidad de estudiar bajo este imperio de limitaciones. Los textos fueron truncados, cubriendose las páginas que hacían alusión a América e Inglaterra y las palabras libertad y democracia fueron eliminadas de estos textos. Los libros que condenaban la guerra fueron confiscados y quemados.

Juntamente con estos medios represivos, los japoneses se embarcaron en una intensa propaganda, importando profesores japoneses para renovar la cultura filipina. A los prisioneros de guerra se les exigió se sometieran a un período de entrenamiento y adoctrinamiento antes de ser puestos en libertad y pagaran un juramento de fidelidad a las fuerzas japonesas. Hubo también una academia militar para entrenar a los policías.

En aspecto religioso, los japoneses, invadiendo también esta esfera, importaron un obispo católico japonés y unas monjes católicas. Se pidió a casi todos los de las jerarquías católicas y protestantes una promesa de cooperación. En el primer aniversario de la declaración de guerra, en 8 de Diciembre de 1942, se anunció el breve pontificio que proclamaba a la Inmaculada Concepción como patrona de Filipinas, diciéndose que había muy bien del celo paternal de su Santidad por la fe y el bienestar de los filipinos, y entraña su simpatía por la justicia de la causa del Japón".

En la esfera política fueron grandes los cambios que -- tenían por objeto la transición de un gobierno democrático y -- una dictadura militar. Todo vestigio del gobierno de la Mancomunidad desapareció cuando los japoneses iniciaron la ocupación y todos los órganos de administración se constituyeron según los planes de Tokyo. Los Partidos políticos se disolvieron en un programa de radio en el que todos los presidentes de los distintos partidos tuvieron que anunciar 'voluntariamente' la disolución de sus partidos respectivos.

Aún el Congreso de los Estados Unidos se hizo cargo que la ocupación Japonesa de Filipinas cuando en una resolución de

29 de Julio de 1944 declaró:

"Whereas, the Japanese are now in possession and control of the land, peoples, business, communication, and institutions of the commonwealth of the Philippines and because of these circumstances, the Filipino people are denied the free use and employment of the processes and political institutions jointly established by the Government of the United States and the Commonwealth of the Philippines for the transaction of public and private business and for the maintenance of liberty, law and order, justice in the Philippine Islands.

Whereas, by their possession and invasion the Japanese have attempted to frustrate the free processes to independence in the Philippines by substituting therefore their own puppet government which was conceived in intrigue, born in coercion and reared primarily for the purpose of Japanese selfishness and aggrandisement and not to achieve the independence and freedom of the Filipino people."

El conjunto de la propaganda japonesa venía a reducirse a una constante amenaza de castigar severos, sobre todo la muerte a todos aquellos que no quisiesen colaborar. Que estas amenazas se habían realidad cuando era llegado el caso lo prueban -- los anuncios públicos como éstos:

1. Pena de muerte a 20 dirigentes de actividades anti-japonesas y conmutación de la misma a cadena perpetua en otros -- 30.(6)

2. Castigo inferido a grupo de filipinos culpables de -- devoción al antiguo régimen.(7)

3. Pena de muerte a 8 personas y encarcelamiento de -- otras tres halladas culpables de hacer y propagar propaganda -- anti-japonesa.(8)

4. Sentencia de muerte a 44 personas por espionaje de -- las operaciones de las fuerzas japonesas. o por escuchar diseminaciones americanas.(9)

7 - Anuncio de 5 de Mayo de 1942, *ibid*, p. 14-15

8 - Aviso del 14 de Junio de 1942, Vol. 5, p. 14, *ibid*.

9 - Anuncio del 8 de Junio de 1942, Vol. V. p. 15-16, *ibid*.

5. Pena de muerte a 21 personas culpables de emitir actividades anti-japoneas.(10)

Basta con estas citas para convencer a cualquiera del deminio que los japoneses, por medio del terror, ejercían en Filipinas.

Volviendo al caso de los dirigentes filipinos que fueron llamados por el Comandante en Jefe Japonés, debemos tener en cuenta a los motivos que les impulsaron a cooperar con los japoneses en el establecimiento de la administración. Algunos, quizás lo hicieron en virtud de la naturaleza cívica de las órdenes militares que les infundió temor por su seguridad personal y la de sus familias. Pero otros, los más, según quedó luego establecido, lo hicieron en su deseo de mantener la paz y el orden públicos y a promover el bienestar y la felicidad de los habitantes. Además, el Presidente Quzon y el General MacArthur habían dejado instrucciones minutos antes de su viaje a Corregidor. Hubo muchas cábelas sobre el cual habían sido estas instrucciones pero en el Colliers de 1 de Julio de 1944. Royel Arch - Gunnison, un periodista americano que estaba en Manila cuando los japoneses entraron en la ciudad, escribió:

En efecto, el General MacArthur y el Presidente Quzon, que también se embarcaba para Corregidor, dijo a Jorge Vargas y a los otros dirigentes filipinos que debían quedarse: "Siguen ustedes. Hagan lo mejor que puedan. Consuman cualquier convenio con esa gente. Procuren unida a Filipinas. Traten de proteger al pueblo

10 - Sentencia de 8 de Noviembre de 1942, p. 750, Official Gazette, Nov. 1.942

contra la brutalidad y la avaricia japonesa. Se verán precisados a adoptar decisiones difíciles. No hay más remedio; habrá que hacerlas. Haganlo por la Filipina futura."

Muchos de nuestros dirigentes se ajustaron a estas instrucciones y en repetidas ocasiones hubieron de adoptar actitudes y decisiones muy en consonancia con aquéllas, aun cuando - al hacer tal sabían que habrían de incurrir en la incomprensión cuando no la hostilidad de los propios filipinos y norteamericanos.

II. REPÚBLICA MANIKU O INTERRABELICA:

Desde el principio de la ocupación de Filipinas, los japoneses procuraron convencer a los filipinos que su misión era liberar a Filipinas de la opresión de los Estados Unidos e Inglaterra y que su intención era establecer bajo su caudillaje una "Esfera de Co-Prosperidad del Asia Mayor" para la felicidad y prosperidad de todas las naciones orientales. En su consecuencia, el Presidente Tojo, en 21 de Enero de 1942, declaró que a Filipinas se la concedería el honor de la independencia, a condición de que los filipinos cooperaran en el establecimiento de la referida Esfera. En 6 de Mayo de 1943, durante su visita a Filipinas, pronunció un discurso en el que dijo que - estaba convencido más que nunca de lo oportuna que era una - - pronta independencia de Filipinas. A su vuelta a Tokyo, en 16 de Junio de 1943, declaró ante la Dieta de Japón, que a Filipinas se la daría la independencia durante el año corriente.

Dos días después del discurso del Presidente Tojo en - el Parlamento, el Comandante en Jefe de las fuerzas japonesas

en Filipinas ordenó a los funcionarios filipinos que se prepararan por la independencia venidera. Hubo una convención en Manila bajo los auspicios de una Asociación llamada KALIBAPI. En esta reunión se eligieron 20 miembros de la Comisión Preparatoria para la Independencia. Después de mucho retraso y como consecuencia de la segunda visita del Presidente Tojo, quien ordenó a dicha comisión que diera cima a su tarea, la Constitución quedó terminada. La firmaron los miembros de la Comisión y tres días después la ratificaron los 117 delegados de KALIBAPI. Los miembros de la Comisión fueron: José Laurel, (Presidente); Ramón Avanceña (1er. Vice Pres.); Benigno Aquino, (2º Vice) Vargas; -- Alas, Sison, Alunan, Recto, Paredes, Yulo, Aguinaldo, Unson, -- Osías, Madrigal, Briones, Tirona, Nozas, Sabido, Alonto, Arranz(11

La Constitución de la República constaba de un Preámbulo y 12 artículos. Se escribió en dos idiomas; inglés y tagalog. La Constitución establecía una República de Filipinas con distribución tripartita de poderes: Ejecutivo--Presidente, Legislativo--Asamblea Nacional; y Judicial--- Tribunal Supremo.(12) -- Era transitoria en el sentido de que tendría efecto solamente durante la guerra. No estatuyó el puesto de Vice Presidente. En su último artículo declaraba que en un año a partir de la terminación de la guerra, el pueblo filipino podría por sufragio po-

11 - Gaceta Oficial, Junio de 1942, p. 547

12 - Por un análisis crítico véase, Aruego, José: Presidential Leadership under the Constitution of the Republic, Philippine Review, Manilán 1.944, p. 7-10.

pular, elegir delegados a una Convención Constitucional para redactar otra constitución. El articulado de los Derechos recalca más las obligaciones de los ciudadanos que sus fueros constitucionales.

Después de la ratificación de la Constitución, se dieron otros pasos para la inauguración de la República. Las "Elecciones" de los delegados a la Asamblea Nacional se celebraron en 23 de Septiembre de 1943; en la sesión inaugural de la misma. El Sr. Benigno Aquino fue elegido Espiquer. Poco más tarde esta Asamblea eligió Presidente de la República al Sr. José P. Laurel.

En 14 de Octubre de 1943, la República fue inaugurada en Manila en medio de ceremonias solemnes. La nueva República fue reconocida por varias naciones pertenecientes al "eje" tales como Japón, China(Manking), Manchukuo, Alemania, Italia, Burma, - Croacia, Tailandia, Slovakia, Hungría, y Bulgaria. Una embajada japonesa fue establecida en Manila, y a su vez, la República estableció la suya en Tokyo con el Sr. Jorge Vargas como embajador.

El primer tratado concluido por la República fue el pacto de Alianza entre Filipinas y Japón, que se firmó en el Palacio de Malacañan el mismo día de la inauguración de la "República". El texto de este pacto fue preparado en Tokyo. Disponía la cooperación política, económica, y militar entre Japón y Filipinas, (13) Conviene notar que la cooperación militar se extendería solamente cuando la exigiera la defensa de la integridad te

territorial y independencia de Filipinas.(14)

El establecimiento de la República formaba parte del programa de los japoneses para organizar un conjunto de países asiáticos al que se llamaría "La Esfera de Co-Prosperidad del Asia Mayor". La independencia de Filipinas así como las de Birmania e Indonesia, era parte integrante del plan japonés para la conquista de las naciones asiáticas. En prueba de esto, recordemos el "Memorial de Tanaka" en el que el Barón del mismo nombre, explicó claramente los sueños y las ambiciones de los japoneses en la conquista del mundo. Decía Tanaka en 1927(15) que para conquistar el mundo, Japón tenía que conquistar antes China, y para conquistar a ésta, debía posesionarse de Manchuria y Mongolia. Más tarde Japón tendría que luchar contra Rusia y aun contra los Estados Unidos. Para cubrir esas ambiciones, Japón adoptó el programa de invadir estos países, y después de algún tiempo concederles la independencia de tipo japonés, para luego firmar tratados de alianza con ellos. Esto resulta más evidente -- cuando se recuerda que el Ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Shigemitsu, declaró que había dos requisitos para ser miembros de la esfera de co-prosperidad, son, a saber, (1) la consecuencia de la soberanía y la independencia por medio de la liberación; y (2) el establecimiento del acuerdo y la cooperación -- a base de igualdad y reciprocidad; en otras palabras, la conclusión de pactos de alianzas.(16) el Prof. Matsushita, de la Oficina

14 - *ibid*, p. 85

15 - "The Tanaka Memorandum,"--International Politics, by Schuman

16 - Address by Foreign Minister Shigemitsu, Contemporary Japan, Vol. IX., 1945

na de Asuntos Exteriores de Japón, en un artículo(17) dice:

"The International Law as practiced by the democratic nations has merely enabled them to form a superficial union among themselves to procure individual profits. This is the reason why if some of them become involved in war, other allies have the option to remain neutral. There does not exist any provision for joint action or joint defence in their order which is indeed serious flaw. In order to preclude the possibility of such a noncollaboration, the principle of joint defence must be enforced to coordinate the defence activities of each nation of greater east Asia, thereby solidifying the life and living of the sphere itself.

In case a country included in greater East Asia is attacked or involved in hostilities with another country outside the sphere, all the remaining countries of the sphere, accepting such hostilities or attack as a direct menace to the safety of greater East Asia, must collaborate militarily with the attacked or involved partner with a view to restoring normalcy".

Aquí se ve la política de los japoneses en sus aventuras en el Extremo Oriente. Todo el plan que elaboraron para la conquista y el establecimiento de la Co-Prosperidad se hizo realidad en Filipinas. Y no había modo de resistirlo.

Sin embargo, si hacemos una comparación entre aquella República maniquí de Filipinas y las otras como Birmania, Indonesia, Nanking China, Siam, e Indochina, nos sorprenderá que éstas, inmediatamente después de ser inauguradas, declararon la guerra a los Aliados y firmaron un pacto de alianza militar, defensiva y ofensiva. En Filipinas, gracias al estadismo de los funcionarios filipinos, los japoneses no consiguieron la inmediata declaración de guerra contra los Aliados, no la cooperación militar activa con Japón en la prosecución de la guerra. En Birmania e Indonesia, los Japoneses obtuvieron los servicios

militares de su ejército para luchar activamente contra los - - aliados. Así, pues, el mayor logro de la República Maniquí de - Filipinas fué el haber evitado el reclutamiento de los filipi-- nos para servir en las fuerzas militares de los japoneses. De - hecho, la proclamación de un estado de guerra fué seguida inme-- diatamente de una salvedad por el Presidente Laurel en el senti-- do que ni un solo filipino sería reclutado para servir en el - ejército japonés. Esta es la mayor contribución del Presidente Laurel a la protección de sus compatriotas.

Contrario a los aviesos propósitos de los japoneses en la concesión de la independencia a Filipinas en vez de hacerse éste instrumento de los japoneses, se volvió un arma contra - - ellos. El establecimiento de la Republica no aligeró el sistema en el terreno práctico. Los dirigentes nuestros, desde el Presi-- dente hasta el último empleados, aprovechando la situación e in-- vocando la nueva soberanía, inmediatamente empezaron a registrar protestas contra los abusos y las barbaridades a que los japone-- ses se habían acostumbrado durante la administración militar. - Protestaron contra el empleo de los Filipinos en tareas milita-- res, como violación de los principios de los Reglamentos de La Haya; pidieron la libertad de los reclutados en el ejército y - la de los empleados civiles que después habían sido incorpora-- dos a servicios auxiliares militares. Protestaron también con-- tra incautación de las casas privadas para uso de los militares y el Presidente Laurel promulgó una amnistía en favor de los -- que habían sido presos por los Japoneses. Así, la República, -- consiguió aliviar en algo los sufrimientos de los filipinos ba-- jo el dominio de los japoneses.

En otras ramas, empero, no sirvió mucho. Así, de hecho la autoridad suprema continuó residiendo en las fuerzas japonesas y los japoneses insistieron en ponerse por encima de las leyes de la República, mientras los filipinos seguimos bajo el yugo militar. Los filipinos se convencieron mucho más de que la concesión de la independencia fue un engaño, y la protección si había alguna, era mínima contra los abusos y desmanes de los soldados japoneses. Vivíamos continuamente con el miedo de que cada día sería nuestro postrero en este mundo, porque a diario visitaban las casas la terrible Kempetai, que se llevaba a los vecinos sin que se supiera más de estos.

Durante esta época, los japoneses intensificaron su propaganda para ganarse la amistad y cooperación de los filipinos. Publicaron muchos artículos sobre la colaboración filipino-japonesa; se introdujo la enseñanza del idioma japonés, y en grandes carteles, se lucieron 'slogans' de cooperación tales como "Asia para los Asiáticos", "Filipinas para los filipinos". etc. También hubo una invasión cultural; poetas, artistas, músicos, profesores, becarios y científicos visitaron Manila. No obstante esto, la propaganda de los japoneses fracasó rotundamente ante el amor por la libertad que profesamos los Filipinos.

En las últimas etapas de la ocupación, el Comandante en Jefe japonés, estableció una organización que se llamó MAKAFILI(18), cuyos miembros eran en su mayoría conocidos pro-japoneses. Su objeto principal era luchar contra los americanos.

18 - Quiere decir- "La Liga Patriótica de los Filipinos.

En 22 de Diciembre de 1944, las fuerzas japonesas llevaron al Presidente Laurel y a su familia oficial a Baguio, pues los - - ejércitos fil-americanos estaban en las puertas de Manila. El - mismo Presidente Laurel y los otros oficiales, cuando la guerra en Filipinas tocaba a su fin, los Japoneses los trasladaron a - Tokyo en donde permanecieron hasta la conclusión de la guerra, en 15 de Agosto de 1945. Dos días después, el Presidente recibía la "República" de Filipinas.

III. EL GOBIERNO EN EXILIO:

El Gobierno de la Mancomunidad Filipina, representado - por el Presidente Quezon, el Ice-Presidente Osmeña, y los miembros del Gabinete según consejo y deseos del Presidente Roosevelt de los Estados Unidos, se trasladó a Washington, en donde funcionó desde el 13 de Mayo de 1942 hasta el 3 de Octubre de - 1944. La familia oficial de este gobierno se componía de los siguientes: El Presidente Quezon, El Ice-Presidente Osmeña; el Coronel Andres Soriano, Secretario de Hacienda; el Sr. Joaquin -- Elizalde, Comisionado Residente; el Gen. Basilio Valdéz, Secretario de Defensa, y Sr. Jaime Hernandez, Intendente General.

En 14 de Junio de 1942, la Mancomunidad Filipina se hizo miembro de las Naciones Unidas. Como consecuencia de esto, - asumió todos los derechos y privilegios de una nación virtualmente independiente. Se le concedió también un puesto en el Consejo de Guerra del Pacífico y se le invitó a participar en varias conferencias internacionales.

La mayor función de este gobierno fue insistir en la inmediata liberación de Filipinas y enfocar la atención del pue--

blo americano en la suerte del sufrido pueblo filipino. El Presidente Quezon por su parte anunció varios discursos ante el -- Congreso de los Estados Unidos en pro de nuestra causa. Como -- prueba de que este gobierno funcionaba en el exilio, ahí estan las proclamas y los decretos para el reclutamiento de los filipinos residentes en Estados Unidos, para tomar parte en la liberación de Filipinas. Como consecuencia de esto, se pudo organizar un ejército de 100.000 soldados filipinos. También exigió y recaudó contribuciones para la manutención y funcionamiento del mismo gobierno.

En 1º de Agosto de 1944, el Presidente Quezon falleció y el Vice-Presidente Osmena le sucedió en el cargo de Presidente que le ocupó hasta la liberación de Filipinas y el establecimiento de la actual Republica en 1946.

IV. LA LIBERACION

En los últimos meses del año de 1944, la guerra con el Japón comenzó a serle adversas. El preludio de la liberación de Filipinas ocurrió cuando los aviones americanos comenzaron a volar a Filipinas y bombardearon los objetivos militares en la -- Provincia de Davao. En 21 de Septiembre de 1944, los mismos aviones atacaron los objetivos militares en Manila. Pero la liberación tuvo su único eficaz en Leyte en donde el General MacArthur cumplió su promesa de regresar a Filipinas. Esto abrió el camino para la liberación completa de Filipinas. Tres días después de la llegada de las fuerzas americanas en Leyte, la Mancomunidad Filipinas quedó restaurada bajo la presidencia del Sr. Osmena. (19)

El General MacArthur continuó sus ataques en casi todas las islas que componen el archipiélago y en 4 de Febrero de 1945 las fuerzas americanas entraron en Manila dando comienzo a cruenta batalla que terminó en 23 del mismo mes después de durísimo combate en la porción antigua de la ciudad, en donde los japoneses se habían atrincherado a la desesperada. La liberación completa y total de Filipinas tuvo lugar en 5 de Julio de 1945 según anuncio oficial del MacArthur.

V. LA MANCOMUNIDAD RESTAURADA:

Hemos dicho que inmediatamente después de la llegada de las fuerzas liberadoras, el General MacArthur declaró la restauración de la Mancomunidad Filipina. De aquí, empezó la ardua tarea de rehabilitación y reconstrucción del país, que había sido devastada por la guerra. El Presidente Osmeña restableció los organismos gubernamentales de antes de la guerra y creó otros nuevos para satisfacer las exigencias de aquel entonces. Instauró organizaciones y asociaciones de rehabilitación y distribución de provisiones; restableció los gobiernos provinciales y municipales; se abrieron las universidades y los colegios; se procuró en lo posible rehabilitar las industrias, el comercio, los transportes.

En 9 de Junio de 1945, el primer Congreso de Filipinas convocó por primera vez. Este Congreso promulgó varias leyes sobre la rehabilitación y reconstrucción de Filipinas. Las últimas

19 - Véase el apéndice, re: Proclamación del General MacArthur sobre la restauración de la Mancomunidad Filipina, Gaceta Oficial, Mayo, 1945, Vol. 41, No 2, p. 147-48

elecciones de la Mancomunidad tuvieron lugar en 23 de Abril de 1946, en las que el General Manuel Roxas y el Senador Elpidio Quirino fueron elegidos Presidente y Vice-Presidente respectivamente.

Antes de abordar la exposición de los sucesos de esta época, es necesario explicar el carácter peculiar de la Mancomunidad de Filipinas. Este gobierno fué creado por la ley de "Tydings McDuffie de 1934", por la que se disponía un periodo transitorio de 10 años previo a la concesión de la independencia. Según sus disposiciones, se establecería una Mancomunidad sujeta a una Constitución redactada por una Convención Constitucional cuyos miembros serían elegidos por el pueblo. En 4 de Julio de 1946, cuando expiraba el período de transición, la independencia de Filipinas sería proclamada y se establecería la República. Según esta ley, durante el período de 10 años de transición, Filipinas continuaría como territorio americano. Todos los ciudadanos y funcionarios filipinos deberían lealtad a los Estados Unidos. El Presidente norteamericano podría suspender cualquier ley, contrato, u orden ejecutiva del Gobierno de la Mancomunidad filipina. Todas las leyes promulgadas por el Congreso de la Mancomunidad y que se refieran a la moneda, el comercio exterior, y la inmigración, debían ser sometidas al Presidente de los Estados Unidos para su aprobación. Los asuntos exteriores de Filipinas, quedaban bajo la supervisión directa y el control de los Estados Unidos. El Tribunal Supremo norteamericano se reservaba la autoridad de tomar en casación causas importantes decididas por el Tribunal Supremo de Filipinas, incluyendo aquellas que perteneciesen a cuestiones sobre la constitución. Con estas limitaciones se estableció la Mancomunidad Fili

pina. Y este es el mismo gobierno que los japoneses expulsaron y que después de la liberación regresó para restablecer su autoridad dentro del país. Este Gobierno filipino no tenía soberanía absoluta dentro del país, por lo que el gobierno de los Estados Unidos ejercía su soberanía directa y los ciudadanos le debían allegiance. Este carácter particular de Filipinas hace de su caso el más peculiar de entre todas las naciones en que se dieron las mismas circunstancias de la ocupación enemiga.

Después de la liberación de Filipinas, el General MacArthur en cumplimiento de las directivas del Presidente Roosevelt en 1943 que disponía que algunos filipinos deberían ser excluidos de puestos de influencia en la vida política y económica del país promulgó la consiguiente proclamación en 29 de Diciembre de 1944 reteniendo a esos filipinos privados de la libertad mientras durase la guerra. En virtud de esta proclamación, la mayoría de los filipinos que habían ocupado puestos durante la ocupación, fueron arrestados y detenidos hasta el fin de la guerra. Uno de los primeros actos del gobierno restaurado fue la creación de un Tribunal que llevó el nombre de "Tribunal del Pueblo" para juzgar a los filipinos procesados por haber colaborado con los japoneses durante la ocupación. Se dividieron a los colaboracionistas en dos clases: los políticos - - - o sea los que sirvieron y ocuparon puestos en el gobierno de ocupación y en el de la República Maniquí, y los económicos ----- es decir los que se dedicaron al negocio de compra y venta de mercancías bélicas aprovechando la oportunidad para enriquecerse a costa del pueblo, favoreciendo al enemigo.

Ahora bien, importa considerar las maniobras políticas -

que hicieron posible las acusaciones contra nuestros colaboracionistas políticos. Notemos que la Mancomunidad Filipina despendía directamente del Departamento de lo Interior norteamericano, cuyo Secretario en aquel entonces era Sr. Harold Ickes. Esta ardía en deseos de castigar a todos los colaboracionistas, y para conseguirlo estaba dispuesto a crear Cortes Especiales, con jueces suyos para juzgarles. Así dió a entender en la siguiente carta - dirigida al Presidente Osmeña en 11 de Septiembre de 1945, que - citamos en su original:

Washington, D.C.
September 11, 1945

Hon. Sergio Osmeña
President of the Philippines
Manila

"Both official and press reports indicate that a substantial number of persons who adhered to the enemy and gave him aid and comfort through their service in -- the puppet government during the invasion are now holding important offices in various branches of the Commonwealth Government including the judiciary. I am informed that you intend to release numerous persons against whom evidence was collected by the United States Army. Your attention is invited to the statement of President Roosevelt on June 29, 1944, that those who have collaborated with -- the enemy must be removed from authority and influence -- over the political and economic life of the country. It was intended that this statement would serve as a guide to the policy of the Commonwealth and that the Commonwealth should find means of effectively investigating charges and speedily trying the offenders before the court or tribunals composed of judges of unquestioned loyalty. I deem it essential that this task be completed before the holding of the next Commonwealth Elections and I would call the attention of your government to the probable reluctance with which funds may be appropriated for the relief rehabilitation and support of the Commonwealth so

verment and if it becomes generally believed that the government has failed diligently and firmly to convict and punish those guilty of collaboration."

HAROLD L. ICKES
Secretary of the Interior"

Por lo que vemos arriba, la cuestión del colaboracionismo en Filipinas no se debió a la voluntad del pueblo filipino de juzgar los que ocuparon puestos durante la ocupación. Fue motivado por América en su deseo de eliminar a ciertas personalidades de la vida política de la nación filipina. Por esto, parece que el colaboracionismo filipino no pertenece a este trabajo ya que se trata de asuntos políticos más que jurídicos. Señalemos que los Estados Unidos para conseguir su objetivo, llegó al punto de amenazar al gobierno de la Mancomunidad con retirarle toda ayuda a reconstrucción de los daños causados por la guerra, de la que ningún ciudadano filipino tenía la culpa. Los Estados Unidos moral y legalmente estaba obligado a ayudar la reconstrucción de Filipinas, y exigir para esto las condiciones citadas es una gran injusticia contra el pueblo filipino.

Este deseo de los funcionarios americanos, no se realizó empero, a la benevolencia y gran comprensión del General MacArthur y su amistad con el Presidente Roos. El Tribunal del Pueblo se organizó por el Congreso más bien por cumplir con los deseos del Secretario del Interior, aun cuando todos los esfuerzos de éste para llegar a su objetivo fueron frustrados. Una prueba de este fracaso es éste: el Secretario Ickes, inmediatamente después de la terminación de la guerra, pidió la entrega de los fi-

lipinos que estaban bajo la detención militar del General MacArthur. Este, para evitar consecuencias graves, no permitió esa entrega de los funcionarios de la Mancomunidad, alegando que las necesidades militares hacían imposible su transferencia a la custodia de las autoridades civiles. Esto obedecía el plan del Presidente Foxas para impedir que el Secretario Ickes lograse sus deseos. Esta combinación entre el Presidente Foxas y el General MacArthur, fue una victoria para el pueblo filipino. Solamente cinco días después de la inauguración de la República, el General MacArthur entregó los prisioneros a las autoridades de la nueva República. De esta forma quedaban libres de las manos del Secretario del Interior porque con la declaración de la independencia los Estados Unidos no tenían ya más jurisdicción ni control sobre los asuntos de Filipinas.

VI. LA REPUBLICA

En la fecha histórica de 4 de Julio de 1946, nació la nueva República de Filipinas, con la proclamación de su independencia en cumplimiento de las promesas de los Estados Unidos de concederle al pueblo filipino una vez que estuviese preparado para gobernar su propio país. Estas promesas se habían encarnado en medidas legislativas del Congreso de los Estados Unidos como la ley "Jones" de 1916, la de "Tydings MacDuffie" de 1934 y la Resolución Conjunta de 29 de Junio de 1944, que autorizaba al Presidente Norteamericano a que proclamase la independencia de Filipinas en la fecha indicada (véase apéndice). Este momento histórico, presenciado por representantes de casi todas las naciones, marcó la culminación de siglos de esfuerzos del pueblo filipino por la libertad política y fue producto de los hermosos

sueños de sus héroes y mártires.

Nunca en la historia del mundo nació una República con problemas tan grandisimos como la República de Filipinas. Surgió de las cenizas de la guerra. Los bárbaros invasores habían asolado la tierra, dejando a su paso ciudades y pueblos destruidos y quemados, campiñas y fábricas arruinadas, caminos y puentes estropeados, la industria y el comercio desquiciados y miles de víctimas. Por consiguiente, la rehabilitación del país era el primer problema capital de la nueva República. Según las estadísticas, las pérdidas en Filipinas por causa de la guerra, llegaron a la increíble cifra de 8,079,624,00. El Número de personas muertas en la guerra fué de 1,111,938.(20)

Había otros problemas aparte del de la rehabilitación económica, como era el de la rehabilitación cultural -- restablecimiento de escuelas y universidades; el de la pobreza económica del gobierno; el del mantenimiento de la paz y el orden públicos, y entre éstos estaba el gran problema que llegó a suscitar la cuestión del colaboracionismo. Los juicios contra estos colaboracionistas cobraron auge cuando llegaron los mayores presuntos colaboracionistas, empezando por el Dr. Laurel, que venían del Japón. Fué en esta época, cuando un jurista filipino, D. Claro M. Recto, antiguo magistrado del Tribunal Supremo de Fi

20 - Informe 7º y final del Comisionado de los Estados Unidos a Filipinas, que abarca el plazo de 14 de septiembre de 1945 a 4 de Julio de 1946, Washington, D.C., 1047, p. 20; También el Texto de los Hallazgos del Comité Araneta sobre el asunto de las Reparaciones, 16 de Junio de 1951; The Manila Times, 7 de Julio de 1.951.

lipinas y Senador, tomando la defensa de los colaboracionistas, suscitó la cuestión del cambio de soberanía en la nueva República. Elevó al Tribunal Supremo una causa por vía de prueba que dominaba la causa de "Anastacio Laurel c. Eriberto Misa", en la -- que se pedía el recurso de habeas corpus ya que el encausado debía tenerse por inocente del delito de traición. En esta causa, la cuestión de la soberanía y allegiance suspendidas se ventiló también pero ya no decimos mas sobre esto, porque de él hemos -- tratado en los capítulos anteriores. Con el advenimiento de la -- República, surgió el cambio de soberanía. Ahora bien; las querrelas contra los colaboracionistas se basaban en el Artículo 114 del Código Penal de Filipinas que dispone: "La traición de comete por cualquiera persona que debiendo allegiance a los Estados Unidos o al Gobierno de Filipinas y no siendo extranjero, combate a éstos o se adhiera a sus enemigos, dándole ayuda y aliento dentro de Filipinas o en cualquiera otra parte." El Sr. Pecto, -- opinaba que en virtud del cambio de soberanía con la proclamación de la independencia de Filipinas y el establecimiento de la República, este citado Artículo del Código Penal que castiga el delito de traición, --- del cual es elemento esencial la violación -- de la allegiance a los Estados Unidos y al Gobierno de Filipinas -- -- fué abrogado y cesó en su vigencia. Esta cuestión jurídico -- hace del caso de Filipinas algo singular y peculiar en comparación con otros los de otras naciones que también fueron ocupadas por los enemigos. Filipinas, cuando estaba bajo el yugo de los -- japoneses, no era una nación independiente desde el punto de vista del Derecho Internacional. Era una dependencia de los Estados Unidos cuya soberanía era la que regía dentro del territorio. El

gobierno filipino expulsado por los ocupantes y que luego volvió era un gobierno testafierro con capacidad de mandatario del verdadero soberano, o sea los Estados Unidos. El Gobierno de Mancomunidad no tenía autoridad absoluta dentro del país, sino que la tenía mediatizada por la ley que la dió existencia. Por causa de este cambio de soberanía, todas las leyes políticas del antiguo soberano, cesan en su efecto y vigencia dentro del país a menos que el nuevo soberano las retenga. Como la ley de traición es política, cesar también en su vigencia. Así, pues, como quiera que la traición es esencialmente un delito que consiste en la violación de la allegiance al soberano, la ausencia de este soberano, en nuestro caso, Los Estados Unidos -- inevitablemente trae consigo la abrogación de la ley que castiga la traición, porque ya no hay soberano contra el cual, según las disposiciones de aquella ley, el delito podría cometerse. Hay una incompatibilidad -- esencial entre la allegiance a los Estados Unidos y la que se debe al nuevo Estado Filipino. Nuestra ley de traición, fundada en la allegiance a un poder extranjero -- riñe con el nuevo carácter político de la República. De manera que, como el constituirse la República, no hay allegiance que se deba a los Estados Unidos por los ciudadanos Filipinos, es absurdo hablar de violación de aquella allegiance que pueda constituir traición.

Es elemental en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que en cada causa, debe haber una parte agraviada y ofendida por los actos delictivos imputados al acusado. Esto, es verdad tanto en los delitos privados como en los públicos. En estos últimos, el proceso criminal debe iniciarlo el Ministerio Fiscal en nombre -- del Estado, de la sociedad, pues el fundamento y fin de la justí

cia penal radica en la defensa social. Ahora bien, la traición es un delito contra el Estado, contra el soberano a quien debe fidelidad el acusado en el momento de la comisión del delito y el querellarle es una manifestación de esa soberanía ofendida.

En el caso de Filipinas, durante la ocupación japonesa, cuando presuntamente se cometieron los actos imputados a los acusados, aquel país, como hemos dicho antes, no era todavía un Estado soberano, pues la soberanía residía en los Estados Unidos de América. Filipinas, se hizo soberano solamente cuando consiguió su independencia en 4 de Julio de 1946. De manera que los actos supuestamente delictivos cometidos por los acusados durante la ocupación bélica de Filipinas se dirigían contra la soberanía americana.

Cuando Filipinas consiguió su independencia y se hizo Estado soberano por propio derecho, con razón se presuntaba el Sr. Pecto: ¿Puede legalmente procesar un soberano a una persona por actos cometidos contra otro soberano? En otras palabras, ¿puede legalmente el Estado Filipino, en nombre del pueblo de Filipinas querellar a unos acusados por haber sido desleales a la soberanía americana?

Se dice en la disposición del Código Penal de Filipinas que castiga el delito de traición refiere no solamente a los actos de infidelidad al gobierno americano sino también a los dirigidos contra el gobierno de la Mancomunidad Filipinas, que es el antecesor del gobierno de la República. Añádese además, que Japón fué tan enemigo de los Estados Unidos como del pueblo filipino. Extra-jurídicamente hablando, no hay cuestión sobre esto. Pero en el ámbito jurídico, Filipinas no fué enemiga de los Japone

ses técnica y legalmente. No declaró la guerra contra los Japoneses. Fueron los Estados Unidos que declararon la guerra y Filipinas, como una dependencia de aquel país, se vió envuelta en la guerra. En realidad, antes de 4 de Julio de 1946, los ciudadanos filipinos, incluyendo sus funcionarios públicos, según la ley de "Tydings MacDuffie" de 1934, debían allegiance a la soberanía -- americana, la cual ejercía dominio y supervisión absoluta en muchos asuntos de Filipinas. El delito de traición imputado a los acusados no solamente exige haber ayudado al enemigo, sino que -- requiere esencialmente, que el reo, al ayudar al enemigo, se adhiera a él libre y espontáneamente, volviéndose infiel e desleal a su soberano, que, en el caso de Filipinas, eran los Estados -- Unidos.

Por todo lo expuesto, es ineludible concluir que después del 4 de Julio de 1946, cuando se hizo independencia Filipinas, el Gobierno de la República, como nuevo soberano, ya no podía -- procesar a los que habían sido desleales a la anterior soberanía americana.

Desgraciadamente el Tribunal Supremo de Filipinas, en la resolución de este punto no aprobó estas discusiones. Negó la petición por habeas corpus alegando que la Mancomunidad Filipina era un gobierno soberano, aunque no absoluto, sino sujeto a algunas limitaciones impuestas por la ley "Tydings MacDuffie" de -- 1934, y reconocido como tal no solamente por el Congreso de los Estados Unidos sino también por el Departamento Ejecutivo Norteamericano como lo prueban las palabras del Presidente Roosevelt -- al decir que los Estados Unidos en la práctica, reconocían a Filipinas como poseedora de un gobierno igual al de los otros paí-

ses independientes.(21) No insistiremos en este punto, bastándonos hacer notar que las actuaciones en el terreno práctico, de los Estados Unidos obedecían a las exigencias propagandísticas del momento al margen de las normas jurídicas. Supones soberanía en colectividades que no sean Estados de derecho, podrá ser buen recurso de propaganda; pero no será actuación jurídica válida.

Por mucho tiempo no hubo sentencia condenatoria en el -- Tribunal de Pueblo que juzgaba a los acusados de haber colaborado con el enemigo. Los procesos se volvían largos y tendidos, -- sin ninguna decisión de condena. Por otra parte, hubo muchos absoluciones de procesados. Parecía que la cuestión del colaboracionismo no tendría fin y por eso, el Presidente Roxas, manifestando sus excelentes dotes de estadista, después de casi dos -- años de existencia de la República, para poner fin a esta cuestión, promulgó un decreto de amnistía a todos los procesados o -- que fueran a ser procesados por haber colaborado política o económicamente con el enemigo durante la ocupación.(22)

VII. DICTAMEN NACIONAL:

Hechos posteriores vinieron a indicar que el buen sentido nacional ratificado en un todo la actuación del Presidente Roxas en esta cuestión, toda vez que en las elecciones de los años inmediatos a la independencia, merecieron el voto popular los -- candidatos que antes habían sido estigmatizados de con el sambenito de "colaboradores", siendo el primero de ellos el propio Jo

sé P. Laurel que consiguió un escaño en nuestro Senado con abrumadora mayoría. Esta es una de las señaladas ocasiones en que, sin irreverencia alguna, cabe suscribir la verdad de aquel decir universal: "Vox Populi, vox dei", y añadiríamos: "Vox legis, vox justitiae".

CAPITULO VII

LOS CASOS DE PETAIN, LAVAL Y QUISLING.

I.- EL CASO DE PETAIN:

Petain fué Jefe del Estado de la Francia no ocupada, con sede en Vichy. A pesar de hecho que esta Francia bajo los dictados del gobierno alemán, sin embargo no esa, según los Reglamentos de La Haya, un territorio ocupado militarmente -- por el enemigo; de manera que, hablando estrictamente, los -- principios y reglas respecto a territorios ocupados no le -- eran aplicables, ni tampoco a las relaciones legales entre -- los habitantes de aquel territorio y el ocupante militar.

El régimen de Vichy fué reconocido por otros países co- mo los Estados Unidos, Gran Bretaña, los de la Mancomunidad Británica, y los poderes pertenecientes al Eje, todo los cua- les mantuvieron relaciones normales con él mismo, ante el -- cual tenían representantes diplomáticos acreditados y reci- -- bían a los de ese gobierno en sus respectivas países. (1).

Entre los hechos históricos en que se fundaban la acu- sación contra Petain por traición se contaban los siguientes :

1.- El haber solicitado que el Generalísimo Franco ac- tuara de mediador de la paz.

2.- El que los dirigentes de Francia que habían esta- da siempre a favor de la rendición a los Nazis fueron nombra- dos miembros por Petain. Así, Weygand- - Ministro de Defensa; Chautemps - - Vice Presidente; Jean Ybarnegaray - Vice Presi- dente de la Croix de Foe, una organización fascista - - miem- bro del Gabinete.

1 - Waverly Root, Secret History of War, Vol. II. p. 195-96.

3.- Por muchos años se sospechaba que Petain patrocinaba a la Croix de Fue. Los documentos presentados parecían - revelar que el nombre de Petain, con el Laval, se contaba entre los aquellos que ocasionaron el escándolo fascista de los "Cagoulards" (Encapuchados" durante la Jefatura del Gobierno de Cahautemps. El objetivo de la organización era el de reemplazar la República con una dictadura totalitaria, según se decía.

4.- Desde un principio se esforzó porque Francia reconociera el gobierno del Generalísimo Franco.

5.- En 8 de Julio de 1.940 se implantó un sistema completamente totalitario.

Los elementos de Francia de sentimientos y afiliaciones pro-Nazi, habiendo sostenido relaciones comerciales e ideológicas con los alemanes, cuyos esfuerzos consiguieron la aceptación del Armisticio, y que después fueron nombrados por Petain funcionarios del Gobierno de Vichy, fueron los siguientes:

A. Los Industriales: Comité de Forges; Comites des Houilleres.

Relacionados con los Vickers de Inglaterra; Los Krupp de Alemania; los Schneider-Creusot de Francia.

La cooperación entre las industrias francesas y alemana data de medio siglo por lo menos y sus resultados se vieron en la primera guerra mundial con la división de las fábricas de armamentos, cuyas propiedades fueron divididas entre ambos bandos beligerantes. Esta cooperación se reanudo después de aquella guerra mundial. (2)

Philippine Barres, escritos francés de mucha fama, escribió después del armisticio que "los funcionarios de Vichy- no son personalidades imbéciles quienes han sucumbido ante -- las fuerzas alemanas como vencidos oprimidos. Son responsa- bles de una cooperación bien fraguada que antecede con macho- a la Francia de Vichy. Son partidarios de un acabado sistema- político, económico, militar e intelectual. Son agentes de un plan y no víctimas de un accidente x x x. Esta empresa no es- otra que la subordinación completa de Francia a Alemania, por medio de una serie de medidas, entre ellos la fusión de los - industriales de los dos países. Se publicó en Vichy en 1.940, no bajo la coacción de la catástrofe, sino aprovechando la co- yuntura del desastre x x x x ".

Entre los funcionarios mencionados por Barres están:

- 1.- Pierre Pucheu.- Primer secretario de la Produ- -
cción Industrial y Ministro del Interior; Presi-
dente del Comité Siderúrgico - -
Franco-Alemán; miembro de Croix
de Feu.
- 2.- François Lehideux.- Ministro de Producción; Dele-
gado de Vichy a la Comisión de Co-
laboración Franco-Alemana; Direc-
tor de Renault, que fabricaba tan-
ques para los alemanes.
- 3.- Lucien Romier.- Ministro de Estado; Director del-
órgano del Comité de Forges.
- 4.- Jacques Barnaud.- Consejero Financiero del Comité
de Forges; Delegado a la Comisión
de Colaboración Industrial.
- 5.- François Poncet.- Director del Boletín Económico-
y Financiero; Embajador de Vichy-
en Berlín.

B. LOS FINANCIEROS:

Hemos visto que el ligamen más fuerte entre Alemania
y los elementos franceses que estaban conformes con el tipo-

de gobierno de los Nazis, fué suministrado por las industrias pesadas. Para trazar esta continuidad entre la colaboración - antes de la guerra y la post-armiscia, cuyo servicio más fructífero fué el de ocasionar la quiebra del negocio francés, es necesario mirar más allá de los industriales y financieros.(3)

- 1.- Barnaud.- Inspector de Hacienda, promovido al cargo de Ministro de Estado;
- 2.- Ives Bouthillier.- Ministro de Economía Nacional.
- 3.- Henry Du Moulin de la Barthete.- Jefe del Gabinete Civil de Vichy;
- 4.- Ives Breart de Boisanger.- Vice Gobernador del -- Banco de Hacienda, nombrado gobernador después del Armisticio;
- 5.- Jacques Guerard.- Arregló la derrota de Indochina a favor de los japoneses.
- 6.- Count Ferdinand de Brion.- Embajador de Vichy en la Francia ocupada y Escritor pro-Eje-- en L'Information.

C. PERIOLICOS Y PERIODISTAS PRO NAZIS:

- 1.- Le Matin.- Edición de París de Deutscher- Tagblatt.
- 2.- Groingoire.
- 3.- Je suis Partout.- Subvencionado por los Nazis.
- 4.- Le Temps y Figaro.
 - a. Paul Perdonnet.- El Lord Haw-Haw francés.
 - b. Jacques Bonoit-Mechin.- Secretario del Estado-- de Vichy.
 - c. Paul Marion.- Secretario General de Información

D. LOS POLITICOS:

- 1.- Pierre Eitein Flandin.- que se exaltó con el golpe de Hitler en Czechoslovakia, sirvió en las industrias francesas ligadas a los Nazis;
- 2.- Georges Bonnet.

- 3.- Alsatian Herman Gregoire.- Oficial del Ejército - Alemán en abril, 1.94; fué naturalizado francés después de 1.918; Consejero legal de la - Embajada de los Nazis en París; Co-fundador - del partido Nazi.

E. LOS CAGOUULARDS:

Esta palabra Cagoulard es una contracción de Croix-de Feu, cuyo jefe fascista era el Coronel François de la Rocque.

- 1.- Henry Du Moilin de la Barthete.- Jefe del Gabinete Civil de Pétain.
- 2.- Dr. Menetrel.- Médico personal de Pétain.
- 3.- Henry Martin.- Médico personal de Pétain y colaborador de Laval.
- 4.- Pierre Bucheu.
- 5.- Col. Lacau, elegido por Pétain como Jefe de la Legión Francesa.
- 6.- Paul Marion.- Secretario de Información de Pétain

EL PROCESO DE PETAIN:

El proceso de Pétain, Mariscal de Francia, y héroe -- idolatrado de la primera guerra mundial, provocará como una -- constante polémica en las generaciones venideras. Ciertamente no pertenece a esta generación mucho menos a la francesa tan -- de cerca afectada por los hechos de esta guerra pasada, el -- emitir un justo fallo en aquel célebre proceso ni sobre los -- méritos de la cuse de Pétain.

No vamos a abordar la exposición de los aspectos jurídicos que entraña el proceso de Pétain. Baste hacer una comparación entre el Caso de Francia y el de Filipinas. Como hemos dicho antes, son enteramente distintas. Pétain, era un Jefe -- de un Estado, que tenía su capital en Vichy. Este Estado, or-

ganizado después del armisticio fué reconocido por varios países, entre ellos, los Estados Unidos e Inglaterra. Desde todos los aspectos jurídicos, no tiene apenas semejanza con el caso de Filipinas ya que, de hecho y de derecho esa Francia no estaba ocupada por el enemigo. Los alemanes dejaron esa parte de Francia completamente libre y Pétain podía en ella ejercer su autoridad si bien la influencia alemana se notaba en seguida. No tenemos que hablar sobre este último aspecto porque pertenece al terreno político y no al jurídico. Lo que únicamente tenemos que saber es que Vichy no estaba ocupado por los enemigos; de manera que las leyes de guerra, especialmente aquéllas que pertenecen a la ocupación bélica, no tenían aplicación dentro del territorio en donde la autoridad del gobierno de Vichy reía. En cambio Filipinas estaba enteramente ocupada y todos los aspectos de la vida de sus habitantes estaban en manos del ocupante. Los habitantes no podían hacer nada salvo obedecer los mandatos bajo penas gravísimas si así no lo hacían. Por eso no habíamos citado antes el caso de Pétain en nuestro trabajo.

II. EL CASO DE LAVAL:

En la exposición del caso de la participación de Laval en el régimen del gobierno de Vichy de Francia después de su derrota en 1.940, tenemos que tener en cuenta como en la de Pétain, que este régimen representó aquella parte de Francia que no estaba ocupada por los alemanes. Fué un régimen reconocido por las grandes potencias que intercambiaron representantes diplomáticos.

En el "Current Biography" (5), leemos lo siguiente:

"What is known is that when Laval became Vice-President of France new authoritarian regime of July - 1.940, he stated that France is through being 'A humanitarian crusader for other nations' and will devote her efforts purely toward national reconstruction within the framework of a European block of nations'. -- Reynaud, Blum, Deladier were to be prosecuted and -- tried for responsibility for the war, all Popular -- Front personages eliminated from power. Since then -- his own position continued to be strengthened despite or perhaps because of, his continued parleys with German officials and Hitler himself. He is now to favor a National Socialist form of government in France".

Pero, aún antes de la guerra en Europa, Laval ya era conocido por sus sentimientos y actividades Pro-Nazis. El tratado de "Hoare-Laval" que cedió Etiopía a los Italianos fue una indicación. En el "Secret History of War (6) se dice por el autor que Laval trabajó por el acercamiento entre Francia y las dos potencias fascistas, Alemania e Italia. La política de Laval y Bonnet acusaba una aprobación del tipo de gobierno que había sido instalado en Italia y Alemania.

Como Laval se hizo Jefe del Estado de Francia en lugar de Pétain, y como proyectó y realizó su política pro-alemana, lo explica por Waverly Root en su obra, "Secret History of War", (7) así:

"The campaign for his restoration began in a curious fashion with a series of mysterious meetings between Laval and Marshall Pétain. The first of these meetings was arranged by the French Ambassador to the Germans in Paris Ferdinand de Brinnon. He told Pétain that Laval had wind of a plot against the personal safety of the Marshall and wanted to see him and warn him about it, This is confirmed by reports that Pétain also heard -- for the Germans had seen to it -- that police services which would report to the Marshall had picked up vague rumors that an attempt might be made on Pétain's life.

With some reluctance, the old Marshall thereupon

consented to see Laval again, but stipulated that the meeting should be kept secret. It was arranged that Pétain should slip out of Vichy and meet Laval in a hunting lodge which was the property of the latter.

To Pétain, Laval disclosed an alleged plot, which he said had the backing of the Germans, to get Pétain out of the way in order to form a government which he, Laval, had been asked to head. It would contain he -- said, Anatole de Monzie, Gaston Bergery, Georges Bonnet, Marcel Déat and Jacques Doriot -- a choice collection of traitors and turncoats as could well be imagined.

Laval represented himself as Pétain's friend, interested solely in saving him. His solution for Pétain's salvation was his cooperation in a new government, in which Laval would hold the real power. Pétain was to exercise only the formal functions of a chief of -- State, leaving the real administrative responsibility to Laval, who would also hold the foreign portfolio, and be charged with the sole responsibility for all relations with the Germans. Admiral Darlan was to remain Minister of Defense, but obviously his powers -- would be considerably curtailed in a government whose other members would probably be named almost entirely by Laval.

The initial meeting at which Laval put this before Marshal Pétain was followed by either of four -- others at Pétain's summer residence at the Pavillon de Sevigné, with Darlan present at one of them. During their course, Laval set forth a program of the -- most complete collaboration with the Germans, including surrendering the ships of the French Navy to the Nazis -- the ships only, without their crews, as the Germans were convinced that their only way they could take over the French fleet would be to get the French sailors off the boats. The Nazis were also to have access to the unoccupied zone and later to France's colonies.

Laval's plan to get the Army and Navy fighting -- for the Axis was not to attempt to force a declaration of war against Britain. It was simply to carry out what would be described as a simple police operation to regain control of French Colonies held by the Free French, notably Syria and French Equatorial Africa. But Syria was essential to the British, for the protection of the oil of the Middle East. French Equatorial Africa was essential to the United States; across its territory, American supplies moved to the -- fighting fronts. If the French Army or Navy moved -- against these points, therefore, they would necessarily find themselves fighting British and Americans, as well as Free French. And in the logical sequence of events, the French would find themselves automatica--

lly pitchforked backed into the war on the wrong side, as helplessly as the unfortunate Finns.

This was Laval's program. Let us see how he set about putting it into effect.

The second maneuver in which Laval had German aid was one of the most ignominious which a politician has ever used against the people he was governing. Shortly after Laval took over the power, a wave of sterner repression swept over the occupied zone. Reinhard Heydrich made his second visit to Paris, instituted an iron regime and ordered the execution of hostages in retaliation for acts of resistance. It seemed odd -- that this action should be taken at the very time when the return of Laval to power seemed to promise increased collaboration. What had promoted this sudden intensification of German severity?

The answer was that Laval himself had asked the Germans to subject occupied France to a harsher regime. His object was twofold: to get rid of the enemies of his policy of collaboration, and to put before his fellow-citizens a sample of the sort of treatment -- they could expect if they didn't collaborate.

In spite of the fact that Laval had no personal prejudice against the Jews, he signed, with his customary cynical opportunism, an infamous agreement with the Germans under which he promised to turn over to them the non-French Jews in the occupied zone, for deportation to Poland -- in other words, for execution. With characteristic trickiness Laval announced this to the country, not by saying: "I have agreed to turn over all foreign Jews to the Nazis," but through the formula, "I have succeeded in saving Jews from Deportation". (8).

III.- EL CASO DE QUISLING:

Quisling fue acusado y ejecutado por sus actividades -- como "quinta-columna" antes de la invasión de Noruega por los alemanes, por haberla planeado y acatado, y por los abusos y atrocidades que cometiera contra sus propios compatriotas -- cuando llegó a ser Jefe del Estado bajo los alemanes. Los siguientes datos dan una breve idea de sus relaciones con los Nazis alemanes:

1.- Fue Jefe de la "Nacional Samling" (Unión Nacional) con tendencia fascistas.

2.- Quisling llamó la atención de Hitler. Quisling empezó a ser muy amigo de Alfred Rosenberg, el "Filósofo" del Socialismo Nacional y asistió a varias conferencias de los Nazis en el extranjero. En julio de 1.937, hubo una conferencia de los emisarios de los Nazis en la Legación Alemana en Riga para discutir la teoría favorita del General Haushofer y la dominación por los Nazis del Báltico. Quisling representó a los Nazis de Noruega y ayudó Rosenberg, que fue presidente de la conferencia. Se dice que fue entonces cuando consiguió la promesa de Hitler de nombrarle Jefe del Estado de Noruega.

3.- Quisling estuvo en Berlín en 5 de abril de 1.940 , al parecer para ultimar detalles de la invasión de Noruega por los alemanes. Tres días después, los buques de los Nazis lograron burlar los fuertes noruegos y las unidades navales a lo largo del Fiordo de Oslo y consiguieron invadir Noruega con la ayuda de Quisling y sus simpatizadores. Las relaciones de Quisling con el ejército, como antiguo Ministro de Defensa, resultó valiosísimo a los Nazis. (9).

Un reportaje del Proceso de Quisling dice: (10)

"The most damaging of the whole batch of new German documents produced by the prosecution was a memorandum concerning Quisling's conversations with the German General Staff before Norway was invaded. The memorandum made these three main disclosure:

1.- Quisling advised the Germans to attack with airborne troops on three specified Norwegian fields.

2.- He told them, that it was vital to surprise --

King Haakon and the Norwegian government.

The diary of Alfred Rosenberg, then Director of the Nazi Foreign Policy Department, excerpts of which created a sensation yesterday was quoted by the chief prosecutor for these new revelations:

That the accused helped Germans by building up - an intelligence service along Norway's west coast and tried to have reliable men placed in every ship travelling along the coast; that he supplied the German -- command with a description of the heavy guns and torpedo stations protecting Oslo; that he advised them - exactly where roads could be cut off to prevent Norwegian troops from mobilizing against Germans".

Estas actividades de Quisling nos muestran al verdadero traidor contra su propia patria. Trabajó mucho para entregar su patria a las manos de sus enemigos. Su colaboración -- con los alemanes empezó mucho antes que la ocupación alemana. Es más, durante la ocupación, Quisling en vez de proteger a - sus conciudadanos, hizo todo lo contrario, cometiendo abusos contra sus propios compatriotas. Un ejemplo de sus abusos, lo constituye la persecución contra obispos de la Iglesia Noruega. En la obra de Waverly Root, (11) se dice:

"It was during his persecution of the Norwegian-Church that Quisling finally convinced his countrymen that he was insane - - not in any figurative sense, - but simply in the ordinary meaning of that word. One of the first occasions on which he betrayed himself -- was when he summoned Bishop Berggrav to the Royal Palace after his resignation, and finding the bishop un compromising, flew into an ungovernable fury during - which he threatened the churchmen with beheading.

Even more revealing was his insensate behaviour in his native village of Furesdal, where he spent a - short vacation. He drove straight to the home of pastor Otto Irgens, accompanied by an imposing escort of cars jammed with police and military men. There he -- staged an extraordinary scene. For several hours he - alternately shouted questions at the unfortunate minister and roared his indignation at the "gang of criminals", the Norwegian clergy.

He told Irgens the only reason he had not been shot was out of consideration for the village in which the Quisling Family had lived for 400, years, and in a final expolosition "dismissed" him and ordered that --- all his possessions should be taken away. The police-- rushed in and pillaged the house, taking even the -- change from the pastor's pocketbook and the preserves in the cellar, leaving Irgens and his wife nothing -- but clothes they had on. (Pastor Irgen's other clothes were worn late by Karl Flatland, whom Quisling--- appointed to take over Irgen's ministry and property. Flatland had a record of several convictions for -- thefts and tax frauds, and one term of confinement in an insane asylum).

Quisling spent most of the rest of his stay in -- the local sherriff's office, summoning farmer from -- the surrounding contryside one by one to threaten them for not joining his party.

The persecution complex which often goes with -- such mental disorders was also part of Quisling's make-up, and he spent \$60.000 on the defenses of his -- "northern Berchtesgaden" near Oslo -- though perhaps even a sane man would have felt the need for protection of his position.

In constant dread of assassination, Quisling was guarded constantly by 150 storm troopers, and when he was at home, the machine guns protecting his property-- were manned day and night. He never ate or drank anything until someone else had tasted it.

Gimle, his fortress home, was protected by anti-aircraft guns against air-attack, and had reinforced -- cement air raid shelter attached to it, to which Quisling hurried whenever the RAF appeared. The work of -- building this shelter was done by 200 men conscripted -- for the job, working in two twelve hour shifts. They-- also fitted up a small observatory on top of the house where Quisling, on nights when the RAF was not -- about, spent hours making astrological observations--.

Another job undertaken by Quisling with only indifferent success was the regimentation of school teachers, who were called upon to make their instruction-- accord with Nazi ideology. They were given their choice of joining Nazi lærersamfund, replacing the former teacher's union, or of losing their jobs. Of Norway's 10.500 school teachers, 98 per cent refused to -- join.

Quisling began to imprison or put into forced labor units all teachers who held out against his organization. To replace them, a two month training course--

se for teachers was organized at Koppant teachers College -- but only sixteen students enrolled. Head of this educational institution was Eyvind Strand, five times for vagrancy, who was saved from prison by a suspended sentence, the last time he came before -- the court only because the Nazi Supreme Court interfered in his favor. He taught religion at the Teacher's College, representing Quisling as a man to be revered with God, and conducting chapel services comprising reading from the Quisling's Book, "Quisling has Said", and the singing of the Nazi "Hird" song, the Norwegian equivalent of the Horst Wessel Lied. The struggle between Quisling and the teachers finally on December, 1. 1. 1942, in the closing of all schools in Norway. (12).

Este caso no es el de Filipinas, porque los que fueron procesados por colaboracionismo en nuestro país nunca habían tenido estas características en sus colaboración con el enemigo. Ella fue impulsada por el noble deseo de proteger a sus conciudadanos.

Conviene hacer resalta que el caso de Quisling nos brinda la prueba de nuestra aseveración de que, es tratándose de traidores indudables, existen medios legales para hacer pasar sobre ellos el rigor de la justicia, por lo que no hay lugar para los temores de algunos de que con nuestra teoría de la soberanía, y la "allegiance" suspendidas vendríamos a dar patente de libre actuación a los traidores.

CAPITULO VIII

RESUMEN DE LA TESIS Y CONCLUSION

I.- EPITOME DE LOS PRINCIPIOS DE LA LEY DE LAS NACIONES SOBRE LA OCUPACION BELICA:

A.- En Filipinas, los principios generalmente aceptados del Derecho Internacional forman parte de la legislación del país. (1) Los derechos políticos nose apoyan sobre meras doctrinas de las leyes municipales aplicables a transacciones ordinarias sino sobre los más generales principios de la ley de las naciones (2). Una medida del Congreso no debe interpretarse nunca con violación de la ley de las naciones si hubiese otra interpretación posible (3). El conjunto de leyes desarrollado conforme a los Reglamentos de La Haya de 1.907, aunque esencialmente internacional en su carácter y origen, es también local porque prevalece fundamentalmente en donde el ocupante ejerza su dominio (4).

B.- Entre las naciones civilizadas, la conducta de guerra está regulada por ciertas reglas establecidas que se llamaban leyes de guerra (5). Uno de los principios básicos que informan todas las reglas o leyes de guerra civilizada es el de la necesidad militar bajo el cual el beligerante está justificado en recurrir incluso a la fuerza para exigir la su misión completa del enemigo (6). El objeto de la guerra es realizar la sumisión completa del enemigo cuanto antes, por

1.- Constitución de Filipinas, Artículo II, inciso 3.

2.- *Shanks vs. Dupont*, 7 U.S. 666.

3.- Chief Justice Marshall in *Murray vs. Schooner*, 2 Cranch , 277.

4.- Hyde, *supra*, Vol. III, p. 1.897.

5.- US. Rules of Land Warfare of 1.940, Art. 1.

6.- US Rules of Land Warfare, Art. 4

medio de la violencia regulada (7). La necesidad militar justifica el recurrir a todas las medidas que sean indispensables para conseguir este objeto con tal que no estén prohibidas por las leyes y los usos de la guerra moderna. (8) Entre las medidas justificadas por la necesidad militar, está la de la apropiación de todo cuanto el país pueda suministrar para la subsistencia y seguridad del ejército (9).

C.- La Ocupación bélica presupone una invasión hostil, como resultado de la cual, el invasor sustituye su propia autoridad en lugar de la del gobierno legítimo (10). La autoridad del poder legítimo pasa a manos del ocupante (11). La ocupación bélica autoriza al enemigo el ejercicio de la soberanía de facto, dándole dominio civil mientras retenga la posesión militar; y los habitantes que se quedan y se someten, - deberán acogerse a las leyes del gobernador de facto y no del gobierno de jure que ha sido expulsado (12). Una serie de actos del ocupante deben ser respetados del estado ocupado sea sobre el territorio que ellos habían conquistado el ejercicio de la soberanía (13). El ocupante ejercer el poder soberano - en el territorio ocupado y tendrá derecho a aprovechar todas las ventajas posibles de la ocupación, a obligar a los habitantes a reconocer el status quo, y hacerlas que le abedexan, considerando sus relaciones con el soberano expulsado como sus pendidas temporalmente (14). El acto del ocupante sobre el te

-
- 7.- Ibid, Article 22.
8.- Ibid, Article 23.
9.- Ibid, Article 24.
10.- Ibid, Article 272.
11.- Reglamentos de La Haya de 1.907, Artículo 43.
12.- Black (1.909), Opinions of Attorney General, 140.
13.- A. Migliazza, L'Occupazione Bellica, Milano, 1.949, p.-
113.

territorio ocupado en cualquier forma que venga competente, sea un acto administrativo, ejecutivo o judicial, se concreta en el ejercicio de una facultad o en el cumplimiento de un deber atribuido del ordinamiento internacional (14a). El ocupante - militar es de todos modos, el poder soberano durante el período de la ocupación (15). Los habitantes deben una allegiance temporal al poder ocupante (16). Durante la ocupación militar el ejercicio por el ocupante de cualquier derecho de soberanía deberá tenerse por regular y legal aún en las consecuencias que afecten las relaciones privadas. (17) El ocupante le corresponde un derecho respecto al territorio, autónomo, aunque limitado en el tiempo, y que el ocupante lo ejerce por fuerza propia (17a). La allegiance de los habitantes a su antiguo gobierno está desplazada o suspendida temporalmente pero no destruida ni abrogada (18). En el fondo, los ingleses - como Lauterpacht, Keith, Wheaton y McNair, están de acuerdo no solamente con la doctrina de la allegiance suspendida sino también con la de la allegiance temporal. El poder del ocupante de ejercer los derechos de soberanía resulta de su poder - establecido y de la necesidad de mantener la paz y el orden -

14.- Fiore, *Diritto Int. Pubblico*, by Borchard, 1.919, Secs.- 1.545, 1.546, 1.547.

15.- Macworth, *Digest of Int. Law*. Vol. I, p. 156, 1.940.

16.- 67 *Corpus Juris*, 421; *US. vs. Haywar*, supra; *Leitensdorger vs. Webb*, supra, *US vs. Percheman*; *Dana's Wheaton* -- and *Boyd's Wheaton*; *Thirty Hogsheads of Sugar v. Boyles*, *Pres. Polk's Message*; *US vs. Rice* supra; *Fleming vs. Page* supra; *Shanks vs. Dupon*; *Colby*, supra, *Birkhimer*, supra.

17.- Fiore, *Dir. Int. Pub.*, 1.919, Sec. 1.560.

17a- *Marinoni, Della natura giuridica dell'occupazione bellica*, *R.D.I.*, 1.910, p. 243; *Wals, Volkerrecht Und Staatliches Recht*, 1.933, p. 211, 235.

18.- *Westlake, International Law*, supra; *Philimore, International Law*, supra, *Davis, Elements of International Law*, supra.

públicos, indispensables a ambos los habitantes y las fuerzas del ocupante (19). Todas las funciones del gobierno expulsado, legislativas, ejecutivas o administrativas, sean generales, - provinciales o locales cesan bajo la ocupación militar (20). El límite de la necesidad y aquello de la provisoriedad determinan la acción del ocupante en el campo legislativo. (20a) - El primer efecto de la ocupación militar es el rompimiento de las relaciones políticas formales de los habitantes y el establecimiento del nuevo poder político (21).

D.- La necesidad de un gobierno militar surge de la ausencia o incapacidad del gobierno legítimo para ejercer sus funciones públicas por razón de las operaciones bélicas (22). Llámese civil o militar, es un gobierno impuesto por la fuerza, y la legalidad de sus actos está determinada por las leyes de guerra, pudiendo ejercer todos los poderes que las leyes de guerra le conceden (23). El único poder organizado capaz de restaurar y mantener el orden es el del invasor (24). Un gobierno aunque sea por soldados hostiles es mejor que la carencia de todo gobierno (25). La existencia de la guerra no rompe de ninguna manera el vínculo de la sociedad ni prescinde del gobierno civil o la administración regular de las leyes, porque el orden tiene que mantenerse, los reglamentos de

19.- US Rules of Land Warfare, 1.940 Article 273.

20.- Ibid, Article 283.

21.- President Mackinley's Instructions, 1.898.

22.- US Rules, Article 281.

23.- Ibid, Article 284.

24.- US. vs. Viockleman, 92 U.S. 526; Davis, op. cit. p. 333.

25.- Colby, Occupation Under the Laws of War, Columbia Law Review, Vol. XXV, No. 7, November, 1.925.

ben continuar, los delitos deberán ser perseguidos, la transmisión de la propiedad deberá ser regulada como en tiempo de paz (26). La ley de la ocupación belica es un intento de sustituir el caos por laguna clase de orden por duro que fuese - (27). La autoridad y las reglas para el gobierno de un territorio ocupado se derivan directamente de las leyes de guerra, como están establecidas por los usos del mundo (28). El gobierno militar es un modo de mantener una conquista, ejercer una supervisión sobre el territorio hostil, y sujetar a los habitantes malquistados a la voluntad de una fuerza superior (29). El gobierno ocupante toma el lugar de la soberanía suspendida (30). Se intenga hacer dos servicios: 1.- Promover las operaciones militares del ejército del ocupante; 2.- Conservar la seguridad de la sociedad (31).

E.- La ley de las naciones reconoce que el ocupante militar de un territorio del enemigo tiene estos objetivos primordiales, que, por tanto deberán considerarse como legítimos y legales: proveer a la seguridad del ejército invasor y contribuir a su ayuda y eficiencia, y al éxito de sus operaciones (32), fortalecerse y debilitar al enemigo, (33) atender a la persecución franca de lo que sirva para molestar y subyugar al enemigo (34) proveer a la paz y el orden de la retaguardia de los ejércitos ocupante y al desarrollo de los -

26.- Horn vs. Jackart, 17nWallace 570.

27.- MacNair, supra, p. 322.

28.- Halleck, supra, Vol. II, p. 444; Co. Kim Cham, vs. Valdes Tan Keh, supra.

29.- Birkimer, supra, p. 53.

30.- Magoon, supra, p. 3.

31.- Ex-Parte Milligan, 4 Wallace, 127; Magoon, 9p. cit.m.13.

32.- US Rules, Article 285.

33.- New Orleans vs. N.Y. Steamship co., supra.

34.- Westlake, Int. Law. 138.

recursos del territorio ocupado y su utilización por el ocupante (35). El mantenimiento y la seguridad de sus fuerzas y el objetivo de la guerra se encuentran en el primer lugar de sus intereses y tiene que promoverlos bajo toda circunstancia y condición (36). El ocupante está obligado a considerar como su objetivo principal la seguridad, ayuda, eficiencia y éxito de sus fuerzas en el territorio enemigo habitado por ciudadanos enemigos. (37) La ocupación existe para hacer al enemigo daño de modo general (38).

F.- La ley de las naciones concede al ocupante aquellos poderes que sean comensurables con su objetivo reconocidos. En general, aquellos poderes tienen que ser muy amplios para que se pueda llevar la guerra con éxito (39) y hacer - - cualquier cosa necesaria para fortalecerse y debilitar al enemigo y no hay límite a estos poderes que podría ejercer, salvo aquéllos que se encuentran en las leyes y los usos de guerra (40). El ocupante naturalmente suspende o modifica todas las leyes políticas y también los privilegios políticos y promulga nuevas leyes por razón de las necesidades militares, incluyendo aquellas que sean necesarias para el dominio del territorio y de la protección de su ejército (41). El ocupante puede exigir de los habitantes la obediencia que sea necesaria para el mantenimiento de la paz y el orden públicos, y para la propia administración del país (42). Puede recabar toda clase de servicios, salvo aquéllos que imponga a los habitantes la

35.- Colby, Elridgen supra.

36.- Oppenheim, supra. p. 342.

37.- Hyde, op. cit. Vol. III, p. 690.

38.- Colby, quoting US vs. Rice; Fleming vs. Page; Macleod -- vs. US; Borchard, p. 240 and I Chansewitz p. 33.

obligación de tomar parte en las operaciones militares contra su propia patria (43). Puede exigir a los funcionarios públicos que tomen un juramento de obedecer sus mandatos mientras dure la ocupación y de no actuar en su perjuicio (44). Puede castigar como delito de guerra la desobediencia o negligencia en el cumplimiento de sus órdenes o regulaciones (45). Puede nombrar todos los funcionarios necesarios dándoles los poderes necesarios según su gusto (46). Puede determinar el tipo y carácter del gobierno que deba establecer (47), y asumir en el ámbito en que lo determina el ejercicio de los poderes y funciones de gobierno (48). Correlativa con el derecho del ocupante de exigir obediencia a los habitantes, está la obligación estricta de estos para con aquél (49), porque sin tal obediencia, el orden civil sería imposible.

G.- El ocupante naturalmente suspende o modifica las leyes políticas y también los privilegios políticos así como todos aquellos que afectan al bienestar y la seguridad de su ejército (50); promulgará nuevos decretos para la gobernación del territorio y que las necesidades militares los demanden(51)

39.- Colby, *supra*, XX.

40.- *New Orleans vs. N.Y. Steamship Co.*, *supra*.

41.- US Rules, Article 286-88.

42.- *Ibid*, Article 297.

43.- Reglamentos de La Haya, Artículo 52; US Rules, art. 302 303; Hall, p. 65-69; 507-508; Lawrence, p. 411-417; Oppenheim, *Law Quarterly Review*, Vol. CXXXII; Hyde Vol. III, p. 1.829; Colby, February, 1.926, *Columbia Law Review*.

44.- Lieber's Instructions, Article 309; Wheaton, II, 1.945, p. 246; Oppenheim, 1.944; Hyde, III, 1.899; The Earl of Birkenhead, *International Law*, 6 th. 1.927, p. 257; Lucio Moreno y Carlos Ballini Shaw, *Derecho Int. Publ.*, p. 284, Buenos Aires; Von Liszt, 1.919, p. 437.

45.- US Rules, Article 354.

46.- *New Orleans*, *supra*.

47.- *Coleman vs. Tennessee*, *supra*.

Las leyes del poder legítimo no podrán ser obligatorias a los habitantes que se someten al ocupante (52), pero el ocupante puede dejar vigentes aquellas leyes que noriñan con sus objetivas y suspenderlas cuando la necesidad militar así lo exija (53). El hecho de la ocupación trae consigo la sustitución de la voluntad del ocupante en el lugar de la autoridad preexistente; el ocupante suspende la operación de las leyes bajo las cuales los habitantes debían obediencia a su gobierno legítimo, porque la obediencia a este no es compatible con la propia seguridad del ocupante (54). Las leyes son meras nulidades si no hubiese un poder que las aplicara (55). Todas las relaciones entre el invasor y el invadido no se rigen por la ley territorial sino por la ley marcial del ocupante (56). Las leyes políticas prescriben los derechos y las obligaciones recíprocas entre el gobierno y los ciudadanos y por su propia naturaleza no pueden permanecer vigentes en el territorio ocupado (57). Las leyes promulgadas por el ocupante dentro de sus atribuciones reconocidas, estén o no justificadas moralmente obligan a todos y cada uno de los habitantes del terri-

48.- New Orleans, *supra*.

49.- US Rules, Article 301; Birkhimer, p. 26; Hyde, Vol. III, 1.899; Thorington vs. Smith, *supra*; Oppenheim, Law Quarterly Review, Vol. 33, p. 363.

50.- Thorington vs. Smith, 8 Wallace 1.

51.- US Rules, Arts. 285, 286; 287; 288.

52.- Rice, Hayward, Coleman, New Orleans, Leitensdorfer, Dow, cases, *supra*; MacArthur's Proclamation, October, 1.944, Leyte, see appendix.

53.- US Rules, Articles 285, 286.

54.- Hall, International Law, p. 462.

55.- Chief Justice Mackeand in *Republica vs. Chapman*, 1 I. S.-L. Ed., 59.

56.- Westlake, *supra*. Vol. II, p. 96.

57.- Halleck, 32; Boyd's Wheaton, 346.

torio ocupado entre sí y entre ellos y el gobierno legítimo - mientras dure la ocupación (58). La ley marcial es el poder - del ocupante de determinar y precisar cuales sean los actos - legales o ilegales, y establecer así el criterio de culpabili- dad del ofensor (59). Los actos del ocupante poseen validez - legal y según el Derecho Internacional no deben ser abrogados por el gobierno legítimo, salvo aquellos de carácter político que no tienen vigencia mas allá del período de la ocupación ; pero no puede haber reparación ni desagravio para los que ya se hayan llevado a cabo (60). No es deseable permitir al go- bierno de jure que desatienda las consecuencias de los actos legales del ocupante cuando estaba en el poder. Los actos o - transacciones legales del ocupante que estén en armonía con - los Reglamentos de La Haya, deben respetarse en bien mismo de los afectados (61). Cuando un ejército en pleno combate expul- sa o destruye la antigua soberanía de un país, las leyes crea- das por ésta y que dependen de ella fenece con esa soberanía, y fenece también la obligación de los habitantes que hasta en- tonces debían lealtad a la soberanía depuesta, de obedecer la voluntad o mandatos del soberano, i. e., sus leyes (62). Los habitantes del territorio ocupado se hallan exentos temporal- mente de la obligación de reconocer la autoridad del antiguo gobierno, la cual no podrá ejercerse ni coexistir con la del Gobierno vencedor durante la ocupación (63). Lo que el ocupan

58.- Westlake, II, p. 98, Peralta vs. Director of Prisons, -- Jur. Filipinas, supra.

59.- Hyde, Vol. III, p. 1.885.

60.- Wheaton, II, 245.

61.- Hyde, III, 1.885.

62.- Magoon, supra, p. 13.

63.- Fiore, IV, supra, 233.

promulgue sera la ley en el territorio ocupado, no obstante -- contradiga la voluntad del soberano legítimo, expresada en -- las leyes de este. El derecho del ocupante de regir, mantener y modificar las leyes dentro del territorio ocupado es suyo -- exclusivo. Los intentos del gobierno de jure de intervenir no tiene nada que ver con la calidad legal de lo que el ocupante exija mientras retenga el dominio (64). Un acto no puede considerarse legal o ilegal al mismo tiempo y el derecho de decidir sobre la legalidad de un acto necesariamente debe ser prerrogativa exclusiva de un soberano solo, perteneciendo a -- aquél que ejerce el dominio sobre el lugar en donde el acto -- en cuestión se hubiese cometido (65).

H.- Cuando una ley está suspendida, queda por el momento, sin vigencia alguna (66). La suspensión de una pragmática es solo provisional. Lo suspendido se define como "lo -- temporalmente inactivo o inoperante" (67). La suspensión de -- una ley por un tiempo limitado impide su vigencia durante ese tiempo. La única diferencia entre una ley suspendida y otra -- abrogada consiste en una cuestión de tiempo: en el primer caso la ley no tiene vigencia durante el período de suspensión, y en el otro, no tiene vigencia de un modo permanente (68) . Una ley derogada tiene que revalidarse para readquirir vigencia; la ley suspendida se hace vigente automáticamente después del lapso del período de suspensión (69). Las leyes políticas del soberano legítimo quedan en suspenso y pierden vi-

64.- Hyde, III, 1.885, 1.886.

65.- Hyde, III, p. 726-7.

66.- 4 Palabras y Frases, 818.

67.- 4 Palabras y Frases, 3.213; 59 Corpus Juris, 930.

68.- 4 Ibid, 6.103; 59 Corpus Juris, 899.

genoa, durante la ocupación (70). La Constitución suspendida no tiene vigencia durante el periodo de suspensión; y con su revalidación no llega por eso a tener vigencia retroactiva. Con relación a la aplicación de las leyes del soberano legítimo, - el territorio ocupado se considera como un territorio extranjero, extra legem reipublicae (71).

I.- La "allegiance" al gobierno no es más que la obligación de obedecer las leyes de aquel gobierno a cambio de la protección que la procura (72). Si la "allegiance" al gobierno no es más que obligación de obediencia a las leyes del gobierno, y por otro lado, las leyes políticas del gobierno legítimo quedan suspendidas en el sólo sentido de que no permanecen vigentes durante la ocupación enemiga, la "allegiance" o la obligación de obediencia a tales leyes deberá también quedar suspendida en el sentido de que por un tiempo, no puede ser exigible (73). Si según el Derecho Internacional, durante la ocupación enemiga, la única ley que obliga a los habitantes es la del ocupante y por éste, los habitantes tienen obligación de obedecerla mientras el ocupante tenga el dominio, la conclusión inevitable es que los habitantes deben una allegiance temporal al ocupante (74).

69.- 59 Corpus Juris 940.

70.- US vs. Reiter, 27 Fed. Cas. 773.

71.- US vs. Hayward, supra, US vs. Rice, supra; ibid.

72.- 18 L. Q.R. 47; US vs. Wong Kim Ark, 169 US 649; Jackson vs. Goodell, 20 Mojs 188 II Hackworth, 271; Magoon, p. 114; Galban & Co. v. U.S., 40 Ct. Cl., 415; I Hackworth 156-7; Resolución del 24 de junio de 1.776 por el Congreso Continental de los Estados Unidos recomendando la aprobación de una ley contra la traición citado en la causa de Cramer, 1.945.

73.- US vs. Rice, Fleming, vs. Page, Shanks vs. Dupont, Leitenstorfer vs. Webb, US, vs. Hayward, supra; Fiere, Davis, Birkhimer, and Colby, pps. cit.

J.- Al ocupante antes se le prohíbe obligar a los habitantes que le presten juramento de fidelidad (75). Pero, el ocupante puede obligar a los habitantes a jurar que voluntariamente se someterán a sus mandatos legítimos (76), con talde que este juramento de fidelidad se limite al período de la ocupación (77). Si este juramento de fidelidad vigente durante el período de ocupación no puede llamarse juramento de -- allegiance temporal, entonces no hay nada que merezca este -- nombre. De manera que la "allegiance", dentro de la prohibición de los Reglamentos de La Haya, es la "allegiance" absoluta, no la allegiance temporal, de la cual se puede exigir legalmente un juramento.

K.- Si la "allegiance" al gobierno legítimo no está suspendida sino que permanece en vigor durante la ocupación enemiga, la obligación estricta que según el Derecho Internacional pesa sobre los habitantes de obedecer los decretos y mandatos del ocupante, deberá reputarse sin duda como una violación de aquella allegiance, porque su propia naturaleza tales mandatos y decretos tienden al logro de los objetivos -- principales del ocupante, que según el Derecho Internacional, son la seguridad de sus fuerzas, el éxito de su administración del territorio, el mantenimiento y suministro de su ejército, la consolidación de su conquista, el fortalecerse y debilitar al enemigo.

-
- 74.- Rice, Shanks, Fleming, Hayward and Reiter cases, supra.
75.- Reglamentos de La Haya, Artículo 45.
76.- Hyde III, 1.898; II Wheaton, 246.
77.- II Wheaton, 346a.

La obediencia a tales mandatos en aras de tales objetivos --- mandatos y obediencia que son legales según el Derecho Internacional, --- no puede significar sino la violación de la "allegiance" al gobierno legítimo, ya que aquellos tienden a la destrucción de la soberanía y la disolución de la allegiance de los habitantes al gobierno legítimo. La obediencia a uno necesariamente implica la desobediencia al otro. Y si la ley de las Naciones declara que la obediencia a los mandatos del ocupante es legal, no puede al mismo tiempo declarar que los habitantes siguen teniendo la obligación de obedecer los del gobierno legítimo que se supone riñeran con los mandatos del ocupante. La sabia resolución a este dilema es aquélla declarada por Tribunales de muchos países, los Presidentes de los Estados Unidos, y los escritores de Derecho Internacional, o sea, que la allegiance de los habitantes a su gobierno legítimo y la soberanía de éste, quedan suspendidas durante la ocupación enemiga.

II.- CONCLUSION - - - - EL COLABORACIONISMO:

Con el análisis de todos los aspectos jurídicos de que consta esta cuestión del colaboracionismo, hemos alcanzado el concepto jurídico del mismo.

Opino que el Colaboracionismo es aquella realidad socio-política que consiste en prestaciones dadas libremente por todo habitante en territorio ocupado a favor de la autoridad ocupante, aún cuando tales prestaciones riñeran con las leyes del gobierno de jure a que dichos habitantes estaban originalmente vinculados; en la inteligencia, sin embargo, de que tales prestaciones respondan a mandatos del ocupante circunscritas dentro del ámbito de las atribuciones que en él reconoce el Derecho Internacional. Si esas prestaciones obedecieran a órdenes en exceso de la autoridad del ocupante, todavía seguirían siendo colaboracionismo, a condición de que tales prestaciones se hayan hecho bajo coacción por parte del ocupante. Si este último elemento falta, entonces, no hay colaboracionismo, sino que se está ante la traición.

Con este concepto jurídico del colaboracionismo al que hemos llegado después de la exposición y valoración de casi todas las consecuencias y los efectos de la ocupación que da lugar a la existencia del colaboracionismo, y de sus aspectos jurídicos, basados en el Derecho Internacional de la guerra y la ocupación bélica, vemos que para la existencia del colaboracionismo, deberá que tener estos elementos siguientes:

1.- Una Realidad Socio-Política: Nos referimos a este elemento como algo social debido a que durante la ocupación, - las habitantes tienen que vivir, alimentarse, sostener relaciones civiles o sociales entre ellos, todo lo cual no se anula -

por las consecuencias de la ocupación enemiga. Es más, el ocupante según hemos dicho en páginas anteriores, está obligado a tomar las medidas necesarias para el mantenimiento de la paz y el orden públicos. Con esta disposición, se reconoce que las relaciones pacíficas de los habitantes tienen que seguir, y la existencia de la guerra, aunque afecte a su país, no rompe de ninguna manera el vínculo de la sociedad ni prescinde del gobierno civil o a la administración de las leyes, porque el orden deberá mantenerse, los reglamentos urbanos deberán seguir, los delitos tendrán que ser perseguidos, habrá que proteger la propiedad, los contratos deberán cumplirse y celebrarse los matrimonios, la transmisión de la propiedad, deberá ser regulada como en tiempos de paz.

Es también político porque entraña las relaciones de los habitantes para con su gobierno legítimo y para con el ocupante. Las relaciones de los habitantes con su gobierno legítimo, son las más afectadas cuando el territorio queda en manos del ocupante y la autoridad del gobierno legítimo se ha vuelto impotente. Desde luego, estos efectos de la ocupación enemiga en las relaciones políticas de los habitantes con el gobierno legítimo y con el ocupante son los que engendran la existencia del colaboracionismo. Hemos dicho que las relaciones y las leyes políticas entre los habitantes y el gobierno legítimo baso del vínculo que liga a los habitantes con el gobierno legítimo, quedan suspendidas mientras dure la ocupación enemiga. Las consecuencias de esta suspensión incluyen la de eximir a los habitantes de cualquiera responsabilidad por actos cometidos en cumplimiento de los mandatos del ocupante.

2.- Consiste en Prestaciones: El Colaboracionismo con-

siste en prestaciones bien en forma de servicio o en metálico. El ocupante militar, según los Reglamentos de La Haya tiene derecho a exigir prestaciones, en especie o en metálico, de los habitantes del territorio ocupado. Las prestaciones pueden consistir también en servicios personales como los de los funcionarios públicos y los otros servicios públicos que son necesarios para mantener la vida y el orden públicos y las necesidades de las fuerzas de ocupación. El reconocimiento de este derecho del ocupante no da lugar a la comisión de traición aunque, en el acto de prestar servicios, de ayuda y aliento al enemigo. Con tal de que los habitantes no sirvan en el ejército del ocupante para luchar contra su propia patria, ni den informaciones sobre su propio ejército, todos los servicios o las contribuciones que prestan al ocupante, no pueden considerarse como una traición contra su propia patria.

3.- Dada libremente.— Estas prestaciones pueden darse libremente por los habitantes, sin que sea necesario que exista coacción o intimidación para conseguir esas prestaciones. — El derecho de exigir prestaciones está reconocido por el Derecho Internacional y por eso, el ocupante tiene que exigirlos absolutamente bajo las cualificaciones que mencionaremos más abajo. Cuando el Derecho Internacional reconoce este derecho, entonces es indudable que el cumplimiento de los habitantes del territorio ocupado por los mandatos y prestaciones no entrañan la comisión de traición contra la patria porque es increíble — que el Derecho Internacional del al ocupante el poder de exigir prestaciones a los habitantes para sus necesidades militares, sin la correspondiente obligación de cumplirlos por parte de los habitantes, injusto e inhumano que se obligue a los ha-

bitantes a cumplir esas prestaciones y al mismo tiempo reconocer derecho en el gobierno legítimo de castigar por traideros a esos habitantes porque hayan prestado servicios al ocupante. Si los habitantes, según el Derecho Internacional, están obligados a cumplir todos los mandatos del ocupante dictados en ejercicio de su autoridad bajo la misma ley, sabe sostener que no puede castigárseles por haber prestado al ocupante esas prestaciones. En este elemento no es necesario distinguir si esas prestaciones se daban libremente o no, porque aún dadas libremente, los habitantes no cometen traición contra su patria. Está tan solo cumpliendo las obligaciones impuestas por las necesidades de la guerra.

4.- Que estas Prestaciones respondan a Mandatos del Ocupante que caigan dentro del ámbito de las atribuciones que en él reconoce el Derecho Internacional:

Importa mucho que las prestaciones que los habitantes presten al ocupante tienen que responder a los mandatos dados por el ocupante en el ejercicio de su autoridad regulado por el Derecho Internacional. Mientras no exceda esta esfera de autoridad, no hay lugar a que el cumplimiento de esos mandatos pueda considerarse como delito de traición. El Derecho Internacional prescribe y limita la autoridad del ocupante en sus relaciones con los habitantes del territorio ocupado. Los actos del ocupante dentro de esa autoridad tienen validez legal que el gobierno legítimo después de la terminación de la ocupación, tiene que respetar. De manera que, todos los actos y servicios en pro del ocupante, en cumplimiento de sus mandatos dentro del ámbito de sus atribuciones reconocida por el Derecho Internacional tienen también validez legal, y el gobierno legítimo,

a su vuelta, no puede procesar a sus ciudadanos por haber cumplido esos mandatos.

5.- El último elemento consiste en que las prestaciones no obedezcan a órdenes en exceso de la autoridad del ocupante:

Aquí tenemos que distinguir dos cosas que caracterizan el cumplimiento de las órdenes del ocupante. Primero, tenemos que averiguar si las prestaciones aún en virtud de órdenes en exceso de la autoridad del ocupante, han tenido lugar mediante coacción. En este caso, la consecuencia jurídica es la misma que con las prestaciones dadas en cumplimiento de las órdenes del ocupante dentro del ámbito de su autoridad bajo el Derecho Internacional. Quiere decirse que constituyen también colaboracionismo y, por eso, no caen dentro de la esfera de la ley que castiga la traición. La existencia de la coacción excluye la responsabilidad jurídica. Este es un principio elemental del derecho penal. Para que exista responsabilidad, debe haber voluntad, y cuando entra en juego la coacción en la ejecución de los actos, entonces desaparece este requisito de voluntad porque la coacción sustituye a la voluntad del sujeto. En este caso, los habitantes que sean víctimas de la coacción del ocupante en la ejecución de prestaciones dadas en virtud de mandatos que excedan su autoridad se ven disculpados. La culpabilidad recae en el ocupante y tiene que responder por estos excesos después de la guerra.

En segundo lugar, tenemos que averiguar si los habitantes han dado esas prestaciones voluntariamente, sin coacción o intimidación por parte del ocupante. En este caso, no-

caerían bajo la esfera del colaboracionismo sino bajo la ley que castiga el delito de traición. Es indudable que si el ocupante no está autorizado a exigir ciertas clases de prestaciones, ya en servicio o en contribuciones, entonces, los habitantes tampoco están obligados legalmente a obedecerla. Si éstos le obedecen por propia voluntad, entonces, no pueden invocar las disposiciones del Derecho Internacional porque éste no reconoce la autoridad del ocupante a exigir tales prestaciones. Por ejemplo, los Reglamentos de La Haya disponen que el ocupante no puede obligar a los habitantes a dar informaciones sobre su ejército. Si los habitantes, a pesar de esta prohibición, cumplen una orden del ocupante en este aspecto, voluntariamente, y sin la presencia de ninguna clase de coacción o intimidación, entonces podrán ser castigados por la ley nacional que pena el delito de traición. Este es el caso de los espías, quintas columnas, etc. El Derecho Internacional no prohíbe el uso de espías, pero tampoco los protege cuando son procesados por traición contra su patria. Para el individuo que presta sus voluntariamente no existe lo que llamábamos fuerza superior en la que consiste la coacción, que es siempre inherente en las ocupaciones bélicas. Con respecto al acto de exigir un juramento de allegiance de los habitantes al ocupante, lo que está prohibido por los Reglamentos de La Haya es la exigencia obligatoria de esa allegiance. No prohíbe a ningún habitante a que jure allegiance voluntariamente al ocupante, pero si los habitantes lo hacen así, tienen que responder ante las disposiciones de la ley que castiga el delito de traición. No pueden invocar los principios que hemos enunciado ya que no reza con ellos, - -

pues, que no están sujetos a coacción.

En resumen, existe el colaboracionismo cuando todos -
estos elementos están presentes. Este colaboracionismo no - -
constituye el delito de traición. No es más que el cumplimiento
de las órdenes del ocupante que está autorizado para dictar
mientras que los habitantes están obligados a obedecer e cum-
plir. Con este concepto al que hemos llegado sobre el colabora-
cionismo, esperamos que en las guerras futuras que Dios quiera
no acontezcan, no habrá ya más confusiones entre colaboracio-
nismo y traición, como ha ocurrido en los años después de la -
guerra mundial. Ojalá que este modesto trabajo pueda contri- -
buir a la rama del Derecho Internacional sobre este tema que -
casi no está explorado todavía por ninguno de los renombrados-
tratadistas de la misma rama de la Ciencia de Derecho.

APENDICE "A"
CONSTITUCION DE FILIPINAS

ARTICULO 2, Inciso 3:

"The Philippines renounces war as an instrument of national policy and adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land".

APENDICE "B"

DEGLAMENTOS DE LA HAYA DEL 1907

SECTION III: ON THE MILITARY AUTHORITY OVER THE TERRITORY OF -
THE HOSTILE STATE:

Article 42: - Territory is considered occupied when it is actually placed under the authority of the hostile army.

The occupation extends only to the territory where such authority has been established and can be exercised.

- 43: - The authority of the legitimate power having in fact passed into the hands of the occupant, the latter shall take all measures in his power to -- restore, and insure, as far as possible, public order and safety while respecting unless absolutely prevented, the laws in force in the country.
- 44: - It is forbidden to force the population of the occupied territory to furnish information about the army of the other belligerent or about its means of defense.
- 45: - It is forbidden to compel the population of the -- occupied territory to swear allegiance to the hostile power.
- 46: - Family honor, rights, and the lives of persons -- and private property as well as religious convictions and practice, must be respected.
- 47: - Pillage is formally forbidden
- 48: - If in the territory occupied, the occupant collects taxes, dues and tolls imposed for the benefit of the state, he shall do so far as is possible, -- in accordance with the rules of assessment and in accordance in force and shall in consequence be bound to defray the expenses of the administration of -- the occupied territory to the same extent as the legitimate government was so bound.

49: - If, in addition to the taxes mentioned in the above article, the occupant levies other money contribution in the occupied territory, this shall only be for the need of the army of the administration of the territory in question.

50: - No general penalty, pecuniary or otherwise, shall be inflicted upon the population on account of the acts of individuals for which they cannot be regarded as jointly and severally responsible.

51: - No contribution shall be collected except under -- written order and on the responsibility of a commander in chief. This collection of said contributions shall be effected as far as possible, in accordance with the rules of assessment and incidence -- of the taxes in force.

For any contribution a receipt shall be given to the contributor.

52: - Requisitions in kind and services shall not be demanded from municipalities or inhabitants except for the needs of the Army of occupation. They shall be in proportion to the resources of the country, and of such a nature as not to involve the population in the obligation of taking part in the operations of war against their country.

Such requisitions and services shall only be demanded on the authority of the Commander in the locality occupied.

Contributions in kind shall as far as possible be paid for in cash; if not, a receipt shall be given and the payment of the amount due shall be made as soon as possible.

53: - An army of occupation can take possession of cash, funds, and realizable securities which are strictly the property of the State, depots of arms, means of transport, stores and supplies and generally -- all movable property belonging to the State which may be used for the operation of war.

All appliances, whether on land, at sea, or in the air, adapted for the transmission of news, or for the transport of persons or things, exclusive of -- cases governed by naval law, depots of arms and generally all kinds of ammunition of war may be seized even if they belong to private individuals but must be restored and compensation fixed when peace is made.

54: - Submarine cables connecting an occupied territory with a neutral territory shall not be seized or destroyed except in case of absolute necessity. They must likewise be restored and compensation fixed when peace is made.

APENDICE "C"

CONVENIO DE GINEBRA RELATIVO A LA PROTECCION DE PERSONAS CIVILES EN TIEMPOS DE GUERRA, DEL 12 DE AGOSTO DE 1949.

TITULO PRIMERO

Disposiciones Generales

Artículo 1.- Las Altas Partes contratantes se comprometen a respetar y a hacer respetar el presente Convenio en todas circunstancias.

2.- Aparte de las disposiciones que deben entrar en vigor en tiempo de paz, el presente Convenio se aplicará en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que pueda surgir entre dos o varias de las Altas Partes Contratantes, aunque el estado de guerra no haya sido reconocido por cualquiera de ellas.

El convenio se aplicará igualmente en todos los casos de ocupación de todo o parte del territorio de una Alta Parte Contratante, aunque esta ocupación no encuentre resistencia militar.

Si una de las Potencias contendientes no fuese parte en el presente Convenio, las Potencias que en él lo sean continuará estando obligadas por él en sus relaciones recíprocas. Estarán obligadas, además, por el Convenio respecto a la dicha Potencia, siempre que ésta acepte y aplique sus disposiciones.

3.- En caso de conflicto armado sin carácter internacional, y que surja en el territorio de una de las Partes contratantes, cada una de las Partes contendientes tendrá la obligación de aplicar, - por los menos, las disposiciones siguientes:

(1) Las personas que no participan directamente en las hostilidades incluso los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedades, heridas, detención o por cualquiera otra causa, serán tratadas en todas circunstancias, con humanidad, sin distinción alguna de carácter desfavorable basado en la raza, el color, la religión o las creencias, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo.

A tal efecto está y quedan prohibidos, en todo tiempo y lugar, respecto a las personas arriba aludidas:

a) Los atentados a la vida y a la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas --

sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, torturas y suplicios.

b) La toma de rehenes.

c) Los atentados ala dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes.

d) Las condenas dictadas y las ejecuciones -- efectuadas sin previo juicio por un tribunal regularmente constituido y dotado de las garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.

(2) Los heridos y enfermos serán recogidos y cuidados.

Podrá ofrecer sus servicios a las Partes contendientes cualquier organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Las Partes contendientes se esforzarán, por otra parte, por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, algunas o todas las demás disposiciones del presente Convenio.

La aplicación de las disposiciones precedentes no producirá efecto sobre el estatuto jurídico de las Partes contendientes.

Artículo 4.- Quedan protegidas por el Convenio las personas que, en un momento cualquiera y de cualquier manera que sea, se encontraren, en caso de conflicto y ocupación, en poder de una Parte contendiente o de una Potencia ocupante de la cual no sean súditas.

No están protegidos por el Convenio los súbditos de un Estado que no sea parte en él. Los ciudadanos de un Estado Neutral que se encuentren en el territorio de un Estado beligerante y los ciudadanos de un Estado cobeligerante no estarán considerados como personas protegidas mientras el Estado de que sean súbditos mantenga representación diplomática normal ante el Estado en cuyo poder se encuentren.

Las disposiciones del Título II, tienen, sin embargo, un campo de aplicación más extenso, definido en el Artículo 13.

Las personas protegidas por el Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas

armadas en campaña o por el de Ginebra del 12 de agosto de 1.949 para mejorar la suerte de los heridos, enfermos y naufragos de las fuerzas armadas en el mar o por el de Ginebra de 12 de agosto de 1.949 relativo al trato de prisioneros de guerra, no serán considerados como personas protegidas en el sentido del presente Convenio.

Artículo 5.- Si en el territorio de una Parte en conflicto ésta tuviera serias razones para creer que una persona protegida por el presente Convenio resulta legítimamente sospechosa de estar entregada a actividades perjudiciales para la seguridad del Estado, o si se demuestra que se dedica en efecto a dichas actividades, la tal persona no podrá prevalerse de los derechos y privilegios conferidos por el presente Convenio que, si actuaran a su favor, pudieran causar perjuicio a la seguridad del Estado.

Si, en territorio ocupado, una persona protegida por el Convenio fuese prendida por espía o malhechora o por ser legítimamente sospechosa de estar entregada a actividades perjudiciales para la seguridad de la Potencia ocupante, la dicha persona podrá en el caso de que la seguridad militar lo exija absolutamente, quedar privada de los derechos de comunicación previstos en el presente Convenio.

En cada uno de estos casos las personas aludidas en los párrafos precedentes serán siempre tratadas con humanidad, y en caso de enjuiciamiento, no quedarán privadas de su derecho a un proceso equitativo y regular tal como prevé el presente Convenio. Recobrarán igualmente el beneficio de todos los derechos y privilegios de persona protegida, en el sentido del presente Convenio, en la fecha más próxima posible, teniendo en cuenta la seguridad del Estado o de la Potencia ocupante, según los casos.

Artículo 6.- El Presente Convenio se aplicará desde el comienzo de todo conflicto u ocupación mencionados en el artículo 2.

En el territorio de las Partes contendientes la aplicación del Convenio terminará con el cese general de las operaciones militares.

En territorio ocupado la aplicación del Convenio terminará un año después del cese general de las operaciones militares; no obstante, la Potencia ocupante quedará obligada mientras dure la ocupación en tanto que esta Potencia

ejera funciones gubernamentales en el territorio de que se trata -- por las disposiciones de los siguientes artículos del presente Convenio: 1 a 12, 27, 29, 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61, a 77, y 143.

Las personas protegidas cuya liberación, cuya repatriación o cuyo establecimiento se efectuen -- después de estos plazos, gozarán en el intervalo de los beneficios del presente Convenio.

Artículo 7.- Aparte de los acuerdos expresamente previstos en los artículos 11, 14, 15, 17, 36, 108, 109, 132, 133 y 149, las Altas Partes contratantes podrán -- concertar otros acuerdos especiales sobre cualquier cuestión que les parezca oportuno reglamentar particularmente. Ningún acuerdo especial podrá alterar la situación de las personas protegidas, tal como queda reglamentada por el presente Convenio, ni restringir los derechos que éste les otorgue.

Las personas protegidas continuarán beneficiándose de estos acuerdos todo el tiempo que les sea aplicable el Convenio, salvo estipulaciones en -- contra contenidas en los dichos acuerdos o en -- acuerdos ulteriores, o lo mismo salvo medidas más favorables que, respecto a ellas, haya tomado -- cualquiera de las partes en conflicto.

Artículo 8.- Las personas protegidas no podrán, en ningún caso renunciar parcial ni totalmente a los derechos -- que les confiere el presente Convenio y eventualmente, los acuerdos especiales a que alude el artículo precedente.

Artículo 9.- El presente Convenio será aplicado con el concurso y bajo el control de las Potencias protectoras encargadas de salvaguardar los intereses de las -- Partes contendientes. A tal efecto, las Potencias protectoras podrán designar, aparte de su personal diplomático o consular, delegados entre sus propios súbditos o entre los súbditos de otras Potencias neutrales. Los nombramientos de estos delegados deberán estar sometidos a la aprobación de la Potencia ante la cual hayan de ejercer su misión.

Las partes en conflicto facilitarán, en la mayor medida posible, la tarea de los representantes o delegados de las Potencias protectoras.

Los representantes o delegados de las Potencias protectoras no deberán rebasar, en ningún caso los límites de su misión, tal y como resulta -- del presente Convenio; habrán de tener en cuenta,

especialmente, de las imperiosas necesidades para la seguridad del "estado ante el cual ejerzan sus funciones.

Artículo 10.- Las disposiciones del presente Convenio no constituyen obstáculo para las actividades humanitarias que el Comité Internacional de la Cruz Roja o cualquier otro organismo humanitario imparcial, emprendan para la protección de las personas civiles y para el auxilio que haya de aportárseles, mediante aprobación de las Partes contendientes interesadas.

Artículo 11.- Las Altas Partes contratantes podrán concertarse, en todo tiempo, para confiar a un organismo internacional que ofrezca garantías de imparcialidad y eficacia, las tareas señaladas por el presente Convenio a las Potencias protectoras.

Si, algunas personas protegidas no se beneficiasen o hubieran dejado de beneficiarse, por cualquier razón, de la actividad de una potencia protectora o de un organismo designado en conformidad con el párrafo primero, la Potencia en cuyo poder se encuentren deberá pedir, ya sea a un Estado neutral o a un tal organismo, que asuma las funciones señaladas por el presente convenio de las Potencias protectoras designadas por las Partes contendientes.

De no poder conseguirse así la protección, la Potencia en cuyo poder se hallen las dichas personas deberá pedir a un organismo humanitario, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, que asuma las tareas humanitarias señaladas por el presente Convenio a las Potencias protectoras o deberá aceptar, la reserva de las disposiciones del presente artículo, las ofertas de servicios emanantes de un tal organismo.

Cualquier Potencia neutral o cualquier organismo invitado por la Potencia interesada, o que ofrezca a los fines arriba mencionados, deberá mantenerse consciente, en su actividad, de su responsabilidad respecto a la parte contendiente de quien dependan las personas protegidas por el presente Convenio, teniendo la obligación de aportar garantías suficientes de capacidad para asumir las funciones de que se trata y desempeñarlas con imparcialidad.

No podrán derogarse las prescripciones precedentes por acuerdo particular entre Potencias, una de las cuales se encontrara siquiera temporalmente, respecto a la otra Potencia o a aliados suyos, limitada en su libertad de negociar como conse-

cuencia de acontecimientos militares, especialmente en el caso de ocupación de la totalidad o de una parte importante de su territorio.

Cuantas veces se haga mención, en el presente Convenio, de la Potencia protectora, esta mención designa igualmente a los organismos la reemplacen en el sentido del presente artículo.

Las disposiciones del presente artículo se extenderán y serán adaptadas a los casos de súbditos de un Estado neutral que se hallaren en territorio ocupado o en el de un Estado beligerante ante el cual el Estado de cuyos ciudadanos se trate no disponga de representación diplomática normal.

Artículo 12.- En todos aquellos casos en que lo juzguen conveniente en interés de las personas protegidas especialmente en caso de desacuerdo entre las Partes contendientes acerca de la aplicación o interpretación de las disposiciones del presente Convenio, las Potencias protectoras prestarán sus buenos oficios para allanar la discrepancia.

A tal efecto, cada una de las Potencias protectoras podrá proponer, por invitación de una Parte o espontáneamente, a las Partes contendientes una reunión de sus representantes y particular de las autoridades encargadas de la suerte de las personas protegidas, eventualmente en territorio neutral convenientemente elegido. Las Partes contendientes tendrán la obligación de poner en práctica a las proposiciones que se les haga en tal sentido. Eventualmente, las Potencias protectoras podrán proponer a la aprobación de las Partes contendientes una personalidad perteneciente a una Potencia neutral o una personalidad delegada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, a la cual se requerirá para que participe en la dicha reunión.

TITULO SEGUNDO

Protección General de las Poblaciones Contra Ciertos Efectos de la Guerra.

Artículo 13.- Las disposiciones del presente título se refieren al conjunto de las poblaciones de los países contendientes sin distinción alguno desfavorable, especialmente en cuanto a la raza, la nacionalidad, la religión, la opinión política, y tienen por objetivo aliviar los sufrimientos engendrados por la guerra.

Artículo 14.- En tiempo de paz, las Altas Partes contratantes y después de la ruptura de hostilidades, las Partes contendientes podrán crear en su propio territorio y si necesario fuese, en los territorios ocupados, zonas y localidades sanitarias y de seguridad organizadas de modo que queden al abrigo de los efectos de la guerra los heridos, y enfermos, los inválidos, las personas de edad, los niños menores de quince años, las mujeres encinta y las madres de criaturas de menos de siete años.

Desde el comienzo de un conflicto y en el curso de éste, las Partes interesadas tendrán facultad para concertar entre ellas acuerdos respecto al reconocimiento de las zonas y localidades que hayan establecido. Podrán a tal efecto poner en vigor las disposiciones previstas en el proyecto de acuerdo que figura en anejo al presente Convenio, aportándole eventualmente las modificaciones que estimen necesarias.

Las potencias protectoras y el Comité Internacional de la Cruz Roja quedan requeridos a prestar sus buenos oficios para facilitar el establecimiento y el reconocimiento de las dichas zonas y localidades sanitarias y de seguridad.

Artículo 15.- Toda parte contendiente podrá, ya sea directamente o por intermedio de un "estado neutral o de un organismo humanitario, proponer a la Parte adversaria la creación en las regiones donde tenga lugar los combates, de zonas neutralizadas destinadas a poner al abrigo de los peligros de los combates sin distinción alguna a las personas siguientes:

- a) Heridos y enfermos, combatientes o no combatientes.
- b) Personas civiles que no participen en las hostilidades y que no ejecuten ningún trabajo de carácter militar durante su estancia en dichas zonas.

En cuanto las Partes contendientes se han puesto de acuerdo sobre la situación geográfica, la administración, el aprovisionamiento y el control de la zona neutralizada prevista, se redactará un acuerdo que habrá de ser firmado por los representantes de las Partes contendientes. Este acuerdo fijará el comienzo y la duración de la neutralización de la zona.

Artículo 16.- Los heridos y enfermos, así como los inválidos y mujeres encinta, serán objeto de particular protección y respeto.

En la medida que las exigencias militares lo permitan, cada una de las Partes contendientes favorecerá las gestiones emprendidas para la búsqueda de muertos y heridos, para acudir en ayuda de los naufragos y otras personas expuestas a graves peligros y para ampararlas contra saqueos y malos tratos.

Artículo 17.- Las Partes contendientes se esforzarán por concertar arreglos locales para la evacuación de una zona sitiada o acorralada, de heridos, enfermos, inválidos, ancianos, niños y parturientas, así como para el paso de ministros de todas las religiones, del personal y del material sanitario destinados a dicha zona.

Artículo 18.- En ninguna circunstancia podrán ser objeto de ataques los heridos, enfermos, inválidos y mujeres de parto; estas personas serán, en todo momento, respetadas y protegidas por las Partes contendientes.

Los Estados partícipes en un conflicto deberán entregar a todos los hospitales civiles un documento en que se testimonie su carácter de hospital civil y certificando que los edificios por ellos ocupados no son utilizados a fines que a tenor del artículo 19, pudieran privarlos de protección.

Los hospitales civiles estarán señalados, si a ello los autoriza el estado, por medio del emblema prescrito en el artículo 38 del Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1.949 para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña.

En tanto que las exigencias militares no permitan, las Partes contendientes tomarán todas las medidas necesarias para hacer claramente visibles a las fuerzas enemigas, terrestres, aéreas y marítimas, los emblemas distintivos que señalen los hospitales civiles, a fin de destacar toda posibilidad de acto agresivo.

En razón de los peligros que pueda presentar para los hospitales la proximidad de objetivos militares, convendrá cuidar de que se hallen lo más lejanos posible.

Artículo 19.- La protección debida a los hospitales civiles no podrá cesar más que si de ella se hace uso para cometer, aparte de los deberes humanitarios, actos dañinos para el enemigo. Sin embargo, la protección sólo cesará después de aviso en que se fije, en todos los casos oportunos, un plazo razonable y que éste quede sin efecto.

No será considerado como acto dañoso el hecho de que esté asistiendo a militares enfermos y heridos en dichos hospitales o que en ellos se encuentren armas portátiles y municiones retiradas a esos militares y que todavía no hayan sido remitidas al servicio competente.

Artículo 20.- Será respetado y protegido el personal regular y únicamente afectado al funcionamiento o a la administración de los hospitales civiles, incluso al que esté encargado de la búsqueda, de la recogida, del transporte y de la asistencia de heridos y enfermos civiles, de inválidos y de parturientas.

En los territorios ocupados y las zonas de operaciones militares este personal se dará a conocer por medio de una tarjeta de identidad que testifique la calidad del titular, está provista de su fotografía y ostente el sello en seco de la autoridad responsable, e igualmente mientras esté montando servicio, por un brazal timbrado resistente a la humedad y colocado en el brazo izquierdo. Este brazal lo entregará el Estado y estará dotado del emblema prescrito en el artículo 38 del Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1.949 para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña.

Cualquier otro personal, afecto al funcionamiento o a la administración de los hospitales civiles, será respetado y protegido, teniendo derecho a llevar el brazal como arriba se dispone y bajo las condiciones prescritas en el presente artículo durante el desempeño de sus funciones. Su tarjeta de identidad especificará las tareas de su incumbencia.

La Dirección de cada hospital civil tendrá en todo tiempo a disposición de las autoridades competentes, nacionales u ocupantes, la lista de al día de su personal.

Artículo 21.- Los transportes de heridos y enfermos civiles, de inválidos o de parturientas, efectuados por la tierra en convoyes de vehículos y trenes hospitalares, o por mar, en barcos afectos a tales transportes, habrán de ser respetados y protegidos a igual título que los hospitales de que habla el artículo 18 y se darán a conocer enarbolando, con autorización del Estado, el emblema distintivo prescrito en el artículo 38 del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1.949 para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña.

Artículo 22.- Las aeronaves exclusivamente empleadas para el transporte de heridos y enfermos civiles, de inválidos

lidos y parturiantas o para el transporte de personal y material sanitario, no serán atacadas, sino -- que habrán de ser respetadas cuando vayan volando a alturas, horas, y por rutas específicamente conveni- das, de consumo, entre todas las Partes contendien- tes interesadas en el conflicto.

Podrán ir señaladas con el emblema distintivo -- prescrito en el artículo 38 del Convenio de Ginebra -- de 12 de agosto de 1,949 para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en -- campaña.

Salvo acuerdo en contrario, queda prohibido vo- -- lar sobre territorio enemigo o territorios ocupados por éste.

Dichas aeronaves habrán de obedecer a cualquier -- intimación de aterrizaje. En caso de aterrizaje así impuesto, la aeronave y sus ocupantes podrán conti- nuar el vuelo, previo eventual examen.

Artículo 24.- Las Partes contendientes tomarán las medidas neces- rias para que los niños menores de quince años que -- resulten huérfanos o separados de sus familias, no queden abandonados a sí mismos o para que se les -- procuren, en todas circunstancias, la manutención, la práctica de su religión y la educación. Esta úl- tima será confiada, si ello es posible, a personas -- de la misma tradición cultural.

Las Partes contendientes favorecerán la acogida -- de esos niños en país neutral durante la duración del conflicto, previo consentimiento de la Potencia pro- tectora, si la hubiere, y sitienen garantías de que los principios enunciados en el primer párrafo van a ser respetados.

Además, se esforzarán por tomar las medidas con- ducentes a que todos los niños menores de doce años puedan ser identificados mediante una placa de iden- tidad o cualquier otro recurso.

Artículo 25.- Toda persona que se encuentre en el territorio de -- una Parte contendiente o en territorio por ella ocu- pado, podrá dar a los miembros de su familia, donde quiera que se hallen, noticias de carácter familiar, podrá igualmente recibirlas. Esta correspondencia se -- rá expedida rápidamente, sin retardo injustificado.

Si, por culpa de las circunstancias, el interes- bio de la correspondencia familiar por la vía pos- -- tal ordinaria resultase difícil o imposible, las par- tes contendientes interesadas se dirigirán a un in- termediario neutral, tal como la Agencia Central -- prevista en el artículo 140 para determinar con el-

los medios de garantizar la ejecución de sus obligaciones en las mejores condiciones, especialmente con el concurso de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja (de la Media Luna Roja, de Leda, y del Sol rojos).

Caso de que las Partes contendientes estimasen necesario restringir la correspondencia familiar, estarán facultadas, a lo más, para imponer el uso de formular modelos que contengan veinticinco palabras libremente escogidas y limitar sus envíos a uno solo por mes.

Artículo 26.- Cada Parte contendiente facilitará las búsquedas emprendidas por los miembros de familias dispersadas por la guerra para recobrar el contacto de los unos con los otros y de ser posible, reunirlos. Facilitará en especial la acción de los organismos consagrados a esa tarea, a condición de que los haya aprobado y que se conformen a las medidas de seguridad tomadas por ella.

TITULO TERCERO

Estatuto y trato de las personas protegidas.

Sección I

Disposiciones comunes a los territorios de las partes contendientes y a los territorios ocupados.

Artículo 27.- Las personas protegidas tienen derecho, en cualquier circunstancia, al respeto a su persona, a su honor, a sus derechos familiares, a sus convicciones y prácticas religiosas, a sus hábitos y a sus costumbres. Deberán ser tratadas, en todo momento, con humanidad, y especialmente protegidas contra cualquier acto de violencia o intimidación, contra los insultos o la curiosidad pública.

Las mujeres serán especialmente amparadas contra todo atentado en su honor, y en particular, contra la violación, contra el fornicamiento a la prostitución y contra todo atentado a su pudor.

Habida cuenta de las disposiciones relativas al estado de salud, a la edad, y al sexo, las personas protegidas serán, todas, tratadas por la Parte contendiente en cuyo poder se encuentren con iguales consideraciones, sin distinción alguna desfavorable, especialmente por lo que atañe a la raza, la religión o las opiniones políticas.

No obstante, las Partes contendientes podrán to

mar, respecto a las personas protegidas las medidas de control o seguridad que resulten necesarias a causa de la guerra.

Artículo 28.- Ninguna persona protegida podrá ser utilizada para poner, con su presencia, determinados puntos o regiones al abrogo de operaciones militares.

Artículo 29.- La Parte contendiente en cuyo ámbito se encuentren personas protegidas será responsable del trato que les den sus agentes, sin perjuicio de las responsabilidades individuales en que pueda incurrirse.

Artículo 30.- Las personas protegidas disfrutarán de toda clase de facilidades para dirigirse a las Potencias Protectoras, al Comité Internacional de la Cruz Roja, (de la Media Luna Roja, y de León, y del Sol Rojo) de la nación donde se hallen, así como a cualquier organismo que les vieniere en ayuda.

Estos varios organismos recibirán a tal efecto por parte de las autoridades, toda clase de facilidades dentro de los límites trazados por las necesidades de orden militar o de seguridad.

Aparte de las visitas de los delegados de las Potencias protectoras o del Comité Internacional de la Cruz Roja, previstas en el artículo 243, las Potencias ocupantes o en cuyo poder se encuentren las personas de referencia, allanarán lo más posible las visitas que deseen hacer a las personas protegidas los representantes de otras instituciones cuyo objetivo sea aportar a dichas auxilios espirituales o materiales.

Artículo 31.- No podrá ejercerse coacción alguna de orden físico o moral respecto a las personas protegidas, en especial para obtener de ellas, o de terceros, informaciones de ninguna clase.

Artículo 32.- Las Altas Partes contratantes convienen en abstenerse expresamente de cualquier recurso susceptible de causar sufrimiento físico o la exterminación de las personas protegidas en su poder. Esta prohibición abarca no solamente el homicidio, la tortura, las penas corporales, las mutilaciones y los experimentos médicos o científicos no exigidos por el tratamiento facultativo de una persona protegida, sino también cualquier otra crueldad practicada por agentes civiles o militares.

Artículo 33.- No será castigada ninguna persona protegida por infracciones que no haya cometido ella misma. Las penas colectivas, así como toda medida de intimidación o terrorismo, quedan prohibidas.

Queda prohibida la rapina.

Quedan igualmente prohibidas las medidas de represalias respecto a las personas protegidas o a sus bienes.

Artículo 34.- Se prohíbe la toma de rehenes.

Sección II

Extranjeros en el territorio de una Parte Contendiente.

Artículo 35.- Toda persona protegida que desee salir del territorio al comienzo o en el curso de un conflicto, tendrá derecho a hacerlo, a menos que su marcha no redunde en daño de los intereses nacionales del Estado. La decisión sobre su salida se tomará según procedimiento regular, debiendo resolverse con la máxima premura. Una vez autorizada a salir del territorio, podrá disponer del dinero necesario para el viaje y llevar consigo un volumen razonable de efectos y objetos de uso personal.

Las personas a quienes se niegue el permiso para dejar el territorio, tendrán derecho a objetar que un tribunal o consejo administrativo competente, a tal efecto creado por la Potencia en cuyo poder se encuentre, considere de nuevo la negativa en el plazo más breve posible.

A petición, los representantes de la Potencia-protectora podrán obtener, a menos que a ello se opongan motivos de seguridad o que los interesados hagan objeción, una explicación de las razones en cuya virtud se haya negado a las personas solicitantes la autorización para salir del territorio, así como, lo más rápidamente posible, los nombres de cuantos se encuentran en ese caso.

Artículo 36.- Las salidas autorizadas en armonía con el artículo precedente se efectuarán en condiciones satisfactorias de seguridad, higiene, salubridad, y alimentación. Todos los gastos efectuados a partir de la salida del territorio de la Potencia en cuyo poder se encuentren las personas protegidas, correrán por cuenta del país de destino, o en caso de estancia en nación neutral, por cuenta de la Potencia cuyos súbditos sean los beneficiarios. Las modalidades prácticas de estos desplazamientos serán, en caso necesario, fijadas por acuerdos especiales entre las Potencias interesadas.

Todo lo cual no podrá reportar perjuicio a los acuerdos especiales que hayan concertado las par-

tes contendientes acerca del intercambio y la repatriación de sus ciudadanos caídos en poder del enemigo.

Artículo 37.- Las personas protegidas que se encuentren en detención preventiva o sufriendo penas de privación de libertad, serán tratadas, durante su encarcelamiento con humanidad.

Podrán, al ser puestas en libertad, pedir su salida del territorio en armonía con los artículos anteriores.

Artículo 38.- Excepción hecha de las medidas especiales que puedan tomarse en virtud del presente Convenio, en particular respecto a los artículos 27 y 41; la situación de las personas protegidas continuará estando regida, en principio por las prescripciones relativas al trato de extranjeros en tiempo de paz. En todo caso se les concederán los siguientes derechos:

- 1) Podrán recibir los socorros individuales o colectivos que se les envíen.
- 2). Recibirán, si su estado de salud lo necesita, un tratamiento médico y atenciones de hospital, en igual medida que los ciudadanos del Estado interesado.
- 3) Tendrán la facultad de practicar su religión y recibir el auxilio espiritual de los ministros de su culto.
- 4) Si residieren en regiones particularmente expuestas a los peligros de la guerra, quedarán autorizadas para desplazarse en la misma medida que los ciudadanos del Estado interesado.
- 5) Los niños menores de quince años, las mujeres embarazadas y las madres de criaturas menores de siete años, beneficiarán, en igual medida que los ciudadanos del Estado interesado, de todo trato preferente.

Artículo 39.- Las personas protegidas que hubieren perdido, como consecuencia del conflicto, su actividad lucrativa, tendrán derecho a que se las ponga en condiciones de encontrar un trabajo remunerador, gozando a tal efecto, la reserva de consideraciones de seguridad y de las disposiciones del Artículo 40, de las mismas ventajas que los ciudadanos de la Potencia, en cuyo territorio se encuentren.

Si una de l a Partes contendientes sometiese a una persona protegida a medida de custodia que la dejasen en la imposibilidad de ganarse la subsistencia, en particular cuando la persona de que se trate no pudiera por razones de seguridad encontrar un trabajo remunerador en condiciones razonables, la dicha Potencia atenderá a sus necesidades y a las de las personas a su cargo.

En todo caso las personas protegidas podrán percibir subsidios de su país de origen de la Potencia protectora, o de las Sociedades benéficas a que alude el artículo 30.

Artículo 40.- No podrá obligarse a trabajar a las personas protegidas sino en igualdad de condiciones que a los ciudadanos de la Parte contendiente en cuyo territorio residen.

Si las personas protegidas fueren de nacionalidad enemiga, no se las podrá obligar más que a trabajos normalmente necesarios para garantizar su alimentación, el alojamiento, la vestimenta, el transporte y la salud de los seres humanos, y que no tengan relación alguna directa con el desarrollo de las operaciones militares.

En los casos mencionados en los párrafos precedentes, las personas protegidas obligadas al trabajo, gozarán de las mismas condiciones de labor y de idénticas medidas protectoras que los trabajadores nacionales, especialmente en lo que atañe a salarios, duración de jornadas, equipos, formación previa e indemnización por accidentes y enfermedades profesionales.

En caso de violación de las prescripciones arriba mencionadas, las personas protegidas quedarán autorizadas a ejercer el derecho de reclamación en armonía con el artículo 30.

Artículo 41.- Cuando la Potencia en cuyo poder se encuentren las personas protegidas no estime suficientes las medidas de control mencionadas en el presente Convenio, las otras más severas a que podrá recurrir serán las de residencia forzosa o internamiento, en armonía con las disposiciones de los artículos 42 y 43.

Al aplicar las prescripciones del párrafo segundo del artículo 39 en los casos de personas obligadas a abandonar su habitual residencia en virtud de una decisión que les ordene la residencia forzosa en otro paraje, la Potencia en cuyo poder se hallen las dichas personas se conformará

lo más estrictamente posible las reglas relativas al trato de internados. (Sección IV, Título III - del presente Convenio).

Artículo 42.- El internamiento o la residencia forzosa de personas protegidas no podrán ordenarse más que si la seguridad de la Potencia en cuyo poder se encuentran las dichas personas lo hace absolutamente indispensable.

Si una persona pidiera, por intermedio de los representantes de la Potencia protectora, su internamiento voluntario y su propia situación lo hiciera necesario, lo hará la Potencia en cuyo poder se encuentre.

Artículo 43.- Cualquier persona protegida que haya sido internada o puesta en residencia forzosa, tendrá derecho a conseguir que un tribunal o Consejo administrativo competente, a tal efecto, creado por la Potencia en cuyo poder está, considere de nuevo en el plazo más breve posible la decisión tomada a su respecto. Si se mantuvieran el internamiento o la residencia forzosa, el tribunal o el Consejo administrativo procederán periódicamente, y por lo menos dos veces al año, a un examen del caso de la persona de que se trata, a fin de modificar en su favor la decisión inicial, siempre que las circunstancias lo permitan.

A menos que las personas protegidas interesadas se opongan a ello, la Potencia en cuyo poder se encuentre comunicará, con la mayor rapidez posible, a la Potencia protectora los nombres de las personas protegidas que hayan sido internadas o puestas en residencia forzosa, así como los nombres de las que hayan sido liberadas del internamiento o la residencia forzosa. Con igual reserva, las decisiones de los tribunales o Consejos apuntadas en el primer párrafo del presente artículo serán también notificadas, con la máxima brevedad, a la Potencia protectora.

Artículo 44.- Al tomar las medidas de custodia previstas en el presente Convenio la Potencia en cuyo poder se encuentren las personas protegidas no habrá de tratar como extranjeros enemigos, exclusivamente a base de su pertenencia jurídica a un Estado adverso, a los refugiadores que, de hecho, no disfruten de la protección de ningún Gobierno.

Artículo 45.- Las personas protegidas no podrán ser transferidas a una Potencia que no sea parte en el Convenio.

Esta disposición no será obstáculo para la repatriación de las personas protegidas o para el retorno al país de su domicilio al fin de las hostilidades.

Las personas protegidas no podrán ser transferidas por la Potencia en cuyo poder se hallaren - a una Potencia que sea parte en el convenio más - que después que la primera se haya asegurado de - que la Potencia de que se trata tiene deseo y es - ta en condiciones de aplicar el Convenio. Cuando - las personas protegidas hayan sido así transferi - das, la responsabilidad por la aplicación de las - cláusulas del convenio incumbirá a la Potencia - que haya aceptado el acogerlas durante el tiempo - que le sean confiadas. No obstante, en caso de que - esta Potencia no aplique las disposiciones del - Convenio en todos sus puntos esenciales, la Poten - cia por la cual las personas protegidas hayan si - do transferidas deberá después de la notificación - de la Potencia protectora, tomar las medidas ef - caces para remediar la situación, a pedir que las - personas protegidas le sean devueltas. A tal de - manda se dará satisfacción.

En ningún caso podrá transferirse a persona pro - tegida alguna a otro país donde pueda tener perse - cuciones por razón de sus opiniones políticas o - religiosas.

Las descripciones de este artículo no obstan a - la extradición en virtud de tratados concertados - antes del rompimiento de las hostilidades, de per - sonas protegidas acusadas de crímenes de derecho - común.

Artículo 46.- Si no hubiesen quedado en suspenso anteriormente, las medidas de carácter restrictivo promulgadas - respecto a las personas protegidas, serán aboli - das lo antes posibles al fin de las hostilidades.

Las medidas restrictivas decretadas respecto a - sus bienes cesarán tan rápidamente como sea posi - ble al fin de las hostilidades, conforme a la le - gislación de la Potencia en cuyo poder se encon - tren las dichas personas.

Sección III

Territorios ocupado.

Artículo 47.- Las personas protegidas que se encontraran en te - rritorio ocupado no perderán, en ninguna ocyuntura ni en modo alguno, los beneficios del presente convenio, ya sea en virtud de cambios ocurridos, - a consecuencia de la ocupación, en las institucio - nes o la gobernación del territorio de que se tra - te, o por acuerdos concertados entre las autori - dades del territorio ocupado y la Potencia ocupan - te, o como secuela de la anexión por esta última -

de la totalidad o parte del territorio ocupado.

Artículo 48.- Las personas protegidas no súbditas de la Potencia cuyo territorio resulte ocupado, podrán prevalerse del derecho a salir del territorio en las condiciones previstas en el artículo 35, y las decisiones serán tomadas en armonía con el procedimiento que la Potencia ocupante debe instituir conforme a dicho artículo.

Artículo 49.- Los traslados en masa o individuales de carácter forzoso, así como las deportaciones de personas protegidas fuera del territorio ocupado, en el ámbito de la Potencia ocupante, o al de cualquier otro Estado, se halle o no ocupado, queda prohibido, fuera cual fuere el motivo.

Sin embargo, la Potencia ocupante podrá proceder a la evacuación total o parcial de una determinada región ocupada, si así lo exigiesen la seguridad de la población o imperiosas necesidades militares. Las evacuaciones no podrán acarrear el desplazamiento de personas protegidas mas que al interior del territorio ocupado, salvo casos de imposibilidad material. La población así evacuada será devuelta a sus hogares tan pronto como hayan terminado las operaciones de guerra en ese sector.

La Potencia ocupante, al proceder a tales traslados e evacuaciones deberá actuar de modo que, en toda la medida de lo posible, las personas protegidas sean acogidas en locales adecuados, que los desplazamientos se lleven a cabo en satisfactorias condiciones de salubridad, higiene, seguridad y alimentación, y que no se separen unos de otros, a los miembros de una misma familia.

Se informara a la Potencia protectora de las transferencias y evacuaciones efectuadas.

La Potencia ocupante no podrá retener a personas protegidas en regiones singularmente expuestas a peligros de la guerra, a menos que la seguridad de la población o imperiosas necesidades militares lo exigieren.

La Potencia ocupante no podrá proceder a la evacuación o transferencia de una parte de su propia población civil al territorio por ella ocupado.

Artículo 50.- Con el concurso de las autoridades nacionales y locales, la Potencia ocupante facilitara el buen funcionamiento de los establecimientos dedicados a la asistencia y a la educación de niños.

Tomará cuantas medidas sean necesarias para con

seguir la identificación de los niños y el empadronamiento de su filiación. En ningún caso podrá proceder a modificaciones de su estatuto personal ni a alistarlos en formaciones u organismos dependientes de ella.

Si las instituciones locales resultasen inadecuadas, la Potencia ocupante deberá tomar disposiciones para asegurar la manutención y la educación si fuera posible por medio de personas de su nacionalidad, lengua y religión, de los niños huérfanos o separados de sus padres a consecuencia de la guerra, a falta de parientes próximos o amigos que estén en condiciones de hacerlo.

Se encargará a una sección especial la oficina creada en virtud de las prescripciones del artículo 136 que se ocupe de tomar las medidas convenientes para identificar a los niños cuya filiación resulte dudosa. Se consignarán sin falta cuantas indicaciones se posean acerca del padre, la madre o cualquier otro pariente.

La Potencia ocupante no deberá entorpecer la aplicación de las medidas de preferencia que hubieran podido ser adoptadas, con anterioridad a la ocupación, a favor de los niños menores de quince años, de mujeres encinta, y de madres de criaturas de menos de siete años en todo cuanto atañe a la nutrición, a los cuidados medicinales y a la protección contra los efectos de la guerra.

Artículo 51 .-- La Potencia ocupante no podrá formar a las personas protegidas a servir en sus contingentes armados o auxiliares. Queda prohibida toda presión o propaganda encaminada a conseguir alistamientos voluntarios.

Tampoco podrá obligar a trabajar a las personas protegidas, a menos que cuenten mas de dieciocho años de edad; sólo podrá tratarse en todo caso, de trabajos necesarios para las necesidades del ejército de ocupación o de servicios de interés público, de la alimentación, de alojamiento, del vestuario, de los transportes o de la sanidad de la población del país ocupado. No podrá obligarse a las personas protegidas a ningún trabajo que las lleve a tomar parte en las operaciones militares. La Potencia ocupante no podrá obligar a las personas protegidas a garantizar por la fuerza de seguridad de las instalaciones donde se hallen desempeñando un trabajo impuesto.

El trabajo sólo se hará en el interior del territorio ocupado donde se encontraren las personas de que se trata. Cada persona requisada seguirá re-

asistiendo, en la medida de lo posible, en el lugar de su habitual trabajo. Este habrá de ser equitativamente remunerado y proporcionado a las capacidades físicas e intelectuales de los trabajadores.

Será aplicable a las personas protegidas sometidas a los trabajos de que se trata en el presente artículo, la legislación vigente en el país ocupado con relación a las condiciones de trabajo y a medida de su poder, especialmente en cuanto atañe a salarios, duración de jornadas, equipos, formación previa e indemnizaciones por accidentes y enfermedades profesionales.

Las requisiciones de mano de obra no podrán en ningún caso conducir a una movilización de trabajadores bajo régimen militar o semimilitar.

Artículo 52.- Ningún contrato, acuerdo u ordenanza podrá lesionar el derecho de cada trabajador, sea o no voluntario, dondequiera que se encuentre, al dirigirse a los representantes de la Potencia protectora para solicitar su intervención.

Toda medida conducente a provocar el paro o a restringir las posibilidades de empleo de los trabajadores de un país ocupado, con vistas a inducirlos a laborar para la Potencia ocupante queda prohibida.

Artículo 53.- Está prohibido a la Potencia ocupante destruir bienes muebles o inmuebles pertenecientes individual o colectivamente a personas particulares, al Estado o a organismos públicos y a agrupaciones sociales o cooperativas, salvo en los casos en que tales destrucciones las hicieren necesarias las operaciones bélicas.

Artículo 54.- Está vedado a la Potencia ocupante modificar el estatuto de los funcionarios o magistrados del territorio ocupado o tomar, respecto a los mismos, sanciones o medidas cualesquiera de coacción o discriminación por haberse abstenido del ejercicio de sus funciones debido a argumentos de conciencia.

Esta última prohibición no ha de ser obstáculo para la aplicación del párrafo segundo del artículo 51. Debe intacto el poder de la Potencia ocupante para apartar de sus cargos a los titulares de funciones públicas.

Artículo 55.- En la medida de sus recursos, la Potencia ocupante tiene el deber de asegurar el aprovisionamiento de la población en víveres y productos medicinales; deberá especialmente importar vituallas, elementos medicinales y cualquier otro artículo indispensable cuando los recursos del territorio ocupado resulten insuficientes.

La Potencia ocupante no podrá requisar víveres, artículos o elementos medicinales existentes en territorio ocupado mas que por las fuerzas y la administración de ocupación; habrá de tener en cuenta las necesidades de la población civil. Bajo reserva de lo estipulado en otros Convenios internacionales, la Potencia ocupante tomara las medidas conducentes a que toda requisación sea indemnizada en su justo valor.

Podrán las Potencias protectoras, en cualquier momento, verificar sin trabas el estado de los -- aprovisionamientos en víveres y medicamentos en los territorios ocupados, so reserva de las restricciones pasajeras impuestas por imperiosas necesidades militares.

Artículo 56.- En toda la medida de sus medios, la Potencia ocupante tiene el deber de asegurar y mantener, con el concurso de las autoridades nacionales y locales, los establecimientos y servicios médicos de hospital, así como la sanidad y la higiene pública en el territorio ocupado, adoptando en particular y aplicando medidas profilácticas y preventivas necesarias para combatir las enfermedades contagiosas y epidemias. Se autorizará al personal médico de todas categorías a desempeñar esta misión.

Si se creasen nuevos hospitales en territorio ocupado, y si los organismos competentes del Estado no estuviesen ya funcionando en ellos, las autoridades de ocupación procederán, si hay lugar, al reconocimiento prescrito en el artículo 18. En circunstancias analogas, las autoridades de ocupación deberán proceder igualmente al reconocimiento del personal de los hospitales y vehículos de transporte a tenor de lo dispuesto en los artículos 20 y 21

Al adoptar las medidas de sanidad e higiene, así como al ponerlas en vigor, la Potencia ocupante -- tendrá en cuenta las exigencias morales y éticas de la población del territorio ocupado.

Artículo 57.- La Potencia ocupante no podrá requisar los hospitales civiles mas que provisionalmente, y en caso de urgente necesidad para cuidar heridos y enfermos -- militares, y siempre a condición de que se tomen a tiempo las medidas apropiadas para garantizar la -- asistencia y el tratamiento de las personas hospitalizadas, así como dar a basto a las exigencias -- de la población urbana.

No podrán requisarse el material y las existencias de los hospitales civiles mientras sean necesarios para la población civil.

Artículo 58 .- La Potencia ocupante habrá de permitir a los ministros de cultos a la asistencia espiritual a sus correligionarios.

Aceptará los envíos de libros y objetos necesarios para las practicas religiosas, facilitando su distribución en territorio ocupado.

Artículo 59 .- Cuando la población de un territorio ocupado o una parte de ella resulte insuficientemente avituallada, la Potencia ocupante aceptara las obras de socorro hechas a favor de dicha población, facilitándolas en todo lo posible.

Tales obras que podrán ser emprendidas ya sea por el Estado o por un organismo humanitario imparcial, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, consistiran principalmente en envíos de víveres, productos medicinales y vestuario.

Una Potencia que autorice el libre paso de envíos destinados a territorios ocupados por una parte adversaria en el conflicto, tendra, no obstante, derecho a verificar los envíos, reglamentar su paso según horarios o itinerarios prescritos y obtener de la Potencia protectora garantías suficientes de que los envíos de que se trata van destinados al socorro de la población necesitada y no han de ser utilizados en provecho de la Potencia ocupante.

Artículo 60:º Los envíos de socorro no descargarán en nada a la Potencia ocupante de las responsabilidades que le imponen los artículos 55, 56 y 59. No podrá desviar en modo alguno los envíos de socorros de la afectación que les haya sido asignada, salvo en los casos de necesidad urgente, en interes de la población del territorio ocupado y previo consentimiento de la Potencia protectora.

Artículo 61.- El reparto de los envíos de socorro mencionado en los artículos precedentes se hará con el concurso y bajo la fiscalización de la Potencia protectora. Esta función podrá ser delegada, como consecuencia de acuerdo entre la Potencia ocupante y la Potencia protectora, a un Estado neutral, al Comité Internacional de la Cruz Roja o a cualquier otro organismo humanitario imparcial.

No se percibirá ningún derecho, impuesto o tasa en territorio ocupado sobre estos envíos de socorro, a menos que semejante percepción resulte necesaria en interes de la economía del territorio. La Potencia ocupante deberá facilitar la rápida distribución de dichos envíos.

Todas las Partes contratantes se esforzarán por permitir el tránsito y el transporte gratuitos de estos envíos de socorro destinados a territorios ocupados.

Artículo 62.- Bajo reserva de imperiosas razones de seguridad, - las personas protegidas se encuentran en territorio ocupado podrán recibir los envíos individuales de auxilio que les sean remitidos.

Artículo 63.- Bajo reserva de las medidas temporales que sean impuestas a título excepcional por imperiosas consideraciones de seguridad de la Potencia ocupante:

a).- Las sociedades Nacionales de la Cruz Roja (de la Media Luna Roja, de León y del Sol Rojo) reconocidas podrán proseguir las actividades en conformidad con los principios de la Cruz Roja, tales y como están definidos por las Conferencias internacionales de la Cruz Roja. - Las demás sociedades de socorros deberán poder continuar sus actividades humanitarias en similares condiciones.

b).- La Potencia ocupante no podrá exigir, en el personal y la estructura de dichas sociedades ningún cambio que pueda causar perjuicio a las actividades arriba mencionadas.

Iguales principios se aplicarán a la actividad y al personal de organismos especiales de carácter no militar, ya existentes o que sean creados a fin de garantizar las condiciones de existencia de la población civil mediante el mantenimiento de servicios esenciales de utilidad pública, la distribución de socorros y la organización de salvamentos.

Artículo 64.- La legislación penal del territorio ocupado se mantendrá en vigor, salvo en la medida en que pueda ser derogada o suspendida por la Potencia ocupante si esta legislación constituyese una amenaza para la seguridad de dicha Potencia o un obstáculo para la aplicación del presente Convenio. Bajo la reserva de esta última consideración y de la necesidad de garantizar la administración efectiva de la justicia, los tribunales del territorio ocupado continuarán actuando respecto a todas las infracciones previstas por esta legislación.

La Potencia ocupante podrá, sin embargo, someter la población del territorio ocupado a las disposiciones que resulten indispensables para permitirle cumplir las obligaciones derivadas del presente Convenio y asegurar la administración regular del territorio, así como la seguridad, ya sea

de la Potencia ocupante, de los miembros y bienes de las fuerzas o de la administración de la ocupación, y de los establecimientos y líneas de comunicación por ella utilizados.

Artículo 65.- Las disposiciones penales decretadas por la potencia no entraran en vigor mas que despues de haber sido publicadas o puestas en conocimiento de la población en la lengua de esta. No podran tener efecto retroactivo.

Artículo 66.- La Potencia ocupante podrá entregar a los acusados, en caso de infracción, a las disposiciones penales promulgadas por ella en virtud del parrafo segundo del artículo 64, a sus tribunales militares, no politicos, normalmente constituidos, a condición de que estos funcionen en el país ocupado. Los tribunales de apelación funcionaran preferentemente en el país ocupado.

Artículo 67.- Los tribunales sólo podran aplicar disposiciones legales anteriores a la infracción y conforme a los principios generales del derecho, especialmente en lo que concierne al principio de la proporcionalidad de las penas. Deberan tomar en consideración el hecho de que el acusado no sea súbdito de la potencia ocupante.

Artículo 68.- Cuando una persona protegida cometiere una infracción únicamente con el propósito de perjudicar a la Potencia ocupante, pero sin que dicha infracción implique atentado a la vida o la integridad corporal de los miembros de las fuerzas, o de la administración de ocupación, cree un peligro colectivo serio o acarree graves daños a los bienes de las fuerzas, de la administración de ocupación o de las instalaciones por ellas utilizadas, las personas de que se trate quedaran expuestas al internamiento o al simple encarcelamiento, entendiéndose que la duración de este internamiento o encarcelamiento habra de ser proporcionada a la infracción cometida. Ademas, el internamiento o encarcelamiento seran, respecto a tales infracciones, las únicas medidas con pérdida de libertad que puedan tomarse contra las personas de referencia. Los tribunales previstos en el Artículo 66 del presente Convenio podran libremente convertir la pena de prisión en internamiento de la misma duración.

Las disposiciones de carácter penal promulgadas por la Potencia ocupante, en armonía con los artículos 64 y 65, no pueden prever la pena de muerte en cuanto a las personas protegidas, salvo en los casos en que estas resultaren culpables de

espionaje, actos graves de atentados contra las instalaciones militares de la Potencia ocupante o infracciones con malicia que causaren la muerte de una o varias personas, y a condición de que la legislación del territorio ocupado, vigente antes de la ocupación aplique la pena capital en casos tales.

No podrá dictarse la pena de muerte contra una persona protegida mas que despues de haber llamado la atención del Tribunal, en particular, acerca del hecho de que el reo, por no ser súbdito de la Potencia ocupante, no se halla obligado respecto a ella por deber alguno de fidelidad.

En ningún caso podrá dictarse la pena de muerte contra una persona protegida cuya edad fuere menor de dieciocho años en el momento de la infracción.

Artículo 69.- En todos los casos la duración de la detención preventiva sera reducida de cualquier pena de prisión a que pueda ser condenada una persona protegida acusada.

Artículo 70.- Las personas protegidas no podrán ser detenidas, enjuiciadas, o condenadas por la Potencia ocupante a causa de acciones cometidas u opiniones expresadas con anterioridad a la ocupación o durante una interrupción temporal de ésta, se reserva de infracciones a las leyes y costumbres de la guerra.

Los ciudadanos de la Potencia ocupante que, antes del comienzo del conflicto, hayan buscado refugio en el territorio ocupado, no podrán ser detenidos, enjuiciados, condenados o deportados fuera del territorio ocupado, si no es por infracciones cometidas despues del comienzo de las hostilidades que, según la legislación del Estado cuyo territorio se halla ocupado, hubieran justificado la extradición en tiempo de paz.

Artículo 71.- Los tribunales competentes de la Potencia ocupante no podran dictar condena alguna la que no haya precedido proceso regular.

A todo acusado enjuiciado por la Potencia ocupante, se le informara sin retraso por la dicha Potencia de quantos temas de acusación se hayan formulado contra el, en lengua que pueda comprender, y la causa sera instruida con la mayor rapidez posible. A la Potencia protectora se la informara de cada motivo de enjuiciamiento formulado por la Potencia ocupante contra personas protegidas cuando dichos motivos puedan acarrear sentencia de muerte o pena de encarcelamiento por dos años, a lo mas; podra dicha Potencia-

en cualquier instante informarse del estado del procedimiento. Además, la Potencia protectora tendrá derecho a conseguir, a petición suya, toda clase de información respecto al procedimiento de que se trata y a cualquier otra causa incoada por la Potencia ocupante contra personas protegidas.

La notificación de la Potencia protectora, tal y como esta prevista en el inciso segundo del presente artículo, deberá efectuarse inmediatamente, y llegar en todo caso a la Potencia protectora tres semanas antes de la fecha de la primera audiencia. Si a la inauguración de los debates no se aportase la prueba de haber sido integralmente respetadas las prescripciones del presente artículo, la audiencia no podrá tener lugar. La notificación deberá comprender en particular los elementos siguientes:

- a).- Identificación del acusado.
- b).- Lugar de su residencia y de la detención.
- c).- Especificación de los temas de la acusación — (con mención expresa de las disposiciones penales en que esté basada).
- d).- Indicación del tribunal a quien corresponde juzgar el asunto.
- e).- Lugar y fecha de la primera audiencia.

Artículo 72.- Todo acusado tendrá derecho a hacer valer los medios de prueba necesarios para defensa, pudiendo citar testigos. Tendrá derecho a ser asistido por un defensor calificado de su elección, el cual podrá visitarlo con entera libertad y al que se le darán las facilidades convenientes para preparar su defensa.

Si el acusado no hubiere escogido defensor, la Potencia protectora le proporcionará uno. Si el infractor debe responder de una acusación grave, y no tiene Potencia protectora, la Potencia ocupante le conseguirá un defensor, so reserva del consentimiento del presunto reo.

A todo acusado, a menos que a ello renuncie libremente, le asistirá un intérprete, tanto durante la instrucción de la causa como en la audiencia ante el tribunal. Podrá, en cualquier momento, recurrir al intérprete y solicitar su sustitución.

Artículo 73.- Todo sentenciado tendrá la facultad de utilizar los recursos prescritos en la legislación aplicada por el tribunal. Se le informará plenamente sus derechos de apelación, así como de los plazos asignados-

para ejercerlos

El procedimiento penal previsto en la presente sección se aplicará por analogía, a las apelaciones. Si la legislación aplicada por el tribunal no previene posibilidades de apelación, el condenado tendrá derecho a apelar contra la sentencia y la condena ante la autoridad competente de la Potencia ocupante.

Artículo 74.- Los representantes de la Potencia protectora tendrán derecho a asistir a la audiencia de cualquier tribunal que juzgue a una persona protegida a menos que los debates hayan de tener lugar, excepcionalmente, a puerta cerrada en interés de la seguridad de la Potencia ocupante; esta avisará entonces la Potencia protectora. Deberá permitirse a la Potencia protectora notificación en que conste la indicación de lugar y fecha de la apertura del juicio oral.

Cuando sentencia se dicten, implicando pena de muerte o prisión por dos o más años, habrán de ser comunicadas, con explicación de motivos y lo más rápidamente posible, a la Potencia protectora; constará en ella notificación efectuada conforme al artículo 71, y en caso de sentencia que implique pena de privación de libertad, la indicación de lugar donde haya de ser purgada. Las demás sentencias serán consignadas en las actas del tribunal, pudiendo ser examinadas por los representantes de la Potencia protectora. En el caso de condenas de pena de muerte o penas de privación de libertad de dos o más años, los plazos de apelación no comenzarán a correr más que a partir del momento en que la Potencia protectora haya recibido comunicación de la sentencia.

Artículo 75.- En ningún caso podrá negarse a los sentenciados a muerte el derecho de pedir gracia.

No se ejecutará ninguna sentencia de muerte antes de la expiración de un plazo de por lo menos seis meses, a partir del momento en que la Potencia protectora haya recibido la comunicación de la sentencia definitiva confirmando la condena a muerte o la negativa del indulto.

Este plazo de seis meses podrá ser acortado en ciertos casos concretos, cuando resulte de coyunturas graves y críticas que la seguridad de la Potencia ocupante o de sus fuerzas armadas está expuesta a una amenaza organizada; la Potencia protectora recibirá siempre notificación de la reducción del plazo y tendrá siempre la posibilidad de dirigir con oportunidad de tiempo protestas, a propósito de tales condenas a muerte, a las autoridades ocupantes competentes.

Artículo 76.- Las personas protegidas inculpadas quedarán detenidas en el país ocupado, y de ser condenadas deberán extinguir en él sus penas. Estarán separadas, si — ello es posible, de los demás presos, y sometidas a un régimen alimenticio e higiénico suficiente para mantenerlas en buen estado de salud, y correspondiente, al menos, al régimen de los establecimientos penitenciarios del país ocupado.

Se les darán los cuidados médicos exigidos por el estado de la salud.

Quedarán igualmente autorizadas a recibir la ayuda espiritual que soliciten.

Las mujeres serán reclusas en locales separados y colocadas bajo la inspección inmediata de mujeres.

Habrà de tenerse en cuenta el régimen especial — prescrito para los menores de edad.

Las personas protegidas detenidas, tendrán derecho a recibir la visita de los delegados de la Potencia protectora, y del Comité Internacional de la Cruz Roja a tenor de las disposiciones del artículo 143.

Además gozarán del derecho a recibir, por lo menos, un paquete de socorro cada mes.

Artículo 77.- Las personas protegidas inculpadas o condenadas por los tribunales en territorio ocupado serán entregadas, al fin de la ocupación con su expediente respectivo, a las autoridades del territorio liberado.

Artículo 78.- Si la Potencia ocupante estimase necesario, por razones imperiosas de seguridad, tomar medidas de seguridad respecto a las personas protegidas, podrá imponerse, a lo más, una residencia forzosa o proceder a su internamiento.

Las decisiones relativas a la residencia forzosa o al internamiento se tomarán en armonía con un procedimiento regular que habrá de ser fijado por la potencia ocupante, a tenor de las disposiciones del presente Convenio. Semejante procedimiento debe prever el derecho de apelación de los interesados. Se estatuirá sobre esta apelación en el menor plazo posible. Si se mantuvieren las decisiones, habrán de ser objeto de revisión periódica, a ser posible semestralmente, mediante un organismo competente constituido por la dicho Potencia.

Las personas protegidas obligadas a la residen—

cia forzosa, y en consecuencia hayan de abandonar su domicilio, se beneficiaran sin restriccion alguna de cuanto se dispone en el articulo 39 del presente Convenio.

APENDICE "D"

PROCLAMAS DEL COMANDANTE SUPREMO JAPONES

2 DE ENERO DE 1942:

1. As the result of the Japanese Military Occupation, the sovereignty of the U.S.A. over the Philippines had completely disappeared and the Army hereby proclaims Military Administration under Martial Law over the districts occupied by the Army.

2. The purpose of the Japanese expedition is nothing but to emancipate you from the oppressive domination of the U.S.A. letting you establish "The Philippines for the Filipinos", as a member of the Co-Prosperity Sphere in the Greater East Asia and making you enjoy your own prosperity and culture.

3. The authorities and people of the Commonwealth should sever their relations with the U.S.A. and trust their just and fair administration of the Army, obeying faithfully all its commands, cooperating voluntarily with it in its stationing activities here and supplying military needs when asked.

4. So far as the Military Administration permits, all the laws now in force in the Commonwealth as well as executive orders and judicial institutions shall continue to be effective for the time being as in the past. Therefore, all public officials shall remain in their present post and carry on faithfully their duties as before.

5. The army recognizes the freedom of your religion and residence and has a regard for your usual customs, so far as the Military Administration permits. Accordingly, all the people of the Commonwealth are requested to comprehend the real intentions of the Army and never be deceived by propogandas of the U.S.A. and Great Britain, and you should never disturb public peace in any way, warning yourselves against rashness and refraining from spreading fabulous and wild rumors. Such actions shall be regarded as hostile operations and offenders shall be severely punished the gravest offenses being punishable with death, according to Martial Law. (Official Journal, Japanese Military Administration, Vol. I, p. 1-2)

3 DE ENERO DE 1942:

Any person who commits acts mentioned below will not be put to death or otherwise severely punished according to the provisions of Martial Law. However if such person who has committed such acts presents himself to the authorized and confessed his guilt, he may be pardoned.

1. Any person who rebels against the Japanese Forces.

2. Those who show hostility against the Japanese forces:

3. Those who jeopardize or break any existing means in politics, economics, industry, transportation, communications, finance, etc.

4. Those who disturb the minds of the officials and the people.

5. Any actions disturbing the economics and financial condition.

6. Any person who kills or inflicts injuries upon any Imperial Japanese soldier, civilian employees of the Army and Navy or hinders the execution of the duties of the above-mentioned persons.

7. Any person who refuses to obey any orders of the military issued by the Japanese Forces.

8. Any person who commits acts other than the above-mentioned against the interests of the Japanese forces.

9. Any person who plans, suggests or assists in committing any of the above mentioned acts.

10. Any one who inflicts or attempts to inflict an injury upon Japanese soldiers or individuals shall be shot to death.

11. If the assailant or attempted assailant cannot be found, we will hold ten influential persons as hostages who live in and about the streets or municipalities where the event happened.

12. Officials and influential persons shall pass their warning on to citizens of towns and villages as soon as possible and should prevent these crimes before they happened on their own responsibilities.

The Filipinos should understand our real intentions and should work together with us to maintain public peace and order in the Philippines. (O.J., J.M.A., Vol I, p. 12)

ORDER NO. 1 DE 22 DE ENERO DE 1942:

a. The Chairman of the Executive Commission shall keep necessary offices under his direct control.

b. The Central Administrative organs shall be reconstituted into six departments, viz., Interior, Finance, Justice, Agriculture and Commerce, Education, Health and Public Welfare and Public Works and Communications.

Each department shall have at its head a "Commissioner" who shall execute an administration within his jurisdiction under the control of the Chairman of the Executive Commission.

Each Department shall have a Japanese Adviser and Japanese assistant advisers.

3. A "Commissioner" for each department constituting the central administrative organization shall be appointed on your responsibility by the Commander in Chief of the Imperial Japanese Forces.

4. As regards the appointments of other important officials, inclusive of chiefs of offices under the direct control of the "Chairman of the Executive Commission" and the chiefs of local administrative organs, you shall have the approval of the Commander in Chief of the Imperial Japanese Forces.

5. The system and constitution of the Departments of the central administrative organization of judicial courts shall generally be based upon what have existed hitherto provided that their outlines be approved by the Commander in Chief of the Imperial Japanese Forces.

Any important changes in the above mentioned systems and constitution shall be effected in conformity with the foregoing paragraph.

6. In the execution of the administration, the foremost importance shall be given to the demands of the Imperial Japanese forces and in the immediate reestablishment of peace and order and the Chairman of the Executive Commission and the Commissioner of the Departments shall comply with the orders of the Commander in Chief of the Imperial Japanese Forces regarding any important matter. (O.J., J.M.A., Vol 1, p. 28)

ORDER NO. 21 DE 17 de FEBRERO DE 1942

In compliance with the following principles, utmost efforts should be made to renovate education in the Philippines.

1. To make the people understand the position of the Philippines as a member of the East Asia Co-Prosperity Sphere the true meaning of a New Order in the Sphere and the sphere in which the Philippine should take for the realization of the New Order, and thus to Promote friendly relations between Japan and the Philippines to the further extent.

2. To eradicate the old idea of the reliance to the Western nations, especially the U.S.A. and Great Britain, and to foster a New Philippine culture based on the self-consciousness of the people as Orientals.

3. To endeavor to elevate the morals of the people giving up over emphasis on materialism.

4. To strive for the diffusion of the Japanese language in the Philippines and to terminated the use of English in due course.

5. To put importance to the diffusion of elementary education and to the promotion of vocational education.

6. To inspire the people with the spirit of the love of labour. (O.J. JMA, Vol I, p. 13-14)

ORDEN NO. 1 DE 20 DE FEBRERO DE 1942:

In exercising the legislative, executive, and judicial powers in the Philippines, the following rules shall be observed:

1. Activities of the administrative organs and judicial courts in the Philippines shall be based upon the existing statutes, orders, ordinances and customs until further orders, provided that they are not inconsistent with the present circumstances under the Japanese Military Administration.

2. The Executive Commission of the Philippines may enact new statutes and ordinances subject to the approval of the Commander in Chief of the Imperial Japanese Forces in the Philippines.

This order was accompanied with the following explanation:

This order was delivered to the Chairmen of the Executive Commission for the purpose of clarifying the standard of activities of the Commission which was organized in conformity with the Special Order No. 1 given by the Commander in Chief of the Imperial Japanese Forces.

In accordance with the principles of International Law the occupation of the Philippine Islands by the Imperial Japanese Forces stopped the sovereignty of the United States of America over said Islands, and accordingly, the function of the government of the Commonwealth of the Philippines, e.g., its legislative, executive, and judicial functions ceased to act.

The commander in Chief of the Japanese forces thereby issued, according to the right recognized by International Law the Special Order No. 1 concerning the establishment of an executive organ in the Philippines. However, all the laws and regulations of the Philippines have been suspended since the Japanese Occupation. As a result of such suspension, it became necessary to give certain basic principles on which the new Executive Commission shall carry out its executive and judicial authorities and to designate a certain organ which shall be in charge of legislation. This order was issued to meet this necessity.

MILITARY ORDINANCE NO. 2 de Marzo 14, 1942, concerning the enjoyment of Civil Rights, benefits, and privileges by Japanese subjects in the Philippines:

Section 1. Subjects of the Empire of Japan are hereby excluded from the application of prohibitions and limitations on civil rights, benefits and privileges which by reason of nationality are denied them by laws, statutes or administrative orders and regulations of the Philippines.

1. All such existing laws, statutes, administrative orders and regulations or part thereof inconsistent with this ordinance are hereby repealed.

2. This ordinance shall apply to pending cases and shall take effect as of December 8, 1941.

ORDER OF APRIL 18, 1942 regarding Inspection of Books:

You are hereby instructed to take necessary steps in order that a survey of all books and other publications which are kept in libraries of schools, colleges and universities, except those kept in libraries which are now occupied or sealed by the Imperial Japanese Forces, shall be conducted in accordance with the principles hereinbelow mentioned, and that those which are found to be improper after the survey shall be sent over to the Office of the Japanese Military Administration:

1. All books and other publications already published whose content come within the purview of the following shall be confiscated after due inspection:

1. Those that are written for anti-Japanese propaganda purposes.

2. Those that propagate democracy and aim at alienating Axis Powers from one another

3. Those that repudiate war.

4. Those that are in contradiction with the fundamental principles of the Philippine Educational renovation.

5. Those that are improper in the enforcement of military administration. (O.J., JMA., Vol 4, p. 4)

WARNING TO THE JAPANESE COMMANDER IN CHIEF TO THE INHABITANTS:

16 de Febrero de 1942:

To All Asiatic Peoples:

We have no intention of conquering any Asiatic people nor do we have any territorial desire on any Oriental nation. The best proof of this statement has already been made before the steady gaze of all the countries of the world in actual deed in Manchuko, New China, Indo-China, Thailand and other countries who had realized the true meaning of Japan's mission in the Far East. All of you Asiatic peoples, must therefore realize that here is your best opportunity to achieve the freedom and independence which you have so long desired.

Stand up with the high pride of your history, tradition and fatherland. As long as you reciprocate accordingly, the Japanese forces will help you in establishing an Asia for the Asiatics in your part of the Orient. But if you fail to understand the true and lofty purpose of Japan, and instead obstruct the successful prosecution of the military activities and tactics of the Imperial Japanese Forces, whoever you are, we shall come and crush you with our might and power, and thus compel you to realize by means of force the true significance and meaning of our mission in the Far East. (O.J., JMA. Vol. 1, p. 9 - 19)

APENDICE "E"

INSTRUCCIONES DEL PRESIDENTE QUEZON

My last instructions to my colleagues who were left behind were that they should do everything in their power to minimize the sufferings of the civilina population. "Keep your faith in America, no matter what happens. She will never let you down". (Quezon, Manule: The Good Fight, Chap. XII, p 2e8)

In effect, Gen. Mac Arthur and President Quezon told Jorge Vargas and other Filipinos left behind:

"Go ahead. Do the best you can. Make what bargains you have with there people. Try to keep the Philippines (17,000,000) together in once piece. Try to protect them from Japanese Brutality and avarice. You'll have some tough decisions to make. But the job must be done. Do it for the future Philippines." (So Sorry, No Peace, By Royal Arch Gunnison, p: 40, 1944)

In the Biography of the late President Quezon, there is an explanation with reference to the actuations of the officials left behind:

"With General Homma, Supreme Chief of the Japanese Occupational firces, there entered into Manila Hideko Kihara, who for many years has been Vice-Consul in Manila and until November, 1941 had been consul General in ^{Manila}awao. Kihara was a good mixer and had built up a number of friendly relationship among the Filipinos for which reason he was being u utilized as advisor to the Japanese Army.

Homma advised by Kihara, convoked the entire official staff of Filipino government who had remained in Manila at the head of whom were Jorge Vargas, my executive Secretary, Jose Yulo, the Speaker of the Philippine Assembly. Homma produced a plan of organizing a commission which should have its charge the administration of civil affairs and could serve as a liaison between the military forces of occupation and the people.

But notwithstanding the advice which I left for them before my departure to the effect that if they should be given an opportunity to cooperate in the administration of civil government, they should accept it in order that the interests of the people and public order and respect for property should be safeguarded, their answer was no.

They were then told, as Governor confesor related to us that in view of their attitude, the Japanese found themselves obliged to place this duty in the hands of Filipinos who were more sensible and cooperative, that is to say, pro-Japanese or more pliable Filipinos.

The officials then asked for twenty four hours to make a decision during which time, it was their intention to send a courier to Corregidor to find out my opinion, but communication was already broken.

There remained therefore no alternative but to accept or permit the placing of the interests of the Filipino people in the hands of individuals who might be mercenary, irresponsible and unscrupulous, which would spread alarm and demoralization throughout the country. Finally, their sense of responsibility came to the fore and they accepted the Japanese proposal, but not without laying down the condition that they should not be asked to renounce their loyalty already given to the United States.

In their zeal, these Filipino officials went even further. Although logically speaking, the head of the new commission should have been Yulo, because he was the Speaker of the Assembly, elected by popular vote, they decided that it should be Vargas, who held only an appointive position, in order that none of their acts might be interpreted as bearing popular sanction nor endorsement of the public. (Quezon, Manuel: *The Good Fight*, p. 290-2, 1944)

In reference to the acceptance of the Filipino officials in the administration under the Japanese, Pres. Quezon in a letter to Gen. MacArthur has this to say:

"In reference to the men who have accepted positions in the commission established by the Japanese, everyone of them wanted to come to Corregidor, but you told me that there was no room for them here. They are not "quislings". The "quislings" are the men who betray their own country. These men did what they have been asked to do while they were free, under the protection of their government. Today, they are virtually prisoners of the enemy. I am sure that they are only doing what they think is their duty. They are not traitors. They are victims of the adverse fortunes of war and I am sure that they have no choice. Besides, it is most probable that they accepted their positions in order to safeguard the welfare of the civilian population in the occupied areas. I think, under the circumstances, America should look upon their situation sympathetically and understandingly." (cited in *The Good Fight*, by Manuel Quezon, p. 275, 1944)

APENDICE "F"

PROCLAMAS DEL GENERAL MACARTHUR

23 De Octubre de 1944:

1. That the Government of the Commonwealth of the Philippines is subject to the supreme authority of the Government of the United States, the sole and only government having legal and valid jurisdiction over the people in the areas of the Philippines free of enemy occupation and control;

2. That the laws now existing on the statute books of the Commonwealth of the Philippines and the regulations promulgated pursuant thereto are in full force and effect and legally binding upon the people in the areas of the Philippines free of enemy occupation and control;

3. That all laws, regulations and processes of any other government in the Philippines other than that of the said Commonwealth are null and void and without legal effect in the areas of the Philippines free of enemy occupation.

29nde Diciembre de 1944:

WHEREAS, evidence is before me that certain citizens of the Philippines voluntarily have given aid and comfort and sustenance to the enemy in violation of allegiance due to the Governments of the United States and the Commonwealth of the Philippines;

WHEREAS, military necessity demands that such persons be removed from any opportunity to threaten the security of our military forces or the success of our military operations;

NOW, THEREFORE, I, DOUGLAS MACARTHUR, General of the Army, United States Army, as Commander in Chief, Southwest Pacific Area, hereby do publish and declare to be my purpose to remove such persons, when apprehended, from any position of political and economic influence in the Philippines and to hold them in restraint for the duration of the war; whereafter, I shall release them to the Philippine government for its judgment upon their respective cases."

DOUGLAS MACARTHUR
General of the Army

APENDICE "E"

PROCLAMACION DE LA INDEPENDENCIA DE FILIPINAS

WHEREAS, the United States of America by the Treaty of Peace with Spain of December 10, 1898, commonly known as the Treaty of Paris, and by the Treaty with Spain of November 7, 1900, did acquire sovereignty over the Philippines and by the Convention of January 2, 1930 with Great Britain did delimit the boundary between the Philippine Archipelago and the State of North Borneo; and

WHEREAS, the United States of America has constantly and faithfully during the past forty eight years exercised jurisdiction and control over the Philippines and its people; and

WHEREAS, it has been the repeated declaration of the legislative and executive branches of government of the United States of America that full independence would be granted as soon as the people of the Philippines were prepared to assume this obligation; and

WHEREAS, the people of the Philippines has clearly demonstrated this capacity for self-government; and

WHEREAS, the Act of Congress approved March 24, 1934, known as the Philippine Independence Act, directed that on the 4th of July immediately following the ten-year transitional period leading to the independence of the Philippines the President of the United States of America, should by proclamation, withdraw and surrender all rights of possession, supervision, jurisdiction, control and sovereignty of the United States of America in and over the territory and people of the Philippines except certain reservations therein or thereafter authorized to be made, and on behalf of the United States of America, recognize the independence of the Philippines.

NOW, THEREFORE, I, HARRY S. TRUMAN, President of the United States of America, acting under and by virtue of the authority vested in me by the aforesaid Act of Congress, do proclaim that, in accord with and subject to the reservations provided for in the applicable statutes of the United States;

The United States of America hereby withdraws and surrenders all rights of possession, supervision, jurisdiction, control, or sovereignty now existing and exercised by the United States of America in and over the territory and people of the Philippines; and

On behalf of the United States of America, I do hereby recognize the independence of the Philippines as a separate and self-governing nation and acknowledge the authority and

control over the same of the government constituted by the people thereof, under the Constitution now in force.

IN WITNESS WHEREOF, I, have hereunto set my hand and caused the Seal of the United States of America to be affixed.

DONE at the City of Washington this Fourth Day of July, in the year of Our Lord, nineteen hundred and forty six, and of the independence of the United States, the one hundred and seventy first.

HARRY S. TRUMAN

President of the United States of America

(Dept. of State Bulletin No. XV
p. 66)

APENDICE "H"

MALACAÑAN PALACE
MANILA

BY THE PRESIDENT OF THE PHILIPPINES

PROCLAMATION NO. 51

A PROCLAMATION GRANTING AMNESTY

WHEREAS, the occupation of the Philippines by the Japanese Armed Forces during the last war and the organization by them of a government administered by the citizens of the Philippines but subject to their direction and control have given rise to the charges of collaboration with the enemy against such citizens who occupied positions in that government as well as against those who traded with the enemy;

WHEREAS, as a result of those charges, indictments have been filed against a large number of Filipino citizens for alleged treasonable collaboration with the enemy before the People's Court, which was established specially to hear and try such cases;

WHEREAS, these trials have been held for more than two years now but no final judgments convicting anyone of the accused have been rendered;

WHEREAS, the Supreme Court has declared that the mere holding of a position in the government established by the enemy does not per se constitute the crime of treason under the laws of the Philippines;

WHEREAS, with respect to those who are at present indicted for alleged trading with the enemy, it appears that because aside from the requirements of the two-witness rule in treason trials, it has been declared necessary to prove specifically that the materials involved in the trading were essential to the prosecution of the war, no final judgment of conviction have been entered so far in such cases, and on the contrary, several verdicts of acquittal have been rendered and orders of dismissal issued;

WHEREAS, the majority of the Filipino people now realize that the alleged acts attributed to the political collaborators either were not voluntary on their part or in effect, were performed by them in the sincere desire and belief that it was their patriotic duty to execute them in the interest of the safety and well being of their countrymen who were then at the mercy of the enemy;

WHEREAS, with the lapse of time, there has come a better understanding on the part of the Filipino people of the motives which actuated the persons who held positions under the occupation government, and there is evidence that a majority of the people have fully ~~realized~~ vindicated the accused, convince that in the discharge of their functions as public officials, they did everything in their power to minimize the atrocities of the enemy and to prevent the carrying out of this purpose to induce or compel the Filipino people to arm themselves against the allied nations;

WHEREAS, under the laws of the Philippines and the doctrines laid down by our courts, the prosecution of the cases now pending appears unjustified with regard to alleged political collaborators and futile as to those charged with economic collaboration;

WHEREAS, the question of collaboration has divided the people of the Philippines since liberation in a manner which threatens the unity of the nation at a time when the public welfare requires that said unity be safeguarded and preserved;

WHEREAS, the question of collaboration is essentially political in nature and should be settled in accordance with the conscience of the majority of the people;

WHEREAS, it appears that the overwhelming sentiment of the people of this Republic is now in favor of resolving the question as speedily as possible by the grant of amnesty to all persons who have been accused of may hereafter be accused of treason through alleged collaboration with the enemy;

WHEREAS, this public sentiment does not extend to persons who voluntarily took up arms against the allied nations or the members of the resistance forces, or acted as spies or informers of the enemy or committed murder, arson, coercion, robbery, physical injuries, or any other crime defined and punished in our penal laws, for the purpose of aiding and abetting the enemy in the war against the allied nations, or in the suppression of the resistance movement in the Philippines;

NOW, THEREFORE, I, MANUEL ROXAS, President of the Philippines, by virtue of the power vested in me by Article VII, Section 10(6) of the Constitution, do hereby proclaim and grant full amnesty to all person accused of any offense against the national security for acts allegedly committed to give aid and comfort to the enemy during the last war; Provided however, that this amnesty shall not extend to persons who are now or may hereafter be accused of treason for having taken up arms against the allied nations or the members of the resistance forces, for having voluntarily acted as spies or informers of the enemy or for having committed murder, arson, coercion, robbery, physical injuries, or any other crime against person or property, for the purpose of aiding and abetting the

enemy in the war against the allied nations or in the suppression of the resistance movement in the Philippines.

All cases now pending before the court for alleged offenses coming within the terms of this amnesty herein granted shall be dismissed by their respective courts on their own motion or upon petition by the prosecution of the accused.

This proclamation shall take effect upon the concurrence therewith by the Congress.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and caused the seal of the Republic of the Philippines to be affixed.

DONE, at the City of Manila, this 28th 28th day of January, in the year of Our Lord, nineteen hundred and forty eight, and of the independence of the Philippines, the second.

. MANUEL ROXAS

President of the Philippines

By the President:

Executive Secretary

BIBLIOGRAFIA

I.- LEGISLACION:

Filipinas:

- 1.- Constitución de Filipinas, Artículo II, Inciso 3; Art. III, Inciso I; Artículo XVII.
- 2.- Código Penal Revisado, Artículos 22, 114, 118, - 120 y 122.

Norte-América:

- 1.- Ordenes Generales 100, A.G.O. (1.863), conocidas por Instrucciones del Dr. Lieber a los Ejércitos de campaña de los Estados Unidos.
- 2.- United States Rules of Land Warfare of 1.940.
- 3.- United States Code Annotated.

II.- TRATADOS:

- 1.- La Cuarta Convención de La Haya de 1.907, Preámbulo, Artículo LII, Sec. III tocante a las leyes y costumbres de guerra terrestre, particularmente - los Artículos 3, 42, 43 y 52.
- 2.- La Convención de Ginebra de 12 de agosto de 1.949 relativa a la protección a los civiles en tiempos de guerra. CMD, 8.033, Misc., No. 4 (1.950).
- 3.- Oxford Manual de la Ley de la guerra, del Instituto de Derecho Internacional, (1.881).

III.- PROCLAMAS:

- 1.- Proclama del General MacArthur de 23 de octubre - de 1.944.
- 2.- Orden del Presidente McKinley de 18 de octubre de 1.898 sobre la reocupación de Santiago de Cuba.
- 3.- Discurso del Presidente Osmena en Leyte de 23 de noviembre de 1.944.
- 4.- Proclamas del Comandante en Jefe Japonés durante la ocupación de Filipinas.
- 5.- Proclama de la Independencia de Filipinas por el Presidente Truman de 4 de julio de 1.946.
- 6.- Proclama de Amnistía por el Presidente Roxas.

IV.- JURISPRUDENCIA:

Filipinas:

- 1.- Co. Kim Cham vs. Valdes Tankeh, et al. G.R. L-5.
- 2.- Peralta vs. Director of Prisons, G.R. No. L-49.
- 3.- Laurel vs. Eriberto Misa, 40 Official Gazette, 451.

Norte-America:

- 1.- American Insurance Co., vs. Canter, 1 Pet. 511, 542.
- 2.- Baldy vs. Hunter, 171, U.S. 388-400.
- 3.- Carlisle vs. U.S., 15 Wallace, 147; 21 L. Ed., 83.
- 4.- City of New Orleans vs. New York Mail Steamship --- Co., 20 Wall 397, 22 L. Ed., 35.
- 5.- Coleman vs. Tennessee, 7 Ott. 509.
- 6.- Cramer vs. U.S., 65 Sup. Ct. Rep., 918, April, 23 , 1.945.
- 7.- Cross vs. Harrison, 16 Howard, 164.
- 8.- Dow vs. Johnson, 25 Lawyer's Ed., 276.
- 9.- Ex-Parte Bollman, 4 Cranch, 25-125.
- 10.- Ex-Parte Milligan, 4 Wallace, 127 (1.867).
- 11.- Fleming et al. vs. Page, 13 Lawyer's Edition, 276 , (1.850).
- 12.- Ford vs. Surget, 97 U.S., 594; 24 L. Ed., 267.
- 13.- Galban and Co., vs. U.S., 40 Court of Claims, 495.
- 14.- Hilton vs. Guyot, 40 U.S., (L. Ed.) 95.
- 15.- Horn vs. Lockhart, 17 Wallace, 570.
- 16.- Jackson vs. Goddell, 20 Johns (N.Y.) 188.
- 17.- Leitensdorfer vs. Webb, 15 L. Ed., 301.
- 18.- Kansas vs. Colorado, 51 U.S. (L. Ed.) 956.
- 19.- Macleod vs. U.S., 57 U.S. (L. Ed.) 1.260.
- 20.- Minor vs. Happerset, 21 Wallace 162.
- 21.- U.S. vs. Elisabeth Alexanders, claimant of 72 bales of cotton, 2 Wallace, 40.

- 22.- Murray vs. Schooner Charming Betsy, 2 Cranch 64.
- 23.- The Paquete Habana, 175 U.S., 677.
- 24.- The Pizarro, 2 Wheaton, 227.
- 25.- The Prize Cases, 17 U.S., (L. Ed.) 459.
- 26.- Respublica vs. Chapman, 1 U.S., (L. Ed.) 33-39.
- 27.- Shanks, vs. Dupont, 3 Peters, 242, (1.830).
- 28.- Skiriotskevs. State of Florida, 61 Supreme Court - Rep., 924.
- 29.- Thirty Hogsheads of Sugar vs., Boyle, 9 Cranch 191.
- 30.- Thorington vs. Smith, 8 Wallace, 1; 19 L. Ed., 361 (1.868).
- 31.- U.S. vs. Cruikshank, 92 U.S., 542.
- 32.- U.S. vs. Hayward, 2 Collison, 485.
- 33.- U.S. vs. Percheman, 7 Peters 51.
- 34.- U.S. vs. Reiter, 27 Federal Cases, 773.
- 35.- U.S. vs. Rice, 4 Wheaton 246.
- 36.- U.S. vs. Wong Kim Ark, 169 U.S., 659.
- 37.- U.S. vs. Wiltberger, CC. Pa. 1.820.
- 38.- Wallace vs. Barnstadt, 44 Pennsylvania, 492-500.
- 39.- Williams vs. Bruffy, 96 U.S., 176.
- 40.- Young vs. U.S., 97 U.S., 39.

Bélgica:

- 1.- Auditear Militaire v. Van Dieren, cited in Hackworth, p. 386.
- 2.- De Nimal vs. De Nimal, VI Hackworth, op. cit., 395.
- 3.- Herwyn vs. Muller, VI Hackworth, op. cit., 398.
- 4.- Schoeven vs. Clemens, VI Hackworth, op. cit., 298.
- 5.- Mathot vs. Longé, Annual Digest, 1.919-22, Case No. 329.

Checoslovakia:

- 1.- Kotra, Egneasy, Balogh, Tegen o. Etat tohecoslova--

que, Annual Digest 1.933, Case No. 221.

Dinamarca:

- 1.- The Adelaide Star, Annual Digest, 1.948.

Francia:

- 1.- *Macum et autres c. Min. public et colonie de L'Afrique occidentale française*, Annual Digest, 1.919-22, Case No. 312.

Holanda:

- 1.- In *Re Van Huis*, 15 de Noviembre de 1.946, Special Criminal Court at. The Hague: *Baxter, Duty of Obedience to the Belligerent Occupant*, BY, 1.950, op. cit; Annual Digest, 1.946, Case No. 143.
- 2.- *Re Contractor Knoles*, Annual Digest, 1.946, Case No. 144.
- 3.- *Re Contractor Worp*, Annual Digest, 1.946, Case No. 145.
- 4.- In *Re Van der Giessen*, Annual Digest, 1.948, Case No. 140.

Inglaterra:

- 1.- *De Jager vs. Attorney General of Natal*, VI Hackworth, op. cit. n 386.
- 2.- *West Rand Central Gold Mining Co., Ltd., vs. The King*, 2 K. B., 391.

LIBROS Y TRATADOS:

ALBERTUS GENTILES, *De Jure Belli*, Liv. II, Cap. V. (1.589), 1.933, OXFORD, the Clarendon Press.

JURISPRUDENCIA AMERICANA, Tomo XXX, 186.

BRAY: *De L'Occupation militaire en temps de guerre*, - - 1.891.

BIRKHIMER, William: *Military Government and Martial Law*, 1.928.

AGO, Roberto: *Occupazione Bellica e trattato Laternanense*, Milano, 1.946.

AGO, Roberto: *II Requisito dell'effectivita dell'occupazione in Dirritto internazionale*, Roma, 1.934.

BALLADORE-PALLINI: *La Guerra*, Padova-Cedam, imp. Fedosi y Romano, 1.935.

BAITER, (Maj): Duty of Obedience to the Belligerent Occupant, British Yearbook of International Law, Oxford - University Press, 1.950.

BLUNTSCHLI: Le Droit International Codifié, ed. de 1.895 Trad. por M.C. Lardy, Paris.

CALVO: Charles: Le Droit International, Theorique et - - Practique, IV, 1.896, Paris.

CORPUS JURIS: Tomos II, LIXe

CORPUS JURIS SECUNDUM, Tomo XVI.

CAPOTOREI: L'occupazione ne diritto di guerra, Napoli, 1.949.

BIRKENHEAD, The Earl of: International Law, London y Toronto, J.M. Dent, 1.927.

COLL: L'Occupation du temps de la guerra, 1.914.

COLBY, Elridge: Occupation under de Laws of War, Columbia Law Review, Vol. XXV I 1.925.

CREASY, Sir Edward. First Platform of International Law, London, 1.927.

CYCLOPEDIA OF AMERICAN GOVERNMENT, Tomo III.

DAVIS, George, Elements of International Law.

DIAZ-LORDA: Derecho Internacion Público en Paz y en Guerra, Madrid, 1.949.

ENCICLOPEDIA BRITANICA, Tomo IX, 14 th. edition.

ENCICLOPEDIA JURIDICA ESPAÑOLA, Espasa-Calpe.

ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA, Europa-Americana, Tomo 23.

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Real Academia Española, Madrid, Espasa-Calpe.

FIORÉ, Pasquale: International Law Codified by Brocha-d 1.919, Washington.

FIORÉ, Pasquale: Trattato di Diritto Internazionale pubblico, trad. de la 3a. ed. italiana por Alejo García reno, Madrid, 1.894-95.

FAUCHILLE: Traité de Droit International Publique, 8a ed. Paris-Rosseau, imp. Saillard, 1.921-25.

GARNER, James Wilford: International Law and World War II, 1.920, Longmans-Green co, London, New York.

GUGGENHEIM, Paul: Traite de Droit International publique, Geneve, 1.953, Librairie de L'Université, imp. de "La Tribune de Geneve".

GLUCK, Sheldon: War Criminals, Their Prosecution and Punishment, 1.944.

GUELLE: Precis des lois de la guerre sur la terre, 1.884, Paris, Pedone-Lauriel.

GROTIUS; Hugo: De Jure Belli ac Pacis, liv. III, cap. -- VIII, 1.625, Oxford, The Clarendon Press, 1.925, trad. -- Esp. por J. Torrubbiano, Madrid, Reus, 1.925.

GROIZARD; El Código Penal de 1.870. 2ª. Ed. Ouello-Calom ob. Cit.

GUTTERIDGE: "The Geneva convention 1.949; Yearbook of -- world A. Hairs, 1.951.

HACKWORTH, Green Hayward: International Law Digest, 1940 44, Washington, Government Printing Office.

HALL, W.E.: A Treatise on International Law, by Pearce -- Higgins, Oxford, The Clarendon Press, 1.924.

HAYES, MacKINLEY: Treason under the Constitution of the United States, Quarterly Law Review, Vol. XII, Jan. 1.918.

HEPPTER, August Wilhelm: Das Europäische Völkerrecht der Gegenwart, 8 th. Ed. Trad. por G. Lasarraga, Madrid, -- 1.888, J. Pérez.

HURTS, William: Analysis of the Cramer Decision, Harvard Law Review, Vol. LVIII, No: 6, 1.945.

HYDE, Charles: International Law Chiefly as Interpreted and Applied by the United States, 2 an. rev. Ed., 1.945.

HACOMET: Les lois de la guerre continentales (Publie sous la direction de la section historique de l'etat major de l'armée, 1.913.

KENT, Chancellor: Commentaries on American Law, 6 th. ed.

KLUBER, J.L.: Droit des Gens Moderne L'Europe, avec un -- supplement contenant une bibliotheque du droit des gens -- 2 d. Paris, imp. J. Brehin, 1.874.

KOHLER; Grundlagen des Völkerrechts Vergangenheit gegen-- wartukunft, Stuttgart, 1.918.

KUNZ, Josef L.: Kriegerrecht und Neutralitätsrecht, Springer, Wein, 1.935.

KUNZ, Josef L.: "The Geneva Convention of August 12, -- 1.949" en Lipsky, Law and Politics in the World Community 1.953.

LAWRENCE, Tomas: Principles of International Law, 1.927.

LOENNING: L'Administration du gouvernement general de l -
L'Alsace durant la guerre de 1.870-71, 1.874.

LOENNING: Das Subjekt der Staatsgewalt in besetzten - -
feindlichen Gebieten, Berlin, Ounler, ZIR, 1.920.

De LOUTER: Droit International Public Positif, II, 1.920
Oxford, Imp. de L'Universite.

LISZT, Franz Von: Derecho Internacional Publico, trad. -
por D. Miral, Barcelona, Grafica Moderna, 1.919.

LORRIOT: De la Nature de L'Occupation de Guerre, 1.903.

MAGOON, Charles: Report on the Law of Civil Government un
der Military Occupation, 1.899-.1900.

MALCOLM, George: Philippine Government, Lawyer's Coop. -
New York, 1.936.

MARTENS, C.F. de: Precis du Roit de Gens de L'europe, nou
velle ed., Leipzig, 1.858.

MACNAIR, Sir Arnold: Legal Effects of War, Oxford Univer
sity Press, 1.944.

MAINE, Henry Sumner: International Law, London, 1.888.

MATSUSHITA: Greater East Asia International Law, Tokyo ,
1.941.

MARINONI: Della Natura Giuridico dell'occupazione belli
ca R.D.I., 1.910.

MIGLIAZZA, A.: La Occupazione Bellica, Milano, 1.949.

MILITARY AID TO CIVIL POWER, a textbook prepared for the
General Service Schools, Fort Leavenworth, Kansas, U.S.

MERIGNHAC: Traite de Droit International, a.912, Bar de
Luo imp. Laguerre.

MORSENTSEN: Validity of the Acts of Belligerent Occupant
Brittish Yearbook, 1.931, Oxford University Press.

MOLLER, Alex: International Law in Peace and in War, Co
penhagen, 1.935.

MOORE, John Bassett: A Digest of International Law, Washi
ngton, 1.906, Govt. Printing Office.

MORRINO-BOLLINI: Derecho Internacional Publico, Buenos -
Aires, ed. Perrot, 1.955.

MONACO: L'Armistice nel sistema degli accordi internatio
nali, 1.943.

NISSEN, CMO, van: L'Occupation allemande pendant la guerre mondiale, 1.946, Martinus Nishoff.

NYS: Le Droit Internationale, les principes, les theories, les faits, Bruxelles, Castaigne, 1.912.

ORCASITAS-LLORENTE: "La protection a las poblaciones civiles en los Convenios de Ginebra de 1.949", Revista de DI IV, 1.951, Madrid.

OPPENHEIM: International Law 6 th. Ed., 1.944; 7th. Ed., London-Longmans Green and Co., Imp. T. and Constable -- 1.952.

OPPENHEIM: The Legal Relations between an Occupying Power and the Inhabitants, Law Quarterly Review, XXXVIII, 1.917.

OLIVART, Marqués de: Derecho Internacional, 1.903.

OPINIONS OF THE ATTORNEY GENERAL OF THE US, Tomos III, IX, XX, XXII.

PILLET: Le lois Actuelle de la guerre, 2 d. ed. 1.898, Paris, Arthur Rousseau.

PAULDING, G.C.: "The Petain Trial", cited in Commonwealth Vol. XIII, No. 18.

PUFFENDORF: De Jure Naturae et Gentium. 1.933, Oxford,

QUEZON, Manuel: The Good Fight, 1.944, New York.

R. CTO, Claro: The Law of Belligerent Occupation, 1.947, Manila.

RECTO: Claro.- Three Years of Enemy Occupation, 1.946,- Manila.

RISLEY, John Schuckburgh: The Law of War.

ROOT, Waverly: The Secret History of War, 1.948.

ROLIN: Le Droit moderne de la guerre, 1.920 Bruxelles.

ROUSSEAU, Charles: Droit International Public, Paris, 1.952.

SCOTTO: The Hague Convention and the Declarations of -- 1.899 and 1.907, N.Y. and Oxford University Press, 1915

SPAIGHT: War Rights on Land, 1.911.

SCHENK, von Stauffenberg: Vetroilige Beziehungen des -- okkupante zu den Landeseinwohnern, S.a: O, R.U.V.R., - 1.931.

SCHUMAN: International Politics, 1.927 N.Y. and London.

TAYLOR, Hannis: International Public Law, 1.901.

WESTLAKE, John: International Law, 1.910-13, London.

WHEATON, Henry: International Law, 8 th. Ed., by Keith, 1.944; also editions by R. Dana and A.C. Boyd.

WILLOUGHBY, Fundamental Concepts of Public Law, 1.924,- N.Y., The Macmillan Company.

WALZ: Völkerrecht Staatsliches Recht, 1.933, Stuttgart, W. Kohlhammer.

WALTSCOG: Recht de Landkriegsführung, 1.942.

WORDS AND PHRASES, Tomo II, IV, VII.

WOLFF. Jus Gentium Methodo Scientifica Retractorum, - - 1.764.

VATTEL, A.De: Le Droit des Gens ou Principes de la lois Naturelle, 9a ed., Paris, Imp. Casimir, 1.830.

VERDESS, Alfred: Derecho Internacional Público, trad.- por A. Truyols, 1.955.

VII.- REVISTAS:

1.- American Journal of International Law, 1.953.

2.- Congressional Record of the United States Congress, Vol. 29.

3.- Official Journal of the Japanese Military Administration in the Philippines.

4.- Official Gazette of the Philippines.

5.- The Manila Times, July, 1.951.

6.- Colliers, July, 1, 1.944.

7.- Current Biography, 1.940.

- - - - -